

Derechos de la Comunidad LGTB
Derechos de las Mujeres
Derechos de la Niñez y Adolescencia
Derechos de los Pueblos Indígenas

Informe de Labores **Procuraduría para la Defensa** **de los Derechos Humanos**

Derechos de las Personas con Discapacidad
Derechos de las Personas Migrantes
Derechos de las Personas con VIH
Derechos de las Personas Adultas Mayores
Derechos de las Víctimas del Conflicto Armado
Derechos de las personas privadas de libertad
Derechos Culturales
Derechos de las Personas Privadas de Libertad
Derechos Ambientales
Derechos de la Juventud
Derechos Económicos y Sociales
Derechos Civiles y Políticos



Lic. David Ernesto Morales Cruz
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos

Informe de Labores **Procuraduría para la Defensa** **de los Derechos Humanos**

JUNIO 2013 – MAYO 2014



Lic. David Ernesto Morales Cruz
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos

UNIDAD DIRECCIONAL

Lic. David Ernesto Morales Cruz

Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos

Tel. 2520-4303

Lic. Antonio Aguilar Martínez

Procurador Adjunto para la Defensa de los
Derechos Humanos
Tel. 2520-4340

Licda. Yanira del Carmen Cortez Estévez

Procuradora Adjunta para la Defensa del Derecho
al Medio Ambiente
Tel. 2520-4342

Licda. Sandra Carolina Rivera

Procuradora Adjunta para la Defensa de los
Derechos Civiles e Individuales
Tel. 2520-4350

Ing. Rosalía Aminta Jovel Chinchilla

Procuradora Adjunta para la Defensa de los
Derechos de la Mujer y Familia
Tel. 2520-4349

Licda. Roxana Elvira Solano

Secretaria General
Tel. 2520-4340

Dr. Luis Raúl Moreno Carmona

Director de la Escuela de Derechos Humanos
Tel. 2524-6913



Lic. David Ernesto Morales Cruz

Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos

Dr. Luis Raúl Moreno Carmona

Director de la Escuela de los Derechos Humanos

Lic. Oliver Román López Serrano

Jefe del Departamento de la Realidad Nacional

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

9ª Avenida Norte y 5ª Calle Poniente, Edificio AMSA No.535

San Salvador, El Salvador, Centro América.

Teléfonos: 2520-4300; 2520-4301; y 2520-4302.

Julio 2014

ÍNDICE

Contenido	Página
MENSAJE DEL SEÑOR PROCURADOR PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS	9
RESUMEN EJECUTIVO	18
I. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	21
1.1 Derechos civiles y políticos.....	25
a) Seguridad Ciudadana.....	25
b) Memoria Histórica	28
c) Derechos a la Libertad de Expresión	30
d) La corrupción como hecho de violación a los derechos humanos	31
e) Derechos políticos	32
1.2 Derechos económicos, sociales y culturales.....	36
a) Derecho a un nivel de vida adecuado	36
b) Derecho a una alimentación adecuada	37
c) Derecho a la salud.....	39
d) Derecho a la educación	40
e) Derecho al trabajo y a las libertades sindicales.....	42
f) Derecho a una vivienda adecuada	44
1.3 Derechos ambientales.....	45
a) Cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de los derechos ambientales	45
b) El estado de los bienes hídricos y la labor estatal	47
c) La situación frente al Cambio Climático.....	49
d) Lo relativo al saneamiento ambiental	51
e) Lo relativo a la biodiversidad	52
f) Sobre las industrias extractivas y sus consecuencias en la población salvadoreña	53
g) Consideraciones finales.....	54
1.4 Derechos de la niñez, adolescencia y juventud	57
a) Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia	58
b) El derecho a la vida y a la integridad personal de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes	59
c) Educación inicial	61
d) El trabajo infantil y el empleo de los jóvenes.....	62
e) Derechos de las personas jóvenes.....	63
f) La participación política de los jóvenes que votarían por primera vez	65
g) Justicia Penal Juvenil.....	66
h) Niñas, niños, adolescentes y jóvenes migrantes en condiciones irregulares.....	68
i) Conclusiones y recomendaciones	68

1.5	Derechos humanos de las mujeres	70
a)	Aprobación de legislación en favor de la igualdad	70
b)	Análisis por autonomías.....	71
1.6	Derechos específicos de otros grupos en situación de vulnerabilidad.....	76
a)	Defensores y defensoras de derechos humanos	76
b)	Pueblos indígenas	77
c)	Comunidad LGBTI.....	77
d)	Personas migrantes.....	78
e)	Personas con VIH.....	83
f)	Personas adultas mayores	86
g)	Personas con discapacidad.....	88

II. PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL..... 91

2.1.	Mandato constitucional y legal	93
2.2.	Estructura organizativa	95
2.3.	Personal de la institución	96
a)	Nuevas contrataciones	96
b)	Personal por régimen laboral.....	96
c)	Personal administrativo, técnico y ejecutivo	97

III. PLAN DE TRABAJO 2013-2014 99

3.1.	Pensamiento estratégico	101
3.2.	Exposición de los objetivos, las metas y los resultados obtenidos	102

IV. ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA..... 107

4.1	Asignación presupuestaria.....	109
4.2	Ejecución presupuestaria	111
4.3	Cooperación externa	113
4.4	Gestiones de compra y contrataciones	114

V. LOGROS PRINCIPALES POR ÁREAS ESTRATÉGICAS..... 115

5.1.	Protección de los derechos humanos.....	117
a)	Tramitación de casos de presuntas violaciones a derechos humanos.....	117
b)	Vigilancia de la situación de las personas privadas de libertad.....	140
c)	Atención a grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad	145
d)	Fiscalización y Auditoría del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones.....	148

5.2. Análisis e incidencia en políticas, normas y prácticas del Estado	149
a) Informes especiales y situacionales	149
b) Posicionamientos públicos	150
c) Opiniones sobre proyectos de ley, posicionamientos sobre normativas y propuestas de reforma.....	151
d) Actividades de observación preventiva y atención de crisis	152
5.3. Promoción y educación en derechos humanos	154
a) Datos estadísticos a nivel nacional.....	154
b) Delegaciones Locales	157
a) Delegaciones Departamentales.....	158
b) Escuela de Derechos Humanos y Departamentos de la Sede Central San Salvador.....	159
5.4. Acciones y relaciones externas	163
a) Mesas temáticas de trabajo.....	164
b) Convenios suscritos	165
c) Asistencia a eventos organizados por diversas instituciones y otras acciones de colaboración	165
d) Reuniones sostenidas con autoridades públicas, representantes de organismos internacionales, organizaciones sociales, entre otros.....	166
5.5. Fortalecimiento institucional	167
a) Secretaría General.....	167
b) Departamento de Recursos Humanos.....	168
c) Departamento Administrativo	168
d) Departamento de Comunicaciones y Prensa	170
e) Departamento Jurídico	170
f) Departamento de Informática.....	171
g) Unidad de Proyectos Institucional	172
h) Unidad de Planificación Institucional	172
i) Unidad de Acceso a la Información Pública	172
j) Procuradurías adjuntas específicas.....	173
VI. ANEXOS.....	175

ÍNDICE DE CUADROS, GRÁFICAS, MAPA Y ORGANIGRAMA

Contenido	Página
Cuadros	
1. Casos recibidos sobre defensores y defensoras de derechos humanos	76
2. Funciones constitucionales	93
3. Atribuciones legales	94
4. Nuevas contrataciones por sexo	96
5. Distribución de plazas por régimen salarial y sexo	97
6. Distribución de plazas por actividad y sexo	97
7. Área Estratégica de Protección de los Derechos Humanos	103
8. Área estratégica de Análisis e Incidencia de Políticas del Estado	104
9. Área estratégica de Promoción y Educación en Derechos Humanos	106
10. Área estratégica de Fortalecimiento Institucional	106
11. Ejecución presupuestaria	112
12. Ejecución presupuestaria proyectos de donación	113
13. Gestiones de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales	114
14. Reporte de orientaciones y trámite de expedientes a nivel nacional	118
15. Diligencias de investigación por derechos específicos en el Departamento de San Salvador	128
16. Verificaciones a instituciones públicas en el Departamento de San Salvador	129
17. Grado de acatamiento de recomendaciones en resoluciones finales por instituciones públicas mayormente señaladas	135
18. Reporte de resoluciones finales firmadas de responsabilidad en las que se señaló el incumplimiento a la Ley de la PDDH	136
19. Verificaciones a instituciones estatales responsables de las personas privadas de libertad	141
20. Verificaciones realizadas por clasificación de centros penitenciarios	142
21. Verificaciones realizadas a centros de internamiento: reeducación y alternativos para jóvenes infractores de la Ley Penal	144
22. Informes especiales y situacionales	149
23. Pronunciamientos por área temática	150
24. Opiniones sobre proyectos de ley, posicionamientos sobre normativas y propuestas de reforma de ley por área temática	151
25. Detalle de diligencias de observación preventiva realizadas y atención a crisis	152
26. Actividades de promoción y educación a nivel nacional	156
27. Actividades de promoción y educación en las delegaciones locales	157
28. Actividades de promoción y educación en las delegaciones departamentales	158

Contenido	Página
29. Actividades de promoción y educación en la Escuela de Derechos Humanos y los Departamentos de la Sede Central	159
30. Material reproducido para la Educación en Derechos Humanos	160
Gráficas	
1. Distribución de la asignación presupuestaria por línea de trabajo	110
2. Distribución de la asignación presupuestaria por rubro y línea de trabajo	111
3. Ejecución presupuestaria	112
4. Recepción de casos más denunciados por área temática	121
5. Recepción de casos más denunciados por derechos específicos	121
6. Recepción de casos más denunciados por instituciones públicas	122
7. Derechos humanos más señalados en resoluciones iniciales	124
8. Instituciones públicas más recomendadas y notificadas en resoluciones iniciales	126
9. Tipo de resolución final emitida	127
10. Grado de acatamiento de recomendaciones en resoluciones finales	135
Ilustraciones	
1. Leyes aprobadas en materia de derechos humanos de las mujeres	70
2. Denuncias admitidas por departamento y regiones	120
Organigrama institucional	95

MENSAJE DEL SEÑOR PROCURADOR PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS



En agosto del 2013 fui nombrado Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos¹ por un período de tres años. En mi calidad de titular de esta institución y en cumplimiento a los artículos 131 ordinal 36 de la Constitución de la República; 102, 104 y 110 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, tengo el agrado de presentar a la Honorable Asamblea Legislativa el Informe Anual de Labores del **1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014**.

En coherencia con la propuesta inicial que presenté ante la Honorable Asamblea Legislativa en junio de 2013², he iniciado durante este primer año de gestión, la construcción de una política institucional que promueve el ejercicio integral del mandato constitucional y legal de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), de tal manera que podamos brindar una respuesta efectiva y oportuna a las víctimas de violaciones a derechos humanos e incidir en las políticas públicas.

Este proceso de fortalecimiento supone una gestión de la PDDH más eficiente y más articulada con las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones del Estado y los organismos internacionales sobre la materia, así como la instauración de un modelo de trabajo pro activo, desde el cual se dé seguimiento a los problemas que afectan el goce pleno de los derechos humanos, pero se genere a la vez, un impacto en los ámbitos de la prevención y la protección.

¹ El licenciado David Ernesto Morales Cruz fue electo Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos el 9 de agosto de 2013, por un período de tres años que concluirá el 8 de agosto de 2016, según el Decreto Legislativo N° 454, publicado en el Diario Oficial N° 148, Tomo N° 400, de fecha 15 de agosto de 2013.

² Propuesta de fortalecimiento a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, presentada por el licenciado David Ernesto Morales Cruz a la Subcomisión Legislativa de Estudio de Propuestas al cargo de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el 10 de junio de 2013.

La PDDH ha sostenido procedimientos de atención e investigación que datan de la década de los noventas y que en la actualidad resultan poco eficientes, además de burocráticos; en tal sentido, la renovación de los procedimientos es indispensable para garantizar un servicio caracterizado por la inmediatez con las víctimas, la celeridad y la incidencia positiva en las relaciones con la restante institucionalidad del Estado.

Este nuevo enfoque hará que la Procuraduría avance hacia un desempeño más integrado, elevando la calidad y la calidez de los servicios de protección, promoción y educación en derechos humanos que presta, incluyendo otros aspectos no considerados anteriormente como la investigación académica y su interrelación con todas las áreas técnicas de la institución.

Estas proyecciones pretenden revertir las debilidades encontradas en el área administrativa y en el modelo de procedimientos de protección de los derechos humanos. Al inicio de mi gestión, en el ámbito administrativo, identifiqué una débil estructura de la planificación institucional, también en el funcionamiento de la oficina de acceso a la información y en la gestión de la cooperación internacional, por lo que instruí el diseño de acciones de fortalecimiento institucional para tales áreas. Asimismo, constaté que las áreas administrativas no guardaban estrecha relación con las áreas técnicas; además, su personal es mayor en proporción al personal técnico que se dedica a las funciones de protección, educación y promoción en derechos humanos.

Otra debilidad es el limitado presupuesto y cada año la institución ha tenido que enfrentar no solo dificultades para su aprobación, sino también amenazas de reducción al mismo. La situación financiera actual de la PDDH es preocupante, ya que el 74.76% del presupuesto total es utilizado para gastos de funcionamiento.

Casi la totalidad de los recursos institucionales -98.0%- se destinan a gasto corriente y funcional. No obstante, debe reconocerse que en los últimos años, el presupuesto fue aumentado considerablemente para nivelar salarios, lo cual era necesario ya que por años su personal técnico estuvo en clara desventaja en comparación con otras instituciones de similar rango.

Frente a esta realidad, me he propuesto en mi gestión, ejecutar con rigor políticas de austeridad que obliguen a una reorganización administrativa y técnica que maximicen las limitadas economías y ahorros institucionales. En este orden quiero agradecer el apoyo que esta Honorable Asamblea Legislativa ha dado a la PDDH con la aprobación de un incremento presupuestario para el año fiscal 2014, ello nos ha permitido llevar a cabo importantes acciones en áreas desfinanciadas.

En cuanto al modelo de protección de derechos, la principal debilidad la constituye su enfoque centrado casi exclusivamente en el abordaje individual de casos, el cual fue diseñado sobre la base de las etapas del juicio penal judicial; por ello, los procedimientos de la PDDH se caracterizan por la predominancia de las comunicaciones escritas y formales, la poca intermediación con las autoridades denunciadas y víctimas, así como por la carga excesiva de diligencias de investigación no siempre esenciales, lo que los convierte en procedimientos lentos y burocráticos. Esto ha limitado por muchos años la capacidad institucional de intervenir ante las causas estructurales que afectan los derechos humanos, las prácticas sistemáticas o recurrentes de violaciones y las afectaciones de derechos de colectivos o poblaciones específicas en situación de vulnerabilidad. La inercia del actual modelo de procedimientos en PDDH, se ha traducido en una mora en la tramitación de casos que se estima supera los ocho mil expedientes.

Por tal razón, es necesario trascender el limitado abordaje individual en los procedimientos de

la PDDH, sobre todo frente a ciertos ámbitos de especial demanda para la institución, como son las denuncias contra actuaciones de la Policía Nacional Civil y la situación de personas privadas de libertad en el sistema penitenciario, entre otras. Lo anterior, con el propósito de incidir en aquellas causas estructurales y prácticas sistemáticas que demandan un análisis e intervención de protección con un enfoque situacional.

Estas posibilidades de intervención institucional están ampliamente reguladas en la Ley Orgánica de la PDDH, mediante el establecimiento de facultades específicas tales como la preparación de informes especiales sobre situaciones que afectan derechos humanos, promover reformas y opiniones al Órgano Legislativo en orden a promover y garantizar los derechos humanos, establecer nexos de coordinación con instancias de sociedad civil y Estado, entre otras. Sin embargo, la activación de estas facultades no ha sido siempre estratégica en cuanto al abordaje de los principales problemas de la realidad nacional, a fin de incidir en el cumplimiento del Estado de sus obligaciones genéricas de respetar y garantizar los derechos humanos.

En virtud de lo anterior, he definido las líneas estratégicas que guiarán el ejercicio de la PDDH en los próximos años de mi gestión. Así, en materia de protección integral de derechos humanos y libertades fundamentales, el suscrito Procurador se ha propuesto realizar acciones de protección, asistencia, investigación, prevención e incidencia no solo ante casos individuales, sino también ante situaciones de presuntas violaciones de los derechos humanos que afectan poblaciones y colectivos, verificando la actuación de la institucionalidad estatal ante los mismos. Esto supondrá un rol activo frente a la formulación y ejecución de las políticas públicas, mediante la búsqueda de una incidencia que

fortalezca tales políticas como mecanismos de respeto y garantía de derechos.

En lo atinente a la promoción y educación en derechos humanos se pretende impulsar el cumplimiento de las obligaciones estatales en esta materia, así como fortalecer a las poblaciones vulnerables, organizaciones civiles, sectores representativos de la sociedad y víctimas en sus procesos de empoderamiento, defensa y promoción de los derechos humanos del que son titulares individual y colectivamente.

También se ha impulsado un proceso de fortalecimiento y desarrollo institucional mediante la implementación de una práctica y cultura organizacional basada en la filosofía, doctrina y normativa de los derechos humanos, a través de políticas y procedimientos administrativos eficientes y eficaces, en orden a brindar un servicio integral a la población, el uso austero y óptimo de los recursos disponibles y la equidad en las relaciones laborales.

Durante el período que informo se ha dado continuidad a la ejecución a los proyectos que establece el actual Plan Estratégico Institucional 2011-2014, en sus cinco áreas estratégicas: a) protección de los derechos humanos; b) análisis e incidencia de políticas públicas, normas y prácticas públicas; c) promoción y educación en derechos humanos; d) acciones y relaciones externas; y e) fortalecimiento institucional; así como mediante un conjunto de acciones recogidas en los Planes Operativos Anuales del 2013 y 2014. Entre los que se destacan los siguientes logros y resultados:

En el área de protección a derechos humanos, se han adoptado medidas *para mejorar el nivel de respuesta a las víctimas de violación a derechos humanos*, la PDDH se ha fortalecido a través del impulso de estrategias como las siguientes: aplicación de nuevas relaciones con la población

y organismos internacionales de derechos humanos, adecuación de los procedimientos de protección para dar respuestas efectivas a las denuncias sobre casos individuales de violación a derechos humanos, a la vez que ha impulsado el análisis situacional y la emisión de recomendaciones de incidencia en las políticas de gobierno o el comportamiento de las instituciones.

En ese sentido, el suscrito Procurador se posicionó frente a temas principales que afectan el bienestar de la población salvadoreña, tal es el caso del impacto del fenómeno de la *inseguridad ciudadana* en la vigencia de los derechos humanos. Así, me pronuncié a favor de la implementación de una política pública integral que tenga por prioridad la atención de las víctimas de la violencia y el delito, la necesidad de avanzar en una reforma fiscal que pueda financiar los esfuerzos públicos en materia de seguridad y el llamado a no disminuir los esfuerzos en materia de represión del delito y la estrategia de prevención de la violencia. También hice públicas algunas de las proyecciones a realizar en los próximos años, como el impulso de protocolos especializados para el trato digno y compasivo de las víctimas en los procesos judiciales y administrativos, la elaboración de la “Carta de derechos humanos de las víctimas del delito y sus familiares”, la propuesta a las autoridades de herramientas para el seguimiento de los casos de personas desaparecidas a causa de hechos delictivos, y estrategias de participación en los procesos de prevención secundaria, especialmente ejerciendo sus facultades de mediación, entre otras.

En ocasión a la celebración de los eventos electorales de 2014, se implementó un *Plan de Verificación y Observación Electoral de 2014* en el que se adoptaron medidas dirigidas a evitar conflictos y hechos de violencia como es la suscripción por representantes de partidos políticos de un Pacto de Entendimiento

para Prevenir la Violencia Electoral, el 24 de octubre de 2013. Se implementó, además, una metodología de seguimiento a indicadores en materia de derechos políticos: inclusión, limpieza, competitividad y acceso a cargos públicos, para supervisar las actuaciones del Estado en las Elecciones Presidenciales de 2014. Evaluamos aspectos del sistema electoral y la legalidad de las elecciones, los insumos fueron recolectados por medio de una encuesta que tomó de base una muestra representativa de la mitad de los municipios del país y en un tercio de los centros de votación autorizados. La PDDH fue garante de los derechos políticos pronunciándose en varias ocasiones e interviniendo en cada etapa del proceso electoral; asimismo, se contó con una destacada actuación en la verificación del escrutinio final.

En virtud del mandato constitucional y legal, he dado el correspondiente trámite de ley ante denuncias ciudadanas relacionadas a presuntas vulneraciones de derechos humanos derivadas de *sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia*, actuación que no desconoce la autoridad y plena obligatoriedad jurídica de las sentencias judiciales. El mandato del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y su labor de vigilancia sobre la actuación de las autoridades públicas en modo alguno es contradictoria con la función jurisdiccional que corresponde a los tribunales, por cuanto en ningún caso afectará la obligatoriedad de las sentencias ni sustituirá a las partes procesales en los diferentes litigios. Empero, como cualquier otra autoridad, el judicial también es susceptible de cometer abusos en contra de los derechos humanos, por lo cual el Procurador puede vigilar tales actuaciones y dictar recomendaciones en orden a prevenir su repetición en el futuro o derivar las responsabilidades a que hubiere lugar. Debido a ello, la vigilancia del debido proceso judicial es

uno de los mandatos explícitos de la actuación de la institución del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.

Un ejemplo de lo anterior fue el trámite a denuncia formal presentada por empleadas y empleados públicos por la presunta violación a sus derechos humanos en relación a la medida cautelar y posterior aclaración emitida por la Sala de lo Constitucional en el Proceso de Inconstitucionalidad N° 8-2014, por medio de las cuales se prohibió realizar actividades relativas al ejercicio de los derechos políticos de todos los funcionarios y empleados públicos, con lo cual se restringían derechos fundamentales sin una tipificación concreta de sus infracciones, violando así el debido proceso.

Al respecto, resolví que la Sala estableció restricciones al pleno y libre ejercicio de los derechos políticos y del derecho a la libertad de expresión de todos los funcionarios, funcionarias, empleadas y empleados públicos, sin haber fundamentado suficientemente las restricciones impuestas en sus resoluciones. Por lo tanto, declaré la violación a los derechos políticos, particularmente los derechos a la participación en actividades políticas individualmente o a través de partidos políticos y otras organizaciones, a la libertad de debatir los asuntos públicos, de realizar manifestaciones y reuniones pacíficas, de publicar material político, hacer campaña y propaganda política y a la libertad de expresión.

Asimismo, se abrió expediente y se emitió resolución en el *caso del cierre de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado (OTLA)*³, en el que reconocí que los archivos históricos sobre violaciones a los derechos humanos de la mencionada oficina contienen información que debe ser objeto prioritario de protección por parte de las personas responsables de su custodia

y administración, pero también y especialmente por parte del Estado en defensa del interés público que dicha información representa. Por tanto, dicté una medida cautelar al señor Fiscal General de la República para que realizara acciones que garantizaran la preservación de los archivos históricos de la OTLA y que girara instrucciones para que se permitiera la verificación del procedimiento por parte de esta Procuraduría.

Además, condené el *atentado a las instalaciones de la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (Pro-búsqueda)*⁴, en el que personas desconocidas robaron equipo informático e incendiaron expedientes y otros documentos que contenían información importante para diligenciar casos judiciales de desapariciones forzadas ocurridas durante el conflicto armado. En su momento, declaré que Pro-búsqueda tiene la calidad de entidad defensora de derechos humanos, por tanto, el personal que la integra, al igual que su sede, expedientes, archivos, documentos y equipo informático deben ser objeto prioritario de protección por parte del Estado, de conformidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos. El atentado dejó en grave vulnerabilidad la seguridad de sus miembros, afectando el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad salvadoreña, al haberse sustraído y dañado información sobre violaciones a derechos humanos, lo cual pone en inminente riesgo de afectación de los derechos a la intimidad, seguridad e integridad de las personas que en condición de víctimas, familiares o testigos proporcionaron información a dicha Asociación.

Por otra parte, he priorizado el trabajo de incidencia en las políticas del Estado para dar cumplimiento a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del que son

³ PDDH. Expediente N° SS-0478-2013, del 2 de octubre del 2013.

⁴ PDDH. Expediente N° SS-0534-2013, del 4 de diciembre del 2013.

titulares las víctimas de las graves violaciones a derechos humanos acaecidas durante el conflicto armado interno (1980-1992); además, he implementado una estrategia de acercamiento con las víctimas y sus familiares como un aporte de la Procuraduría a la reconciliación de la sociedad salvadoreña, objetivo que ha quedado postergado luego de más de veinte años de alcanzar la paz.

En marzo del presente año, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, que honra la memoria y la labor de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, hice pública la conformación de la *Asamblea Permanente de Víctimas*, cuyo propósito será dar seguimiento a la agenda de recuperación de memoria histórica en coordinación con las distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Por otro lado, he mantenido la *política de acercamiento con la Asamblea Legislativa*, ya sea para solicitar espacios para presentar o promover la discusión sobre temas de interés ante las comisiones especiales del Parlamento, o ante el requerimiento de la Asamblea con el propósito de escuchar la opinión y posición de esta institución sobre determinados temas o para solicitarle investigación e informe de algún caso particular.

Muestra de lo anterior, ha sido la participación junto con organizaciones sociales y organismos internacionales en la elaboración de un *Anteproyecto de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional* que fue entregado a la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa. Esta experiencia ha resultado valiosa y debe ser retomada como ejemplo para futuros procesos de discusión de leyes de interés para la

población. Además, se realizaron acciones para incidir en la formulación y ejecución de las políticas en materia de derechos humanos, por medio del apoyo y la gestión para la aprobación de la Ley de Creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de los Niños y Niñas Desaparecidos Durante el Conflicto Armado, en la aprobación de la Ley de Acceso al Agua, la ratificación de la Reforma Constitucional sobre el reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas de El Salvador (Art. 63 Cn.) y otras de similar importancia para garantizar la vigencia de los derechos humanos en el país.

En razón a la atribución de procurar la conciliación entre las personas cuyos derechos han sido vulnerados y las autoridades públicas, realicé varias mediaciones destacando la que dirimió el conflicto que se mantuvo por casi quince días por la medida de “*huelga de hambre por tiempo indefinido*” que decidió realizar un agente policial en protesta por las precarias condiciones laborales en la que se encontraba él y sus compañeros de trabajo; además de otras exigencias como la portación de arma en el período de licencia, reforzamiento presupuestario, revisión de normativa policial y problemas en el funcionamiento de las instituciones de controlaría interna. Este proceso de mediación fue realizado bajo la línea de trabajo de “fortalecer el seguimiento a las condiciones laborales y respeto a la dignidad de los y las policías, ante los casos que fueren de su conocimiento”⁵, y con ello contribuir en el marco de nuestras funciones al esfuerzo por superar la inseguridad. El resultado de esta gestión fue la suscripción de un acuerdo en el que me comprometí a mantener un proceso sostenido de intercambio de información y diálogo entre las partes y cualquier otra institución pública relacionada a la solución de los problemas planteados.

⁵ PDDH. Posicionamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la situación de inseguridad en el país y las políticas estatales de seguridad, emitido el 12 de mayo de 2014.

En el plano internacional, se ha dado seguimiento a las *recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos* presentando informes al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y al Consejo de Derechos Humanos para el Examen Periódico Universal de la Organización de Naciones Unidas.

Asimismo, he dado continuidad con éxito a la ejecución de diferentes convenios de cooperación con organismos internacionales, entre ellos el suscrito con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que tendrá como resultado la elaboración del estudio *Análisis de Contexto- Derechos Humanos y Grupos con Necesidades Específicas en El Salvador*; y con la Comisión de Derechos Humanos de México Distrito Federal (CNDH), en el marco del *Proyecto Red Derechos Humanos de las Personas Migrantes*, en el cual también participa el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE). Así como el *Acuerdo de Cooperación Interinstitucional para la Creación de Mecanismos de Intercambio de Información Sobre Migrantes No Localizados y Cuerpos No Identificados*, que es el instrumento que dio origen al Banco de Datos Forenses de Migrantes No Localizados de El Salvador⁶. Este mecanismo ha permitido que estas instancias aporten sus recursos y experticia para que los equipos de cada parte estén en constante coordinación y comunicación para brindar una respuesta a las familias que reportan a una persona migrante como no localizada.

En cuanto a la *promoción y educación en materia de derechos humanos*, he fortalecido la Escuela de

Derechos Humanos como estrategia para incidir en la prevención de violaciones a derechos humanos, así como del monitoreo de la realidad nacional y la investigación académica en materia de derechos humanos. En este sentido, he logrado consolidar los espacios de interacción y vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y actores internacionales involucrados en la protección y promoción de los derechos humanos, como la actividad conmemorativa realizada en coordinación con la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM), del 32° *Aniversario de la Masacre de El Mozote* y el 65° *Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos*, el 10 de diciembre de 2013.

En cuanto al *fortalecimiento y desarrollo institucional*, he emprendido diferentes acciones entre las que se destacan, como ya se mencionó, la revisión del modelo organizacional y de los procedimientos de protección a derechos humanos, lo cual ha implicado la adopción de algunas medidas como la reorganización de algunas áreas en la sede central con el propósito de dar respuesta efectiva y oportuna a las presuntas víctimas de violación a derechos humanos; realización de inventarios para identificar la mora y dictar criterios para su tramitación y resolución; identificación y estandarización de los procesos institucionales y revisión de la normativa interna para adecuarla a las necesidades institucionales y a las demandas de la realidad nacional.

Además, se ha iniciado la construcción de un nuevo sistema informático con enfoque integral, lo cual era urgente debido a lo obsoleto y limitado del actual. No obstante tales medidas, es necesario avanzar en la tecnificación y cualificación de los equipos técnicos, para lo cual se requiere contar con recursos adicionales.

Igualmente he adoptado medidas que han promovido la participación del personal en

⁶ Conformado por COFAMIDE, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), firmado en agosto de 2010.

asuntos importantes, técnicos y administrativos, mediante la consulta con grupos focales, comisiones de trabajo y el Sindicato de Empleadas y Empleados de la PDDH (SEPRODEHES). También he promovido la elaboración de políticas para optimizar el uso de los recursos, fomentar la transparencia, equidad e igualdad de género en todos los espacios internos y el respeto de los derechos de audiencia y defensa en procedimientos disciplinarios. Asimismo destaco la creación de la Unidad de Género Institucional en Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia y los esfuerzos para concentrar en un edificio único a todas las oficinas de la sede central, lo que permitirá que el personal disponga de condiciones dignas para realizar su trabajo, mejorará la comunicación interna, el funcionamiento administrativo y las facilidades de atención para los usuarios y usuarias.

Los retos que me tocará enfrentar en este período como titular de la PDDH, se enmarcan en la contribución por medio del ejercicio de mi mandato constitucional a la superación de las debilidades de la institucionalidad del Estado que agobia a la población salvadoreña, tales como: la impunidad, la marginación derivada de la pobreza y políticas económicas excluyentes o que no tienen en el centro de sus prioridades a los derechos humanos, la discriminación de grupos en situación de vulnerabilidad, la crisis fiscal y financiera, el desempleo y subempleo y los altos niveles de violencia y criminalidad. Por lo tanto, tenemos que reforzarnos como institución nacional de derechos humanos para incidir oportunamente en la solución a los grandes problemas de la realidad nacional y dar respuesta oportuna y eficaz a las víctimas de violación a derechos humanos, sean de naturaleza individual o colectiva. Por lo tanto es necesario continuar con las siguientes acciones:

1. Dar un salto cualitativo y pasar de la tradicional forma de protección, como es la resolución individual de casos, al análisis de problemáticas situacionales para incidir en políticas públicas y formular propuestas de reformas, en un rol complementario a nuevos sistemas institucionales de protección.
2. Mantener vigilancia sobre la Administración Pública y dar seguimiento a su comportamiento y a los patrones de violaciones de los derechos humanos. Esta supervisión debe ser asumida con eficiencia y eficacia y estar comprometida con el desarrollo integral de la sociedad y del Estado de Derecho.
3. Avanzar en el desarrollo de una cultura de respeto de los derechos humanos por parte de las funcionarias y funcionarios públicos, a través de la coordinación y acompañamiento correctivo de sus actuaciones.
4. Estrechar la relación con las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo con las históricas, para el fortalecimiento mutuo en las áreas de protección, promoción y educación en derechos humanos.
5. Mantener la credibilidad y confianza de la población, las instituciones del Estado y las organizaciones nacionales e internacionales. Ello, sobre la base de una gestión transparente y eficaz en el cumplimiento del mandato constitucional y legal encomendado.
6. Mejorar la comunicación y coordinación interna e interinstitucional.
7. Avanzar en la tecnificación y fortalecimiento del personal de las delegaciones departamentales para descongestionar las áreas de la sede central.

8. Establecer mecanismos objetivos y eficientes de control de la gestión institucional, para la mejora continua de la atención a usuarios y usuarias.
9. Promover un mayor presupuesto que le permita a la PDDH aplicar integralmente el mandato constitucional y disponer de condiciones óptimas de trabajo.

Finalmente, reitero mi compromiso con la esencia y fundamento de los derechos humanos que deviene del principio de la dignidad humana, valor básico de la convivencia y solidaridad de las personas, el cual implica exigir al Estado aquellas

medidas que hagan posible contar con una mejor calidad de vida y gozar a plenitud de los derechos humanos que le son inalienables.

Como titular de esta institución nacional de derechos humanos, controladora de las actuaciones del Estado, refrendo mi deber de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos y en particular, dar una respuesta efectiva a las demandas de la población salvadoreña que depositan en la intervención de la Procuraduría su confianza y expectativas para la restitución de sus derechos vulnerados.

San Salvador, 17 de julio de 2014.

Lic. David Ernesto Morales Cruz
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos

RESUMEN EJECUTIVO

En el período que comprende este Informe Anual de Labores, del *1 de junio del 2013 al 31 de mayo del 2014*, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha continuado ejerciendo su mandato constitucional de velar por los derechos humanos de la población salvadoreña. En los siguientes párrafos se encontrará una breve presentación institucional, la ejecución de los proyectos de la actual planificación estratégica y la sistematización de los resultados de las actividades principales realizadas en el período.

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos es una figura institucional creada para cumplir la misión esencial de promover los derechos humanos y velar porque sean respetados. Se introduce al ordenamiento jurídico nacional luego de la finalización del conflicto armado interno, en el marco de la transición hacia la democracia de la sociedad salvadoreña. Su antecedente se encuentra en las reformas constitucionales de los Acuerdos de México, del 27 de abril de 1991, que posteriormente formaron parte de los Acuerdos de Paz de El Salvador, suscritos en Chapultepec, México D.F., del 16 de enero de 1992. Orgánicamente se encuentra ubicada en el Ministerio Público, pero cuenta con las características de independencia, personalidad jurídica propia y autonomía administrativa.

Actualmente, contamos con un total de 449 servidores y servidoras públicas incluidos en el presupuesto ordinario, de los cuales el 53% (237) son hombres y el 47% (212) son mujeres. El régimen laboral de contratación se distribuye de la siguiente manera: 43 personas están por contrato de servicios profesionales y 406 personas por el régimen de Ley de Salarios. En el período se realizaron 17 contrataciones nuevas de plazas vacantes, de las cuales 10 fueron del sexo femenino y 7 del sexo masculino. El personal se encuentra dividido en tres tipos: personal ejecutivo con un total de 60, de los cuales 25 son mujeres y 35 hombres; personal técnico que lo componen 221 personas, de los cuales 104 son mujeres y 117 hombres; y personal administrativo con 168 personas, de las cuales 83 son mujeres y 85 hombres.

El Plan Estratégico Institucional 2011-2014 está compuesto por 34 proyectos estratégicos y 61 indicadores de resultados o metas, en sus cinco líneas de trabajo: protección de los derechos humanos, análisis e incidencia de políticas públicas, promoción y educación en derechos humanos, acciones y relaciones externas y fortalecimiento institucional. De este modo, se continuó en el período ejecutando dicha planificación, destacando los siguientes proyectos: diseño e implementación de nuevos mecanismos para fortalecer el nivel de respuesta a las presuntas violaciones (40%); implementación de la política de derechos humanos de personas viviendo con VIH-SIDA (100%); implementar la política institucional de género en los mecanismos de protección a derechos humanos (40%); programa de observación y verificación electoral (100%); programa observatorio de los derechos humanos (75%); construcción de propuestas de incidencia desde las mesas permanentes (100%); monitorear e incidir en la actividad legislativa, inversión pública y políticas públicas (100%); investigación, desarrollo y difusión de la memoria histórica (50%); estudio de modernización y reorganización de la PDDH (88%); y automatización de la biblioteca institucional (40%).

La estructura presupuestaria de la PDDH durante el período del presente Informe de Labores se concentra principalmente en la asignación para cubrir las Remuneraciones (75.8%) de su personal y la adquisición de Bienes y Servicios (23.28%); poco menos del 1.0% complementario es asignado

para la Inversión en Activos Fijos (0.46%), las Transferencias Corrientes (0.02%) y los Gastos Financieros (0.44%).

En el período de referencia, la Procuraduría ejecutó US \$ 8.583,158.86 de su presupuesto asignado, lo cual representa un nivel de ejecución del 94.14%. Si consideramos la ejecución por rubro tenemos que se alcanzaron los siguientes niveles de ejecución: 97.15% en Remuneraciones, 85.54% en Bienes y Servicios, 95.7% en Gastos Financieros, 100% en Transferencias Corrientes y 99.88% en Inversiones en Activos Fijos.

Esta Procuraduría, en cumplimiento de su mandato constitucional y legal ha realizado durante este período importantes acciones de protección, promoción y educación en derechos humanos beneficiando a distintos sectores de la sociedad civil y funcionarios de instituciones públicas y municipales; asimismo, ha impulsado medidas para fortalecer dichos servicios con tal de ofrecer una respuesta inmediata y efectiva a las denuncias ciudadanas recibidas; de este modo, se presentan a continuación, de manera general, los siguientes resultados de actividades que son detalladas más adelante en el contenido de este Informe:

En el área de *protección de los derechos humanos*, el personal jurídico atendió a nivel nacional: 8,207 orientaciones legales; 2,549 denuncias admitidas; 3,848 oficios; 387 resoluciones iniciales (225 fueron firmadas en el período); 819 resoluciones finales (170 fueron firmadas en el período); 43 resoluciones de archivo; 2 resoluciones de buenos oficios; y 6 medidas cautelares.

En general, los derechos humanos mayormente denunciados durante el periodo fueron: integridad personal con una frecuencia de 612 veces; debido proceso administrativo con 380; trabajo con 275; seguridad personal con 263; acceso a la justicia con 231; libertad personal con 181; salud con 162, entre otros. Entre

las instituciones mayormente denunciadas se encuentran: la Policía Nacional Civil continúa siendo la más señalada en 1,431 ocasiones; seguido por los diferentes gobiernos locales con 414; juzgados y tribunales con 199; Fiscalía General de la República con 190; Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada con 159; Procuraduría General de la República con 124, entre otras.

También se realizaron acciones de protección en situaciones importantes, tales como: casos en materia laboral, libertades sindicales, seguridad social, salud, derechos de las personas adultas mayores, y comerciantes informales; casos relacionados con problemáticas ambientales y riesgo de desastres a nivel nacional, como lo relativo al tema de proyectos mineros metálicos, contaminación por plomo, contaminación por agroquímicos, seguimiento a emergencias suscitada por la erupción del volcán Chaparrastique; buenos oficios ante instituciones públicas que les corresponden velar por los derechos de las mujeres, en casos de violencia intrafamiliar, violencia psicológica y debido proceso judicial; casos en los que se protegieron los derechos de la niñez y juventud; casos de personas privadas de libertad; entre otros.

En materia de las personas privadas de libertad, esta Procuraduría continuó con su labor de monitoreo y verificación permanente, obteniendo los siguientes resultados: en centros penales se realizaron 336 verificaciones; 899 en bartolinas policiales; 45 en pabellones de reos en centros hospitalario; 125 en centros de reeducación para menores; 82 en juzgados de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena, entre otros. En virtud de lo anterior, a pesar de haber detectado algunos avances, también se destacó que persiste la situación precaria de las personas internas en temas como el hacinamiento, falta de atención médica en general y de enfermedades graves en particular, falta de acceso a medicamentos, entre otros.

En lo relativo a la atención de personas vulnerables o en situación de vulnerabilidad, los Departamentos de VIH y Derechos Humanos, Personas con Discapacidad y Derechos Humanos y la Unidad de Migrantes, continuaron brindando asistencia técnica a otras dependencias sobre temas pertinentes, orientaciones legales a personas usuarias, diligencias de verificación y seguimiento de casos, acciones de activación de instancias competentes, mediaciones con diferentes instituciones, entre otras. Especial atención merece destacar las cuatro jornadas de tomas de muestras de ADN obteniendo el ingreso de 46 casos de migrantes no localizados.

Se destaca la entrada en funcionamiento del Departamento de Fiscalización y Auditoría del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones quien ha desarrollado diversas actividades, entre ellas: la Primera Auditoría en el Centro de Intervención a las Telecomunicaciones de la FGR; elaboración del Primer Informe Anual de la Auditoría realizada y presentado a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa; firma del Protocolo entre Fiscalía General de la República y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para el desarrollo de las atribuciones conferidas en el Art. 33 de la Ley Especial de Intervención a las Telecomunicaciones.

En el área de *análisis e incidencia en políticas públicas, normas y prácticas estatales*, se ha demandado a las autoridades públicas un comportamiento respetuoso de la dignidad humana y del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos. En el período se emitieron 6 informes especiales y situacionales que evalúan los progresos en materia de derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los principales Tratados en esta materia.

Asimismo, se emitieron 17 opiniones Proyectos de Ley, Posicionamientos sobre Normativas y Propuestas de Reforma de Ley, entre las

que destacan las referidas a la adopción de instrumentos internacionales de derechos humanos. De igual forma se publicaron 18 posicionamientos públicos, relacionados a temáticas específicas, situaciones de especial interés para la institución, fechas conmemorativas de los derechos humanos, entre otros.

También, durante el período que comprende al presente informe, la PDDH realizó a nivel nacional un total de 1,630 acciones de protección relacionadas con la observación preventiva, diligencias de buenos oficios y mediaciones. Las problemáticas mayormente atendidas se encuentran referidas a los derechos laborales y de manera particular a los grupos del comercio informal.

En el área de promoción y educación en derechos humanos, pese a los recursos limitados con que cuenta la institución, se han realizado esfuerzos porque estas funciones de difundir y educar, logren expandirse a más personas y entidades tanto públicas como de la sociedad civil, promoviendo la metodología de la réplica de capacitaciones por parte de líderes y lideresas formados por la PDDH. Se ha procurado divulgar la política de educación de derechos humanos entre el personal. Con dichas iniciativas estamos fortaleciendo la estrategia de promoción y educación en derechos humanos.

En sintonía con lo anterior, se informa que el total de actividades de promoción y educación de derechos humanos, en este período a nivel nacional fue de 2,896, con las cuales se beneficiaron a 59,271 personas. De esta población, el 51.1% fueron mujeres. En relación a la edad, 56% de las personas beneficiadas fueron adultos y los jóvenes y la niñez representaron el segundo grupo más atendido con el 44%. En las delegaciones departamentales y locales se efectuó el 70.5% (2,042) de las actividades de promoción y educación, y en la sede central, en San Salvador, se ejecutó el 29.5 % (954).

Sobre las actividades específicamente educativas, éstas representaron 1,645, equivalente al 56.8% del total de acciones. En este tema se contemplaron talleres, cursos, panel fórum, diplomados, materiales pedagógicos, y otras actividades, que pretendían dejar un contenido formal de los derechos humanos, comprensible y asimilable en la conciencia de las personas que han participado en la educación. La cantidad de personas beneficiadas con las actividades educativas durante el período fueron 33,529.

Las actividades de promoción fueron 1,251 correspondiente al 43.2% del total de acciones realizadas en esta área estratégica. Como se ha indicado en informes pasados, la promoción contempla la realización de conferencias, conversatorios, participación en medios de comunicación social, divulgación de informes especiales y situacionales, foros, seminarios, ferias, festivales, celebración de días conmemorativos, reuniones de seguimiento, acompañamiento a comunidades, promoción del mandato del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y actividades de difusión y sensibilización sobre temas importantes como la memoria histórica y los derechos de grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad.

Como se planteó anteriormente, uno de los objetivos específicos de este eje estratégico, fue fortalecer la educación y promoción en derechos humanos en diversos sectores sociales como el sector educativo formal; el sector de los servidores públicos; de las organizaciones sociales y de los grupos en situación de vulnerabilidad, entre otros sectores. Asimismo, en la práctica formativa se ha difundido y socializado el quehacer de esta Procuraduría que se materializa en muchos casos en resoluciones, informes especiales y otros documentos como opciones ilustrativas relacionadas a proyectos de leyes, a adhesiones a instrumentos internacionales como en el caso de la Corte Penal Internacional que establece el Estatuto de Roma.

En el área de *acciones y relaciones externas* se ha logrado la consolidación de los espacios de interacción y vinculación las organizaciones de la sociedad civil y actores internacionales involucrados en la protección y promoción de los derechos humanos. En ese sentido, se han formulado diferentes estrategias tales como la suscripción de convenios de Cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados que tendrá como resultado la elaboración del estudio “Análisis de Contexto-Derechos Humanos y Grupos con Necesidades Específicas en El salvador” y con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México sobre el Proyecto Red Derechos Humanos de las personas migrantes, en el cual también participa COFAMIDE.

En el área de *fortalecimiento institucional*, es importante señalar que los fondos recibidos en los últimos años se destinaron a dignificar los salarios del personal y fortalecer algunas necesidades de funcionamiento institucional. Sin embargo, aún persiste la situación de insuficiencia de recursos, específicamente en la obtención de establecimientos propios; creación de nuevas dependencias de atención a personas en situación de vulnerabilidad; inversión en proyectos sobre temas prioritarios; entre otras. Se destaca en este periodo, la creación de la Unidad de Género Institucional en atención especializada para mujeres víctimas de violencia, así como la revisión y actualización del marco legal institucional y la reorganización del Sistema de Protección y fortalecimiento del Departamento de Denuncias para dar acompañamiento, gestión y respuesta inmediata a las víctimas.

Además, como parte del esfuerzo de dignificar y materializar la aspiración de mejorar la situación laboral de los empleados y las empleadas de la PDDH, enfatizó el seguimiento y ejecución de las cláusulas contenidas en el Laudo Arbitral con carácter de Contrato Colectivo de Trabajo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos

Humanos y el Sindicato de Empleadas y Empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (SEPRODEHES) 2013-2015.

En la misma línea para optimizar la calidad del servicio a las personas usuarias, logramos impartir al personal institucional: nueve capacitaciones en diversas temáticas, beneficiando tanto al personal técnico como administrativo. Se promovieron además, capacitaciones especializadas para el personal técnico, a través de la gestión de cursos, diplomados, talleres y jornadas de sensibilización en temas y actividades relacionadas con la protección y la promoción de los derechos humanos.

Ente las actividades realizadas, destacó la permanencia del programa de capacitación continua del personal institucional, con la realización del “Curso Básico de Mediación

Social” impartido por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano; participación en el “Taller de Prevención de la Violencia y Masculinidades”, impartido por el Centro de Prevención de la Violencia CEPREV; así como los talleres impartidos al personal técnico de las Delegaciones Departamentales y Locales, en el tema de derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo; en ese mismo sentido es importante resaltar la cooperación de la Universidad Alcalá de Henares, Madrid, España, quienes designaron una pasante para colaborar en con esta Institución.

Asimismo, a través de la Unidad de Proyectos se ha logrado mantener la cooperación externa con diferentes organismos tales como PNUD, UNICEF, ACNUR e INTERVIDA quienes apoyaron con asistencia técnica y financiamiento para la elaboración de estudios e informes especiales destinados a fortalecer las capacidades institucionales.

Capítulo
I

**ANÁLISIS SITUACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS**



“El Procurador podrá elaborar y publicar informes sobre situaciones generales o especiales, que afecten los derechos humanos”

Artículo 43 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos



Fotografía tomada el día lunes 19 de mayo de 2014 en verificación a las comunidades sobre la situación de vulnerabilidad y de alto riesgo en las zonas aledañas del Volcán Chaparrastique, San Miguel

El objetivo de este apartado es presentar un balance sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado salvadoreño en materia de derechos humanos durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2013 y el 31 de mayo de 2014. Dado que el período analizado coincide con el último año del ejercicio gubernamental 2009-2014, se incluye una evaluación de las políticas, programas y acciones más relevantes implementadas por el Órgano Ejecutivo, y se retoman además las principales medidas adoptadas o que se encuentran pendientes por parte de los Órganos Legislativo y Judicial. En el análisis desarrollado se enfatiza en los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad tales como mujeres, niñez, adolescencia y juventud, personas con discapacidad, personas viviendo con VIH, personas adultas mayores, personas migrantes, personas de la comunidad LGTBI, personas de los pueblos indígenas, personas víctimas del conflicto armado, principalmente.

Las temáticas abordadas en este apartado han sido ponderadas en base a su relevancia durante el último año y su destacada posición en el debate público; también se han considerado aquéllas sobre las cuales el Estado debe rendir cuentas ante los organismos internacionales de derechos humanos, cuyo abordaje por parte de los poderes del Estado se encuentra pendiente; así como la consideración de planteamientos de derechos humanos que realizan las organizaciones sociales.

Esta apartado se ha estructurado por categorías de derechos, en cada acápite se presenta una breve reseña que introduce en el contexto actual el derecho a analizar; el análisis de los estándares internacionales de derechos humanos; el modo en que se encuentra regulado a nivel nacional; los planes, políticas y acciones desarrolladas, las situaciones particulares o estadísticas que permitan evaluar el estado de cosas. Asimismo, se apoya en información y datos estadísticos oficiales, respuestas de instituciones públicas y pronunciamientos públicos institucionales. Al final, se agregan recomendaciones generales sobre aspectos comunes a todas las temáticas y recomendaciones específicas sobre casos particulares.

1.1 Derechos civiles y políticos

25

a) Seguridad Ciudadana

El Salvador es uno de los países más violentos del mundo. La tasa de homicidios refleja que ha superado en tres veces el promedio mundial (situado aproximadamente en 24 víctimas por cada 100,000 habitantes)⁷ y hasta siete veces los niveles epidémicos establecidos por la Organización Mundial para la Salud, OMS, (10 víctimas por cada 100,000 habitantes)⁸. Además, existen otras manifestaciones violentas igualmente muy graves: en el 2013, el 90% del total de los delitos cometidos correspondieron a hurtos, robos, lesiones, extorsiones y violaciones sexuales; asimismo, las tasas de dichos delitos por mil habitantes se mantienen en niveles altos.⁹

A ello se suma la falta de acceso a la justicia dada la alta predominancia de la impunidad. Según datos del Banco Mundial, entre 2009 y 2011, solo el 3.9% al 3.4% de los casos recibidos por la FGR terminaron en sentencias condenatorias.¹⁰

⁷ UNODC. Estudio Global sobre el Homicidio 2013. Resumen Ejecutivo. P.2.

⁸ PNUD. Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014: Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: Diagnóstico y Propuestas para América Latina, noviembre 2013, página 41.

⁹ PNUD. Experiencias de gestión local en seguridad ciudadana en El Salvador: Foro Experiencias y buenas prácticas sobre seguridad ciudadana. Lecciones y desafíos para El Salvador, San Salvador, 23 de abril de 2014.

¹⁰ Banco Mundial. El Salvador: Estudio Institucional y de Gasto Público en Seguridad y Justicia, Junio 2012, Borrador, p. 12

Sin duda que la generalización de las conductas violentas y prácticas delictivas afectan real o potencialmente los derechos a la vida, la integridad personal y el patrimonio de la población salvadoreña. Sobre esta situación esta Procuraduría ha expresado su preocupación y condena hacia toda actividad delictiva haciendo, además, una serie de recomendaciones orientadas a la incorporación de los derechos humanos en todas las estrategias de seguridad que se implementen.¹¹

Al respecto, se ha considerado como una acción positiva la aprobación de una nueva Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia (2012), la cual está basada en una visión de integralidad en la intervención del Estado; sin embargo, es necesario avanzar hacia la implementación y desarrollo significativo de los componentes y estrategias de prevención, la disminución de factores de riesgo, la rehabilitación, y la reinserción social.

De manera particular se ha destacado la necesidad de establecer como prioridad en las políticas de seguridad la atención a las víctimas de la violencia y el delito. Esto incluye el fortalecimiento del Programa de Protección de Víctimas y Testigos y la aprobación de protocolos aplicables en los procesos administrativos y judiciales que incluyan criterios de trato humano y compasivo hacia las víctimas, además de establecer medidas en orden a favorecer su acceso a servicios de salud, rehabilitación y beneficios de resarcimiento o indemnizatorios a causa del daño sufrido.

Según los datos derivados del Sistema de Protección de la PDDH, durante el período comprendido entre los meses de junio de 2009 y abril de 2014, la Policía Nacional Civil continuó siendo la entidad estatal mayormente denunciada por presuntos abusos contra los derechos humanos de la ciudadanía, recibiendo un total de 5,125 denuncias contra la corporación

policial, lo cual representa el 33% del total de las denuncias recibidas contra el Estado en dicho período; los hechos más denunciados son afectaciones a la integridad personal (2,577) y en perjuicio de la libertad personal (1,182).¹²

Otro factor preocupante lo representan las condiciones laborales precarias que afectan a los integrantes de la PNC, especialmente en puestos policiales en el interior del país. La PDDH, aunque en menor grado, recibe denuncias de personal de la corporación por este motivo, así como también por presuntos abusos de autoridad y afectaciones al debido proceso administrativo, en algunos casos disciplinarios, atribuidos a sus superiores.

Siempre en materia de respeto a los derechos humanos, no puede obviarse la preocupación adicional por la perpetración de diversos homicidios en lo que va del 2014, los cuales reúnen las características de las ejecuciones extrajudiciales, y parecen haber sido motivados con el espurio propósito de la llamada “limpieza social”. Los hechos han utilizado ropas oscuras y, en ocasiones, armas largas en semejanza con los efectivos policiales; las víctimas han sido generalmente jóvenes a quienes se atribuye pertenencia a pandillas. Esta Procuraduría ha abierto varios expedientes de investigación sobre los casos y, en principio, las autoridades han negado que existan elementos suficientes para presumir la participación de policías en tales ejecuciones.

Los llamados “grupos de exterminio” han operado esporádica pero recurrentemente desde los primeros años de la pos guerra en el país, y en el pasado se demostró la participación de miembros de la corporación policial en algunos de los casos. Tales grupos operan desde la clandestinidad y recuerdan la trágica experiencia que en nuestro país dejaron los llamados escuadrones de la muerte, por lo cual es un deber prioritario de las autoridades policiales, fiscales y judiciales, investigar con la mayor acuciosidad

¹¹ Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. “Posicionamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la Situación de Inseguridad en el país y las Políticas Estatales de Seguridad”. Emitido el 12 de mayo de 2014.

¹² *Ibidem*.

este tipo de hechos y erradicar tales grupos, en caso de comprobarse su existencia. La PDDH mantendrá un seguimiento permanente de las investigaciones ante este tipo de hechos lamentables.

Por otro lado, en el marco de las facultades de la PDDH contenidas en la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones se realizó la primera auditoría anual de las funciones conferidas a la Fiscalía General de la República (FGR) en dicha ley, remitiendo un informe preliminar en el mes de septiembre de 2013 a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa.

En el referido documento se destaca que el Centro de Intervención a las Telecomunicaciones (CIT) no ha definido claramente los procedimientos y dependencias que serán las encargadas de tramitar los casos que puedan presentarse por infracciones administrativas, o la comisión de delitos relacionados a la revelación de información por parte del personal asignado. Asimismo, se informa que la PDDH no obtuvo información sobre la cantidad de personal adscrito al CIT, ni cuánto de este personal se encarga directamente del análisis de los casos.

El CIT tampoco cuenta con información de los controles implementados por otras instituciones involucradas para resguardar la información relacionada al trabajo realizado, en especial los controles internos de los juzgados de Instrucción de San Salvador que son los encargados de la autorización de la intervención.

Con relación al sistema penitenciario salvadoreño, resolver su crítica situación continúa siendo un desafío importante para el Estado salvadoreño y ocasiona que la población privada de libertad cumpla las penas y detenciones provisionales en condiciones crueles, inhumanas y degradantes.

La Dirección General de Centros Penales (DGCP) informó que hasta el 30 de abril de

2014 se encontraban reclusas 27,342 personas, lo cual representa una cantidad tres veces mayor que la capacidad instalada del sistema penitenciario¹³ (8,490 personas). De este total, el 78.2% de las personas privadas de libertad ha sido condenada y el 21.8 se encuentra todavía procesada.

Sumado a ello, persisten situaciones de especial gravedad tales como: la insuficiente capacidad de la DGCP para atender las necesidades de salud física, mental y odontológica; problemas con la calidad y cantidad de alimentación; dificultades para la implementación del tratamiento individualizado por los equipos del personal técnico; limitaciones para las actividades de acceso a la educación y al trabajo; aumento en los factores de inseguridad personal por situaciones de criminalidad intercarcelaria que incluso pone en riesgo la vida de las personas internas y del personal de custodia, sin olvidar la vulnerabilidad de la infraestructura ante situaciones de amenazas naturales o desastres.

Otro aspecto importante está referido a iniciar acciones para limitar el uso excesivo de la detención preventiva así como su duración, recurriendo a medidas alternativas siempre que sea posible y cuando la persona acusada no suponga una amenaza para la sociedad.¹⁴ Al respecto, es necesaria la adopción de medidas integrales orientadas a respetar los derechos de las personas privadas de libertad y asegurar condiciones de reclusión compatibles con la dignidad humana. Dichas medidas deben tener como fin primordial la readaptación social y la rehabilitación personal, asegurando la atención psicosocial y el control judicial efectivo de la ejecución de las penas privativas de la libertad.¹⁵

¹³ Esta cifra pudiera no ser la capacidad real, pues varios centros penales tienen áreas inhabilitadas para el internamiento de personas, lo cual ha sido corroborado por personal de esta Procuraduría.

¹⁴ Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, Observaciones finales a El Salvador, CAT/C/SLV/CO/2, del 19 de noviembre de 2009, observaciones 16 "Detención preventiva" y 17 "condiciones de privación de libertad".

¹⁵ CIDH "Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad" OEA/Ser.L/V/II. Doc. 64 del 31 diciembre 2011.

b) Memoria Histórica

Esta Procuraduría declara el especial interés de incidir en las políticas públicas para dar cumplimiento a los derechos de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado salvadoreño (1980-1992), particularmente frente a las obligaciones reconocidas por diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y que, a más de veinte años de suscribir los Acuerdos de Paz, todavía son parte de la agenda pendiente del Estado salvadoreño: a) el derecho a la recuperación de la memoria histórica, que incluye el derecho a conocer la verdad de lo acontecido, el deber de recordar y las garantías para la protección de esa memoria; b) el derecho a la justicia; y c) el derecho a la reparación integral.

De acuerdo al Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, se logró identificar durante el conflicto armado un patrón sistemático de ataques generalizados en contra de la población civil, como asesinatos, secuestros, masacres, torturas, ejecuciones sumarias y otros actos de violencia que pueden ser tipificados como crímenes en contra de la humanidad.¹⁶

En el último quinquenio se han dado acciones gubernamentales en orden a reconocer los derechos de las víctimas, lo que tiene un valor histórico relevante en tanto representa la superación de la tradicional postura oficial de negación de la historia sobre las graves violaciones de los derechos humanos en El Salvador en aquel trágico período. En ese sentido, el Estado salvadoreño ha impulsado procesos de reparación

¹⁶ En un período de seis meses, la Comisión recibió más de 22 mil denuncias de violaciones a derechos humanos; un 60% correspondieron a ejecuciones extrajudiciales (13,070 personas asesinadas); el 20% a desapariciones forzadas (4,937 personas desaparecidas); y 20% a denuncias de tortura (4,949 personas torturadas). La responsabilidad de tales hechos fue del 85% para agentes del Estado, a grupos aliados a éstos y a los escuadrones de la muerte; un 10% a grupos delincuenciales no identificados; y un 5% para el grupo guerrillero FMLN. Estos hechos, han marcado la historia, el presente y el futuro del Estado de Derecho en El Salvador. Véase ONU. Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador: De la locura a la esperanza la guerra de 12 años en El Salvador. New York, Estados Unidos: Naciones Unidas, 1992-1993.

en el marco del cumplimiento de los informes y sentencias del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, dando lugar a peticiones de perdón a las víctimas y al reconocimiento de la responsabilidad estatal por los crímenes cometidos.

De manera particular destaca la creación del “Programa de Reparaciones a las Víctimas de graves violaciones a Derechos Humanos ocurridas en el contexto del Conflicto Armado Interno” el cual establece medidas de rehabilitación, indemnización, dignificación de las víctimas y garantías de no repetición de los hechos.¹⁷ Asimismo, con base en el mencionado programa, se ha creado y puesto en funcionamiento el “Registro de Víctimas de graves violaciones a Derechos Humanos” cuya finalidad es reconocer a las víctimas y la adecuada ejecución de las diferentes medidas de reparación adoptadas. Con la ejecución adecuada de este marco jurídico, el gobierno estaría sentando las bases para dignificar a las mencionadas víctimas e iniciando un verdadero camino hacia una reconciliación nacional.

En orden a contribuir a la reversión del estado de impunidad sobre tales crímenes, esta Procuraduría expresó su satisfacción por la emisión de la sentencia de amparo 665-2010, dictada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual declara la violación al derecho de acceso a la jurisdicción, el derecho a conocer la verdad, el derecho de petición y respuesta de las víctimas sobrevivientes de la masacre perpetrada el 25 de julio de 1981 en el Cantón San Francisco Angulo, Municipio de Tecoluca, Departamento de San Vicente, por efectivos de la Fuerza Armada e integrantes de la Defensa Civil. La referida sentencia ordenó al Fiscal General de la República a impulsar en un plazo razonable una investigación seria, exhaustiva, diligente y concluyente, con el fin de esclarecer los hechos; además, dar respuesta a las diversas peticiones en el mismo sentido de las víctimas, ignoradas durante varios años, y deja

¹⁷ Decreto Ejecutivo N° 204 del 23 de octubre de 2013, publicado esa misma fecha en el Diario Oficial N° 197, Tomo N° 401.

expedita a éstas la promoción de un proceso por los daños materiales y morales resultantes de la omisión fiscal.

Asimismo, se reconoce como un avance la resolución emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en la que ordenó al Ministro de la Defensa Nacional recuperar la información castrense respecto a los operativos de la Fuerza Armada realizados entre 1981 y 1983 en los cantones Tenango y Guadalupe, municipio de Suchitoto, Cuscatlán; y en el cantón San Francisco Angulo, municipio de Tecoluca, San Vicente, respectivamente. La referida resolución se presenta luego que fuera rechazada una solicitud en la que el Ministerio de la Defensa alegó la destrucción e inexistencia de la referida información; por tanto, el IAIP obliga a que dicha cartera de Estado la reconstruya por encontrarse relacionada con los casos de violaciones a derechos humanos del conflicto armado, otorgándole dos meses para cumplir. Asimismo, constituye un paso para alcanzar justicia, ya que las autoridades militares deben explicar cómo se destruyeron los archivos originales a fin que los responsables puedan ser identificados, juzgados y eventualmente sancionados.

A pesar de lo anterior, en el período del presente Informe se constataron dos hechos lamentables que atentaron contra las labores que realizan organizaciones sociales identificadas como entidades defensoras de los derechos humanos, y que dejaron en riesgo y vulnerabilidad la documentación histórica e importante para el impulso de acciones judiciales sobre casos de graves violaciones a derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado. Esta Procuraduría asumió desde un inicio un rol protagónico en la denuncia de tales hechos, y exhortó a las instituciones competentes la adopción de medidas que garantizaran el resguardo de la información y la protección de las víctimas, familiares, y las y los defensores de derechos humanos.

El primero de ellos ocurrió el treinta de septiembre del dos mil trece, fecha en la que el señor Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, ordenó de forma abrupta e inconsulta la disolución de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, así como el despido sin previo aviso de todo su personal calificado. El cierre tuvo repercusiones en muchas comunidades que recibían asistencia jurídica gratuita, recepción de denuncias e investigación en casos de violación a derechos humanos, programas de prevención de violencia, atención a la niñez y juventud, así como educación en derechos humanos. Asimismo, colocó en grave vulnerabilidad el archivo histórico que dicha oficina custodiaba, el cual contiene al menos 50 mil expedientes de denuncias de abusos de derechos humanos que acumuló a lo largo de tres décadas. De acuerdo a estimaciones de organismos internacionales, el archivo contiene el 80% de todos los documentos existentes sobre violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado y que fueron retomados por el Informe de la Comisión de la Verdad de El Salvador de 1993.

Esta Procuraduría declaró la violación a los derechos de promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos en perjuicio de las y los defensores de derechos humanos de la Oficina de Tutela Legal por parte del Señor Arzobispo de San Salvador. Así como la violación al derecho a un debido proceso por inobservancia del principio de proporcionalidad por el señor Fiscal General de la República y el señor Juez Octavo de Paz de San Salvador.

El segundo de los hechos ocurrió en horas de la mañana del catorce de noviembre del dos mil trece, cuando personas armadas no identificadas ingresaron por la fuerza a la sede de la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos. En este acto violento incendiaron expedientes y sustrajeron documentos que contenían datos privados de familiares de las víctimas, así como otros que sustentaban procesos judiciales que actualmente dicha organización se encuentra

tramitando ante instancias nacionales e internacionales. Posteriormente, se tuvo conocimiento que cinco personas que laboran en dicha Asociación fueron perseguidas por sujetos desconocidos, por lo que se consideraron sentirse amenazadas en su seguridad e integridad.

Esta Procuraduría condenó de forma categórica el ataque perpetrado, a la vez expresó su preocupación por las características del hecho, el cual se asemeja a los atentados cometidos contra las y los defensores de derechos humanos durante el conflicto armado, ya que tuvo entre sus propósitos evidentes la destrucción de archivos que registran investigaciones sobre casos relacionados a violaciones a derechos humanos. Lo anterior causa un efecto amedrentador a las labores del personal de la Asociación, quienes acompañan a los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas de niños y niñas ocurridas durante el conflicto armado.

De este modo declaró la vulneración a los derechos a la verdad, al acceso a la justicia, a la garantía de confidencialidad, a la seguridad personal de las y los defensores de derechos humanos, y a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos. Exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) una investigación exhaustiva y pronta para esclarecer este atentado, examinando seriamente la posibilidad de que se trate de un ataque motivado por el interés de infundir temor y amedrentar el trabajo que realiza la Asociación en torno a la búsqueda de justicia para las víctimas de desapariciones forzadas durante el conflicto armado; así como al Director de la Policía Nacional Civil (PNC) instando a la ejecución eficiente y pronta de las acciones de su competencia, además de proporcionar seguridad y protección al personal y oficinas de Pro-Búsqueda.

Por otro lado y en cumplimiento de su mandato, la Procuraduría ha impulsado y acompañado acciones promovidas por las víctimas y familiares del conflicto armado; de esta manera, en la

conmemoración del “Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas” y el Aniversario del Martirio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, se impulsó la “Asamblea Permanente de Víctimas”, espacio en el que se dará el seguimiento a la agenda de recuperación de la memoria histórica en coordinación con las diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos.

También, esta institución ha buscado incidir en la adhesión y posterior solicitud de ratificación de algunos instrumentos internacionales como el Estatuto de Roma, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Sin embargo, todavía se encuentran pendientes de ratificación la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad y el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que vendrían a ampliar los mecanismos de protección ante violaciones a derechos humanos de la población salvadoreña.

c) Derechos a la Libertad de Expresión

El derecho a la libertad de expresión implica que todas las personas pueden buscar, investigar y recibir información y, además, expresar y difundir su pensamiento, opinión e informaciones de toda índole sin limitaciones de fronteras, *por cualquier medio o cualquier procedimiento de su elección*.¹⁸ Este derecho también tiene una faceta o dimensión social en la cual cobran especial importancia los medios de comunicación, los cuales cumplen un papel esencial en tanto vehículo o instrumento para el ejercicio de

¹⁸ Este derecho garantiza de la forma más amplia posible recibir, buscar, y difundir ideas, opiniones o información. Artículos 6 de la Constitución de la República, artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

la libertad de expresión e información en sus dimensiones individual y colectiva en una sociedad democrática.¹⁹

Es por ello que para esta Procuraduría es de suma importancia el tema del reconocimiento legal y el fortalecimiento de los medios de comunicación por radio, televisión y prensa escrita, con especial énfasis en los medios comunitarios de radio y televisión, porque de su existencia depende que existan una verdadera pluralidad de voces y diversidad de contenido, así como una mayor accesibilidad para que los grupos normalmente excluidos de los medios de comunicación puedan expresarse.

La actual Ley de Telecomunicaciones no reconoce los tipos de sectores de la comunicación, refiriéndose únicamente a concesionarios de forma general, por lo que en la práctica al dar un tratamiento de bien privado a las concesiones²⁰ está estableciendo un marco regulatorio referido únicamente a los medios privados con fines comerciales, y no brinda reconocimiento legal ni establece disposiciones que faciliten el surgimiento y fortalecimiento de medios comunitarios. Por tanto, es necesario que la legislación nacional en materia de comunicaciones respete los estándares internacionales y reconozca a los medios públicos y estatales, los privados y los comunitarios.

Para esta Procuraduría, el hecho que la subasta pública sea el único mecanismo para asignar las concesiones de frecuencias radioeléctricas para los medios de radiodifusión (radio y televisión), puede violentar los derechos a la igualdad y libertad de expresión. Ello, porque significa basar en el aspecto económico el otorgamiento de una concesión para el uso de un bien público de carácter limitado, lo cual favorece a las personas

naturales o jurídicas con mayor poder adquisitivo y perjudica la posibilidad que organizaciones sociales, entidades académicas o cualquier grupo social que tengan ingresos menores y con una propuesta comunicacional diferente, tengan acceso a frecuencias para crear medios de comunicación alternativos o comunitarios.

d) La corrupción como hecho de violación a los derechos humanos

Tanto la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción como la Convención Interamericana contra la Corrupción establecen la responsabilidad de los Estados para combatir la corrupción y erradicar la impunidad, en particular desarrollando las acciones de prevención, detección, sanción y erradicación de dichas prácticas por medio de mecanismos que hagan efectivo su cumplimiento. También alude a las instrucciones al personal de las entidades públicas, la forma de contratación de funcionarios públicos y el control que debe ejercer un Órgano superior.

En ese mismo sentido, tanto el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) como el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (CDN) emitieron opiniones y lineamientos²¹ encaminados a proveer herramientas para enfrentar con eficacia la corrupción y los daños que derivan de ella; identificando claramente a las víctimas y la obligación en sus tres niveles que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar o cumplir.

Durante el presente año se creó una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa encargada de investigar el empleo de donativos y préstamos destinados a proyectos que beneficiarían a personas víctimas de la vulnerabilidad socio-ambiental, tales como: reconstrucción después de desastres naturales, mitigación en áreas de

¹⁹ Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 117; Corte I.D.H., Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 149.

²⁰ Ley de Telecomunicaciones, artículo 15 Derecho de explotación, inciso 1º: "El derecho a la explotación derivado de las concesiones otorgadas por la SIGET para el uso del espectro, es un bien privado, pudiendo ser transferible y además fragmentable, en el tiempo, en las frecuencias como en el espacio geográfico"

²¹ La Corrupción y los Derechos Humanos: Véase en el sitio electrónico: http://www.ichrp.org/files/reports/52/131_report_es.pdf, última visita el 1 de julio de 2014.

alto riesgo, infraestructura básica y combate a la pobreza, pequeños proyectos para el desarrollo económico y social y viviendas permanentes para personas afectadas por terremotos.²²

En este contexto, el Procurador señaló públicamente y ante audiencia convocada por la citada Comisión Especial que la corrupción es un hecho constitutivo de grave violación a los derechos humanos, ya que impide que las personas gocen de todos sus derechos, especialmente los económicos, sociales, culturales y políticos; afectando principalmente los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, impidiendo que las condiciones de vida de miles de familias mejoren.

En razón de lo anterior, esta Procuraduría se pronunció²³ con respecto a la responsabilidad que deben asumir los funcionarios públicos que gobernaron durante el período de 2002 y 2003 en vista de que incumplieron con las obligaciones de reconstruir las zonas afectadas por los desastres naturales, de construir viviendas a las personas afectadas por los terremotos, y de garantizar y proteger la vida de quienes vivían en zonas de alto riesgo. De igual manera, señaló la importancia de romper la impunidad e investigar el destino final de los fondos con el objeto de devolverlos a la Hacienda Pública para que sean utilizados en los proyectos planteados garantizando los derechos humanos a las víctimas.

e) Derechos políticos

La sociedad salvadoreña ha avanzado en el proceso de democratización con la celebración de elecciones libres de manera sucesiva e ininterrumpida desde que se instauró un nuevo

régimen político con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992. En particular, fue relevante para el sistema político la alternancia en el poder alcanzada en las elecciones generales del 2009, en las cuales el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) derrotó al partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) después de que éste se mantuviera cinco períodos sucesivos en la presidencia (1989-2009).

El contexto político posterior a esas elecciones se caracterizó por una dinámica inusual de reformas legislativas y la emisión de una serie de medidas administrativas dirigidas a facilitar el ejercicio del voto de sectores que tradicionalmente se encontraban excluidos, ampliar las modalidades de participación para optar a cargos públicos, perfeccionar los procedimientos de votación, activar de oficio la justicia electoral, reivindicar el ejercicio del sufragio libre con plena capacidad de opción, financiamiento político, acceso a medios públicos, dotar de transparencia a las elecciones, y el fortalecimiento a la representación política. Lo anterior ha significado que el Estado salvadoreño camine progresivamente a una profundización de la democracia, proceso de reforma general que se encontraba estancado desde hace dos décadas.

Este comportamiento del Estado se debió fundamentalmente a la sustanciación de sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que exigieron de la Asamblea Legislativa la promoción de modificaciones al ordenamiento jurídico electoral. Independientemente de los obstáculos que se impusieron en su momento para tornar de efectividad a tales reformas, se regularon novedosas modificaciones al sistema electoral como las candidaturas no partidarias, la lista cerrada y desbloqueada, y la modalidad del voto por rostro; así como la aprobación de nuevos cuerpos legales como el Código Electoral, la Ley de Partidos Políticos, la Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior en las Elecciones Presidenciales y la reforma de los Concejos Municipales Pluripartidarios.

²² Fondos donados por la República de China-Taiwán, entre octubre de 2003 y abril de 2004, fondos recibidos para los programas de reconstrucción de los daños ocasionados por el Huracán Mitch, y para atender la emergencia y reconstrucción post-terremotos de enero y febrero del 2001.

²³ Oficio de respuesta de fecha 11 de febrero de 2014 suscrito por el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Ernesto Morales Cruz ante convocatoria hecha por la Comisión Especial para Investigar el Destino de los Fondos Donados por la República de China-Taiwán de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador.

Asimismo, en el último quinquenio el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha adoptado medidas administrativas que han resultado favorables para el ejercicio del derecho al voto tales como la ampliación en todo el territorio nacional del voto residencial; la emisión de directrices a los organismos electorales temporales para facilitar el ejercicio del voto a miembros de la Policía Nacional Civil, Academia Nacional de Seguridad Pública, Comunidad LGBTI y personas con discapacidad; la institucionalización vía reglamentación de la figura del observador electoral provocando una masiva inscripción de organizaciones nacionales e internacionales; y la adopción de medidas de control como la penalidad a servidores públicos que emitan el sufragio dos veces y la prohibición de tomar fotografías o vídeos a la papeleta de votación al momento de ser marcada.

No obstante, todavía falta avanzar hacia la participación política en espacios diferentes a la convocatoria de elecciones a cargos populares para que la ciudadanía pueda emitir sus opiniones y participe en los asuntos públicos que impactan la vida cotidiana en sus localidades, como la regulación de mecanismos de democracia directa: cabildos abiertos, consultas públicas, comités de desarrollo local, sesiones públicas de los organismos legislativos o municipales, planes de trabajo y presupuesto con enfoque participativo en su discusión y elaboración, entre otros.

En ocasión a la verificación y observación de las pasadas elecciones presidenciales celebradas el 2 de febrero y el 9 de marzo del 2014, esta Procuraduría afirmó que el proceso electoral salvadoreño ofrece suficientes garantías para celebrar elecciones democráticas, cumpliendo con los estándares internacionales de inclusión, limpieza, competitividad y acceso libre a cargos públicos. A su vez, reconoció la efectividad de las medidas adoptadas por el TSE para el procesamiento de datos durante el escrutinio final que cumplió con lo establecido en la legislación electoral de manera ágil y transparente. Sin duda

alguna, se ha avanzado significativamente en la optimización de los eventos electorales. En esta línea, también valoró positivamente la labor de la Policía Nacional Civil cuya presencia en la totalidad de los centros de votación contribuyó al desarrollo de los comicios en condiciones de seguridad. Además, reconoció el espíritu de servicio de la corporación policial en favor de grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad así como la respuesta inmediata ante las solicitudes de los fiscales electorales, del personal y observadores de esta Procuraduría para atender los casos aislados de tensión o conflictos ocurridos a lo largo de ambas jornadas.

No obstante, algunas de las reformas aprobadas experimentaron problemas en su implementación afectando en diferente medida las características esenciales de elecciones democráticas. Tal es el caso del voto desde el exterior, reforma que se implementó por primera vez, pero que resultó limitada en sus proyecciones debido a la aprobación tardía del decreto de promulgación de la Ley, lo cual no permitió la aprobación oportuna del presupuesto el cual, además, sufrió un recorte financiero que afectó áreas claves del plan inicial aprobado por el TSE. Asimismo, no se adoptaron medidas para facilitar el empadronamiento, difundir la forma adecuada para emitir el voto y capacitar a las personas que integraron los organismos temporales, provocando la anulación de aproximadamente el 49% de los sobres recibidos con estos votos, lo que indica que debe hacerse una revisión exhaustiva del procedimiento establecido.

Aunque se emitieron medidas administrativas para facilitar el ejercicio del voto y participar en la observación electoral a miembros de la Comunidad de Lesbianas, Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual (LGBTI), se reportaron algunos casos de discriminación que no pudieron ser evitados en contra de esta minoría, particularmente las personas trans durante el ejercicio de emisión del sufragio, por lo que hace falta realizar una campaña de sensibilización

y efectuar una capacitación continua para que los organismos electorales temporales no obstaculicen la participación política de este sector social.

Esta Procuraduría expresó su satisfacción por la participación de las personas policías y el alumnado de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) mediante la emisión e implementación del Decreto Legislativo N° 614. Hubo así un progreso notable en el goce del derecho al sufragio, lo cual contribuyó directamente a fortalecer el carácter democrático de las elecciones presidenciales. Sin embargo, se presentaron algunas dificultades respecto a la redacción del texto que contiene el Decreto y la posición rígida de las autoridades de los organismos electorales. De esta manera, muchas de las personas a las que iba dirigida la medida no pudieron ejercer su derecho al voto porque no estuvieron adscritos a un centro de votación específico, y otros, al estarlo, no se encontraron en los padrones electorales. En este sentido, recomendamos a la Asamblea Legislativa a que reformulara el decreto en comento para que se estableciera con claridad que todas las personas pertenecientes a ambas instituciones públicas pudieran votar sin más restricciones que las dispuestas por la ley; así como ajustar las medidas organizativas pertinentes con tal de evitar aglomeraciones.

Por otro lado, las campañas electorales se desarrollaron con respeto al derecho a la libertad de expresión y pensamiento por parte de los partidos políticos y candidaturas, así como por sectores sociales independientes, empero se continuaron presentando problemas como la propaganda electoral anticipada y las brechas significativas en el acceso a medios de comunicación que generaron un desbalance en la competencia política e incidieron en las oportunidades de la ciudadanía para ejercer el voto de manera libre e informada.

A pesar del avance en la regulación del acceso

a medios de comunicación públicos con la entrada en vigencia de la Ley de Partidos Políticos, persistieron evidentes desequilibrios en la publicidad pagada y cobertura mediática a favor de los partidos políticos y personas candidatas que cuentan con mayores recursos económicos, en detrimento de los partidos minoritarios y candidaturas no partidarias. Esta Procuraduría ha recomendado a la Asamblea Legislativa que impulse las reformas en orden a garantizar la equidad en el acceso a los medios de comunicación para todos los partidos políticos que participen de las contiendas electorales.

Esta Procuraduría resolvió una denuncia relacionada a la negación de la participación de los empleados públicos en actividades políticas, por medio de resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia de referencia 8-2014, en la que se ordenó suspender provisionalmente los efectos del artículo 1 inciso 2° del Decreto Ejecutivo 181/2013, que contiene las “Disposiciones para Regular la Eficaz Gestión de la Administración Pública en el Marco del Proselitismo Electoral y de las Actividades que el mismo conlleva”. Tras el análisis del caso, en la resolución final²⁴ se concluyó que la medida cautelar y su posterior aclaración dictada por la Sala estableció restricciones al pleno y libre ejercicio de los derechos políticos y del derecho de la libertad de expresión de todos los funcionarios y funcionarias, empleados y empleadas públicas, sin haber fundamentado suficientemente las restricciones impuestas en tales restricciones.

En esa oportunidad, la Procuraduría concluyó que si bien las medidas carecen de autonomía procesal y son transitorias, el alcance de las mismas ocasionó la limitación o restricción de derechos fundamentales de rango constitucional y primera relevancia en el ordenamiento democrático de los servidores públicos en el marco del proceso electoral realizado este año. Por lo tanto, declaró la violación a los

²⁴ PDDH. Resolución final del expediente SS-0080-2014. Emitida el veintiséis de febrero de dos mil catorce.

derechos políticos, particularmente los derechos a la participación en las actividades políticas individualmente o a través de partidos políticos, a la libertad de debatir los asuntos públicos, de realizar reuniones y manifestaciones pacíficas, de publicar material político, hacer campaña y propaganda política, y de la libertad de expresión, en perjuicio de los denunciantes y de todos los funcionarios y empleados públicos que se ven afectados con las restricciones impuestas.

En cuanto al componente de la formulación de las plataformas programáticas, reconocimos que algunos partidos políticos cumplieron con el deber de transparencia de publicar para garantizar el acceso a la información a la población salvadoreña. Además, algunos institutos políticos emplearon metodologías participativas para su formulación, lo que generó una riqueza de propuestas muy bien estructuradas y que contenían aspectos relacionados a los derechos humanos. No obstante, expresó su desacuerdo con las proyecciones en orden a impulsar estrategias en materia de seguridad ciudadana que tenderán a la militarización del funcionamiento de las instituciones, pues tales propuestas estarían en principio reñidas con preceptos constitucionales y abrirían la posibilidad de afectación a los derechos humanos.

Un avance importante representó la incorporación a las facultades del TSE en el vigente Código Electoral de iniciar de oficio los procedimientos para sancionar las infracciones a las disposiciones electorales. Tal reforma viene a

superar la tolerancia del Estado que prevaleció en eventos anteriores relacionada a la transgresión manifiesta de la normativa electoral. Durante las pasadas elecciones presidenciales se observó que la aplicación de tales procedimientos cumplió con garantías básicas para ser expedito, permitir el acceso igualitario a la justicia electoral, permitir la presentación de pruebas y dotar de proporcionalidad a las sanciones aplicables. No obstante, en algunos casos el TSE no actuó con la debida celeridad en los que se señalaron posibles vulneraciones a prohibiciones tales como hacer campaña anticipada, incurrir en inhabilidades y prohibiciones, o de hacer propaganda en el día de las elecciones, a pesar de haber sanciones establecidas en el marco legal electoral.

Finalmente, esta Procuraduría ejerció un papel fundamental en la verificación del proceso de escrutinio final de las pasadas elecciones presidenciales del 2014. Debido al resultado estrecho que presentó el conteo preliminar por parte del TSE, que anunciaba un desenlace tenso, se tomó la decisión de conformar un equipo verificador que se integró a las veintitrés mesas de trabajo para garantizar el cumplimiento de los procedimientos legales y administrativos que dictara el ente rector en materia electoral, además de mediar ante cualquier conflicto que surgiera en la revisión de las actas electorales. También se realizaron diferentes llamados a los partidos políticos y la población en general para evitar mensajes de confrontación y dirimir las desavenencias mediante los mecanismos legales correspondientes.

1.2 Derechos económicos, sociales y culturales

a) Derecho a un nivel de vida adecuado

En junio de 2009 el Presidente de la República anunció la ejecución del Plan Global Anti Crisis (PGAC), el cual integraba un conjunto de medidas agrupadas en cuatro componentes, con las cuales se pretendía dar una respuesta inmediata para “resguardar a la población en condiciones de mayor pobreza y de vulnerabilidad de los impactos negativos de la crisis, iniciar la construcción del Sistema de Protección Social Universal (SPSU) y aprovechar la coyuntura para construir políticas de estado inclusivas en materia económica y social”²⁵.

El componente del SPSU en el PGAC fue retomado y ampliado en el Plan Quinquenal para el Desarrollo 2010-2014, para integrar programas como: Comunidades Solidarias; Dotación de Uniformes, Zapatos y Útiles Escolares; Salud y Alimentación Escolar; Apoyo Temporal al Ingreso (PATI); Ciudad Mujer; Nuestros Mayores Derechos; Agricultura Familiar; Reforma de Salud; Acceso y mejoramiento de vivienda; infraestructura social básica; y el esquema de subsidios al gas licuado, al transporte colectivo y a la energía eléctrica²⁶.

Al respecto, esta Procuraduría ha manifestado en distintas ocasiones su satisfacción por la implementación de dichas medidas, las cuales constituyen esfuerzos destacables que contribuyen a paliar la crítica situación que enfrentan las familias empobrecidas y en situación de mayor vulnerabilidad; no obstante, también reconoce la necesidad de avanzar en la definición de una política social integral, articulada con la política económica, con la que se supere el enfoque

compensatorio y asistencialista, y aborde los determinantes estructurales y sistémicos que generan la exclusión, el empobrecimiento y que profundizan las brechas de desigualdad económica, social, genérica, etaria y étnica.

En este contexto, para la PDDH es relevante la reciente aprobación de la “Ley de Desarrollo Protección y Social”²⁷, que establece el deber del Estado salvadoreño de contar con una Política de Desarrollo, Protección e Inclusión Social, para lo cual está en la obligación de formular, de manera participativa y en el primer semestre posterior al inicio de cada período presidencial, un Plan de Desarrollo, Protección e Inclusión Social. Además, en esta normativa se establece que los programas del SPSU forman parte del Subsistema de Protección Social Universal.

A juicio de esta Procuraduría, para potenciar el pleno ejercicio del derecho a un nivel de vida adecuado y el acceso de la población a los mecanismos contemplados en el marco constitucional para denunciar violaciones a los derechos fundamentales, el Estado debe avanzar en el reconocimiento de este derecho de forma explícita en la Constitución; al igual que el derecho a una alimentación adecuada y el derecho al agua. La PDDH considera prioritario el reconocimiento de estos derechos en la Constitución y su desarrollo en la legislación secundaria y la jurisprudencia, estableciendo garantías para su exigibilidad y justiciabilidad.

Es de resaltar que pese a la persistente situación deficitaria de las finanzas públicas, durante el último quinquenio se ha realizado un importante esfuerzo en materia de inversión en programas de protección social²⁸; sin embargo, falta garantizar la sostenibilidad financiera de estas medidas y de la política social en general, lo cual pasa por

²⁵ Secretaría Técnica de la Presidencia de la República de El Salvador: *Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014*, P. 33 y 34.

²⁶ Secretaría Técnica de la Presidencia. *Sistema de Protección Social Universal. Resumen ejecutivo*. San Salvador, 2013.

²⁷ Aprobada el 3 de abril de 2014 y publicada en el Diario Oficial N° 68, Tomo N° 403, del 9 de abril de 2014.

²⁸ De acuerdo a las cifras oficiales, la inversión en protección social ha aumentado de \$2.2 millones en 2005 a \$181.87 millones en 2013. Ver Gobierno de El Salvador y Sistema de Naciones Unidas en El Salvador (2014). *Tercer informe de avance de los objetivos de desarrollo del milenio*. El Salvador. San Salvador, P. 33.

asegurar la suficiente generación de ingresos tributarios que permitan aumentar la inversión pública, mejorar la protección social y garantizar el acceso universal a servicios básicos de calidad; y de esta manera no depender para este propósito de los fondos provenientes del endeudamiento, a través de la contratación de préstamos, la emisión de bonos o de fondos provenientes de donaciones o de la cooperación internacional.

La PDDH ha expresado públicamente la impostergable necesidad de implementar una reforma fiscal integral, que permita recuperar la función redistributiva de la política fiscal, que promueva la progresividad y la justicia tributaria; la incorporación de un enfoque de derechos humanos en la estructura del presupuesto general del Estado; la aplicación de criterios de eficiencia y equidad en la política de gasto público; y que defina una política de financiamiento público, de manera que se supere el círculo vicioso del endeudamiento público.

Durante el período de análisis se constata la reducción en los niveles de pobreza, para el 2013 ésta se redujo al 28.9% del total de los hogares salvadoreños, aunque subsiste una enorme disparidad entre los niveles de pobreza del área rural (35.9%) y del área urbana (25.1%)²⁹. Pese a las limitaciones metodológicas en la medición del fenómeno, que obvia su carácter multidimensional y lo subvalora al reducirlo al ámbito de la pobreza del ingreso, dicho porcentaje continúa siendo alarmante.

Al respecto esta Procuraduría ha señalado en distintas ocasiones la necesidad de que el país avance en la medición y el abordaje de la pobreza desde un enfoque holístico y estructural, dado el carácter multidimensional de dicho fenómeno. En este sentido, cobra importancia que el Órgano Ejecutivo dé cumplimiento a lo establecido en los artículos 40 y 49 de Ley de Desarrollo y Protección Social, en cuanto a la obligación de diseñar e implementar un sistema de medición de pobreza multidimensional.

²⁹ MINEC. *Evolución de Indicadores Socio-Económicos en los últimos años, 2014.*

La pobreza, la desigualdad y la exclusión social continúan siendo los principales obstáculos para que El Salvador avance de forma contundente hacia mejores niveles de desarrollo humano, por lo que deben ser atendidas de manera integral, no solo con medidas asistencialistas y de corto plazo, sino reconociendo el carácter sistémico y estructural de sus determinantes.³⁰

b) Derecho a una alimentación adecuada

El ordenamiento jurídico en materia de seguridad y soberanía alimentaria no establece las garantías suficientes para la protección del derecho a una alimentación adecuada, pues como se ha señalado anteriormente, queda pendiente la ratificación de la reforma constitucional que reconoce explícitamente dicho derecho y se carece de una ley marco que desarrolle su contenido y facilite su exigibilidad. Asimismo, las medidas de políticas públicas orientadas a mejorar la disponibilidad y el acceso a una alimentación adecuada, no han reportado avances significativos dado su carácter focalizado, su baja cobertura y su marcado énfasis asistencial, obviando los determinantes estructurales de dicha problemática.³¹

En cuanto al desarrollo de la legislación secundaria atinente a este derecho se han llevado a cabo algunas iniciativas, como el establecimiento en 2013 de un comité intersectorial formado por la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa³² en cuyo espacio se logró consolidar un Anteproyecto de Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional, a partir de las propuestas presentadas por diferentes sectores: No obstante, el documento consolidado que

³⁰ PDDH. *Informe Anual de Labores 2012-2013.* P. 21.

³¹ PDDH. *Tercer Informe sobre el Estado del Derecho a una Alimentación Adecuada en El Salvador.* P. 147 y 148.

³² El Comité Intersectorial fue conformado con representantes de las fracciones legislativas; de instituciones estatales como la Universidad de El Salvador (UES), la Escuela Nacional de Agricultura (ENA), el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), la PDDH; y de organizaciones sociales como el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), La Asociación Movimiento de Mujeres Anaya Montes (Las Mélicas), la Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo (REDES) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).

fue entregado a dicha Comisión Agropecuaria en octubre de 2013³³, continúa pendiente de ser discutido³⁴.

Cabe reconocer los esfuerzos realizados por el Estado en los últimos años en materia de alimentación y atención al sector agropecuario. En 2011 se presentó la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2015; además, fruto de los esfuerzos realizados en el marco del Plan de Agricultura Familiar (PAF), se registran incrementos en las cosechas de maíz y frijol³⁵, y se han impulsado los programas de alimentación escolar como medida para prevenir y combatir la inseguridad alimentaria en la niñez³⁶. No obstante, las cifras oficiales indican que la desnutrición crónica continúa afectando aproximadamente a un 20% de la población menor de cinco años³⁷, lo que deja planteado otro de los retos que el Órgano Ejecutivo tiene en esta área.

Por otra parte, esta Procuraduría reitera su preocupación por la falta de prioridad conferida por el Estado salvadoreño a la defensa y protección de la agro-biodiversidad, y la ausencia de políticas agropecuarias tendientes a una reconversión sustentable de los procesos productivos. Además, prevalecen importantes amenazas a la salud, al medio ambiente y la soberanía alimentaria, con la introducción de organismos genéticamente modificados (OGM) en la producción de alimentos, el uso indiscriminado de agroquímicos, la desigual distribución de la tierra y la vulnerabilidad de la pequeña agricultura frente a las grandes corporaciones agroindustriales, que no han sido abordadas.

En este orden, resulta fundamental que el Estado salvadoreño atienda las observaciones emitidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (CDESC) en mayo de 2014, en las que recomienda a la Asamblea Legislativa ratificar “las reformas constitucionales para garantizar el derecho a la alimentación y el acceso al agua en la Constitución”, y al mismo tiempo insta al Estado a que “intensifique su labor para prevenir y combatir la malnutrición infantil, especialmente la que afecta a los niños que viven en zonas rurales y remotas”³⁸.

Para la PDDH es indispensable que el Estado salvadoreño asuma como una prioridad el reconocimiento y cumplimiento del derecho a una alimentación adecuada, mediante el ajuste del marco jurídico y la implementación de políticas públicas que garanticen la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional de toda la población. En especial, debería adoptarse una política de desarrollo rural integral, diseñada específicamente para reducir la desigualdad, la

³³ Escobar, T. *Presidente Reyes y Comisión Agropecuaria reciben Anteproyecto de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional*, del 16 de octubre de 2013. Documento recuperado de <http://www.asamblea.gob.sv/noticias/archivo-de-noticias/presidente-reyes-y-comision-agropecuaria-reciben-anteproyecto-de-ley-de-soberania-y-seguridad-alimentaria-y-nutricional>, última visita el 1 de julio de 2014.

³⁴ Ortiz, E. *Equipo especial discutirá metodología de estudio anteproyecto de Ley Seguridad Alimentaria*, del 11 de junio de 2014. Documento recuperado de <http://www.asamblea.gob.sv/noticias/archivo-de-noticias/equipo-especial-discutira-metodologia-de-estudio-anteproyecto-de-ley-seguridad-alimentaria/?searchterm=None>, última visita el 1 de julio de 2014.

³⁵ Los reportes del Gobierno indican que la producción de maíz aumentó de 19.1 millones de quintales en la cosecha 2008-2009, a 20.4 millones en la cosecha 2012-2013; mientras que la producción de frijol aumentó de 1.6 millones de quintales a 2.4 millones en el mismo periodo. Ver Secretaría Técnica de la Presidencia (2013). *El camino del cambio en El Salvador. Legados de cuatro años de gestión*. San Salvador: Gobierno de El Salvador. P. 137.

³⁶ De acuerdo a las cifras oficiales, con el programa de alimentación escolar se ha logrado beneficiar a 1.4 millones de estudiantes del sistema público, mientras que el programa Vaso de Leche favorece a 821,000 estudiantes en 2,289 escuelas públicas de 10 departamentos del país. Ver Transparencia Activa: *Discurso del Presidente Mauricio Funes a 4 años de gestión*. Documento recuperado de <http://www.transparenciaactiva.gob.sv/discursos-del-presidente-mauricio-funes-a-4-anos-de-gestion/>, última visita el 1 de julio de 2014.

³⁷ FAO. *FAO Statistical yearbook 2014. Latin America and the Caribbean food and agriculture*. Documento recuperado de <http://www.fao.org/docrep/019/i3592e/i3592e.pdf>, última visita el 1 de julio de 2014.

³⁸ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2014). *Observaciones finales sobre los tercero, cuarto y quinto informes periódicos combinados de El Salvador*. E/C.12/SLV/CO/3-5. 23 de mayo de 2014. Documento recuperado de http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/SLV/E_C-12_SLV_CO_3-5_17284_S.doc, última visita el 1 de julio de 2014.

pobreza, el desempleo y la carencia de servicios básicos, a la vez que promueva la generación de mejores oportunidades educativas y laborales.

c) Derecho a la salud

En los últimos años el Gobierno ha desarrollado lo que se ha denominado la “Reforma de salud”, con el objetivo de “sentar las bases de un nuevo sistema integrado de salud que permita a todos los habitantes del país, acceder de manera oportuna a servicios de salud equitativos, universales y de alta calidad”³⁹. La reforma cuenta con ocho ejes: a) construcción de la Red Integral e Integrada de Servicios de Salud (RIISS); b) recursos humanos en salud como piedra angular del sistema; c) respuesta a la demanda de medicamentos y vacunas; d) instalación del Foro Nacional de Salud; e) construcción de un Sistema Nacional de Emergencias Médicas; f) desarrollo de un Sistema Único de Información Estratégica; g) articulación progresiva con el ISSS y otros prestadores públicos de salud; y f) creación del Instituto Nacional de Salud y g) fortalecimiento de la Red de Laboratorios.

Al respecto, esta Procuraduría ha señalado su satisfacción con las acciones emprendidas en el marco de la reforma, principalmente en cuanto al aumento de la asignación presupuestaria en el ramo de la salud⁴⁰, las mejoras en el acceso y la cobertura, la contratación de personal en salud y la reconstrucción de la red pública hospitalaria.

De forma particular, la PDDH ha reconocido como una medida acertada la aprobación de la Ley de Medicamentos, así como el desempeño de la Dirección Nacional de Medicamentos en cuanto a la regulación y vigilancia de los precios de los medicamentos en el país, pues con ello

se ha dado un paso fundamental para garantizar el derecho a la salud en el ámbito privado, ya que se han establecido controles a la industria farmacéutica para evitar la profundización de la mercantilización de la salud en lo referente al acceso a medicamentos.

La PDDH ha venido insistiendo en la necesidad de eliminar la fragmentación, segmentación e inequidad del Sistema Nacional de Salud Pública, la cual se expresa en la inequitativa distribución en el gasto per cápita de las instituciones que lo conforman, en detrimento del Ministerio de Salud; así como en la insuficiencia de la inversión pública en salud, pues apenas representa el 2.5% del PIB; el aseguramiento de la calidad y la calidez en la atención, y garantizar el adecuado equipamiento de los centros de salud.

A pesar de los avances y los resultados positivos registrados en este ámbito, resultan insuficientes para dar respuesta a las necesidades de la población en materia de derecho a la salud, la Procuraduría registra denuncias recibidas de usuarios y usuarias atinentes a negligencia y baja calidad en la atención.⁴¹ De forma particular se identifican denuncias de desabastecimiento de medicamentos, especialmente en pacientes con hemofilia; aunque se reconoce que las autoridades gubernamentales han realizado esfuerzos por mejorar la situación, existen periodos en los que el desabastecimiento aumenta.⁴²

También figuran en los registros de la PDDH un número considerable de denuncias recibidas por casos de posible mala praxis o negligencia

³⁹ Secretaría Técnica de la Presidencia. *El camino del cambio en El Salvador. Legados de cuatro años de gestión*. San Salvador, 2013, P. 95.

⁴⁰ De acuerdo a los reportes oficiales, entre 2008 y 2013 el presupuesto del MINSAL aumentó del 1.8 % del PIB al 2.6% del PIB. Ver MINSAL. *Rendición de cuentas 2013-2014*. San Salvador, 2013, P. 3.

⁴¹ Vale la pena señalar que en los últimos tres años, las violaciones por derecho a la salud constituyen una de las principales causas de denuncia ante la PDDH. Entre el 1º de junio de 2010 y el 31 de mayo de 2013 fueron atendidas un total de 912 denuncias en relación a vulneraciones a este derecho. Ver Informes de labores de la PDDH para los periodos 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013.

⁴² Herrera, M. *Los desafíos para una provisión efectiva para el acceso a medicamentos. Reflexiones para el caso de El Salvador*. Documento recuperado de http://www.fusades.org/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=172&view=finish&cid=958&catid=73&lang=es, última visita el 1 de julio de 2014.

médica⁴³. Lastimosamente, en El Salvador no se cuenta con una regulación idónea para este tipo de casos. El Código Penal únicamente contiene los delitos de lesiones culposas y homicidio culposo, y establece que cuando sean causados en el ejercicio de la profesión médica o paramédica, se impondrá adicionalmente una pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o actividad, ya sea por un término de seis meses a dos años, en el caso de las lesiones (art. 146); o de dos a cuatro años, en el caso de homicidio (art. 132). Al respecto, a juicio de esta Procuraduría, se debería hacer un esfuerzo por tipificar de forma específica el delito de negligencia médica.

También es preocupante que la omisión de regulaciones de forma específica de este tipo de actos, genere que las víctimas enfrenten numerosos obstáculos para poder denunciar y acceder a la justicia frente a dichas violaciones. De forma reciente, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), al referirse a este punto, ha señalado que la impunidad frente a los casos de mala praxis constituye uno de los principales obstáculos para dar cumplimiento a la política de salud del Estado⁴⁴.

En adición a esto, son frecuentes las protestas y denuncias de parte de trabajadores y trabajadoras del sector salud, debido a la falta de recursos, equipo e infraestructura adecuada para desempeñar sus labores. De forma periódica se registran conflictos entre autoridades y personal de los centros de salud, debido a la falta de atención a reivindicaciones laborales. Lastimosamente, conflictos de este tipo en reiteradas ocasiones también conllevan a la afectación de los servicios que se brindan a los usuarios y usuarias del sistema.

⁴³ PDDH. *Pronunciamento público ante las denuncias de violación al derecho a la salud por casos de negligencia médica en los distintos hospitales del sistema de salud en nuestro país*, emitido el 3 de octubre de 2011; PDDH. *Funcionarios atienden invitación de Procurador para abordar casos de mala praxis médica*, en el siguiente sitio: <http://www.pddh.gob.sv/menupress/menunoti/488-funcionarios-atienen-invitation-de-procurador-para-abordar-casos-de-mala-praxis-medica>, última consulta el 1 de julio de 2014.

⁴⁴ CIJ. *Acceso a la justicia. Recursos contra las violaciones de los derechos sociales en El Salvador*. Ginebra, 2013, p. 78.

Para esta Procuraduría la población salvadoreña enfrenta numerosas dificultades para ejercer su derecho a la salud. Los avances logrados, aunque satisfactorios, deben considerarse como el paso inicial de un proceso que permita el acceso universal de la población a servicios de salud con alta calidad y calidez. Para ello, es imprescindible que se adopten decisiones orientadas a incrementar considerablemente la inversión pública en salud, unificar el sistema público, revertir la mercantilización de la salud, vigilar y controlar de forma estricta la calidad y calidez en los servicios, y garantizar la sanción y reparación de violaciones al derecho a la salud en casos de negligencia médica y mala praxis.

d) Derecho a la educación

En los últimos años el Estado salvadoreño ha adoptado medidas orientadas a facilitar el acceso a la educación para las familias de bajos ingresos. Hay esfuerzos destacables en cuanto a garantizar la gratuidad de la educación hasta el bachillerato, la ejecución de los programas de entrega de paquetes escolares, alimentación escolar, el programa “vaso de leche”, el mejoramiento de la infraestructura escolar y la implementación del modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno⁴⁵; los cuales inciden en la mejora de la alimentación y nutrición de las y los estudiantes, de su rendimiento escolar y en la disminución del analfabetismo⁴⁶.

El Programa de Alfabetización implementado ha generado resultados importantes, entre los cuales destaca la disminución de la tasa de analfabetismo del 14% en 2009 al 12.4% en 2012; no obstante, continúa manteniéndose una diferencia muy marcada entre el área rural y urbana.

⁴⁵ Secretaría Técnica de la Presidencia. *El camino del cambio en El Salvador. Legados de cuatro años de gestión*. San Salvador, 2013.

⁴⁶ La tasa de analfabetismo ha disminuido del 14% en 2009, al 12.4% en 2012. Ver DIGESTYC (2010). *Encuesta de hogares de propósitos múltiples 2009*. San Salvador. Véase DIGESTYC. *Encuesta de hogares de propósitos múltiples 2012*. San Salvador, 2013.

Pese a los avances señalados, el sistema educativo salvadoreño continúa presentando muchas deficiencias que se manifiestan en los insuficientes niveles de inversión; la baja cobertura escolar⁴⁷; la dificultad de reducir la deserción escolar; la baja calidad de la educación; la precarización de las condiciones de trabajo de los profesores y profesoras, entre otras. Todo lo cual incide negativamente en el cumplimiento efectivo del derecho a la educación para un gran número de personas.

También en el ramo de educación se refleja el bajo esfuerzo inversor del Estado salvadoreño⁴⁸, pues a pesar del incremento presupuestario para el Ministerio de Educación (MINED) logrado durante el período, la inversión pública en educación en el país apenas representa alrededor del 3.5% del PIB, cuando de forma general se recomienda que la inversión en educación sea al menos equivalente al 6% del PIB.

Conviene puntualizar que aunque durante el período de análisis se ha logrado un elevado acceso a Educación Primaria, prevalecen las dificultades para retener a una gran cantidad de niños y niñas en la escuela. La deserción escolar inicia desde la misma primaria y de acuerdo a las cifras oficiales, el porcentaje promedio nacional de estudiantes urbanos que comienzan el primer grado y que logran llegar hasta el último grado de la primaria es del 84%⁴⁹. No obstante, en el área rural el abandono escolar es un fenómeno

⁴⁷ Cifras a 2011 reflejan que la cobertura neta en Educación inicial es de escasamente 0.6%, 54.2% en Educación Parvularia, 62.2 % en Tercer Ciclo y 35.4% en Educación Media. Por otra parte, la tasa bruta de cobertura educativa fue en 2010 del 25.3%. Ver: Gobierno de El Salvador y Sistema de Naciones Unidas en El Salvador. *Tercer informe de avance de los objetivos de desarrollo del milenio*. El Salvador. San Salvador, 2013, P. 38.

⁴⁸ En los últimos años se han aplicado incrementos al presupuesto del ramo de educación, por ejemplo, en 2008, el presupuesto votado para este rubro fue de \$635.0 millones, mientras que en 2014 ascendió a \$884.9 millones. Ver MINED, Fundación de Innovaciones Educativas Centroamericanas (FIECA) y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2013). *El financiamiento de la educación en El Salvador*. San Salvador: Autor, p. 32; Alas, C. & Serpas, L. *Presupuesto aprobado 2014: continúan las fallas y la indisciplina fiscal*. La Libertad: Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). P. 29.; PNUD. *Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible*. Diagnóstico y propuesta. San Salvador: P. 303.

⁴⁹ Ibídem. P. 39.

más generalizado, pues solamente el 77% logra finalizar la Educación Primaria.

Entre las principales causas de la deserción escolar se encuentran: el desinterés en la escuela, la demandas de trabajo doméstico o la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades generadoras de ingreso, dada la precarización de las condiciones de las familias⁵⁰; y más recientemente, las autoridades gubernamentales también han señalado la inseguridad y la delincuencia en los centros educativos como un factor primordial.

Esta Procuraduría considera relevante brindar una mayor atención a la calidad de la educación, tanto en el sector público como en el privado. Indicadores como la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES) y la Prueba de Evaluación de Logros de Aprendizaje en Educación Básica (PAESITA) reflejan serias deficiencias en la calidad el sistema educativo⁵¹. Así, la nota promedio nacional en la PAES de 2013 fue de 5.3 en una escala de 0 a 10; siendo el promedio en el sector privado de 5.83, mientras que en el sector público fue de 5.12⁵².

Además, otro de los factores que preocupa de manera especial a esta Procuraduría es la situación del magisterio nacional, principalmente en lo atinente a las remuneraciones y estabilidad laboral, los recursos y materiales de que disponen, las condiciones de trabajo, formación y cualificación profesional, así como la necesidad de implementar de un sistema de evaluación y monitoreo del desempeño del personal docente.

En cuanto a las remuneraciones y condiciones de trabajo, la PDDH ha recibido de parte del magisterio demandas para incidir en la mejora

⁵⁰ OIT. Programa Entendiendo el Trabajo Infantil. *Entendiendo los resultados del trabajo infantil y el empleo juvenil en El Salvador*, Roma, 2013, P. 39.

⁵¹ PNUD. *Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta*. San Salvador, 2013.

⁵² MINED. *Resultados PAES 2013*. Documento recuperado de http://www.mined.gob.sv/jdownloads/PAES/Resultados%20PAES%202013/resultados_paes_2013.pdf, última visita el 1 de julio de 2014.

de las mismas, en base de lo cual es pertinente señalar la necesidad de valorar en mayor medida el trabajo de los y las docentes, dada la importante función que desempeñan. Con frecuencia, motivados por la insuficiencia de las remuneraciones, un buen número de docentes optan por hacer un doble turno o buscar un trabajo adicional, lo que en muchos casos podría estar afectando su desempeño, y por ende, la calidad de la educación.

En este sentido, una política integral para dignificar el magisterio, debería considerar la mejora en las condiciones de trabajo, ya que muchos centros escolares no cuentan con la infraestructura adecuada, ni con materiales educativos idóneos y suficientes para poder desarrollar los programas asignados. Igualmente, en reiteradas ocasiones, maestros y maestras tienen a su cargo un gran número de estudiantes, incluso de grados distintos, lo que dificulta una atención más cercana e individualizada de parte de los y las docentes.

La PDDH considera que el Estado salvadoreño debe asumir importantes retos en el ámbito del derecho a la educación, entre los que destacan: elevar significativamente la inversión en el ramo, incrementando el presupuesto asignado para el sistema educativo, de manera que se permita avanzar de forma acelerada hacia una verdadera transformación de la educación en el país; diseñar e implementar un plan integral que permita enfrentar las limitaciones para atender todas las causas de la deserción escolar, y además, ejecutar acciones para reintegrar al sistema educativo a los niños y niñas que han abandonado la escuela. Sumado a esto, debería situarse como una prioridad el incremento en la calidad de todo el sistema educativo y desarrollar un programa integral para la dignificación del magisterio nacional.

e) Derecho al trabajo y a las libertades sindicales

Por varios años, la PDDH ha venido señalado que el cumplimiento del derecho al trabajo y el respeto de las libertades sindicales son áreas que el Estado salvadoreño debe atender de forma urgente. No obstante, su abordaje requiere de la implementación de medidas de carácter estructural orientadas a generar una mayor cantidad de empleos de calidad, elevar los salarios, sancionar y reparar las violaciones a la legislación laboral y garantizar un entorno adecuado para el desarrollo libre de la actividad sindical.

En relación a la creación de empleo, según datos oficiales, entre diciembre de 2009 y octubre de 2013 se han creado en el país 109,969 nuevos empleos⁵³. Este esfuerzo resulta positivo, pero exiguo, pues se necesitaría generar al menos 48 mil nuevos empleos anuales, tomando en cuenta el número de personas que cada año se incorporan a la Población Económicamente Activa (PEA).⁵⁴ Además, todavía no se observa una clara tendencia hacia la reducción de los niveles de desempleo y subempleo, para el año 2012, 31 de cada 100 personas que vivían en el área urbana se encontraban subempleadas.⁵⁵

Es preocupante la alta tasa de subutilización laboral en El Salvador, según el Informe de Desarrollo Humano 2013 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ésta es del 50.7% a nivel nacional, en el área urbana de 39.6% y en el área rural de 71.6%⁵⁶. También destaca la baja calidad del empleo generado, en el mismo informe del PNUD se registra que apenas el 23.8% de la PEA; es

⁵³ Véase el siguiente sitio electrónico: <http://www.transparenciaactiva.gob.sv/gobierno-del-presidente-funes-crea-110-mil-nuevas-plazas-en-su-gestion/>, consultado el 15 de marzo de 2014.

⁵⁴ PDDH. *Informe Anual de Labores 2010-2011*. P. 76.

⁵⁵ DIGESTYC. *Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2012*.

⁵⁶ PNUD. *Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta*. San Salvador: 2013. P. 314-315.

decir, aproximadamente uno o una de cada cinco personas trabajadoras en el país, posee un trabajo decente, con el agravante que prevalece una gran desigualdad de oportunidades, ya que el nivel de trabajo decente en el área urbana es tres veces mayor al del área rural⁵⁷.

Esta Procuraduría considera beneficioso para la población ocupada el aumento registrado en el salario mínimo nominal a partir del 1 de julio de 2013; sin embargo, éste es insuficiente para garantizar la reproducción material y espiritual de los hogares trabajadores⁵⁸, tal como lo establece la Constitución en el artículo 38 inciso 2°. Además, es urgente reducir las enormes diferencias que existen entre los salarios mínimos urbanos y rurales, y entre las distintas ramas de la actividad económica.⁵⁹

Por otra parte, también se debe señalar como motivo de preocupación la persistencia de constantes violaciones a los derechos laborales y libertades sindicales, tanto en el sector privado, como en el sector público y en las municipalidades. De manera permanente se reciben en la PDDH numerosas denuncias por violaciones como despidos sin causa justificada; irrespeto e incumplimiento de las disposiciones constitucionales que protegen el fuero y el trabajo sindical; acoso laboral; discriminación por afiliación sindical y por embarazo; amenazas

e intimidación hacia dirigentes sindicales; falta de pago de horas extra, vacaciones, aguinaldos o indemnizaciones; y por retención de cuotas de seguridad social y fondos de pensiones sin el correspondiente reporte⁶⁰.

Lo anterior pone en evidencia que existe un entorno general que posibilita y tolera las violaciones a los derechos laborales y libertades sindicales. La situación todavía es más grave para los trabajadores y las trabajadoras del sector agropecuario, del sector de servicios domésticos y del sector informal, quienes se encuentran en un grave estado de desprotección de sus derechos laborales y sindicales y expuestos a riesgos laborales. La mayor parte de personas que se desempeñan en estos sectores no pueden acceder a los sistemas de seguros de salud ni de pensiones contributivas, por lo que incluso se ven obligadas a trabajar hasta edades muy avanzadas y en condiciones extremadamente precarias.

Dicho todo esto, resulta claro que es necesario un mayor compromiso del Estado salvadoreño por atender los enormes retos que existen en materia de derechos laborales, y que hace falta un plan integral para reducir la inserción laboral precaria. Sin duda, ésta es una tarea que requiere de acuerdos con todos los sectores de la sociedad, pero es urgente que el país atienda los problemas estructurales que generan el desempleo y el subempleo.

Como se ha señalado anteriormente, si bien es cierto la conformación de un sistema de protección social es una de las acciones prioritarias para el desarrollo social del país, las mismas deben ser complementadas con la generación de oportunidades para que las personas puedan acceder a mejores salarios y condiciones de vida.

⁵⁷ *Ibidem*, P. 32.

⁵⁸ Según cifras de la DIGESTYC, a febrero de 2014, el salario mínimo rural era de US \$ 113.70 por debajo del valor de la Canasta Básica Alimentaria Rural (US \$ 123.26); mientras que para todas las actividades económicas urbanas, el valor de la canasta básica alimentaria urbana (US \$ 175.47) representaba un alto porcentaje del salario mínimo respectivo. Así: para el sector de comercio y servicios, la canasta básica alimentaria urbana representaba el 72% el salario mínimo (US \$ 242.40); el 74% del salario mínimo en la industria (US \$ 237.00) y el 85% del salario mínimo para el sector maquila textil y confección (US \$ 202.80). Además, cabe señalar que los salarios mínimos históricamente han reflejado una tendencia a la disminución de su poder adquisitivo. De manera específica, el PNUD reporta que el salario mínimo agrícola ha perdido un 77% de su poder adquisitivo entre 1965 y 2012. A la vez, los salarios mínimos en el comercio, la industria y los servicios han perdido un 65% entre 1978 y 2012. Ver PNUD (2013). *Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible. Diagnóstico y propuesta*. San Salvador, 2013, P. 104.

⁵⁹ PDDH. Informe de Labores 2010-2011, P. 79.

⁶⁰ Por ejemplo, entre el 1 de junio de 2010 y el 31 de mayo de 2013 se recibió un total de 1,014 denuncias por violaciones al derecho al trabajo. Ver Informes de labores de la PDDH para los periodos 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013.

f) Derecho a una vivienda adecuada

Esta Procuraduría ha venido insistiendo en los últimos años en que uno de los derechos que ha recibido menor atención de parte del Estado salvadoreño ha sido el derecho a la vivienda. La persistencia de un alto déficit habitacional, que oscila entre 360,301 y 477,908 viviendas según estimaciones realizadas entre 2007 y 2009⁶¹, lo que refleja que las iniciativas impulsadas durante el período no han sido efectivas y que hasta la fecha no se han generado propuestas integrales y novedosas al respecto.

En este sentido, para la PDDH resulta muy acertada la observación realizada por la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) al respecto: “En el país, la crisis de la vivienda se debe en parte a la falta de una política habitacional concertada, ordenada y coherente. Hasta el momento han sido implementadas varias políticas sectoriales de vivienda sin mayor impacto –política de financiamiento, de derecho y promoción habitacional, de seguridad jurídica de tierras–. Por otro lado, el sector privado trabaja con una lógica que no está coordinada con las intervenciones estatales”⁶².

De manera similar, el CDESC de Naciones Unidas ha expresado de forma reciente su preocupación por la insuficiencia de la asignación presupuestaria al sector vivienda, el alto déficit habitacional y las consecuencias negativas de la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, aprobada en

2009, para facilitar la realización de procesos de desalojo de forma ágil y expedita.⁶³

Sobre este último punto, la PDDH considera importantes las valoraciones del Comité, debido a que se ha constatado que durante los procesos de desalojo que se realizan amparados en la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, se han cometido distintas violaciones a derechos humanos. Desde la entrada en vigencia de dicha normativa, se han recibido varias denuncias de familias y comunidades pobres de todo el país, quienes enfrentan amenazas de desalojo o que han sido afectadas durante la ejecución de los mismos, sin que hayan recibido de parte del Estado alternativas adecuadas para garantizarles unas condiciones de vida dignas.

Por todo lo anterior, a juicio de esta Procuraduría, la mejor forma de avanzar en la garantía del derecho a una vivienda adecuada pasa por la adopción de las recomendaciones señaladas en mayo de 2014 por el CDESC⁶⁴. Se requiere reforzar la asignación presupuestaria del Estado para la realización de programas dirigidos a otorgar seguridad de la tenencia, incluyendo el acceso al crédito y subsidios para las familias de bajos ingresos y los miembros de los grupos más desfavorecidos; así como adecuar la legislación sobre los desalojos forzosos de manera que cumpla con los estándares y directrices internacionales. Es prioritario que el Estado salvadoreño asuma la garantía del derecho a la vivienda, que se construya una mejor articulación entre los esfuerzos estatales y los del sector privado, buscando favorecer principalmente a las personas de menores ingresos, para quienes actualmente resulta imposible acceder a una vivienda digna.

⁶¹ Martínez, E. *Situación Habitacional en El Salvador: Déficit, Políticas y Programas*, 2011. Ponencia presentada durante el Foro Internacional de Vivienda de Interés Social, llevado a cabo el 20 de mayo de 2011 en el Departamento de La Libertad, El Salvador; Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL). *Anteproyecto Ley de Vivienda de Interés Social. Una necesidad palpable. Una propuesta para el acceso de los más pobres*. Carta Urbana N° 160. San Salvador; PNUD. *Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2010. De la pobreza y el consumismo al bienestar de la gente. Propuestas para un nuevo modelo de desarrollo*. San Salvador.

⁶² CIJ. *Acceso a la justicia. Recursos contra las violaciones de los derechos sociales en El Salvador*. 2013, Ginebra. P. 84 y 85.

⁶³ Naciones Unidas. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. *Observaciones finales sobre los tercero, cuarto y quinto informes periódicos combinados de El Salvador*. E/C.12/SLV/CO/3-5. 23 de mayo de 2014. Documento recuperado en: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/SLV/E_C-12_SLV_CO_3-5_17284_S.doc, última visita el 1 de julio de 2014.

⁶⁴ *Ibidem*.

1.3 Derechos ambientales

Como ha venido señalando la PDDH, la situación ambiental del país es preocupante. La población y el territorio se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad y están expuestos a diversos riesgos y amenazas ambientales y climáticas, sin que se haya desarrollado en los ecosistemas la capacidad de recuperarse o de resistir presiones derivadas de la intervención humana.

El Salvador enfrenta un deterioro ambiental, acumulado a través de décadas, que está determinado por factores antropogénicos, producto de la lógica de un sistema económico basada en la explotación indiscriminada de los bienes naturales, la pérdida de la biodiversidad y el alto nivel de consumo que, junto a otros fenómenos, están impactando de forma negativa las condiciones de vida de las personas.

La realización de los derechos humanos, especialmente del derecho a un ambiente sin riesgo, limpio, saludable y sustentable tienen a la base el replanteamiento del sistema económico, de manera que a través de la intervención del Estado se pueda anteponer a la persona humana y a la naturaleza frente al objetivo de la irrestricta obtención de la máxima ganancia, lo cual estimula una dinámica depredatoria y de abuso de los bienes naturales, ligada a una cultura consumista y altamente contaminante.

La Política Nacional del Medio Ambiente vigente (PNMA), reconoce que los principales problemas en el territorio salvadoreño se expresan en la degradación de los ecosistemas de gran valor⁶⁵, la insalubridad ambiental generalizada, el estado crítico del bien hídrico, la desordenada

⁶⁵ Entendidos como la infraestructura natural esencial para el país, ya que su recuperación y buen manejo reduce los riesgos, sostiene las actividades productivas y asegura el bienestar de la población; refiriéndose específicamente a las tierras cultivadas y pastizales, los ríos y humedales (lagos, lagunas, esteros, pantanos), los bosques, así como los parques y zonas verdes en los espacios urbanos. MARN. Política Nacional de Medio Ambiente 2012, aprobada el 30 de mayo de 2012, P. 6 y 7.

ocupación del territorio, la escasa cultura de responsabilidad y cumplimiento ambiental, y la amenaza climática creciente.⁶⁶

Bajo las anteriores condiciones, los impactos para los derechos humanos de la población son casi inevitables, especialmente para aquellas personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Por lo que, esta Procuraduría ha insistido en la responsabilidad que tiene el Estado, en cuanto a facilitar y fomentar el involucramiento de las comunidades en la toma de decisiones en materia ambiental, la participación de las mismas en el abordaje de los problemas de conflictividad social generados al implementarse actividades, obras o proyectos no consultados adecuadamente; así como el derecho que les asiste de acceder a un sistema efectivo de justicia y al resarcimiento de daños, entre otros.

En ese contexto, es fundamental la adopción de medidas eficaces y coherentes con el criterio de precaución⁶⁷, las cuales deben tener como finalidad el evitar daños graves o irreversibles a la vida, salud y al entorno natural; protegiendo y garantizando los derechos humanos y el medio ambiente; aún y cuando no exista certidumbre científica completa de tal daño.

a) Cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de los derechos ambientales

La obligación estatal de protección ambiental tiene rango constitucional, a partir de lo prescrito en el artículo 117 de la Constitución de la República, se establece que es “deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible. Se declara

⁶⁶ *Ibidem*, P. 2.

⁶⁷ Naciones Unidas. *Declaración de Río de Janeiro de la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo, principio 15*. Disponible en: <http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm>, última visita el 1 de julio de 2014.

de interés social la protección, conservación, aprovechamiento racional, restauración o sustitución de los recursos naturales, en los términos que establezca la ley.”

Esta obligación del Estado surgió inicialmente en varios instrumentos a nivel internacional, en virtud de la íntima relación que la persona guarda con el medio ambiente. Así, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo⁶⁸, destacó en su principio 4, que con “el fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada”. Y es que la protección del medio ambiente y los derechos humanos guardan una relación de inherencia e interdependencia entre sí, pues estos últimos persiguen la realización de los atributos de la dignidad, la igualdad y la libertad, para lo cual se necesita de un ambiente que se los permita,⁶⁹ caso contrario, la contaminación y degradación ambiental producirá atentados contra los derechos humanos y el mismo desarrollo de los países, con repercusiones de difícil o imposible reparación. Es a partir de esta lógica, que la idea de la protección ambiental fue permeando a nivel global y se fue introduciendo en las normas y las políticas de desarrollo, como una obligación de los Estados tanto con las presentes como las futuras generaciones.

A nivel nacional, de acuerdo a las principales apuestas estratégicas para el año 2014, plasmadas en el Plan Quinquenal 2010-2014, el Gobierno Central para marcar “el inicio de la articulación de una estrategia nacional de desarrollo”, adquirió el compromiso de tener vigente un modelo de crecimiento y desarrollo integral que fuera “sostenible, eficiente, equitativo e incluyente,

basado en el ordenamiento y la integración territorial y productiva interna” -entre otras cosas-, para lo cual el Gobierno sentaría las bases de este nuevo modelo, con el inicio de políticas públicas integrales que contarían con “un amplio respaldo social y político”, que promoverían la inversión productiva, el fortalecimiento de las empresas (micro, pequeña y mediana) y de nuevos actores económicos, la conservación del medio ambiente y la transformación y modernización de los sectores agropecuario e industrial⁷⁰.

En 2012 la Política Nacional de Medio Ambiente, siguiendo las grandes líneas establecidas en el Plan Quinquenal, retomó en su proceso de formulación las principales preocupaciones de la problemática ambiental salvadoreña, reflejadas en la consulta pública territorial y sectorial desarrollada, y propuso como objetivo global “revertir la degradación ambiental y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático”⁷¹, como meta a mediano y largo plazo. Tal objetivo iba en acuerdo a otra de las apuestas estratégicas contenida en el Plan Quinquenal de Desarrollo, orientada a revertir el proceso de degradación ambiental y volver a El Salvador en un país ambientalmente ejemplar, con menores condiciones de vulnerabilidad frente a los fenómenos ambientales y las acciones humanas.⁷²

En junio de 2013, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales lanzó la Estrategia Nacional del Medio Ambiente con el objetivo de “revertir la degradación ambiental y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático”. La Estrategia contiene, a su vez, cuatro estrategias en las áreas de Biodiversidad, Cambio Climático, Saneamiento y Recursos Hídricos. Cada una de ellas enmarca un plan de acción que ha sido sometido a consulta pública por el MARN, es en esta la etapa en la que actualmente se encuentran

⁶⁸ Aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992.

⁶⁹ Naciones Unidas. *Informe del Experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible*, John H. Knox, Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 22º período de sesiones, 24 de diciembre de 2012, P. 5.

⁷⁰ Gobierno de El Salvador. Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014, P. 48 y 49.

⁷¹ MARN. *Política Nacional de Medio Ambiente 2012*, P. 1.

⁷² Gobierno de El Salvador. *Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014*, P. 50.

y se espera que sean lanzados próximamente para ser implementadas por el Gobierno Central 2014-2018.

A pesar de los avances gubernamentales plasmados formalmente en estrategias, políticas y planes, que reconocen la problemática ambiental existente, es necesario iniciar acciones concretas para resolver la contaminación y degradación de los bienes naturales, la vulnerabilidad socio-ambiental, las prácticas agrícolas insostenibles basadas en el uso de agroquímicos, así como a las medidas de reparación de los daños producidos al ambiente. Para tal cometido, es indispensable que se genere información accesible, clara, oportuna y suficiente, y que se haga partícipe a las poblaciones de las decisiones ambientales que les competen y los cambios necesarios para encaminarse a una cultura de protección ambiental, como parte de las obligaciones estatales en materia de derechos ambientales, en particular, y a los derechos humanos fundamentales en general.

A nivel nacional, es fundamental tener una posición clara y definida de los proyectos que se implementarán, llamados de desarrollo o de interés nacional, que coherentemente apuesten a la protección ambiental, aplicado los principios de precaución y prevención para evitar afectaciones a los derechos humanos y el medio ambiente. Ello, como premisa indispensable si lo que se busca es la sustentabilidad y el buen vivir dentro del territorio salvadoreño.

Finalmente, la PDDH rescata el positivo avance en el que recientemente la Asamblea Legislativa decretó⁷³ la creación de la Jurisdicción

⁷³ Decreto Legislativo de Creación de Tribunales Ambientales de fecha 22 de mayo de 2014, pendiente de publicación en el Diario Oficial y de entrada en vigencia a la fecha de este período de informe; el cual establece por medio del dictamen favorable número 64 que la entrada en vigencia de dichos tribunales no deberá exceder de seis meses para San Salvador y de un año para Santa Ana y San Miguel. Puede encontrarse en el siguiente sitio electrónico: http://www.marn.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&catid=1:noticias-ciudadano&id=2373:asamblea-legislativa-aprueba-creacion-de-tribunales-ambientales, última visita el 1 de julio de 2014.

Ambiental, a cargo de los Juzgados y Cámaras Ambientales, que conocerán y resolverán de las acciones civiles “en las que se deduzca la responsabilidad civil derivada de actos que atenten contra el medio ambiente”. Según el Decreto, tal jurisdicción debe instalarse en un plazo máximo de un año. No obstante, a pesar de este importante y exigido logro, debe tenerse claro que la visión estatal de la protección ambiental debe ser integral y de orientación especialmente preventiva y precautoria, no limitarse únicamente a la atención del daño ya sufrido, sin que ello menoscabe la obligación que se tiene de reparación de las víctimas y el medio ambiente una vez conculcados.

b) El estado de los bienes hídricos y la labor estatal

El Salvador ha sido catalogado como el país con la más baja disponibilidad hídrica a nivel de Latinoamericano y del Caribe,⁷⁴ en años recientes las aguas superficiales y subterráneas han sufrido un manifiesto deterioro a consecuencia de la contaminación y sobreexplotación⁷⁵. De acuerdo a las últimas evaluaciones sobre la calidad de agua⁷⁶, los ríos salvadoreños no cuentan con agua de calidad excelente y en la mayoría de sitios evaluados el agua resultó con calidad ambiental “regular”⁷⁷, aunque se haya registrado una leve tendencia a la recuperación de la calidad de los recursos hídricos superficiales y la posibilidad de desarrollo de vida acuática en ellos.⁷⁸

⁷⁴ Manlia Alicia del Rosario Romero Deras (MARN). *Producción de Aguas Servidas, tratamiento y uso en El Salvador*, Proyecto de Desarrollo de Capacidades para el Uso Seguro de Aguas Servidas en Agricultura (FAO, WHO, UNEP, UNU-INWEH, UNW-DPC, IWMI e ICID), se puede encontrar en el siguiente sitio: http://www.ais.unwater.org/ais/pluginfile.php/378/mod_page/content/144/EL_SALVADOR.pdf, última visita el 1 de julio de 2014.

⁷⁵ MARN. *Política Nacional del Medio Ambiente* 2012, p. 11.

⁷⁶ MARN. *Informe de la Calidad de Agua de los Ríos de El Salvador. Año 2011, 2012*, puede encontrarse en el siguiente sitio electrónico: http://www.marn.gob.sv/phocadownload/Informe_Calidad_de_Agua%202011.pdf, última cita el 1 de julio de 2014.

⁷⁷ *Ibidem*.

⁷⁸ MARN. *Río Lempa recupera calidad de agua en zona norte del país*, 19 de marzo de 2012, véase la página electrónica: http://www.marn.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&catid=1:noticias-ciudadano&id=1327:rio-lempa-recupera-calidad-de-agua-en-zona-norte-del-pais&Itemid=227, última cita el 1 de julio de 2014.

Según el MARN, los dos principales factores que afectan la disponibilidad del agua en el país, son los relativos a mala calidad hídrica y los efectos del cambio climático, señalando que los incrementos de temperatura de 0.4 a 2.2 grados centígrados, han producido la reducción del caudal de los ríos en la época seca, en un rango de 30% a 80% con relación a datos registrados en 1970.⁷⁹ Incluso, en el ámbito internacional, la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y saneamiento, ha destacado que de mantenerse “las previsiones sobre cambio climático, para el 2030 casi la mitad de la población mundial vivirá en zonas donde la presión de los recursos hídricos será muy elevada”.⁸⁰

Al mismo tiempo y de acuerdo a la Política Nacional de Medio Ambiente, existe un profundo problema institucional relacionado con la gestión hídrica, en la que actualmente se involucran 27 instituciones que se sujetan a diferentes marcos normativos y competencias, sin que haya una entidad rectora. Situación que ha conllevado a la implementación de acciones dispersas y una crisis institucional que ha concluido en la mala gestión hídrica.⁸¹

A este crítico estado de los bienes hídricos, además, se suma la condición de agua dependencia que el país tiene con respecto a las repúblicas de Guatemala y Honduras, siendo una situación que debe ser considerada al adoptarse decisiones o medidas, así como retomarse como un punto clave en la relación bilateral o trinacional que se tiene con estos Estados.

El 25 de septiembre de 2013, el MARN presentó públicamente el Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, cuyo objetivo “es garantizar la sostenibilidad del recurso agua, ordenando sus usos y la conservación del entorno

⁷⁹ *Ibidem*.

⁸⁰ Naciones Unidas. Informe de la Relatora Especial sobre el Derecho Humano al Agua Potable y el Saneamiento, Catarina de Albuquerque, A/HRC/24/44, 16 de julio de 2013, párr. 5, puede encontrarse en el siguiente sitio: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/156/05/PDF/G1315605.pdf?OpenElement>, última visita el 1 de julio de 2014.

⁸¹ MARN. *Política Nacional de Medio Ambiente 2012*.

natural para lo cual es necesario desarrollar productos técnicos que permitan analizar la información y determinar las acciones a corto, mediano y largo plazo”⁸². El Plan es parte de la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, la que tiene como principales elementos a considerar:

- Derecho humano al agua potable y el saneamiento
- Escasez de agua y desperdicio
- Contaminación de ríos
- Contaminación y sobreexplotación de acuíferos
- Cambio de uso de suelo y pérdida de la capacidad de regulación hídrica
- Extracción de áridos y alteración de cauces de ríos
- Degradación de humedales (lagos, lagunas y esteros)
- Impactos de la variabilidad climática: sequías, inundaciones y deslizamientos
- Adaptación al cambio climático
- Cuencas y acuíferos transfronterizos

A partir de lo anterior, la PDDH advierte que de no implementarse medidas integrales y participativas, encaminadas a la protección y conservación de los bienes hídricos a nivel no solo nacional, sino con los países vecinos, para hacer posible su manejo sostenible; se desencadenarán mayores afectaciones a los derechos humanos de la población salvadoreña, no sólo de aquellas comunidades que ya viven en situaciones de vulnerabilidad, sino a la población salvadoreña en general.

En este contexto, es imperioso que se proceda a la ratificación de la reforma constitucional del artículo relativa al derecho al agua, para ser consecuentes con la preocupante situación de los bienes hídricos y en cumplimiento de las obligaciones de legislar para la realización efectiva del derecho humano al agua; al mismo tiempo, debe acelerarse el proceso de análisis del articulado del proyecto de Ley General de Agua,

⁸² MARN. Hoja Informativa 01: Objetivos y resultados del Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, versión 24 de septiembre de 2013.

el cual debe tener como parámetros el enfoque de derechos humanos y el principio de manejo sustentable de las cuencas y de recuperación de las actualmente deterioradas.

c) La situación frente al Cambio Climático

Desde 2013 el país cuenta con una Estrategia Nacional de Cambio Climático, como parte de la Estrategia Nacional del Medio Ambiente, como instrumento de la Política Nacional del Medio Ambiente. El MARN ha reconocido que en el país la amenaza climática es significativa y aumentará en las décadas próximas, por lo que ha considerado vital que se asuma dicha “realidad como nación para que podamos construir una economía resiliente al clima y un futuro viable para la población salvadoreña dentro de su territorio.”⁸³

Durante las últimas seis décadas la temperatura promedio anual del país aumentó arriba de 1.3° C y, el nivel del mar aumentó casi 8 centímetros, pronosticándose que ese proceso se acelerará en el futuro, ya que “los escenarios climáticos apuntan a aumentos entre 2°C y 3°C adicionales en las siguientes seis décadas”⁸⁴, esto como el MARN lo destaca, aunado a los cambios que se prevén en los patrones de precipitación, conlleva serias implicaciones para la disponibilidad hídrica, la seguridad alimentaria, la agricultura, la salud, entre otros ámbitos fundamentales para el desarrollo económico y el bienestar de la población.⁸⁵

Como la autoridad rectora en materia ambiental lo menciona, El Salvador más allá de los lentos e inevitables cambios de la temperatura y el nivel del mar y sus impactos crecientes, afronta en la actualidad altas pérdidas y daños por los eventos climáticos extremos que, en el corto plazo, están

comprometiendo la posibilidad de desarrollo económico y social del país.⁸⁶

Esta realidad relativamente reciente, según la entidad ambiental, ha llevado a exigir la incorporación estratégica del cambio climático y la variabilidad climática asociada a la planificación del desarrollo, las inversiones públicas y privadas, y en las principales políticas públicas.

Para la Procuraduría el reconocimiento gubernamental de la trascendencia de la variabilidad climática y sus consecuencias es un signo positivo, y considera que todo esfuerzo de política pública debe basarse en la dignidad humana y en el pleno respeto de los derechos humanos, en consonancia con los principios de equidad social, justicia climática y sustentabilidad. Ello, en adición, impone al Estado salvadoreño la obligación para que en los espacios internacionales de discusión sobre cambio climático, exija medidas concretas y radicales a favor del clima, pues si bien existe responsabilidades compartidas a nivel global, éstas deben ser diferenciadas y responder a la magnitud y urgencia del problema de la variabilidad climática que ya afrontamos, y teniendo claro que existen países que tienen mayor grado de responsabilidad. En este sentido, tal como contempló la Política Nacional de Medio Ambiente:

“El Salvador requiere movilizar cuantiosos recursos financieros para promover y encauzar los procesos necesarios de adaptación al cambio climático y el país no está en capacidad de movilizar dichos recursos fundamentalmente a través de endeudamiento adicional. Por lo tanto, se debe priorizar la captación de financiamiento climático externo no reembolsable a través de propuestas innovadoras que apoyen las distintas componentes del plan nacional de cambio climático.”⁸⁷

⁸³ MARN. *Estrategia Nacional de Cambio Climático 2013*, versión 16 de mayo de 2013.

⁸⁴ *Ibíd.*

⁸⁵ *Ibíd.*

⁸⁶ *Ibíd.*

⁸⁷ MARN. *Política Nacional del Medio Ambiente 2012*, P. 29.

Pero además, debe decirse que las autoridades de Estado deben orientar todos sus esfuerzos al pleno cumplimiento de los compromisos internacionales establecidos en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y, en las decisiones asumidas en las Conferencias de las Partes (COP).

La variabilidad climática produce eventos extremos que como país es cada vez más difícil afrontar, por lo que se requieren medidas efectivas para preparar a la población y al territorio, así como el financiamiento internacional para respaldar los procesos que a nivel nacional se inicien. En este punto, la PDDH celebra que el país ahora cuenta con un Observatorio Ambiental dentro del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; sin embargo, considera que el mismo este debe fortalecerse con un sistema nacional de observación del clima, articulado con el sistema de Observación Climático Mundial, tal como ha sido sugerido por personas expertas en el tema.

Dentro de las medidas a implementar de acuerdo a la Estrategia Nacional de Cambio Climático, también se ha contemplado la figura de las inversiones críticas, que pretenden ejecutar intervenciones que en el corto plazo logren proteger a las familias en mayor situación de riesgo climático, así como “alargar la vida útil de activos o reducción significativa de potenciales impactos del cambio climático mediante inversiones, anualmente programadas en el presupuesto nacional”⁸⁸.

En cumplimiento de la Estrategia en comentario el MARN llevó a cabo consultas de las estrategias y planes sectoriales específicos que formarán parte del Plan Nacional de Cambio Climático, el cual debía oficializarse en el mes de mayo de 2014, pero a la fecha de análisis del presente informe aún no ha sido presentado, aunque se entiende que es un instrumento que está

próximo a hacerse público y que debe concretar las declaraciones que los instrumentos previos han orientado para reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático y evitar en el país la ocurrencia de desastres relacionados al mismo. Tal como reconoce la Declaración de Hyogo de 2005, debe fomentarse en los diferentes niveles, del individual al internacional, la cultura de prevención de desastres y de resiliencia, al igual que estrategias conexas que sean previas a los desastres, consideradas como inversiones sólidas, ya que las sociedades están sujetas a vivir el riesgo, pero son capaces de prevenir y mitigar los efectos de los desastres, reduciendo las vulnerabilidades. Por lo que, se hace nuestra la afirmación de Hyogo, al plantear que

“incumbe principalmente a los Estados la protección de su población y sus bienes en su territorio frente los peligros y, por consiguiente, es imprescindible que concedan un alto grado de prioridad a la reducción del riesgo de desastres en las políticas nacionales con arreglo a sus capacidades y a los recursos de que se dispongan”.

En consecuencia, hay avances positivos en relación al tema, pero existen importantes retos que todavía resta asumir de forma inmediata, con el fin de evitar agravar las condiciones de vulnerabilidad de la población, la ocurrencia de desastres y las violaciones a los derechos humanos. En tal sentido, es urgente contar con un Plan Nacional de Cambio Climático y políticas públicas que integre el tema climático y retomen los estándares internacionales en la materia; así mismo, diseñar un sistema de información sobre los impactos de cambio climático, el fortalecimiento de las capacidades humanas y la participación comunitaria en todos los niveles.

⁸⁸ MARN. *Estrategia Nacional de Cambio Climático* 2013.

d) Lo relativo al saneamiento ambiental

El saneamiento ambiental es una de las estrategias nacionales que complementa a la Estrategia Nacional del Medio Ambiente, y que consistente en un enfoque integral “reconocido como el conjunto de acciones al medio físico, con énfasis en la prevención y el control de factores ambientales que podrían afectar potencialmente la salud de la población, entendiendo que salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino el estado de completo bienestar físico, mental y social”.⁸⁹

La Estrategia Nacional de Saneamiento Ambiental señala que

“El manejo irresponsable de materiales tóxicos, el abuso de los agroquímicos en la agricultura, la contaminación generalizada de cuerpos de agua por vertidos domésticos e industriales sin ningún tratamiento previo y la presencia de todo tipo de desechos en los espacios públicos, ha generado en El Salvador problemas severos de saneamiento, graves consecuencias en la salud de las personas y los ecosistemas, así como limitadas posibilidades para el desarrollo de las actividades económicas.”⁹⁰

Para describir la problemática del saneamiento ambiental salvadoreño, la Estrategia enfatiza concretamente aspectos como los impactos en la salud, la contaminación de suelos por uso de agroquímicos y tóxicos, el manejo inadecuado de desechos sólidos y peligrosos, sistemas obsoletos de alcantarillado sanitario, falta de tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales, inadecuadas condiciones de operación de rastros municipales y entornos comunitarios insalubres.

En este apartado oportuno resaltar el problema con el uso de agroquímicos y las consecuentes afectaciones a la salud de la población, particularmente a comunidades agrícolas impactadas por la enfermedad renal crónica, caso en el que el Ministerio de Salud ya ha establecido una relación causal.

El 14 de octubre de 2013, la PDDH convocó a una reunión de carácter técnico consultivo, en la que participaron personas expertas en disciplinas relacionadas a la agricultura, la salud, el medio ambiente y la seguridad y soberanía alimentarias, con el objeto que dieran sus opiniones en relación al uso de agroquímicos en el país. En esa oportunidad se concluyó, con la información especializada brindada, sobre los consecuentes impactos de los agroquímicos en la agricultura nacional y la realización de los derechos humanos a un medio ambiente sano, al nivel más alto posible de salud física y mental y a una alimentación adecuada.

Además, durante el período que cubre el presente informe, se ha conocido de la problemática vinculada al elevado número de casos de enfermedad renal crónica y muertes por esa causa en los municipios de San Luis Talpa y Olocuilta, asociada al uso de agroquímicos en la zona, así como el abandono de 34.6 toneladas de desechos de plaguicidas y productos químicos⁹¹, más 40.4 toneladas de desechos contaminados en la ex planta QUIMAGRO, ubicada en el cantón Loma de Gallo del municipio de Olocuilta.

Al respecto, la Procuraduría ha expresado su preocupación y ha realizado una serie de diligencias y solicitudes de informe y atención oportuna a las autoridades para el caso, que se ha vuelto representativo y ha develado a la opinión pública los negativos efectos de los plaguicidas y la necesidad de atender el problema que no solo

⁸⁹ MARN. *Estrategia Nacional de Saneamiento Ambiental 2013*, versión 1 de junio de 2013.

⁹⁰ *Ibidem*.

⁹¹ Los agrotóxicos encontrados fueron: Toxafeno, Metil Paration, Etil Paration y compuestos clorinados, prohibidos para la comercialización y uso en el país por Acuerdo Ejecutivo N° 15, de fecha 27 de junio de 2000, del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

se circunscribe a esa zona, sino que trasciende a nivel nacional y por tanto debe ser atendido en su real dimensión. Al mismo tiempo, lleva a afirmar que es necesario plantearse la necesidad del cambio de modelo agrícola salvadoreño, dejando de lado el uso de agroquímicos y decantándose por la agroecología, en aras de evitar mayores afectaciones a las personas y el medio ambiente, y en el que se tenga como principal respaldo la información científica existente y el elevado costo en vidas humanas, además de los daños a la salud y a los ecosistemas, producidos por el uso de agroquímicos. Un paso inicial para este cometido es prohibir legislativamente el uso de agroquímicos, vale mencionar que ya existe un proyecto de reforma a la Ley Sobre Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos para uso Agropecuario, que introduce la prohibición expresa de 53 agroquímicos, pero que recibió observaciones presidenciales para su sanción y ahora se encuentra nuevamente en estudio en el seno legislativo. En este sentido, es importante agilizar dicha discusión y sentar un precedente positivo y comprometido con el bienestar de la población salvadoreña.

e) Lo relativo a la biodiversidad

La diversidad biológica es entendida como “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas (artículo 2 del Convenio sobre la Diversidad Biológica). La biodiversidad se ha declarado de interés común de la humanidad, reviste importancia tanto para la evolución, como para el mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida de la biosfera y su conservación y utilización sostenible es de “importancia crítica para satisfacer las necesidades alimentarias, de salud y de otra naturaleza de la población mundial en crecimiento, para lo que son esenciales el acceso

a los recursos genéticos y a las tecnologías y la participación en esos recursos y tecnologías”⁹²

En la actualidad, el MARN ha identificado las principales amenazas a la diversidad biológica, consistentes en “la reducción, deterioro y fragmentación del hábitat; la utilización excesiva de los recursos o sobre explotación; la introducción de especies exóticas invasoras y altamente competitivas; la contaminación de los cuerpos de agua y el suelo; y el cambio climático”⁹³.

Como puede verse, el tema de la biodiversidad se encuentra estrechamente vinculado al resto de temáticas señaladas en este apartado en materia ambiental y su importancia es significativa para la realización de los derechos humanos, verbigracia los derechos a la salud, la alimentación adecuada, el medio ambiente sano, entre otros; por lo que su protección y la conciencia de su relevancia en la población y los funcionarios de estado es trascendental.

La Estrategia Nacional de Biodiversidad, oficializada el 22 de mayo de 2013, y su Plan de Acción son los instrumentos que aplicarán el Convenio sobre la Diversidad Biológica. La Estrategia ha identificado los aspectos críticos y aquellos necesarios para garantizar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad salvadoreña, articulándolos en torno a tres ejes fundamentales, que contienen las líneas prioritarias de acción⁹⁴. Los ejes contemplados los constituyen: la integración estratégica de la biodiversidad en la economía, la restauración y conservación inclusiva de ecosistemas críticos y la restauración y conservación inclusiva de ecosistemas críticos.⁹⁵

⁹² Convenio sobre la Diversidad Biológica, Preámbulo.

⁹³ MARN. Hoja Informativa 02: Hacia el Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2013: Plan Estratégico 2011-2020 y Metas de Aichi del Convenio sobre la Diversidad Biológica, versión 5 de noviembre de 2013.

⁹⁴ MARN. Hoja Informativa 01: Hacia el Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2013: Proceso de Consulta para la Formulación del Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2013, versión 4 de noviembre de 2013.

⁹⁵ *Ibidem*.

El MARN tenía previsto el lanzamiento del Plan de acción para abril de 2014, pero hasta la fecha de emisión de este informe no ha sido realizado, a pesar de haber hecho varias consultas a nivel nacional y reuniones de mesas de trabajo temáticas. La implementación de este plan de acción que se imponga ante las graves amenazas ya señaladas, se convierte en una necesidad impostergable y garantía de vida de las presentes y futuras generaciones.

f) Sobre las industrias extractivas y sus consecuencias en la población salvadoreña

En lo que concierne a las industrias extractivas, desde el año 2006, y recientemente en un evento público realizado en el mes de diciembre de 2013,⁹⁶ la PDDH se ha venido pronunciando, de manera consecuente, por la prohibición definitiva de la actividad minera, en virtud de las afectaciones que la misma representa y que ya se han demostrado en El Salvador, con el caso de la contaminación del Río San Sebastián en el municipio de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión, así como fundamentado en la opinión de especialistas y personas afectadas por la introducción de empresas con interés en este rubro en otras latitudes, por los conflictos sociales que desencadenan y en las condiciones particulares de este país que no hacen viable la explotación minera, especialmente por los problemas con la disponibilidad y calidad hídrica.

A pesar del enorme movimiento social ambiental que se opone a la introducción de la industria minera metálica en El Salvador y abogan por

una prohibición permanente, el 17 de julio de 2012, el Ministerio de Economía en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República de El Salvador presentaron a la Asamblea Legislativa la propuesta de Ley Especial para la Suspensión de los Procedimientos Administrativos relacionados a Proyectos de Exploración y Explotación de Minería Metálica, que es una solución temporal mientras son superadas ciertas condiciones contenidas en el mismo proyecto de Ley.

Esta Procuraduría expresó que dicho anteproyecto de ley fue elaborado y propuesto de forma inconsulta, sin responder a los intereses y demandas del movimiento social. Además, prescinde de las opiniones señaladas por expertos e informes técnicos oficiales, respecto a las condiciones sociales, ambientales, climáticas, institucionales y económicas del territorio salvadoreño que no hacen viable que la industria minera metálica realice sus actividades extractivas sin riesgos para la salud y la vida en condiciones adecuadas de la población salvadoreña y los recursos de los que se abastece. Por tanto, esta institución ha concluido que desde el punto de vista de los derechos humanos, la alternativa que mejor atiende a la realidad actual es la prohibición total de tal actividad extractiva, y no así a una solución paliativa como sería una suspensión temporal de los procedimientos para la exploración y explotación minera metálica⁹⁷.

Resulta preocupante que a pesar del anterior señalamiento, uno de los temas ausentes en la plataforma programática del actual gobierno en materia medioambiental, fuera la indefinición ante la necesidad de prohibir los proyectos de explotación minera y contaminación transfronteriza; sin embargo no se puede ser

⁹⁶ El 29 de noviembre la PDDH realizó un foro público denominado "Perspectivas del Derecho Humano al Agua", en la que el Procurador David Morales Cruz, se pronunció en torno al tema de los proyectos mineros. En esa misma fecha se emitió la "Posición del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos respecto a los derechos al agua y a la alimentación adecuada en la actual coyuntura" que contemplaba la posición institucional respecto a las industrias extractivas a nivel nacional y transfronterizo.

⁹⁷ PDDH. *Informe sobre la Minería Metálica y los Derechos Humanos en la República de El Salvador*, presentado en el marco de la audiencia de carácter general a celebrarse en el 146º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 16 de octubre de 2012, P. 8.

concluyente en este punto ya que al cierre de este informe, aún no se conocen las políticas que en esta materia serán implementadas por el actual Órgano Ejecutivo⁹⁸.

Al mismo tiempo, para la PDDH también es pertinente rescatar que las amenazas de las industrias de extracción minera a nuestros bienes hídricos trascienden fronteras, por lo que existe un reto para las autoridades de Estado de advertir e identificar oportunamente los riesgos de este tipo de proyectos transfronterizos pueden producir e invocar tanto las normas y principios del derecho internacional en la materia, como las del derecho comunitario correspondiente, para luego propiciar una solución pacífica al conflicto que puede generarse con los países vecinos por la explotación minera que en ellos se realice y evitar repercusiones para la vida, la salud y el medio ambiente de los habitantes salvadoreños y de la región centroamericana.

g) Consideraciones finales

Luego de los puntos expuestos en esta parte del análisis situacional sobre los derechos ambientales, se concluye que en los últimos años ha existido avances significativos en materia de protección ambiental, pero los mismos no han sido suficientes para atender los amplios problemas ambientales del país y resarcir los daños ya causados, tanto al ambiente como a las personas.

Evidentemente una de las principales deudas es de carácter legislativo en lo que respecta al reconocimiento constitucional del derecho humano al agua, al estudio y aprobación de una ley marco en materia hídrica, respecto a la prohibición de la minería metálica y la prohibición de productos químicos de uso agrícola. Por tanto, la discusión seria y pronta aprobación de las referidas normas, a la luz de los

⁹⁸ PDDH. *Primer Informe Electoral del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos*, David Ernesto Morales Cruz, sobre las Elecciones Presidenciales, 20 de enero 2014, P. 29.

derechos humanos, sigue siendo una exigencia de esta institución, respaldada en las demandas de la sociedad civil organizada, para encausarse hacia la sustentabilidad de El Salvador y la potenciación de las capacidades de las personas que habitan El Salvador, tanto en la esfera individual como colectiva.

A nivel del Órgano Ejecutivo, se debe profundizar en los cambios ya iniciados, implementándolos e informando a la población y haciéndola partícipe de las decisiones adoptadas en los asuntos ambientales que les afectan.

El artículo 2 de la Convención Americana establece el deber de los Estados de adoptar medidas legislativas y de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos en la Convención. Así, el deber de garantía del artículo 1.1 interpretado en concordancia con la obligación de adoptar medidas del artículo 2, en armonía con la disposición de no discriminación del artículo 24, impone a los Estados la obligación de adoptar medidas positivas que en ciertas circunstancias se requieran para igualar a los desiguales. En ese sentido, se deben tomar medidas positivas de protección en favor de las personas que se ven impactadas por las graves consecuencias del daño ambiental, las que viven en zonas vulnerables o bajo riesgo y aquellas que arriesgan su vida y seguridad en la defensa de un ambiente sin riesgo, limpio, saludable y sustentable.

El derecho humano a la salud implica, como lo afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS), “que los gobiernos deben crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones incluyen la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos”⁹⁹.

⁹⁹ Véase: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/>, consultado el 28 de abril de 2014.

Una de las situaciones destacables en el último año y que son de suma preocupación para esta Procuraduría es el asocio de varios padecimientos al uso de agroquímicos, especialmente en comunidades agrícolas, y que se convierten en afectaciones y amenazas al derecho a la salud, el derecho a la alimentación y el derecho al medio ambiente de las personas, no solo en el presente, sino a las generaciones venidera.

Frente a tales riesgos para la vida humana, los Estados deben formular acciones concretas para frenar el impacto de los agroquímicos en la vida de las personas y generar condiciones medioambientales mínimas compatibles con la dignidad de la persona humana tal como ha sido reconocido en el artículo 1 de la Constitución de la República y en diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos, como un prerequisite para el disfrute del resto de derechos humanos.

Según la información a la que esta institución ha tenido acceso, científicamente está demostrado que el uso de plaguicidas tiene vinculación a efectos cancerígenos y con afecciones como la enfermedad renal crónica, problemas congénitos y asociados a otras enfermedades, con consecuencias en la vida silvestre y bienes naturales; por lo que se hace imperativo volcar esfuerzos por detener el uso de tales productos agrícolas y buscar alternativas que no representen riesgos para salud, al tiempo que se atiende oportuna y efectivamente a las personas que ya están sufriendo las consecuencias de la contaminación por plaguicidas.

Casos que de manera especial han llamado la atención de esta institución, por ser ejemplos claros y próximos de los efectos vinculados al uso de plaguicidas, son el alarmante número de personas con enfermedad renal crónica por causas no tradicionales en comunidades agrícolas salvadoreñas, particularmente los denunciados por habitantes del Cantón Loma de Gallo en La

Paz, Guayapa Abajo en Ahuachapán, Las Brisas en San Miguel y el Bajo Lempa en Usulután, que han conducido a la muerte de muchos de sus habitantes y el sufrimiento de las familias sobrevivientes, con miembros que en muchos casos también están padeciendo la enfermedad.

Si bien, esta institución reconoce positivamente las acciones que se han realizado a la fecha para determinar científicamente el origen de esta enfermedad y, las acciones adoptadas ante los efectos causados; considera que como una medida de reparación y de prevención de futuras afectaciones debe procederse a la prohibición del uso de agroquímicos e impulsar una política basada en la agricultura orgánica que asegure la vida de las personas y de los ecosistemas.

Un motivo de preocupación de esta Procuraduría en el ámbito de la protección ambiental, son las amenazas y muertes ocurridas contra las personas defensoras del medio ambiente, sobre todo, en las zonas en donde se pretende desarrollar proyectos de extracción de minería metálica. Desde junio del año 2009, la PDDH ha recibido denuncias sobre hechos lamentables en contra de habitantes de las zonas de mayor protesta social en contra de la minería metálica; situación que, según los denunciantes, ha generado intranquilidad y zozobra.

El último atentado contra la vida de un defensor ambiental, fue el sufrido por el señor Alejandro Guevara Velasco, activista y líder de la Asociación Ambiental de la Comunidad La Maraña, miembro de la Mesa Frente a la Minería Metálica, quien el pasado 3 de octubre de 2013, recibió en su casa de habitación varios impactos de bala y luego una llamada telefónica amedrentadora. Situación a la que esta institución da seguimiento y cuenta con un expediente abierto y una resolución inicial.

El tema de los defensores ambientales requiere de mucha atención por parte de las autoridades, quienes están llamadas a escuchar sus justas

demandas y garantizar su protección, al respecto el Experto Independiente de las Naciones Unidas, sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, señor John Knox, recientemente resaltó el vínculo entre medio ambiente y derechos humanos e indicó que los ecologistas merecen igual protección que los defensores de los derechos humanos, al recordar los grandes riesgos que asumen cuando realizan su trabajo en favor del medio ambiente.

Es por tal razón, que la Procuraduría desde que ha tenido conocimiento de estos graves hechos ha recomendado al Estado que adopte todas las medidas para la protección de los defensores ambientales, especialmente de los que se oponen a proyectos que por su naturaleza amenazan la vida, salud y el medio ambiente. En este sentido, una de las acciones inmediatas que han sido recomendadas es la investigación de los hechos sucedidos, identificar y responsabilizar a los autores materiales e intelectuales de los mismos, a fin de proteger el trabajo en defensa de los bienes naturales y como garantía de no repetición. De esa manera el Estado promoverá la efectiva protección de la vida e integridad física de miembros de las organizaciones ambientales y asegurar la vida y la tranquilidad de sus familias.

En este punto la PDDH considera que, además, como una medida de protección se debe adoptarse medidas legislativas, orientadas a prohibir la explotación de la minería metálica retomando las demandas de las organizaciones sociales, que con fundamento científico han planteado que la industria minera no aporta beneficios a favor de la vida de los pueblos y los bienes naturales.

La PDDH destaca, por tanto, el trabajo de las personas y organizaciones civiles defensoras

ambientales, y quienes requieren del Estado medidas para que la defensa de los derechos humanos que realizan, se produzca en un entorno seguro y propicio para plantear sus demandas.

De igual forma, la personas afectadas por desastres socio ambientales tienen derecho a que el Estado les otorgue, sin distinción alguna, la protección que requieren mientras recuperan las condiciones que le permitan satisfacer por sus propios medios sus necesidades básicas y desarrollar sus potencialidades.

Tal protección requiere medidas como el establecimiento de albergues adecuados y de acuerdo a las necesidades de los grupos específicos, así como suministro de alimentación, vestido, atención médica y psicológica, recreación y seguridad para sí mismos, su grupo familiar y sus bienes.

Dicha protección se extiende al derecho a ser evacuados de forma oportuna de las zonas de riesgo, y el derecho a ser reubicados hacia zonas libre de amenazas, si el riesgo en el lugar de vivienda original persiste, con el propósito de garantizar de forma condiciones de vida digna.

Si bien, durante el último quinquenio se han dado avances positivos en el manejo y atención de las emergencias, que se traduce en una mejor atención de las víctimas de desastres. Sin embargo, hay que decir que aún continúa pendiente la implementación de una política pública en materia de gestión de riesgos con un enfoque prospectivo, que tenga como eje principal la prevención del riesgo de desastres y que coloque a la persona humana en el centro de toda actuación.

1.4 Derechos de la niñez, adolescencia y juventud

A partir del año 2011 entró en vigor la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia¹⁰⁰ (LEPINA), que en coherencia con la Constitución de la República¹⁰¹ y la Convención sobre los Derechos del Niño¹⁰² (CDN), establece como finalidad de dicha normativa nacional garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos y satisfacer el cumplimiento de los deberes de la niñez y la adolescencia¹⁰³.

La LEPINA contempla disposiciones fundamentales de la CDN, armonizando la normativa interna con los estándares internacionales. Además, con esta Ley se instituye una nueva concepción basada en la doctrina de la protección integral de las niñas, niños y adolescentes¹⁰⁴ (NNA), con lo cual se pretende superar y sustituir una arraigada práctica social y legislativa de la “situación irregular” y la visión tutelar del “menor”, por el paradigma de la “protección integral”, en el que los NNA se reconocen como sujetos plenos de derechos.

Por otra parte, con la LEPINA se creó un Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (SNPINA), en el que participan de manera coordinada la familia, el Estado y la sociedad para garantizar el pleno goce de los derechos de los NNA, en coherencia con el principio de corresponsabilidad. La autoridad

rectora del SNPINA es el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia¹⁰⁵ (CONNA).

Esta Procuraduría ha expresado su satisfacción por el avance en la armonización de la normativa interna con los estándares internacionales de derechos humanos en materia de protección de los NNA y la creación del SNPINA, la instalación del CONNA, el despliegue territorial de las Juntas de Protección, la aprobación de la política nacional y la emisión del primer informe de situación de los derechos de la niñez.

Pese a estos avances positivos, sigue siendo alarmante la situación de violencia que ha imperado en el país en las últimas décadas¹⁰⁶, particularmente en el último quinquenio, pues continúa la presencia de problemas estructurales que afectan gravemente los derechos de la niñez, tales como la inseguridad ciudadana, la delincuencia, la desatención de las víctimas, la crisis económica, la deficiencia del sistema de justicia y las limitaciones en los servicios de salud y educación¹⁰⁷, los cuales han configurado un ambiente de vida no digna y limitadas oportunidades para las familias y afectado directamente a muchos NNA, quienes se han visto empujados a realizar actividades generadoras de ingresos, a la emigración, la inserción en las pandillas¹⁰⁸ y la delincuencia común.

¹⁰⁰ Aprobado por Decreto Legislativo No 487, del 26 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial No. 68 tomo No 383, del 16 de abril 2009.

¹⁰¹ Artículo 34 de la Constitución de la República; artículo 2 numeral 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño; y Considerando IV de la LEPINA.

¹⁰² Suscripción el 26 de enero de 1990; ratificación en abril del mismo año. Publicado en el Diario Oficial No 108 tomo No 307, del 9 de octubre de 1990.

¹⁰³ LEPINA, Art. 1

¹⁰⁴ Se comprenden también las niñas, niños y adolescentes con discapacidad e indígenas.

¹⁰⁵ Artículo 135 de la LEPINA, “El CONNA es la máxima autoridad del sistema de protección integral”.

¹⁰⁶ PDDH. Posicionamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la situación de inseguridad en el país y las políticas estatales de seguridad. 12 de mayo de 2014, p. 1

¹⁰⁷ PDDH. Informe de labores 2011-2012 y 2012-2013.

¹⁰⁸ ISNA. Una aproximación al fenómeno de las pandillas en El Salvador. Cuadernos monográficos No 1, 2011. <http://www.isna.gob.sv/ISNA/phocadownload/Estadisticas/CUADERNO%20MONOGRAFICO%20PANDILLAS.pdf>, última visita el 8 de julio de 2014.

a) Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia

Un avance muy significativo en el período que se evalúa lo representa la aprobación de la LEPINA y la creación del SNPINA, el cual constituye un paso fundamental para la protección integral de los NNA, particularmente de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Asimismo, se reconoce como un logro la aprobación en 2013 de la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (PNPINA), la cual fue construida a través de un proceso participativo, con el involucramiento de las mismas niñas, niños y adolescentes.

También constituye un hecho relevante la puesta en funcionamiento, por parte del CONNA de quince Juntas de Protección de la Niñez y de la Adolescencia (JPNA) para atender casos de niñas, niños y adolescentes vulnerados en sus derechos. Estas Juntas reportaron entre enero y agosto de 2013, 6,062 casos de NNA cuyos derechos habrían sido infringidos¹⁰⁹; así como la aprobación de la normativa interna del CONNA, incluyendo la atinente a la organización y funcionamiento de la Red de Atención Compartida (RAC) y de los Comités Locales de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia (CLDNA).

La LEPINA integra al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) al SPINA por medio de la RAC y transforma al ISNA en una entidad pública prestadora de servicios especializados para atención de la niñez y adolescencia, con la responsabilidad de ejecutar y supervisar las medidas de protección a través de programas de atención para los NNA vulnerados en sus derechos, así como la ejecución y organización de programas para la inserción social de jóvenes en conflicto con la Ley Penal Juvenil, la coordinación y supervisión de las entidades integrantes de la RAC, la formación de

operadores internos y externos del Sistema y el desarrollo y promoción de investigaciones y producción de estadísticas en materia de niñez, adolescencia y familia¹¹⁰.

Durante el período de análisis, el ISNA ha avanzado de manera significativa en algunas de sus áreas de competencia, según el Informe de Rendición de Cuentas del ISNA. Junio 2009-Febrero de 2014, se crearon y actualmente están en funcionamiento el “Centro de Integración Nacional para Niñez y Adolescencia (CINNA) para la desintoxicación y deshabitación de drogas, alcohol y tabaco para niñas, niños y adolescentes; el “Centro de Acogida de Emergencia Erlinda y Ernestina Serrano Cruz” en San Miguel, para atención de víctimas en la zona oriental; y el Albergue Regional para Víctimas de Trata.

También reporta el ISNA la potenciación de los programas en Medio Abierto que desarrolla para la inserción social de adolescentes y jóvenes en conflicto con la Ley Penal Juvenil y la dignificación del servicio de alimentación para los adolescentes y jóvenes internos en los cuatro Centros de Inserción Social y en cinco resguardos. En materia de coordinación y supervisión de la RAC, el ISNA habría dado acompañamiento a las entidades que ejecutan programas de atención a la niñez y adolescencia y articulado con más de 87 municipalidades en procesos de sensibilización y organización de los gobiernos y actores locales¹¹¹.

Un aporte relevante para el fortalecimiento del SNPINA es la creación y el funcionamiento la Escuela de Formación de Operadores (EFO) del ISNA; así como el mantenimiento y la cualificación de los servicios especializados de atención inicial a un promedio anual de 7,085 niñas y niños de entre 0 y 6 años en 15 Centros de Desarrollo Integral (CDI) y de 5,764 niñas

¹⁰⁹ CONNA, Op. Cit. p. 74

¹¹⁰ Artículos 180 y 181 de la LEPINA.

¹¹¹ ISNA, Informe de Rendición de Cuentas del ISNA. Junio 2009-Febrero de 2014

y niños en 191 Centros de Bienestar Infantil (CBI). Además, el ISNA aporta a la formulación y evaluación de políticas públicas con la producción de investigaciones y estadísticas atinentes a la niñez y adolescencia atendidas en el sistema de protección especial; así como la promoción de la investigación a través de los certámenes nacionales de investigación con estudiantes de centros educativos públicos y privados.¹¹²

Pese a lo positivo de contar con un Sistema y una Política de Protección Integral, aún falta por superar algunos problemas y limitaciones reales como la efectiva articulación y fortalecimiento de la institucionalidad del SNPINA, la insuficiencia de las asignaciones presupuestarias para las instancias responsables de implementar la PNPINA, la necesidad de creación y puesta en funcionamiento de los CLDNA en cada uno de los municipios del país; sin dejar de tener en cuenta el impacto del grave ambiente de inseguridad y violencia del país. Sin duda que estas situaciones han influenciado el desempeño de las instituciones del Sistema, y su capacidad de respuesta ante los graves problemas que dañan la vida de quienes son parte de este sector social.

La PDDH también está integrada al SNPINA¹¹³ y ha contribuido con sus esfuerzos propios, acorde a su mandato constitucional de velar porque éste sea cada vez más efectivo en la protección de la integral de las niñas, niños y adolescentes. Ha sido una preocupación permanente para la PDDH que el Estado no adopte medidas contundentes en favor de las víctimas en general y especialmente sobre NNA que han sido víctimas de la violencia física, sexual, doméstica, delincuencia, de trata y de otras formas de explotación económica.

b) El derecho a la vida y a la integridad personal de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes

Ante la situación de violencia e inseguridad imperante en el país y reconociendo la complejidad del problema, la PDDH ha demandado medidas estructurales que eliminen tal flagelo del país, mediante una política de seguridad ciudadana integral y eficaz, que no privilegie la represión en sí misma. Los derechos fundamentales a la vida, la integridad y el desarrollo personal de los NNA se ven directamente afectados de manera negativa en este entorno y resulta deplorable e indignante que dicho problema afecte a la mayoría de la población, especialmente a las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes.

Es lamentable que al final del período de análisis se registre un aumento de los índices de la violencia. El indicador de la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, refleja que el Estado salvadoreño ha superado en tres veces el promedio mundial, el cual es un poco mayor a 24 víctimas por cada 100,000 habitantes¹¹⁴. Esta situación coincide con lo expresado por la representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, en su visita oficial realizada al país a mediados del año pasado, en su informe expresó que “La violencia en la comunidad, la violencia de tipo delictivo y la que se produce en la intimidad del hogar, están profundamente interrelacionadas y provocan miedo, inseguridad y daños en las familias, en la comunidad y en la sociedad en general. Los niños y las niñas son especialmente vulnerables a estas formas de violencia interconectadas, ya sea como víctimas o como testigos”¹¹⁵.

¹¹⁴ PDDH. Posicionamiento sobre la situación de inseguridad en el país y las políticas estatales de seguridad, emitido el 12 de mayo de 2014, P. 1.

¹¹⁵ Naciones Unidas. Informe de la visita de la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, señora Marta Santos Pais, San Salvador, 14 de junio de 2013, p. 3

¹¹² *Ibidem*.

¹¹³ Artículo 105, LEPINA.

Sobre esta situación, el CONNA ha expresado que en El Salvador, dadas las condiciones y el entorno de violencia social, las niñas, niños y adolescentes se enfrentan a situaciones que les provocan temor ante una serie de amenazas que atentan contra su vida y su bienestar. Tal es el caso, que a diario son víctimas de acciones violentas o de cualquier tipo de abuso¹¹⁶, por lo que la niñez y adolescencia salvadoreña ha estado y está bajo asedio y en peligro. La violencia y el crimen “se posicionan y confirman como factores de gran peso que atentan contra el desarrollo nacional y la integridad de la infancia y de la juventud”¹¹⁷.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha expresado su indignación y profunda preocupación “por la incesante continuidad y el recrudecimiento en los altos índices de criminalidad y violencia contra niñas, niños y adolescentes registrados en El Salvador. Entre el 2005 y 2013 fueron asesinados aproximadamente 6,300 niñas, niños y adolescentes. En los años 2012 y 2013, un total de 984 niñas, niños y adolescentes fueron asesinados, de los cuales el 82% se registró en personas de sexo masculino entre las edades de 15 y 19 años”¹¹⁸.

Según información de la Policía Nacional Civil (PNC)¹¹⁹, del total de niñas, niños, adolescentes

¹¹⁶ Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA): Informe sobre el estado de situación de los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador, 2013, p. 69.

¹¹⁷ Gaborit, Mauricio et al: Migración infantil irregular salvadoreña: reflexiones desde la psicología social, en: Revista Estudios Centroamericanos (ECA), volumen 69, enero-marzo de 2014, número 736, p.56

¹¹⁸ Véase UNICEF *llama a respetar la vida e integridad de niñas, niños y adolescentes y conmina a la ciudadanía salvadoreña a la indignación por sus muertes*, Comunicado de prensa, publicado el seis de mayo de 2014. Disponible en <http://www.nacionesunidas.org/sv/comunicados/unicef-llama-a-respetar-la-vida-e-integridad-de-ninas-ninos-y-adolescentes-y-conmina-a-la-ciudadania-salvadorena-a-la-indignacion-por-sus-muertes>, consultado el 18.06.14

¹¹⁹ Durante 2013 se registraron 1,388 niñas, niños, adolescentes y jóvenes que perdieron la vida en hechos violentos, afectando mayormente al grupo de personas jóvenes (81.14%); le sigue el grupo de personas adolescentes (18.14%), con edades entre 13 y 17 años; y finalmente el grupo de las personas menores de 12 años, representan el 0.72% del total de personas que perdieron la vida. Para todos los grupos las víctimas son predominantemente del

y jóvenes que perdieron la vida en hechos violentos durante 2013 y primer trimestre de 2014, más del 81.0% corresponden a personas con edades entre 18 y 30 años, y poco más del 18.0% son personas entre 13 y 17 años; además, la mayor incidencia de personas que perdieron la vida en hechos violentos son del sexo masculino, superando el 92% de los casos. Con relación a violaciones a la integridad personal, los datos oficiales para el mismo período señalan que el 68.7% de las víctimas de lesiones culposas fueron jóvenes, el 11.8% adolescentes y el 19.5% niñas y niños menores de 12 años, manteniendo la prevalencia de personas del sexo masculino, en un 67.8%¹²⁰. Por otra parte, las desapariciones constituyen otro fenómeno que está afectando sobremanera a la niñez, adolescencia y juventud salvadoreñas, las cifras policiales indican que en el año 2013, hasta el mes de septiembre, se habían reportado 302 casos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes desaparecidos¹²¹.

Durante el período de análisis también se constata el recrudecimiento de otras agresiones hacia la niñez y la adolescencia. Al respecto, UNICEF reportó, en base a información de las JPNA, que en 2012 y 2013 éstas atendieron 18,754 casos de niñas, niños y adolescentes vulnerados en sus derechos, de los cuales el 46.0% correspondieron a violaciones al derecho a la integridad personal. Entre 2012 y 2013 se registra un significativo incremento en los casos de vulneración atendidos por las JPNA: aumentaron en más 1.6 veces los casos de violaciones al derecho a la integridad

sexo masculino (92.05%); además, destaca que uno de cada cinco de los 1,388 homicidios corresponden a niñas, niños y adolescentes, para quienes el Estado, la familia, sociedad y la comunidad deben otorgar una protección especial. A estas cifras hay que agregar las 316 NNA que murieron el año pasado víctimas de accidentes de tránsito y las 54 que se contabilizan hasta el 11 de marzo del año en curso fallecidas por esa misma causa. Fuente: Estadísticas remitidas por la Policía Nacional Civil ante solicitud formulada mediante oficio n° PADNJ/005/14 de febrero de 2014

¹²⁰ Comunicado: UNICEF *llama a respetar la vida e integridad de niñas, niños y adolescentes y conmina a la ciudadanía salvadoreña a la indignación por sus muertes*. Op. Cit.

¹²¹ Véase el sitio: http://observatoriodelosderechosdelaninezylaadolescencia.org/Maltrato_Infantil.php, última consulta el 8 de julio de 2014.

personal de NNA, también se incrementaron en 78% los casos de vulneración del derecho a la protección frente al maltrato, y se acrecentaron en 38% los casos de vulneración del derecho a la protección frente al abuso y explotación sexual¹²².

Ante el grave problema de la violencia que padecen las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, esta Procuraduría considera prioritaria la implementación de una política de seguridad ciudadana integral, basada en un enfoque de seguridad humana, lo cual requiere establecer una efectiva coordinación y articulación inter institucional de todas las instancias públicas y privadas, incluyendo a amplios sectores de la sociedad civil. Ocupa un rol prioritario la atención y reparación a las víctimas, así como la reinserción de las NNA en conflicto con la ley, atendidos en los Centros de Inserción Social del ISNA.

Si bien los programas y las herramientas jurídicas actuales en materia de protección integral de la NNA resultan insuficientes¹²³, se recomienda al Estado apoyar de manera decidida la plena vigencia de la LEPINA y de la Política Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia; así como el adecuado funcionamiento del Sistema de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, para lo cual debe observarse en la implementación de las políticas públicas el cumplimiento del principio del interés superior de los NNA, y la asignación de los recursos necesarios a la institucionalidad del Sistema para llevar a cabo adecuadamente las funciones que le establecen la LEPINA.

¹²² Comunicado: UNICEF llama a respetar la vida e integridad de niñas, niños y adolescentes y conmina a la ciudadanía salvadoreña a la indignación por sus muertes, publicado el 06.05.14 disponible en <http://www.nacionesunidas.org.sv/comunicados/unicef-llama-a-respetar-la-vida-e-integridad-de-ninas-ninos-y-adolescentes-y-conmina-a-la-ciudadania-salvadorena-a-la-indignacion-por-sus-muertes>, consultado el 18.06.14

¹²³ Posicionamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la situación de inseguridad en el país y las políticas estatales de seguridad, p.11.

c) Educación inicial

El derecho a la educación inicial ha sido reconocido en múltiples tratados internacionales, que obligan al Estado salvadoreño a realizar acciones para garantizarlo. La Convención sobre los Derechos del Niño dispone que la niñez “por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”¹²⁴. Otros instrumentos que reconocen una protección especial para la niñez son la Declaración Universal de Derechos Humanos¹²⁵, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales¹²⁶; la Declaración Mundial de Educación para Todos (EPT) y el Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje¹²⁷, en ellos se establece la necesidad de ampliar los medios y el alcance de la educación básica, incluyendo a la educación inicial en la infancia, a través de medidas destinadas a la familia, la comunidad o las instituciones, dependiendo de la conveniencia y de las posibilidades que el contexto permita.

En materia de cobertura educativa, la primera infancia, que corresponde al período que va desde la concepción hasta los 6 años 11 meses¹²⁸, registra las tasas más bajas, pues solo el 57.0 % de la población con edades entre 4 y 6 años recibe educación inicial, y de ésta el 80.0 % es atendido en centros del sector público. En este sentido, más de 147,000 niñas y niños en dicho rango de edad están excluidos de ese nivel de educación. Cabe señalar que en lo relativo a la población con edades entre 0 y 3 años, hay poca información estadística, pero se estima que para

¹²⁴ Convención sobre los Derechos del Niño, considerando 9º, asimismo, los artículos 28 y 29 se refieren al tema que se está abordando.

¹²⁵ Artículos 25 y 26.

¹²⁶ Artículos 10.3 y 13.

¹²⁷ Aprobados por la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, celebrada en Jomtien (Tailandia), del 5 al 9 de marzo de 1990. Citados en MINED: Política de Educación y Desarrollo Integral para la Primera Infancia, 2010, p. 15.

¹²⁸ MINED: Fundamentos curriculares de la primera infancia, 2ª. Edición, junio de 2013, p.17

los más de 433,500 niñas y niños registrados, solo el 1.8 % participa en programas de atención que brindan, principalmente instituciones de la sociedad civil¹²⁹.

El Estado salvadoreño ha adoptado algunas medidas para abordar el problema de la exclusión de la niñez en el sistema educativo en la primera infancia¹³⁰. Así en el año 2012, como parte del Plan Social Educativo 2009-2014 “Vamos a la escuela”, se emitieron los currículos para los niveles educativos de primera infancia y educación parvularia, los cuales se sustentan en los derechos humanos, en la doctrina de la protección integral y en la concepción científica del desarrollo del niño y de la niña como sujetos de derecho.

d) El trabajo infantil y el empleo de los jóvenes

Esta Procuraduría considera que el respeto y la garantía de los derechos de las niñas, niños, adolescentes está íntimamente ligado no solo con la supresión de las peores formas de trabajo infantil (esclavitud, trata infantil, servidumbre por deudas, trabajo forzoso, condición de siervo y explotación sexual); sino que además requiere de la eliminación del trabajo infantil, acompañado de la implementación de programas permanentes y gratuitos que protejan a los NNA frente al abuso y la explotación, así como la generación de condiciones dignas y de oportunidades para

las personas jóvenes y las familias.

En este sentido, quedan por realizar numerosos esfuerzos. Solo superar el doble desafío de trabajo infantil y empleo juvenil, y dar cumplimiento a los retos consignados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio perfila un horizonte muy difícil de alcanzar; para esta situación habría que garantizar que cerca de 58,000 niños con edades entre 5 y 13 años que en El Salvador se dedican a alguna actividad generadora de ingresos, vayan a la escuela y reciban una educación de calidad, además de garantizarle sus derechos. Por otro lado, habría que reducir la tasa de desempleo de jóvenes entre 15 y 29 años, que alcanza a casi al nueve por ciento de la PEA¹³¹.

Según las estadísticas oficiales, el trabajo infantil se concentra en la población adolescente por lo cual las autoridades deben adoptar medidas para proteger sus derechos. Al respecto, la LEPINA elevó a catorce años la edad mínima para que una persona pueda llevar a cabo actividades laborales, siempre y cuando se garanticen sus derechos y no perjudique su acceso y derecho a la educación; a la vez establece que “bajo ningún concepto se autorizará el trabajo para las niñas, niños y adolescentes menores de catorce años”¹³²

En el período que analiza este Informe se han observado pocas iniciativas tendientes a eliminar el trabajo infantil. De hecho, las autoridades han tenido serias dificultades para su reducción, al respecto el ISNA, sostiene que “(...) Lejos de menguar, el trabajo infantil aumenta y este proceso es propiciado por el carácter aislado y unidimensional de algunas políticas públicas en la materia. Con esto, se alude principalmente a programas focalizados que no modifican los elementos que están detrás de la problemática”¹³³. En este contexto las autoridades deben realizar

¹²⁹ Ver: Rivas Villatoro, Felipe Alexander: Primera infancia en El Salvador. Estado actual y perspectivas, 2012, p. 7, y MINED, 2013, *Ibíd.*

¹³⁰ MINED: Política de Educación Inclusiva, 2010, p. 7. En el 2010, el MINED emitió la Política de Educación Inclusiva. Dicha herramienta “pretende dar respuesta a las niñas, niños, adolescentes y personas adultas que no acceden a la escuela, que no avanzan como se espera (o avanzan demasiado en relación con los demás), que repiten grado, llegan con sobre-edad o abandonan la escuela, que estando dentro de la escuela son segregados o marginados por sus diferencias (necesidades educativas especiales, etnia, género o condición social), que habiendo culminado el trayecto escolar no logran insertarse satisfactoriamente en una sociedad porque el aprendizaje logrado en la escuela no fue relevante para ese fin y a los que habiendo terminado un grado o nivel no pueden acceder al próximo

¹³¹ OIT. Entendiendo los resultados del trabajo infantil y el empleo juvenil en El Salvador, Programa Entendiendo el Trabajo Infantil, Roma, junio 2013, p. 102.

¹³² LEPINA, Art. 59.

¹³³ ISNA, Boletín Estadístico Trimestral, correspondiente al año 3, número 10, abril-junio 2013.

mayores esfuerzos para erradicar el trabajo infantil y le corresponde al CONNA establecer políticas para elevar progresivamente la edad mínima de admisión al trabajo de la población adolescente. Cabe destacar que el Estado salvadoreño¹³⁴ asumió el compromiso de eliminar las peores formas de trabajo infantil en 2015 y el trabajo infantil en su totalidad en 2020¹³⁵. Para alcanzar tales objetivos, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social con apoyo del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT ha desarrollado la iniciativa “Desarrollo de una Hoja de Ruta para hacer de América Central y República Dominicana una Zona Libre de Trabajo Infantil”. Empero, según datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2012, para dicho año se registraron 191,599 NNA en situación de trabajo infantil, 3,256 personas más que el nivel correspondiente a 2011.

e) Derechos de las personas jóvenes

Algunos estudios han demostrado que tanto las políticas educativas como las políticas de empleo tienen un fuerte impacto positivo en las personas jóvenes, lo que contribuye a reducir la violencia y mejora las probabilidades de desarrollo del país y de la persona joven misma¹³⁶. En este sentido, la PDDH ha valorado como positivos los programas que impulsaron las autoridades para generar oportunidades de empleo y reducir la violencia mediante la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia en Apoyo a las municipalidades lanzada en 2010, del Plan Nacional de Juventud 2005-2015; y del programa PROJÓVENES II

(Proyecto de Prevención Social de la Violencia con Participación Juvenil)¹³⁷

La sola implementación de los referidos programas no sería suficiente para generar oportunidades de empleos dignos para este sector social; pues además de replantearse el esquema de crecimiento y el patrón de acumulación vigente -por otro que propenda a la distribución equitativa de los excedentes, genere y pondere en mayor medida los encadenamientos productivos nacionales, basados en el desarrollo de las capacidades y la formación científico -tecnológica de las personas trabajadoras-, se necesita definir una política nacional de empleo que incorpore la perspectiva de equidad de géneros y retome el enfoque de derechos, incluyendo los de NNA, mujeres, personas con discapacidad, personas viviendo con VIH-Sida, personas de la comunidad LCTBI y personas de los pueblos indígenas.

De acuerdo a la Ley General de Juventud¹³⁸, se considera joven a la persona comprendida en el rango de edad de 15 a 29 años; en dicho grupo están incluidas personas que jurídicamente son menores de edad y se categorizan como adolescentes. El Salvador tiene una estructura poblacional predominantemente joven, el 58.5% del total de la población nacional son menores de 30 años¹³⁹; de los cuales 49.4% son hombres y 50.6% son mujeres; además, dentro de la población joven, el número de personas con edades entre 15 y 30 años representa el 26.9% de la población total, según la estructura poblacional que presenta el VI Censo de Población y V de Vivienda.

Históricamente las mujeres jóvenes han contado con menores oportunidades que los hombres jóvenes y su participación en el mercado laboral

¹³⁴ OIT. Entendiendo los resultados del trabajo infantil y el empleo juvenil en El Salvador, citado supra, P. 1.

¹³⁵ En el 2006, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su XVI Reunión Regional Americana adoptó la Agenda Hemisférica sobre Trabajo Decente (AHTD), como estrategia articulada de políticas que combina acciones en el campo económico, legal, institucional y del mercado laboral con el propósito de avanzar en la promoción del trabajo decente en los países de las Américas. El Salvador se comprometió en estas medidas.

¹³⁶ OIT. Entendiendo los resultados del trabajo infantil y el empleo juvenil en El Salvador, citado supra. P. 105

¹³⁷ OIT. Entendiendo los resultados del trabajo infantil y el empleo juvenil en El Salvador, citado supra. P. 107

¹³⁸ D.L. número 910 de fecha 17.11.11, publicado en el D. O. número 24, tomo 394 de fecha 06.02.12.

¹³⁹ Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA): Informe sobre el estado de situación de los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador, 2013, p. 69.

resulta sistemáticamente baja e inferior a la participación de los jóvenes del sexo masculino. En la actualidad la tasa de participación de las mujeres jóvenes se ubica en un 30% por debajo de la correspondiente a jóvenes masculinos¹⁴⁰.

Uno de los problemas más críticos entre la población joven es el embarazo precoz, sobre todo en las niñas y adolescentes mujeres. Estos casos de embarazo adolescentes entrañan una grave afectación de los derechos a la supervivencia y desarrollo; al derecho a no ser abusada, descuidada o maltratada por las personas responsables de su cuidado personal; al derecho a la educación, a la salud, a los derechos sexuales y reproductivos, a la integridad, al derecho a la vida y a un proyecto de vida de la niña o adolescente.

A la base del fenómeno de embarazo adolescente, se conjugan una multiplicidad de determinantes, relacionados con los patrones culturales patriarcales y machistas imperantes en la sociedad; la violencia ejercida en contra de las mujeres, adolescentes y niñas, en particular la violencia sexual; y la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, entre otros.

Es motivo de preocupación el carácter recurrente y la tendencia al alza de este fenómeno. Información del MINSAL para los años 2011 y 2012 registra atenciones de 23,581 y 24,190 partos en adolescentes, respectivamente.

Para la PDDH merece especial atención la obstrucción de persecución del delito en los casos de violación¹⁴¹, ya que el agresor puede eximirse de responsabilidad penal, so pretexto de contraer matrimonio aludiendo la excepción establecida en el Código de Familia¹⁴², la cual reconoce que “los menores de dieciocho años podrán casarse si

siendo púberes, tuvieren ya un hijo en común, o si la mujer estuviere embarazada”, lo que conlleva no solo a la impunidad, sino también a la re-victimización de la niña o adolescente embarazada; razón por la cual el Estado tiene la obligación y el deber de legislar de acuerdo a los parámetros de protección internacional de niñas y adolescentes, por lo que se hace necesaria la revisión de la legislación interna.

Con relación a la protección jurídica de los jóvenes, esta Procuraduría ha expresado su reconocimiento y considera un avance importante la aprobación de la Ley General de Juventud, la Política General de la Juventud y la creación del Instituto Nacional de la Juventud; no obstante, también ha hecho pública su preocupación por la falta de firma y de ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes por parte del Estado salvadoreño, por lo que se requiere avanzar en este sentido.

En materia del derecho a la educación de las personas jóvenes, se constató en el período del Informe, la recurrencia del problema que enfrentan crecientes contingentes de personas jóvenes dada la imposibilidad de acceder a una educación superior universitaria, una vez concluida la educación media. Con ello muchos jóvenes ven limitadas sus posibilidades de desarrollar una profesión, y por esta vía superar la condición de pobreza del ingreso y mejorar sus condiciones de vida.

Al respecto, el PNUD ha señalado que “la tasa neta de matrícula universitaria muestra una tendencia casi estacionaria de 10.9 % en 1998 a 14.8 % en 2012. Este último dato indica cómo solo 1 de cada 10 personas jóvenes en edad oficial tiene acceso a estudios universitarios. Según estimaciones alrededor del 21 % de casi 1.25 millones de jóvenes no estudian ni trabajan; de esta porción, 7 de cada 10 son mujeres y 3 son hombres”¹⁴³.

¹⁴⁰ OIT. Entendiendo los resultados del trabajo infantil y el empleo juvenil en El Salvador, citado supra P. 106

¹⁴¹ Tipificado en el artículo 159 del Código Penal vigente, el cual establece como castigo la prisión de 14 a 20 años. Decreto Número 1030, Diario Oficial Número 105, Tomo 335, de fecha 21 de noviembre de 2013.

¹⁴² Artículo 14 del Código de Familia, Decreto Número 667, Diario Oficial Número 231, Tomo 321, de fecha 13 de diciembre de 1993.

¹⁴³ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo país. Hacerlo posible, p. 156.

f) La participación política de los jóvenes que votarían por primera vez

En cuanto a la participación de las personas jóvenes en la vida política y electoral del país, en el período de informe se observó una disminución con respecto a las proyecciones que esta Procuraduría y otras autoridades como el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habían considerado. En el año 2014 hubo elección presidencial, y a pesar de que el Estado contaba con las condiciones necesarias para lograr una plena universalización del goce del derecho al sufragio, los jóvenes no acudieron a obtener su documento único de identidad, DUI para ejercer su derecho a la participación electoral.

En ese contexto, la Procuraduría verificó que al cierre del registro electoral en octubre de 2013, el TSE informó que de 80 mil 465 jóvenes en edad de votar, solo 9 mil 752 se inscribieron en el padrón electoral (12%).¹⁴⁴ La limitada inscripción de jóvenes en el padrón se debió de igual forma a la mínima inscripción de aquellos en el RNPN, por lo que la institución no pudo cumplir con el artículo 15 del Código Electoral que le establece la obligación de proporcionar al TSE la información del documento único de identidad personal de quienes lo hayan obtenido.

Una de las razones que influyó para que los jóvenes no participaran fue el retraso del presupuesto para las elecciones, así como su reducción, dado que esto retrasó las campañas de información e inducción, según el Magistrado Presidente del TSE, Eugenio Chicas Martínez¹⁴⁵.

Sobre la participación de los jóvenes, la PDDH ha subrayado lo fundamental¹⁴⁶ que es su participación electoral y política, en el sentido que de esa forma empiezan a incidir y empoderarse en la construcción de un futuro que no sea indiferente a las necesidades y derechos de las personas jóvenes¹⁴⁷. En contraste, puede reflexionarse sobre los efectos negativos que acarrearía el ausentismo electoral de los jóvenes, como se ha observado en años pasados, la limitada presencia del tema de los jóvenes en la agenda del gobierno, de los institutos partidarios y de la sociedad en general.

Por lo anterior, es necesario reflexionar sobre otras causas que limitaron la participación electoral de los jóvenes que votaría por primera vez. Esta Procuraduría considera que entre las causas del ausentismo de los jóvenes en las elecciones está un problema histórico: el desempeño de la clase política salvadoreña. La limitada eficacia y eficiencia que durante las últimas tres décadas han tenido ciertos líderes de partidos políticos y funcionarios públicos de elección popular, para contribuir a la solución de las crisis socio económica, de inseguridad ciudadana, de desempleo y el estancamiento productivo, que afecta el bienestar de los jóvenes, esta situación ha insertado cierta apatía hacia este tipo de participación¹⁴⁸. En este sentido, se muestra un problema más complejo y estructural, que demanda un abordaje serio y con voluntad de erradicar las problemáticas de raíz que limitan las oportunidades para este grupo social.

¹⁴⁴ Véase el sitio: http://www.rnpg.gob.sv/index.php?option=com_k2&view=item&id=291:9752-j%C3%B3venes-se-inscribieron-anticipadamente-en-ducientos-del-pa%C3%ADs&Itemid=116, última visita el 12 de noviembre de 2013

¹⁴⁵ TSE. *Informe del Tribunal Supremo Electoral a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos*, emitido por el Magistrado Presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas Martínez, de fecha 9 de diciembre de 2013. Nota 7.

¹⁴⁶ Véanse los informes electorales de PDDH de 2004, 2006, 2009, 2012,

¹⁴⁷ Por caso, el derecho al empleo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad, el derecho al acceso a la justicia, el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la cultura, el derecho a la expansión de todas sus potencialidades humanas.

¹⁴⁸ IUDOP-UCA. la lógica de la democracia se determina precisamente por la inclusión de la participación de la sociedad, boletín de prensa, año XVIII, Nº 3.

g) Justicia Penal Juvenil

En el contexto de violencia y criminalidad del país, se ha observado que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, además de ser las principales víctimas de este fenómeno, han sido estigmatizados como los responsables de la grave situación de inseguridad del país y, por tanto, objeto de medidas represivas como los planes de mano dura, aprobación de leyes discriminatorias, reformas al aumento del número de años de la medida de internamiento, la divulgación de su identidad ante los medios de comunicación, entre otras.

En el último año, también se ha continuado impulsando bajo este mismo enfoque, otras acciones similares como la que pretende equiparar el cumplimiento de la medida de internamiento con la pena privativa de libertad establecida para personas adultas mayores, cuando el adolescente se le haya comprobado premeditación y alevosía en un delito penal grave¹⁴⁹. Esta Procuraduría ha expresado que el incremento del número de años como medida de internamiento no contribuye a bajar los niveles de homicidios y de la criminalidad en general, como ocurrió en el sistema penal de adultos, en el cual lejos de disminuir la comisión de delitos ha ido en aumento desde el año 2001 cuando se aumentó la pena máxima de prisión hasta 75 años.¹⁵⁰ Además, la mera agravación de las medidas de internamiento no posee eficacia preventiva o disuasiva, pues siempre existe la posibilidad que no sean declarados responsables del delito. Lo que produciría la inhibición para delinquir, sería la seguridad que toda persona que cometa delito será efectivamente sancionada.

¹⁴⁹ Proyecto de Decreto Legislativo presentado por el Diputado Guillermo Gallegos a la Asamblea Legislativa.

¹⁵⁰ Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Lic. Oscar Humberto Luna, ante la reforma a la Ley Penal Juvenil para incrementar la pena de internamiento, de febrero 2010.

Por otro lado, la mayoría de delitos que se cometen en el país no es atribuible a las personas adolescentes. De acuerdo a datos de la Unidad de Justicia Juvenil de la Corte Suprema de Justicia, a diciembre de 2010, la proporción de personas adolescentes que habían cometido delitos era de 12.8% en relación al total, mientras que la proporción de delitos cometidos por adultos fue de 87.2%. En el año 2012, la proporción de delitos cometidos por adolescentes bajó a 11.8%, mientras que la de adultos subió a 88.2%. Lo cual demuestra que a pesar de los altos índices de violencia, los delitos que comenten las personas menores de edad son proporcionalmente inferiores en relación a los cometidos por los adultos. A junio de 2013, los datos publicados señalaban que la tendencia se mantenía, ya que los delitos cometidos por adolescentes apenas representaban el 6.87% del total¹⁵¹.

Esta Procuraduría es la encargada de velar por el respeto de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes privados de libertad en los diferentes centros de internamiento, por lo que toda persona detenida, sin distinción de edad tiene derecho a vivir en condiciones de

detención compatibles con su dignidad. No obstante, el estado actual de la justicia penal juvenil es el reflejo de las graves carencias en la atención de la niñez y adolescencia salvadoreña, la poca inversión estatal en la satisfacción de sus derechos y la ausencia de una auténtica política pública.

En el último quinquenio los adolescentes y jóvenes que se encuentran bajo esta condición se han tenido que enfrentar a un sistema de justicia que dista de ser especializado y reeducativo, tal como lo exige la Convención sobre los

¹⁵¹ UNICEF. Juzgar a niñas, niños y adolescentes como adultos no mejora la seguridad y viola acuerdos internacionales, publicado el 27 de mayo de 2014. Disponible en: <http://www.nacionesunidas.org.sv/comunicados/juzgar-a-ninas-ninos-y-adolescentes-como-adultos-no-mejora-la-seguridad-y-viola-acuerdos-internacionales>, última visita el 1 de julio de 2014.

Derechos del Niño. De acuerdo a datos oficiales del Instituto Salvadoreño para la Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) y la Dirección General de Centros Intermedios del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, se ha experimentado un incremento de adolescentes y jóvenes privados de libertad en los cuatro Centros de Inserción Social (CIS)¹⁵² y en el Centro Intermedio de Tonacatepeque (CI) a partir del año 2007, llegando a su máximo nivel en diciembre del 2011; posterior a este año, se ha observado una tendencia descendente pero nunca los registros han sido menores a las reportadas ocho años atrás¹⁵³. Para mayo del 2014, se continuaba con una cifra elevada de 553 adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil¹⁵⁴. Cabe señalar, que los datos de jóvenes con medida alternativa al internamiento (no privativa de libertad) también han ido en aumento en los últimos años¹⁵⁵, y es también el reflejo de la situación actual de inseguridad, ya que el uso de esta opción de prisión preventiva en el sistema de justicia juvenil, solamente puede utilizarse para los crímenes graves como el homicidio.

Esta Procuraduría ha expresado que los Centros de Internamiento y de Inserción, no son verdaderas instancias especializadas compatibles con el mandato que establece la Ley Penal, sino presentan en la realidad una situación grave de hacinamiento, insalubridad, inadecuada atención médica general y menos especializada,

¹⁵² CIS El Espino, CIS Sendero de Libertad, CIS Tonacatepeque y CIS Femenino.

¹⁵³ En diciembre del 2006 se registraron 411 adolescentes y jóvenes privados de libertad, luego en diciembre del 2007 esta cifra aumentó a 535; en diciembre del 2011, ambas cifras fueron rebasadas llegando a 971. Tomado de Unidad de Justicia Juvenil de la Corte Suprema de Justicia, con datos procesados a partir de los informes solicitados al Instituto Salvadoreño para la Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia y la Dirección General de Centros Intermedios del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, abril de 2012.

¹⁵⁴ PDDH. Monitoreo y verificación a centros de personas privadas de libertad, Departamento de Verificación Penitenciaria.

¹⁵⁵ Banco Mundial. El Salvador: Estudio Institucional y de Gasto Público en Seguridad y Justicia, Junio 2012, páginas 56 y 57.

irrespeto a la integridad personal y dignidad de las y los internos, ocio carcelario, y sobretodo ausencia de un modelo socio-educativo.¹⁵⁶

Estas condiciones provocaron un incendio en el Centro Alternativo de Jóvenes Infractores (CAJI), el 10 de noviembre de 2010, en el que fallecieron 16 internos y más de 20 resultaron gravemente lesionados. Esta Procuraduría recomendó en su momento, incrementar el presupuesto para abrir al menos otro recinto penitenciario, además de crear las condiciones de infraestructura para separar adecuadamente a los jóvenes que han alcanzado la mayoría de edad y tener protocolos de actuación ante emergencias como incendios¹⁵⁷.

Posterior a este hecho, se ha reportado por parte de las autoridades responsables un compromiso por mejorar las condiciones de inseguridad e infraestructura. De esta manera, se han elaborado ocho protocolos de seguridad con sus procedimientos y planes de contingencia, lográndose avances significativos en cuanto al tema de seguridad interna de los Centros de Inserción Social, a través del fomento de la cultura de paz por medio de la música y el arte, espacios para actividades deportivas, así como mediante el fortalecimiento de las coordinaciones con Jueces de Menores, Jueces de Ejecución de Medidas al menor y personal de la Dirección General de Centros Penales. También se ha mejorado las instalaciones de los cuatro Centros de Inserción Social, realizando acciones como el cambio de techos, construcción de dormitorios individuales, iluminación en las áreas de talleres y escuela, entre otros.

¹⁵⁶ PDDH. Informe especial sobre las condiciones en las que se encuentran los y las jóvenes menores de edad en los centros de internamiento del país, emitido el 9 de febrero de 2010, pág. 27.

¹⁵⁷ PDDH. Informe Preliminar de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre los incidentes ocurridos en el Centro Alternativo de Jóvenes Infractores el 10 de noviembre de 2010, emitido el 6 de diciembre de 2010, páginas 1 y 23-26.

Asimismo, es una preocupación que en los Centros de Inserción, además de su superpoblación y hacinamiento, más de la mitad del total de los jóvenes internos ya cumplieron la mayoría de edad, por lo que se mantiene una expectativa de inestabilidad en tales recintos. De esta manera, se ha reportado que del total de la población atendida, el 51.6% corresponde a jóvenes que han cumplido la mayoría de edad al interior de los CIS y se encuentran a la espera de orden judicial para el traslado a Centros Intermedios¹⁵⁸.

h) Niñas, niños, adolescentes y jóvenes migrantes en condiciones irregulares

En los últimos años, esta Procuraduría ha observado con preocupación el incremento del flujo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes migrantes. Así, datos oficiales afirman que desde el 2012 hasta junio del 2014, se ha registrado una cifra de 4,933 personas que pertenecen a este sector poblacional y luego fueron retornadas por las autoridades de los países receptores. Esta cantidad que representa solamente el 5.5% del total, ha experimentado en el mismo período un crecimiento exponencial de un 132% para el 2014¹⁵⁹.

La migración en condición irregular de niños, niñas y adolescentes, es motivada por diversos factores de naturaleza política, social y económica; en búsqueda de la reunificación familiar o evitar cualquier atentado contra su vida o integridad personal debido al accionar del crimen organizado como el narcotráfico y las pandillas, en un contexto de violencia y criminalidad tolerada por el Estado. Asimismo, la extrema peligrosidad en las rutas migratorias, vuelve altamente vulnerables a este sector

poblacional para que se conviertan en víctimas de delitos que atentan gravemente a sus derechos humanos y libertades fundamentales.

En virtud de lo anterior, se exhorta a las autoridades del Estado a continuar realizando esfuerzos para construir los mecanismos legales e idóneos y adoptar iniciativas regionales con aquellos países de destino, para que al abordarse la migración de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, se priorice la satisfacción de los principios universales del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, el principio y derecho de no devolución y el inderogable derecho de mantener sus relaciones familiares, de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre Protección de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares, entre otros relevantes instrumentos internacionales aplicables en esta materia.

i) Conclusiones y recomendaciones

Existen logros importantes en materia de derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el quinquenio anterior que se visibilizan en el período. Entre los más importantes se encuentra la armonización de la legislación nacional con los estándares internacionales relativos a la protección de este sector. En este mismo orden, se encuentra la instalación del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y la institucionalización del Sistema Integral de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes y la posterior aprobación de la Política Nacional de Protección Integral. Asimismo, ha sido un avance para la juventud, la aprobación de la Ley General de Juventud, y la Política General de la Juventud y la fundación del Instituto Nacional de la Juventud.

¹⁵⁸ ISNA. Informe de rendición de cuentas de la gestión junio 2012-mayo 2013, agosto del 2013, Párrafo 67, página 23.

¹⁵⁹ Datos Ministerio de Relaciones Exteriores, consulta preliminar, 2014

De igual manera se identifican logros en relación a las medidas destinadas a controlar el flagelo de la violencia, el trabajo infantil y empleo de la juventud. En el tema de la justicia juvenil también se evidenciaron aportes notables. Se concluye que las medidas implementadas aún son insuficientes en relación a la gravedad de los problemas.

Es claro también el hecho que los problemas como la inseguridad ciudadana, la exclusión social y los limitados recursos financieros para el funcionamiento del Sistema Integral de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes y de la Política Nacional de Protección Integral, y de la Política de Juventud, deja en el ambiente una seria preocupación. No será factible avanzar en el mayor respeto de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, si los instrumentos legales e institucionales no reciben los recursos necesarios para hacer bien su mandato y función.

En el tema de la atención integral a la primera infancia existe todavía un enorme segmento de población en esta edad que está fuera del sistema educativo tanto público como privado, es decir, a quienes este derecho no se les está cumpliendo, lo cual está provocando daños irreparables a ellos y en el largo plazo al país, pues no contará con el máximo desarrollo de estas personas para que se vuelvan agentes de cambio. A pesar de ello, se visualiza que existe el compromiso por apostarle a esta población lo cual es esperanzador confiamos en que se sigan dando pasos positivos en dicho rumbo.

El Salvador no garantiza el derecho a la vida e integridad personal de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes: la mayoría de homicidios y lesiones afectan a dicho segmento de la población.

En virtud de lo señalado, esta Procuraduría recomienda al Estado salvadoreño adoptar mejores canales de entendimiento y coordinación para garantizar los derechos de las NNAJ y erradicar los diferentes flagelos que los amenazan. Dotar con más recursos el nivel superior de estudios para los jóvenes, asimismo, procurar medidas para extender la educación inicial a sectores que actualmente se ven excluidos. Facilitar los recursos financieros para garantizar el buen funcionamiento de las instituciones que están involucradas en el SNPINA, y en la Política de Juventud. Coordinación de acciones y medidas de reducción de la violencia, la pobreza y la desigualdad que afecta a las niñas, niños, adolescentes y juventud. Adoptar las acciones de su competencia para garantizar condiciones dignas de trabajo ahí donde laboran niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y continuar mejorando la infraestructura y las condiciones en las que se encuentran los adolescentes y jóvenes en los establecimientos del sistema de justicia juvenil, así como establecer los procedimientos y protocolos de actuación necesarios para hacer efectivo el traslado de los adolescentes que han alcanzado la mayoría de edad en coordinación con la Dirección General de Centros Intermedios y Centros Penales, los Jueces de Menores y de Ejecución de Medidas al Menor.

1.5 Derechos humanos de las mujeres

a) Aprobación de legislación en favor de la igualdad

Durante el periodo de 2009-2014 se crearon y ejecutaron leyes, políticas y planes nacionales en favor de la igualdad, a partir de la incidencia

generada por los movimientos de mujeres y el trabajo realizado por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer ISDEMU, además de todas aquellas instituciones del Estado, gubernamentales y no gubernamentales, que se sumaron con el objetivo de eliminar las brechas de género en el país. Las leyes y políticas que fueron aprobadas por orden cronológico se nuestra a continuación:

Ilustración N° 1

Leyes aprobadas en materia de derechos humanos de las mujeres



Además, el país cuenta con un Protocolo de Actuación para la Investigación del Femicidio en El Salvador¹⁶⁰; asimismo, en áreas como salud con la aprobación de la Política de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) del MINSAL y en Educación con la revisión de la curricula para la introducción de la perspectiva de SSR, se han sentado las bases para articular acciones conjuntas. El programa gubernamental “Ciudad Mujer”, que brinda servicios especializados en salud sexual y reproductiva, atención integral a la violencia de género, empoderamiento económico y promoción de sus derechos, ha iniciado la aplicación de un modelo de atención integral¹⁶¹ que favorece a las mujeres con mayores niveles de vulnerabilidad.

¹⁶⁰ Aprobado en el año 2012 e implementado desde la Fiscalía General de la República.

¹⁶¹ En total se cuenta con la intervención de 14 instituciones al interior de Ciudad Mujer, tales como la Secretaría de Inclusión Social (SIS); el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU); Ministerio de Salud (MINSAL); Policía Nacional Civil (PNC); Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS); Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP); Consejo Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE); Banco de Fomento Agropecuario (BFA); Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN); Procuraduría General de la República (PGR); Fiscalía General de la República (FGR); el Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (FOSOFAMILIA), el Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Por su parte, la PDDH reconoce como un logro importante, el lanzamiento del Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva (SNIS) y espera su pronta puesta en funcionamiento para elevar la coordinación y articulación de las actuaciones institucionales del Estado, como proceso sistemático que contemple la perspectiva de género y derechos humanos para la implementación integral de las políticas públicas para la igualdad.

Este contexto de buenas prácticas a favor de las mujeres, ha sido fortalecido con la vigencia de dos normativas de avanzada: La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE). La primera de ellas, responde a los estándares reconocidos en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, expandiendo el marco de prevención y protección ante cualquier tipo de violencia en una situación de relaciones desiguales de poder; en ella se tipifican delitos como el feminicidio y la obstaculización al acceso a la

justicia; y se reconocen garantías procesales mínimas relacionadas con el cumplimiento de la obligación a la *debida diligencia*.

Por su parte, el contenido de la LIE, es coherente con los parámetros de igualdad que desarrolla la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y contribuye al cumplimiento de la igualdad sustantiva en las diferentes autonomías de las mujeres que se analizan en próximas líneas.

No obstante, los importantes avances en el presente quinquenio; la violencia, la discriminación y la desigualdad de género, continúan afectando significativamente la vida de las mujeres. Se identifican retos importantes como la incorporación de la perspectiva de género al interior de las instituciones del Estado, la creación y fortalecimiento de las Unidades Institucionales de Género y las Unidades de Atención Especializada a Mujeres¹⁶², base fundamental para la erradicación y eliminación de las brechas de género, la violencia hacia las mujeres, los prejuicios culturales y religiosos fundamentalistas, que persisten entre los y las servidoras públicas.

b) Análisis por autonomías

El análisis se presenta de acuerdo a las autonomías dado que el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos de las mujeres, en un contexto de igualdad se concentra fundamentalmente en el goce de tres autonomías básicas: física, económica y política; en el entendido que el control sobre su cuerpo, la generación de ingresos, recursos propios y la plena participación en la toma de decisiones que afectan su vida y su colectividad, forman parte de la promoción y goce de sus derechos fundamentales.

¹⁶² De acuerdo a la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres y la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las Mujeres.

i. Autonomía económica

Se define como “la suma de las capacidades [de las mujeres] para generar sus propios ingresos y recursos y acceder al trabajo remunerado sin discriminación y en condiciones de igualdad, lo que les permite su desarrollo pleno y la toma de decisiones sobre su vida. Conlleva establecer la corresponsabilidad social sobre el cuidado y el reconocimiento de su aporte a la economía a través del trabajo no remunerado”¹⁶³. La autonomía económica está relacionada con el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres y su estrecho vínculo con el derecho a vivir libres de discriminación y en condiciones de igualdad.

En lo relativo a la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, la información de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2012 muestra que, a pesar de que las mujeres representan casi la mitad de la PEA, sus ocupaciones específicas están relacionadas mayoritariamente con el comercio y los servicios, actividades económicas en las cuales el ingreso promedio mensual es 33% menor que el de los hombres.¹⁶⁴

De igual forma, el mercado de trabajo en El Salvador se caracteriza por una clara delimitación de las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres con relación al ingreso y salario, de tal manera que en todos los niveles por años de estudio aprobados, el salario promedio de los hombres supera al salario promedio correspondiente a las mujeres. Además, el Informe del ISDEMU sobre la Situación de las Mujeres 2011-2012¹⁶⁵ muestra que entre la población ocupada las mujeres reportan tasas de subempleo por ingreso y por jornada superiores a las correspondientes

¹⁶³ MINEC. Informe El Salvador políticas y acciones para impulsar la autonomía económica de las mujeres, 2013.

¹⁶⁴ DIGESTYC. Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, año 2012.

¹⁶⁵ ISDEMU. Informe Situación y Condición de las Mujeres Salvadoreñas 2011-2012, San Salvador, 2013, P. 51. Puede encontrarse en el siguiente sitio: www.aecid.org.sv, última consulta el 1 de julio de 2014.

a los hombres, evidenciando que “persiste una alta tasa de subempleo de mujeres, lo cual indica que trabajan menos de 40 horas a la semana y sus ingresos son menores al salario mínimo legalmente establecido”¹⁶⁶

Una parte importante de las mujeres con bajos niveles de escolaridad se ocupan en el sector informal o en empleos formales en las actividades de servicios o en la maquila. En general, son madres solteras y jóvenes que tienen que migrar de sus localidades en busca de mejorar sus condiciones de vida, lo que muchas veces les obliga a abandonar sus estudios para incorporarse tempranamente al ámbito laboral. En su entorno laboral muchas veces prevalece la discriminación salarial, el acoso laboral y sexual, así como la dificultad para acceder a puestos decisorios.

La situación de vulnerabilidad de las mujeres trabajadoras se profundiza si consideramos que el fenómeno de la pobreza en El Salvador afecta principalmente a las mujeres. Del total de personas en condición de pobreza más de la mitad son mujeres: 52.6% en situación de pobreza extrema y 53.5% en pobreza relativa el 53.5%.¹⁶⁷

Es importante destacar que actualmente se llevan a cabo esfuerzos interinstitucionales entre el ISDEMU, el Banco Central de Reserva (BCR) y la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) para impulsar las cuentas satélites en el Sistema de Cuentas Nacionales, con el fin de visibilizar el aporte de las mujeres en el ámbito del trabajo no remunerado, a considerar en la formulación de políticas públicas. Es necesario continuar con estos esfuerzos para evidenciar la esfera de la economía del cuidado y la valorización del trabajo reproductivo, que recae fundamentalmente en las mujeres.

En ese sentido, es responsabilidad del Estado salvadoreño desarrollar acciones concretas y efectivas que aumenten la autonomía económica de las mujeres logrando su acceso pleno al mercado formal del trabajo. De manera particular es necesario examinar detalladamente

y eliminar toda práctica o norma discriminatoria que tenga efectos en las condiciones laborales y oportunidades de trabajo entre hombres y mujeres. Asimismo resulta ineludible la adopción de medidas de protección para las mujeres que trabajan en el servicio doméstico y el reconocimiento formal del trabajo no remunerado,¹⁶⁸ de tal manera que se inicien acciones para conceder beneficios, en particular en el ámbito de la seguridad social¹⁶⁹.

Al respecto, los datos de la DIGESTYC sobre el uso del tiempo, indican que existe una brecha entre el promedio de horas que hombres y mujeres dedican al trabajo doméstico. Ellos ocupan menos de la mitad de horas (2.44) promedio del tiempo que dedican las mujeres al trabajo doméstico (5.35). Sin embargo, cuando se comparan los datos entre el ámbito urbano y rural la brecha aumenta, ya que las mujeres rurales emplean más horas en el trabajo doméstico.¹⁷⁰

Por otra parte, la discriminación hacia las mujeres, también se expresa en el acceso y control de activos. Con relación al derecho a la propiedad, para el año 2009, el 82% de los propietarios de todas las tierras con vocación agrícola eran hombres, mientras que solo el 18 % mujeres; lo que evidencia una significativa brecha de desigualdad por sexo que equivale a 33%.¹⁷¹

Según información del Ministerio de Economía, en el país existen unas 94,360 unidades económicas lideradas por mujeres, 58.27% del total de las personas empresarias, de las cuales el 99.53 % de ellas son microempresas.¹⁷²

¹⁶⁸ Es importante destacar que actualmente se hacen esfuerzos significativos entre el ISDEMU, el Banco Central de Reserva (BCR) y la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) para impulsar las cuentas satélites en el Sistema de Cuentas Nacionales, que visibilicen el aporte de las mujeres en el ámbito del trabajo no remunerado, para ser utilizadas como instrumento en la formulación de políticas públicas..

¹⁶⁹ CIDH. El trabajo, la educación y los recursos de las mujeres. La ruta hacia la igualdad en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales” OEA/Ser.L/V/II.143 Doc. 59 del 3 noviembre 2011. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/mujeres/docs/pdf/MujeresDESC2011.pdf> última visita el 7 de julio de 2014

¹⁷⁰ DIGESTYC. Avances y resultados en la producción estadística, noviembre de 2013. Presentación de resultados sobre del tiempo.

¹⁷¹ MINEC. Informe El Salvador políticas y acciones para impulsar la autonomía económica. Op cit. Pág 10

¹⁷² Ibidem.

¹⁶⁶ Ibidem.

¹⁶⁷ ISDEMU. Informe de la Situación y Condición de las Mujeres Salvadoreñas 2011-2012.

Con relación al acceso a créditos, desde las instancias como el Fondo de Desarrollo Económico (FDE) y Banco Multisectorial de Inversiones-Banco de Desarrollo de El Salvador (BMI-BANDESAL); según la línea crediticia, el otorgamiento es mayor en un 10% y 30% en comparación con los hombres. Pero si se analiza el total de los montos otorgados este comportamiento se invierte, los hombres han accedido a créditos de mayor cuantía en promedio a los de las mujeres en un 30% y en algunos casos esta brecha se amplía y supera el 50%¹⁷³.

Cabe señalar la necesidad de incorporación de la perspectiva de género dentro de las políticas y requisitos en las instituciones crediticias, pues la situación de las mujeres obliga a pensar de manera diferenciada, ya que históricamente el acceso a los recursos tangibles e intangibles les ha sido negado y a pesar que exista el FOSOFAMILIA, que ofrece servicios financieros de fácil acceso para las mujeres, especialmente en las ventanillas abiertas en algunas sedes de Ciudad Mujer.

En ese sentido el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda, debe incorporar en su quehacer acciones afirmativas en favor de las mujeres e incentivar a las instituciones vinculadas al Gabinete Económico a incluir partidas presupuestarias para aplicar las políticas públicas de igualdad, tanto al interior de sus instituciones como en la atención que se brinda a las mujeres.

ii. Autonomía física

Considerar los derechos vinculados específicamente a la igualdad y no discriminación de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a una vida libre de violencia, derecho a la vida, a la integridad, libertad física, entre otros. Posibilita a las mujeres la toma de decisiones y empoderamiento individual en el marco de contar con condiciones para el desarrollo de una vida digna.

Tal como se mencionó anteriormente, el Estado salvadoreño ha reconocido formal y jurídicamente el derecho de las mujeres a una

¹⁷³ Ibidem.

vida libre de violencia, estableciendo además una serie de mecanismos de prevención, atención y restitución de derechos; sin embargo persisten diversas formas de violencia por razones de género que afectan a las mujeres y niñas en el ámbito público y privado, que constituyen un problema de singular gravedad.

Al respecto, para el primer trimestre de 2014, la Policía Nacional Civil (PNC) registró los casos de 60 mujeres asesinadas, la mayoría jóvenes de 18 a 30 años. Esta situación se compara con el año 2013 en el cual se reportaron 215 asesinatos de mujeres y 70 de ellas estaban en el mismo rango de edad.¹⁷⁴ Es necesario aclarar que los asesinatos de mujeres han reportado cifras descendentes en los últimos años.¹⁷⁵ Sin embargo, este tipo de delitos se comete con especial intención de causar daño a las mujeres, llevando aparejada diferentes tipos de violencia.

En relación a la violencia intrafamiliar, la PNC reportó para el año 2013 un total de 3,052 denuncias; para el primer trimestre de 2014, se registran 511 casos.¹⁷⁶ Con respecto a la violencia sexual, en los primeros cinco meses de 2014, se han reportado 410 avisos de violaciones en menor e incapaz sumado a 182 violaciones en mujeres adultas, estos datos indican un promedio de al menos 4 abusos sexuales diarios, sin contar los casos de estupro y agresiones sexuales en menores.¹⁷⁷

Debe aclararse que las cifras antes citadas representan solamente una parte de la totalidad de casos sobre violencia que afectan los derechos de las mujeres. Por ello continúa siendo un desafío importante la implementación total del Sistema Estadístico Nacional que también incluya información, dato y estadísticas de

¹⁷⁴ ORMUSA. Observatorio de la Violencia de Género contra las Mujeres. *Datos de la Policía Nacional Civil sobre feminicidios, 2013-2014*. Disponibles en: <http://observatoriodeviolencia.ormusa.org/feminicidios.php>, última visita el 1 de julio de 2014.

¹⁷⁵ Para el año 2011 se reportaron 411 casos, descendiendo un 47% para el 2012, en el cual se registraron 329 víctimas. (ORMUSA, con datos de la PNC)

¹⁷⁶ ORMUSA. *Datos de la PNC sobre Violencia Intrafamiliar 2013-2014*. Disponibles en: <http://observatoriodeviolencia.ormusa.org/violenciaintrafamiliar.php>, última visita el 1 de julio de 2014.

¹⁷⁷ ORMUSA. *Datos de la PNC sobre Violencia Sexual 2014*. Disponibles en: <http://observatoriodeviolencia.ormusa.org/violenciasexual.php>, última visita el 1 de julio de 2014.

violencia contra las mujeres, y que permita conocer con mayor exactitud la dimensión de esta problemática en el país. Esta obligación se encuentra contenida en el capítulo VI de la LEIV y su intencionalidad es la adopción de un sistema de indicadores que evalúe los impactos de las políticas para la erradicación de la violencia, los casos atendidos y los efectos causados, entre otros.¹⁷⁸

Esta Procuraduría reconoce los esfuerzos realizados por el ISDEMU para el fortalecimiento de la institucionalidad pública en la erradicación de la violencia contra las mujeres y en cumplimiento de la Política Nacional de las Mujeres y la normativa nacional e internacional.

Sin embargo, aún es necesario profundizar los esfuerzos institucionales en orden a eliminar los patrones y estereotipos culturales discriminatorios y, en general, cualquier obstáculo que impida la correcta aplicación del marco normativo existente y la eficaz ejecución de las políticas y programas. Dichos esfuerzos deben ser respaldados por recursos financieros adecuados, así como por el establecimiento de un sistema de información que permita analizar y tomar las decisiones más adecuadas para mejorar la situación de las mujeres y niñas a nivel nacional.

Para esta Procuraduría, uno de los aspectos que requiere mayor atención es el vínculo crítico que existe entre el acceso a una adecuada protección judicial y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Es, por tanto, una obligación del Estado, y de manera primordial del Órgano Judicial y del Ministerio Público, dar una respuesta idónea, inmediata y efectiva frente a los actos de violencia contra las mujeres, actuar con

la debida diligencia para investigar los hechos cometidos, lograr la sanción de los responsables y una adecuada reparación a las víctimas.

Con relación a los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad, esta Procuraduría ha señalado que las afectaciones principales son el hacinamiento, la falta de infraestructura, la falta de atención médica, la falta de condiciones higiénicas y de salubridad.¹⁷⁹

Respecto a los procesos judiciales en contra de las mujeres por aborto o delitos conexos, para el año 2011 se contaba con 129 mujeres condenadas por aborto o por homicidio agravado. Se estima que las mujeres afectadas por este tipo de criminalización son jóvenes y de bajo nivel socioeconómico. Uno de los principales problemas es que el 46.51% de los casos de delitos son tipificados como homicidios, lo que tiene serias consecuencias frente al respeto del principio de proporcionalidad de la pena, pues puede condenar a las mujeres con hasta 50 años de prisión. Las 129 mujeres condenadas se encontraban en situación de pobreza, y en algunos casos la pena ha recaído en mujeres que ante situaciones obstétricas las han llevado a la pérdida del producto del embarazo y que además, no han tenido acceso a medios de salud¹⁸⁰.

Esta Procuraduría también ha insistido en la necesidad de avanzar hacia una efectiva protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y adolescentes, garantizando que la información y los servicios de salud estén disponibles, sean accesibles y de buena calidad. Siendo responsabilidad del Ministerio de Salud y, de manera general, de todos los Órganos del Estado, garantizar los derechos a la autonomía, confidencialidad, consentimiento informado y libre determinación de las mujeres.

¹⁷⁸ Según la información publicada por el ISDEMU, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública ha concluido el diseño conceptual del sistema de información e instalado y puesto en operación una plataforma informática para que cada institución generadora de datos ingrese sus estadísticas. Ver: Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU Situación de las Mujeres Salvadoreñas: análisis a partir de la PNM 2011-2014.

¹⁷⁹ PDDH. Informe Especial sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad las niñas y niños que viven con sus madres en los centros penales de El Salvador. 2009.

¹⁸⁰ Centro de Derechos Reproductivos, "El impacto de la criminalización absoluta del aborto en El Salvador. 2013.

iii. Autonomía para la toma de decisiones

Se refiere a los derechos sobre la participación en la toma de decisiones que afecta la vida y la colectividad, en todos los niveles del Estado, mediante la promoción de la participación plena en igualdad de condiciones. En este ámbito de la autonomía se deben incluir los derechos políticos como la libertad de pensamiento y expresión, participación en la vida política del Estado y el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Respecto a la participación política de las mujeres, la Ley de Partidos Políticos aprobada en febrero de 2013, obliga a incluir dentro de sus planillas electorales para la Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano, y Consejos Municipales, un 30% de participación de mujeres. También contempla sanciones para aquellos partidos políticos que no respeten dicho porcentaje.

Durante la anterior gestión presidencial (2009-2014) únicamente se contó con el 15% de representatividad de las mujeres en

las instancias ministeriales. Respecto a los titulares de Superintendencias e Instituciones Autónomas, de un total de 21 instancias, sólo 1 mujer fue nombrada titular. En los cargos de elección popular como diputadas y diputados las mujeres han logrado paulatinamente mejor representación con el 32% de candidaturas en el quinquenio.

Lograr el reconocimiento total de los derechos políticos de las mujeres en un sistema cultural patriarcal, se vuelve más difícil cuando el imaginario colectivo continúe ubicando a este sector en el ámbito privado y bajo la creencia de la superioridad de los hombres hacia las mujeres, de ahí se debe a que las mujeres se les ha concedido manejar cargos de menor valía como las suplencias de la Asamblea Legislativa, regidoras suplentes de los gobiernos locales o de las instituciones autónomas del ejecutivo¹⁸¹.

¹⁸¹ Ibidem.

1.6 Derechos específicos de otros grupos en situación de vulnerabilidad

a) Defensores y defensoras de derechos humanos

Los defensores y defensoras de derechos humanos, entre ellos los activistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil que

trabajan los temas de memoria histórica, medio ambiente, seguridad ciudadana, sindicalistas, los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación son vulnerables a violaciones a los derechos humanos, que se traducen en atentados contra sus vidas, amenazas o intimidaciones como consecuencia de su trabajo, por lo que se han generado diferentes acciones institucionales. La Procuraduría ha recibido casos, de los cuales se mencionan los más ejemplarizantes recibidos en el período de este Informe:

Cuadro N° 1
Casos recibidos sobre defensores y defensoras de derechos humanos

Expediente	Resumen de la denuncia
SS-0066-2013 periodistas canal 12	Equipo de periodista y camarógrafo de noticiero Hechos del canal 12 de televisión fueron amenazados con un arma de fuego por una persona particular, luego de salir de la cobertura de una vista pública.
CA-0056-2013 Alejandro Guevara	El 3 de octubre de 2013, el señor Alejandro Guevara, miembro de la Mesa Frente a la Minería Metálica, sufrió un atentado contra su vida cuando se encontraba en su vivienda en el municipio de Ilobasco, al menos tres disparos fueron dirigidos a su persona sin que alguno alcanzara a impactarle.
SS-0478-2013 Cierre de la oficina de Tutela Legal del Arzobispado	En fecha 30 de septiembre de 2013, esta Procuraduría tuvo conocimiento del súbito cierre de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador y el despido de todo su personal técnico y administrativo sin previo aviso. Esta situación puso en riesgo el archivo histórico de casos que manejó dicha institución, así como generó una afectación arbitraria a la labor ejercida por los defensores de derechos humanos que trabajaron durante años en dicho lugar. Inmediatamente se emitieron medidas cautelares y se dictó posteriormente resolución de responsabilidad.
SS-0534-2013 Atentado en la Asociación Pro búsqueda	Se tuvo conocimiento por diferentes medios que en la madrugada del día 14 de noviembre de 2013, tres hombres armados ingresaron a las instalaciones de la Asociación Pro Búsqueda, robaron computadoras, entre otros, e incendiaron expedientes y otros documentos.
SS-0087-2014 Ciro Granados	A través de denuncia pública del Diario Digital La Página se tuvo conocimiento que el jueves 13 de febrero de 2014, el periodista José Ciro Granados Reyes, Director de ese diario digital, recibió amenazas de muerte por parte de una persona que solo fue identificada como “un alto dirigente de un partido político”.

Fuente: elaboración propia, Sistema Informático Integrado de Gestión (SIIG)

b) Pueblos indígenas

El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en El Salvador históricamente han sido negados, no visibilizados, pues han sido víctimas de discriminación y persecución: la Procuraduría ha acompañado a los pueblos indígenas en diferentes reivindicaciones, tales como en la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, el 25 de abril de 2012, de la reforma al artículo 63 de la Constitución de la República, en la cual se reconoce la existencia y los derechos de los pueblos indígenas: *“El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad”*.

Esta reforma constitucional es una deuda histórica, la cual otorga una protección especial para garantizarles sus derechos, especialmente los que ejercen de manera colectiva conforme a su cosmovisión indígena, formas de vida, tradiciones y costumbres.

A pesar que este informe abarca hasta el 31 de mayo de 2014, agregamos a este apartado el suceso del 12 de junio de 2014, ya que la Asamblea Legislativa, ratificó la reforma al artículo 63 de la Constitución, con 56 votos del Pleno Legislativo, siendo el partido ARENA la única fracción que no emitió su voto. Esto implica un avance importante en los derechos de los pueblos indígenas y en materia de igualdad y derechos humanos en el país.

Otra reivindicación histórica, que representaría un avance, es la ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre *“Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes”*. Si bien es cierto su firma y ratificación se encuentra en estudio, y en el marco de dicho proceso las autoridades competentes en la materia han rendido su informe sobre la viabilidad de su suscripción, éste aún no ha sido incorporado en nuestra legislación a pesar de ser una exigencia de los pueblos indígenas de El Salvador y de la Comunidad Internacional. La

Procuraduría considera que este proceso debe agilizarse pues dicho Convenio, al convertirse en Ley de la República, sería un instrumento que dotaría de una protección especial a dichos pueblos.

En cuanto a la persistente discriminación a los pueblos indígenas en el país, es preocupante el incumplimiento de las recomendaciones hechas al Estado salvadoreño, como Estado parte de la comunidad internacional, por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas (CERD), observaciones referidas a la realización de un censo para visibilizar el porcentaje de población indígena, la incorporación en el ordenamiento jurídico de una definición de discriminación racial apegada a los estándares de la Convención y la suscripción del Convenio 169 de la OIT por El Salvador, lo que hasta la fecha no se ha cumplido, a pesar que en el mes de agosto de 2014 se llevará a cabo el examen del Estado salvadoreño ante dicho Comité.

Es fundamental que los pueblos indígenas cuenten con una política de reconocimiento de sus derechos, así como una instancia nacional que conduzca la implementación de dicha política.

c) Comunidad LGBTI

La Procuraduría, por medio de la Mesa LGBTI, integrada por diferentes organizaciones, activistas independientes y personas que trabajan en la defensa de los derechos humanos de esta población, ha acompañado diferentes acciones y gestiones gubernamentales para la protección y promoción de los derechos humanos de la población LGBTI.

En relación a la aplicación y al cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 56, de 2010, denominado *“Disposiciones para evitar toda forma de Discriminación en la Administración Pública, por razones de Identidad de Género y/u Orientación Sexual”*, es considerado un avance como un

instrumento de protección a la población contra la discriminación; sin embargo su aplicación es únicamente en la administración pública, y durante el año 2013 a la fecha se han reportado casos de discriminación en contra de la población LGBTI cometidos por la Policía Nacional Civil (PNC), el Cuerpo de Agentes Metropolitanos CAM, la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Fiscalía General de la República (FGR), la Universidad Nacional (UES), entre otras.

El referido Decreto 56-2010 debería ser el antecedente para avanzar hacia la aprobación de una Ley de Igualdad y No Discriminación hacia la población LGBTI, así como también la Ley de Identidad de Género de la cual ya existe una propuesta del colectivo LGBTI de El Salvador.

En relación a los derechos de identidad especial de las mujeres “*trans*”, se han dado ciertas acciones afirmativas por parte de algunas instituciones públicas, entre ellas el ISSS, con la creación de una política de género y el desarrollo de un protocolo de atención médica hacia la población LGBTI. También, durante las Elecciones Presidenciales 2014 celebradas en los meses de febrero y marzo, mujeres “*trans*” fueron acreditadas como observadoras del Tribunal Supremo Electoral para garantizar el ejercicio del voto de dicha población.

Sobre los asesinatos cometidos contra la población “*trans*” de El Salvador, mencionamos los crímenes cometidos por odio como los de “Catherine”, “Tania”, “Betzaída”; y el año recién pasado el de “Tania Vázquez”, integrante del equipo de trabajo de COMCAVIS-Trans. A la fecha se encuentran en etapa de investigación por parte de la Fiscalía General de la República, evidenciándose retardación de justicia.

Esta Procuraduría ha emitido opinión positiva para impulsar la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo,

la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y de la Convención Interamericana Contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia¹⁸², en vista que la ratificación de las mismas en nuestro ordenamiento jurídico dotaría de un marco especial de protección y garantía de los derechos de grupos vulnerables y especialmente de las víctimas directas o indirectas de cualquier tipo de discriminación e intolerancia, como sucede con la población LGBTI y los pueblos indígenas.

d) Personas migrantes

Personas salvadoreñas migrantes

Las rutas que recorren las personas salvadoreñas que migran de forma indocumentada con destino a Estados Unidos se han constituido en zonas de mayor riesgo y peligro debido a que enfrentan lugares desolados y desérticos con altas o muy bajas temperaturas; además de agresiones, ataques, asaltos, extorsiones, violaciones sexuales, perpetrados por agentes del Estado, miembros de pandillas o de estructuras del crimen organizado.

La violencia en diferentes Estados de la Frontera Norte de México con Estados Unidos, generada por el crimen organizado y el narcotráfico, hacen a las personas migrantes y a sus familiares víctimas de delitos graves, así como las integran a sus organizaciones para cometer delitos y hacerlos víctimas de trata de personas.

Organizaciones de la Sociedad Civil han calificado como crisis humanitaria la situación de vulnerabilidad y grave violación a derechos humanos en perjuicio de las personas migrantes, en la cual los grupos armados al servicio del crimen organizado dominan zonas y territorios ante la pasividad o falta de intervención efectiva de las autoridades, particularmente en países de tránsito hacia el norte continental.

¹⁸² PDDH. Opinión sobre la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y de la Convención Interamericana Contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia. Emitida el 24 abril de 2014.

Entre la población que ha sido deportada de Estados Unidos se registraron 10 denuncias en contra de las autoridades migratorias de Estados Unidos de América por el maltrato recibido durante la detención, a la espera de ser deportados.¹⁸³ También se han realizado gestiones de investigación, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, en 22 casos para conocer las situaciones jurídicas de migrantes que han sido detenidos.

El contexto de inseguridad y violencia en el cual migran los niños, niñas, adolescentes y mujeres, quienes son sometidas por su condición específica a una serie de vulneraciones, aumenta los riesgos y peligros desde el mismo momento que abandonan el territorio nacional.¹⁸⁴ Esta situación ha sido verificada en los puntos fronterizos, siendo ejemplo de ello la “sugerencia de aplicarse la inyección anticonceptiva” que los traficantes de personas exigen a las mujeres antes de salir por la frontera.

Sobre el tipo de agresión y vejamen que sufren las migrantes salvadoreñas muy poco o nada se ha podido documentar por las autoridades responsables del tema; sin embargo, es público el accionar de bandas del crimen organizado y diversos actores que operan de forma particular, que las mujeres han sido convertidas en “*objeto de canje*” por los denominados “*coyotes*”,

¹⁸³ La PDDH ha recibido 10 denuncias, sobre esta situación, de los cuales vale mencionar: Expediente SS-0082-2014- “...Denunció el compatriota que en fecha del 27 de octubre de 2010, dos oficiales federales a quienes no pudo identificar del Estado de California, lo trasladaron del Estado de Virginia para Sacramento, vía aérea... el denunciante les hizo saber sobre los problemas médicos...fue agredido por los agentes de migración en el aeropuerto, y durante estuvo en diferentes Centros de Detención se le negó atención médica y los medicamentos correspondientes, causándole graves daños, hasta ser enviado al país en condiciones de salud deplorables” Exp. SS-0578-2014-“...salvadoreño retornado que estando en el Centro “La Salle Country Regional Detención Center”... después de quince días de su detención comenzó a sentir fuertes dolencias abdominales y orina con residuos de sangre, los resultados del examen dio positivo, cálculos en los dos riñones, y ameritaba una cirugía de emergencia, una semana después...fue transferido para la prisión de “Willacy County Correctional Center” esto sucedió el día diez de febrero de 2012. Añadió que cuando llegó a este lugar habló con el departamento médico y le explicó su estado de salud, pero no le brindaron la atención médica y su salud desmejoró estando detenido...”

¹⁸⁴ PDDH. Opinión sobre la situación de las Mujeres Salvadoreñas Migrantes. San Salvador, 25 de noviembre de 2013.

quienes ofrecen a las autoridades o estructuras criminales, a las mujeres para que sean violadas al momento que son interceptados en los controles migratorios o puntos de extorsión, y en algunos casos incluso son vendidas a redes para convertirlas en víctimas de trata de personas, para explotación sexual comercial y otras tareas relacionadas a la actividad delictiva.

Una muestra de la victimización de las mujeres migrantes, de acuerdo a datos emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y que corresponden a violaciones a derechos humanos contra personas migrantes salvadoreñas que fueron registradas por la red consular, en el período de enero a diciembre del dos mil trece, son los siguientes: de violaciones a derechos humanos en los casos colectivos se han registrado 163 víctimas en total, de las cuales 39 corresponden a mujeres migrantes víctimas; en cuanto a los casos individuales, se han contabilizado 129 víctimas de las cuales 32 son mujeres migrantes.

La Procuraduría se ha pronunciado en el sentido de profundizar en las políticas integrales y acciones de protección estatales destinadas a las mujeres migrantes, especialmente en el desarrollo de programas de atención y protección a las personas migrantes retornadas para que puedan incorporarse a su entorno familiar, social y laboral.¹⁸⁵ Además, la PDDH consideró impostergable que se proporcionara al Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTE) como organismo creador y rector de estas políticas, los recursos financieros necesarios para que ejecute su mandato y desarrolle las acciones establecidas en su plan estratégico en aras de la protección de los derechos humanos de las personas migrantes.

El Estado de El Salvador en los años recientes ha tenido un avance en materia de iniciar esfuerzos para la protección de las personas migrantes salvadoreñas y sus familias, particularmente con

¹⁸⁵ *Ibidem*.

la aprobación de la Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia.¹⁸⁶ La cual tiene como objeto desarrollar los principios constitucionales “rectores garantes de los derechos de la persona migrante salvadoreña y su familia; por medio del diseño, formulación evaluación y monitoreo de políticas públicas integrales de protección y desarrollo, mediante la coordinación interinstitucional e intersectorial del Estado y la Sociedad civil, en los procesos de desarrollo nacional.”¹⁸⁷

Es determinante la creación y funcionamiento del Consejo Nacional para la Atención de la Persona Migrante y su Familia, como organismo intersectorial, donde participan las instancias de gobierno a las que corresponde la atención de los migrantes (Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección General de Migración, Ministerio de Trabajo, Salud, Educación, Seguridad, etc.) así como de la sociedad civil dentro y fuera del país, por medio de este organismo es determinante que se desarrolle el programa de asistencia y protección humanitaria que incluye servicios de asistencia y repatriación a personas accidentadas, con enfermedades terminales o fallecidas; así como un programa sobre migración y desarrollo que buscará la integración y cooperación productiva, económica, social y cultural, por medio de la implementación de proyectos productivos de cooperación técnica y desarrollo económico, retorno a casa, identidad cultural, entre otros.

Cabe mencionar que hasta la fecha dicho organismo rector e intersectorial no cuenta con un presupuesto propio que permita su pleno funcionamiento y la contratación de personal técnico que refuerce el trabajo de la Secretaría Ejecutiva. Esta Procuraduría interviene como observadora de las actuaciones de CONMIGRANTES, y se ha verificado que ha

sentado las bases de trabajo al establecer su plan estratégico, pero no cuenta con el presupuesto suficiente para diseñar e implementar una política migratoria integral.

La emigración es un fenómeno multicausal, las razones más frecuentes suelen ser económicas, reunificación familiar y la violencia en los países de origen. Las víctimas de la violencia no denuncian ante las autoridades que investigan el delito por el temor a que sus agresores tomen represalias directas y porque no confían en las instituciones responsables de dichas investigaciones y en la protección que deben de brindarle. Por ello desisten de interponer denuncia y prefieren abandonar sus viviendas, lo que trae como consecuencia el desplazamiento interno o abandonan el país junto al grupo familiar.

En el periodo de enero a mayo del presente año, esta Procuraduría ha recibido 11 casos de personas que solicitan apoyo para salir o abandonar de forma inmediata el país y buscan protección internacional. En algunos casos corresponde a personas que ya se encuentran en Estados Unidos y han sido interceptados por autoridades migratorias, a las cuales han solicitado asilo, argumentando problemas con miembros de pandillas o que aseguran ser testigos de procesos judiciales vinculados a los miembros de dichas agrupaciones y temen regresar al país por represalias.

De acuerdo a un diagnóstico realizado en Centroamérica, a solicitud del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,¹⁸⁸ el crimen organizado genera desplazamiento forzado internamente y hacia el exterior en los países del triangulo norte (Guatemala, Honduras y El Salvador). Esta realidad hace que los hechos delictivos como los homicidios, extorsiones y secuestros, continúen impunes. Lo anterior hace

¹⁸⁶ Decreto Legislativo No. 655, de fecha 17 de marzo de 2011, publicado en el Diario Oficial No. 74, Tomo No. 391, del 14 de abril del mismo año, se emitió la Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia.

¹⁸⁷ Artículo 1 de la Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia.

¹⁸⁸ CIDEHUM/ACNUR. Diagnóstico *Desplazamiento Forzado y Necesidades de Protección, generadas por nuevas formas de Violencia y Criminalidad en Centroamérica*, Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes, mayo del 2012.

necesario que dichos Estados adopten mecanismos institucionales y normativa de protección y atención a las víctimas. El diagnóstico señala que un aproximado de 17,000 son refugiados en Estados Unidos y Canadá y otros países de Latinoamérica y Europa, provenientes de los países de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

En lo que respecta a las personas migrantes retornadas, se resalta la vigencia del “Memorándum de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, de la República de El Salvador, de la República de Guatemala, de la República de Honduras y de la República de Nicaragua, para la repatriación digna, ordenada, ágil y segura de nacionales centroamericanos migrantes vía terrestre” (2006); el Manual de Procedimientos para el Retorno de Niños y Adolescentes Víctimas de Trata, elaborado por el Comité Nacional Contra la Trata de Personas, con el apoyo de la OIM; así como los acuerdos sobre repatriaciones entre El Salvador y los Estados Unidos de América, en los cuales se han establecido fechas de recepción de vuelos y la cantidad de personas a recibir. En estos instrumentos se establecen condiciones óptimas para el retorno de migrantes.

La información que reporta la Dirección General de Migración y Extranjería es preocupante; por vía aérea en el año 2013, ingresaron en calidad de repatriados 21,906 personas; reportándose un incremento de 2,221 personas que representa el 11.3%, en comparación al año 2012.¹⁸⁹ Por vía terrestre en el mismo año 2013, fue de 14,150 personas, reportándose un incremento de 2,024 personas que representa el 16.7% en comparación al año 2012.¹⁹⁰ Los programas “Bienvenido a Casa” y de “Reinserción a Personas Migrantes Retornadas” siguen vigentes hasta la fecha; sin embargo, no son suficientes y no se ha evaluado su efectividad en la reinserción económica, social

y cultural de los retornados, lo cual es urgente para reforzar dichos programas.

En las rutas que hacen los migrantes indocumentados, muchos de ellos desaparecen por diferentes causas, por lo que son buscados por sus familiares. Esta situación ha llevado a que instituciones del Estado y de la sociedad civil se apoyen y cooperen entre sí para trabajar en la búsqueda de los migrantes no localizados (MNL). Es así que en el año 2010, se firma el “Acuerdo de Cooperación Interinstitucional para la Creación de Mecanismos de Intercambio de Información sobre Migrantes No Localizados y Cuerpos No Identificados” el cual ha dado origen al Banco de Datos Forenses de Migrantes No Localizados de El Salvador, conformado por el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE), el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Desde el año 2010 a la fecha en el Banco de Datos Forense se han registrados 244 casos de migrantes no localizados, con 688 muestras de ADN de familiares. En el periodo de 2013 a 2014 se registraron un total de 46 casos de personas MNL (10 mujeres y 36 hombres), se tomó la muestra de ADN a un total de 116 familiares (70 del sexo femenino y 46 del sexo masculino). Además, se identificaron y se notificó a los familiares de 6 migrantes localizados y se repatriaron 9 restos de salvadoreños (8 hombres y una mujer).

Según testimonios de los familiares de MNL, las personas migrantes pudieron haber sido víctimas de secuestro, reclutados para actividades ilícitas del crimen organizado y del narcotráfico y de trata de personas. En otros casos el “*coyote*” los ha abandonado para evitar ser vistos por las patrullas fronterizas o agentes federales. Otra circunstancia común es que la persona migrante enfermó y fue abandonada en el camino, en un

¹⁸⁹ Véase los datos de la Dirección de Migración y Extranjería, en el siguiente sitio electrónico: http://www.migracion.gob.sv/index.php?option=com_graficos&view=graficos&task=verjs&cid=153&Itemid=175, última consulta el 1 de julio de 2014.

¹⁹⁰ *Ibidem*.

hospital o en una unidad médica. Son comunes asimismo los casos en que las personas migrantes son detenidas por la patrulla fronteriza y puestas bajo custodia de migración, logran asegurar la supervivencia. En un número alto de casos, los familiares ignoran el paradero de su pariente que emigró hacia los Estados Unidos de América.

El funcionamiento del Banco de Datos Forenses requiere ser fortalecido con personal especializado y un presupuesto, pues se ha constituido en un mecanismo de apoyo a los familiares, garantizando un servicio eficiente, con un enfoque de protección y de reparación a las víctimas y a sus familiares.

Personas migrantes en territorio de El Salvador

El flujo migratorio de sur al norte de personas indocumentadas por medio de redes de traficantes de personas, quienes transitan por la región centroamericana, ha registrado un considerable número de personas migrantes que solicitan protección internacional en nuestro país, invocando la figura del refugio.

En El Salvador contamos con la ratificación de instrumentos internacionales de protección para las personas que solicitan refugio o asilo, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967) y la Declaración de Cartagena sobre Refugiados (1984). A nivel nacional, se encuentran vigentes la Ley para la Determinación de la Condición de Personas Refugiadas (2002) y su reglamento aprobado en el año 2005; el objetivo de ambas normas nacionales es regular las condiciones de una persona refugiada, así como garantizar el derecho de toda persona natural de origen extranjero a buscar y recibir protección en el territorio nacional y salvaguardar su vida, integridad personal, libertad, seguridad y dignidad. La entidad aplicadora de esta normativa es la

Comisión para la Determinación de la condición de Personas Refugiadas (CODER). No obstante la importancia de esta legislación interna en materia de personas refugiadas, es una necesidad la modernización de las mismas, especialmente para garantizar procedimientos más expeditos y garantizar recursos para la atención y asistencia de las personas en trámite de refugio y la población refugiada en El Salvador.

Las estadísticas de la población refugiada en El Salvador hasta diciembre de 2013 son: 44 refugiados reconocidos y 5 solicitantes de reconocimiento pendientes. De esta población, 12 son mujeres, entre ellas una niña y una adolescente, y dos varones adolescentes. El perfil de esta población es que residen en zonas urbanas pobres, su ingreso promedio es menor al salario mínimo establecido, el 90% trabaja en el sector informal, por lo que carece de derecho a la seguridad social, derechos laborales, como pagos de indemnizaciones, por accidentes laborales o enfermedades profesionales, entre otras.

La identificación y posterior protección de una persona solicitante de refugio implica que el Estado debe proporcionar y garantizar el principio de no devolución, la no detención arbitraria, el derecho a un intérprete en caso de ser necesario, el derecho a la alimentación, cuidados médicos y en caso de grupos familiares mantener la unidad de los miembros, entre otros derechos en atención a estándares internacionales establecidos en los instrumentos de protección de personas refugiadas antes mencionados.

No obstante, en nuestro país no existen programas integrales que brinden la recepción y asistencia para las personas solicitantes de asilo que tomen en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que pueden encontrarse niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, entre otros; a través de los cuales se les garantice asistencia humanitaria, educación o permiso de trabajo, para que durante

el procedimiento que resuelve la condición de refugiado, la persona solicitante puedan subsistir de una manera digna. La ausencia de estos programas coloca a estas personas en una situación más vulnerable para sufrir afectaciones de sus derechos humanos.

A partir del año 2001, con la dolarización en El Salvador, se incrementó el flujo de personas migrantes provenientes de Nicaragua, Honduras y Guatemala, quienes llegaron al país con el objetivo de trabajar, especialmente en el sector de la agricultura, en el sector informal, especialmente como vendedoras y como trabajadoras domésticas. Las autoridades de El Salvador no han impulsado acciones tendientes a la adecuada identificación y caracterización de estas poblaciones migrantes radicadas en El Salvador, en su mayoría establecidas producto de migraciones intrarregionales y tampoco existen políticas específicas para garantizar su acceso a servicios básicos y garantizar de modo efectivo sus derechos humanos, de conformidad con los estándares del derecho internacional.

El Salvador como país ratificante de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares de la (ONU) en adelante Convención, debe aplicarla y cumplirla. Sobre su cumplimiento, el Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares¹⁹¹ observó que El Salvador, en su calidad de país de tránsito y destino, debe proteger los derechos de los trabajadores migrantes.¹⁹² Para lograr lo anterior, es necesario aprobar el Proyecto de Ley de Migración y Extranjería, armonizándola con las disposiciones de la Convención, ya que la actual Ley vigente data de

1958. También deben ratificarse tres Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); el Convenio 97 relativo a los trabajadores migratorios (revisado en 1949); el Convenio 143, sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes, de 1975; y el Convenio 189, sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos, de 2011.

Para emitir políticas de protección para los trabajadores migrantes es necesario contar con la recopilación de datos sobre los flujos migratorios, en situación irregular en El Salvador, esta información estadística no existe en lo que respecta a los trabajadores migrantes centroamericanos o extra-continetales, situación que impide evaluar con detalle suficiente el cumplimiento de la Convención a nivel nacional.

e) Personas con VIH

El año 1984 marcó el inicio de la historia de la epidemia del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en El Salvador, del cual hasta diciembre del año 2013 se reportó un acumulado de 30,699 casos. Según el Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA, en el último año ha continuado la tendencia de disminución de los casos detectados, ya que en el año 2008 se detectaban seis casos diarios, mientras que en el año 2013 fueron cuatro por día¹⁹³. Esta reducción es muy importante, ya que de acuerdo a la tendencia de los últimos seis años, la epidemia en la población en general se está conteniendo o estabilizando, con tendencia a la baja. Por lo tanto, es necesario continuar con los esfuerzos de una adecuada respuesta ante el VIH en el país, para hacer sostenible esta reducción en el número de casos anuales.

¹⁹¹ El Comité examinó el segundo informe periódico de El Salvador (CMW/C/SLV/2) en sus sesiones 245° y 246° (véanse CMW/C/SR.245 y 246), celebradas los días 1 y 2 de abril de 2014.

¹⁹² Aprobó las observaciones finales siguientes en su 261° sesión (CMW/C/SR.261), celebrada el día 11 de abril de 2014.

¹⁹³ MINSAL. *Informe Nacional de Progreso de en la lucha contra el SIDA*. Documento recuperado de http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knownyourresponse/countryprogressreports/2014countries/SLV_narrative_report_2014.pdf, última consulta el 1 de julio de 2014.

Uno de los logros más importantes de los últimos años es haber logrado un quiebre a la baja en la tendencia de la detección tardía de nuevos casos¹⁹⁴, lo que impacta en un mejor pronóstico en la vida de las personas. Esto es resultado de una serie de factores como el ofrecimiento de la prueba de VIH, mejora en la calidad de los servicios, el programa de transmisión materno infantil, entre otros esfuerzos que ha realizado el Ministerio de Salud por medio del Programa Nacional de ITS/VIH/Sida. En este sentido, como Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se observa que en nuestro país ha sido positiva la respuesta ante el VIH.

Para el año 2013, la relación de casos nuevos de VIH entre hombre – mujer (índice de masculinidad) fue de 1.6 hombres por cada mujer, cifra que se ha mantenido estable desde el año 2008¹⁹⁵. En el caso de las mujeres, favorece que la detección se haya efectuado en las fases tempranas de la infección; contrario al caso de los hombres, donde hay una elevada detección de casos en la fase avanzada, por lo que se requiere redoblar esfuerzos y buscar estrategias que permitan la detección temprana de casos en la población masculina.

En cualquier caso, es relevante señalar que la epidemia de VIH que presenta El Salvador es considerada, según criterios del Programa de Naciones Unidas para el VIH/SIDA (ONUSIDA), como una epidemia concentrada con prevalencia en población general de 0.09 %, según reporte global 2012, Ministerio de Salud, y con altas cifras en las poblaciones de mayor vulnerabilidad, como son población de mujeres trans (25.8%), hombres que tienen relaciones con otros hombres (10%), y mujeres trabajadoras sexuales (3.14%).

¹⁹⁴ Por ejemplo, en 2009, de 1,587 casos nuevos registrados, en 163 de ellos se detectó VIH avanzado; mientras que en 2013, de 1,440 casos nuevos, 61 correspondían a VIH avanzado. MINSAL. *Informe Nacional de Progreso de en la lucha contra el SIDA*, citado supra.

¹⁹⁵ Ibidem.

A través de las denuncias recibidas, entrevistas a personas con VIH, actores clave y visitas a grupos de personas con VIH se recogió evidencia sobre la persistencia a violaciones de Derechos Humanos hacia las personas con VIH. Principalmente, relacionadas y fundamentadas en el estigma y discriminación, manifestado en la red de salud, en las comunidades, familia, lugares de trabajo; asimismo, en el acceso a bienes y servicios tales como la educación, seguros, entre otros. Es decir, siguen vigentes algunas vulneraciones que ya han sido señaladas en años anteriores por esta Procuraduría.

Algunos de los problemas y desafíos por superar en materia de respeto y garantía de las personas que viven con VIH, verificados por la PDDH, son las siguientes:

- Como se ha señalado con anterioridad, las guías o protocolos de atención a personas con VIH del Ministerio de Salud y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, aún no se han actualizado de acuerdo al contexto actual de las directrices internacionales y del uso de nuevos tratamientos y tecnologías; ni han sido armonizados entre sí. Por lo que es urgente realizar esta actualización y armonización de las herramientas técnicas jurídicas, para que las personas que dejan de ser cotizantes del ISSS, continúen sin interrupción su tratamiento en los Hospitales del MINSAL, o viceversa, cuando una persona está siendo atendida en el MINSAL y obtiene el beneficio del ISSS debe ser atendidos de igual forma.
- Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social no cuenta con estadísticas que vinculen la incidencia que el VIH tiene en el sector laboral; de tal manera que es necesario que se le dé relevancia a esta situación y se generen los mecanismos para visibilizar los derechos laborales de las

personas con VIH. Asimismo, se requiere que se fortalezca la Unidad de Discriminación y Género de esta Cartera de Estado, para que responda adecuadamente al contexto actual de la discriminación por VIH que se da en el ámbito laboral de la empresa privada, debido a que existen empresas que están solicitando a sus empleados/das o candidatos/tas la prueba de VIH por otros medios, como la prueba del polígrafo.

- Con el propósito de obtener mayor sostenibilidad de la respuesta al VIH, se recomienda a las instituciones gubernamentales, la actualización de sus políticas y programas en el lugar de trabajo, con el propósito de asegurar la protección y promoción de los derechos humanos de sus trabajadores/as en relación con el VIH (incluidos los derechos laborales) y de las poblaciones que atienden.
- Por otro lado, no se percibe voluntad de parte de las autoridades del ISSS, en descentralizar la atención integral a las personas con VIH, ya que se sigue concentrada en dos hospitales a nivel nacional, a pesar de que el país ha comprobado los efectos favorables de descentralizar la atención.
- Es urgente que el Estado asuma con mayor esfuerzo el acceso universal a la prevención, atención y apoyo relacionados al VIH en las poblaciones de mujeres trans, hombres que tiene sexo con otros hombres y mujeres trabajadoras sexuales, ya que estas poblaciones tradicionalmente han sido vulneradas en sus derechos humanos.
- Con respecto a personas privadas de libertad con VIH, persiste la situación de los años 2012-2013, donde el principal problema es la pérdida de citas para controles médicos, debido a falta de personal que les resguarde o les brinde transporte. Asimismo, en algunos

centros se han tenido dificultades en el acceso al tratamiento antirretroviral, así como el tratamiento de infecciones oportunistas. Sin embargo, uno de los avances es la entrega de condones a los privados de libertad, lo cual se verificó en algunas visitas a centros penitenciarios.

- No hay evidencia de que en el presente período se haya hecho una ampliación de la Profilaxis post exposición. Aún no se tiene conocimiento de su uso en establecimientos fuera del área de competencia del Ministerio de Salud (donde solo existe para accidentes laborales), como por ejemplo la Policía Nacional Civil o el Instituto de Medicina Legal de la CSJ.
- Aún no existen garantías que permitan un acceso adecuado a un sistema de protección social para las personas con VIH, sus familiares y allegados, para mitigar el impacto de la infección a nivel individual, familiar y comunitario.
- Se ha realizado la actualización de las normas de bioseguridad en cuanto al manejo de cadáveres, pero sigue sin haber armonía con el Código de Salud, para garantizar la no discriminación de las personas con VIH que fallecen por diversas causas. Esto ocasiona que persista la discriminación de las personas con VIH aún después de su fallecimiento.
- En cuanto al acceso a créditos a largo plazo para adquisición de vivienda, los seguros obligatorios se vuelven un obstáculo al limitar la cobertura a personas con VIH. En consecuencia, se restringe el acceso al crédito de vivienda de interés social en el Fondo Social para la Vivienda.
- Continúa vigente la Ley de Prevención y Control de la Infección provocada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana

y su reglamento, que contienen algunas disposiciones que pueden fomentar la discriminación hacia las personas con VIH.

- No existen garantías para las personas con VIH en cuanto al resarcimiento de daños cuando han sido víctimas de actos discriminatorios en los diferentes ámbitos de la vida social. La Ley estipula sanciones de carácter administrativo, pero no se refiere a la compensación por el daño recibido de parte de las Instituciones, funcionarios o particulares responsables.
- En materia de acceso a medicamentos persisten prácticas que afectan este derecho, como por ejemplo la llevada a cabo en el ISSS, cuando se solicita la presentación de testigos para la entrega del tratamiento antirretroviral.
- Se requiere de mayor atención en el entorno de las niñas, niños y adolescentes con VIH que se encuentran con medidas judiciales de protección, para evitar la discriminación y exclusión en el hogar, de parte de las personas con las que convive.
- Las instituciones gubernamentales responsables en la respuesta al VIH y las organizaciones de sociedad civil comprometidas, deberían iniciar procesos educativos sobre los derechos humanos relacionados con el VIH, desde una perspectiva más práctica y centrada en la movilización de actitudes contra el estigma y la discriminación. La educación debe enseñar a las personas cuáles son sus derechos y cómo exigirlos; y el Estado debería asegurar las herramientas, la asistencia jurídica y los servicios que les contribuyan a la exigibilidad de los mismos.
- Aunque aparentemente hay una reducción de las nuevas infecciones en la población en

general, al revisar el grupo de 15 a 24 años nos encontramos que ha aumentado el número de nuevas infecciones, por lo que es urgente orientar esfuerzos hacia este segmento poblacional, ya que en esta edad es la que se encuentra en proceso de construcción de su proyecto de vida, es económicamente productiva, sexualmente activa y con poca percepción de riesgo.

f) Personas adultas mayores

Para esta Procuraduría, la protección de los derechos de las personas adultas mayores es una de las principales deudas del Estado salvadoreño, principalmente porque es ampliamente conocido que constituyen uno de los grupos poblacionales en mayores condiciones de vulnerabilidad. Asimismo, cabe mencionar que representan un grupo de considerable tamaño y que en el futuro irá aumentando su participación dentro de la población total. Según los datos del VI Censo de Población y V de Vivienda (2007), en El Salvador habitan 542,191 personas mayores de 60 años de edad, lo cual representa el 11.1% de la población total del país; mientras que de acuerdo a las proyecciones de población, este grupo aumentará al 20% en un plazo de 15 años¹⁹⁶.

Por otra parte, cabe señalar que se observa una mayor proporción de mujeres mayores de 60 años (55.7%) en comparación con el número de hombres de ese rango de edad (44.3%); y a la vez se registra una notable diferencia entre las personas mayores que residen en el área urbana (64.2%) y las que viven en el área rural (35.8%)¹⁹⁷. En relación a la composición familiar, se estima que

¹⁹⁶ Secretaría de Inclusión Social. *Informe Nacional El Salvador*. Documento recuperado de <http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/9/46849/ElSalvador.pdf>, última consulta el 6 de julio de 2014.

¹⁹⁷ FUNDAUNGO. *Evolución de las tendencias demográficas de la población adulta mayor: 1950-2025*. Ponencia presentada durante el Panel-Foro "De la exclusión a la inclusión de las personas adultas mayores en la construcción de una verdadera política nacional en nuestro país" organizado por la PDDH. 28 de enero de 2009.

del total de hogares del país, al menos el 23% es conducido por una persona adulta mayor¹⁹⁸.

En el marco del Plan Quinquenal de Desarrollo 2009-2014, se desarrollaron acciones enmarcadas en el Programa Presidencial Nuestros Mayores Derechos, cuyo objetivo central es “revertir la tendencia del aumento de la pobreza registrada en los últimos años y ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, en especial para la población en condición de mayor vulnerabilidad, y sobre todo para las mujeres”¹⁹⁹.

Entre las acciones más significativas desarrolladas en dicho Programa Presidencial podemos mencionar las siguientes: 1. *Pensión básica universal*: monto entregado bimensualmente a personas mayores de 70 años o más, que se encuentren en condiciones de pobreza extrema; 2. *Aprendiendo Juntos y Juntas*: alfabetización y capacitación de personas adultas mayores, así como la formación de recursos especializados: desarrollo de tres diplomados en gerontología social.

Por otra parte, para la PDDH ha sido muy positivo que el Estado salvadoreño se haya involucrado de forma protagónica en la promoción e impulso de dos propuestas de instrumentos internacionales para la protección de los derechos de las personas adultas y mayores. En primer lugar, en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Secretaría de Inclusión Social ha impulsado y colaborado en la preparación de una propuesta de Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores. Asimismo, dentro de las Naciones Unidas, se ha estado promoviendo la aprobación de una resolución con el fin de que

se considere una convención internacional sobre la materia.

Sumado a esto, en el contexto de la primera propuesta, a iniciativa del Gobierno de El Salvador, se organizó y desarrolló el Encuentro Sub Regional “Lineamientos para una Convención de los Derechos de las Personas Mayores de Edad”, los días 17 y 18 de junio de 2010. Este encuentro reunió a las autoridades de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana en materia de atención a las personas mayores, acompañados por un representante del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, división de población de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, en calidad de observador y con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas; del cual las delegaciones participantes, luego de dos días de análisis, concluyeron en recomendaciones encaminadas a continuar con los esfuerzos de apoyo y seguimiento para la confección de una Convención para los Derechos de las Personas Mayores a través de todos los actores regionales e internacionales existentes.

Con todo, es necesario señalar que para la PDDH, ha resultado preocupante que el abordaje de la situación de las personas adultas mayores no ha sido una prioridad para el Estado salvadoreño. Principalmente, ha sido lamentable que no se haya reformado la Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor, pese a que en 2009 la PDDH, en conjunto con la Mesa de Trabajo sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, presentó un documento a la Asamblea Legislativa con distintas propuestas de reforma orientadas a fortalecer la protección de los derechos de las personas adultas mayores.

¹⁹⁸ Córdova, R., Burgos, D., Tablas, V. y Rodríguez, F.. *Las tendencias demográficas de la población adulta mayor y su incidencia en las políticas públicas en materia de seguridad social*. San Salvador, 2010.

¹⁹⁹ Gobierno de El Salvador. Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014. San Salvador, P. 54.

Entre las propuestas realizadas se pueden mencionar las siguientes:

- La creación de una **Institución autónoma** encargada directamente de la persona adulta mayor, lo que permitiría la seguridad de asignaciones presupuestarias periódicas, a fin de volver realidad en la vida práctica, lo que hasta el momento se ha quedado en el reconocimiento formal de sus derechos y libertades fundamentales.
- El derecho a una **pensión universal**, concedida oportunamente, que les ayude a satisfacer sus necesidades fundamentales, haya contribuido o no a un régimen de pensiones.
- La **revalorización de pensiones** y el establecimiento de una adecuada **pensión mínima**.
- La incorporación de **beneficios** que coadyuven a mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor.
- El establecimiento de **sanciones** para todas aquellas personas naturales o jurídicas que no cumplan con las disposiciones legales de la mencionada Ley.
- El **financiamiento** para la ejecución de los programas dirigidos hacia la población adulta mayor.

Todo lo señalado implica una responsabilidad en el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales en materia de envejecimiento, vejez y personas adultas mayores, a partir de la cual el Estado tiene el deber de garantizar los derechos y la sociedad civil de exigirlos. En este sentido, se espera que de forma pronta, la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adulto Mayor de la Asamblea Legislativa retome la discusión de dichas propuestas de reforma.

Finalmente, como ya lo ha señalado la PDDH, se debe recalcar que es necesario que la protección de los derechos humanos de la población adulta mayor no represente un interés secundario en las políticas públicas del Estado Salvadoreño y, por el contrario, se desarrollen acciones con perspectiva de derechos humanos, gerontológica y de género, que incidan en la reducción de la pobreza en la que cotidianamente viven muchas personas adultas mayores.

g) Personas con discapacidad

Conforme a los datos expresados hace tres años en el Informe Mundial sobre la Discapacidad del 2011, elaborado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial²⁰⁰, un 15% de la población mundial vive con alguna discapacidad y, de ese porcentaje, un aproximado de 80% habitan en países en desarrollo como el nuestro.

En el caso salvadoreño, la información oficial resultado del VI Censo de Población y V de Vivienda de mayo de 2007 indica que para ese entonces en El Salvador vivían 235,302 personas con discapacidad, es decir un 4.1% de una población total, que según el Censo ascendía a 5.744,133 personas. Del total de la población con discapacidad censada, el 52.5 % son hombres, mientras que el 47.4 % son mujeres. Asimismo, el 61.1% reside en la zona urbana, mientras que el 39% lo hace en la zona rural.

Es válido señalar que en aquel momento se consideró tal dato como conservador, en atención a nuestra condición de ser un país en desarrollo y una sociedad post conflicto; es así que siete años después y sin avanzar hacia la salida de una compleja situación económica y social, es atinente concluir que en la actualidad estamos probablemente muy cerca del porcentaje estándar de población con discapacidad según el Informe Mundial.

²⁰⁰ Puede encontrarse en el siguiente sitio: http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/es/, última visita el 6 de julio de 2014.

Durante el último quinquenio hemos observado la realización de acciones destinadas a favorecer el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, tales como: a) la recomposición del Pleno del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD), incrementando el número de representantes de organizaciones de y para personas con discapacidad e igualarlo al de los representantes de las entidades gubernamentales; b) la reforma del sector salud que incorporó en la actual Política Nacional de Salud una estrategia de “atención integral” a las personas con discapacidad, incluyendo la contratación de fisioterapeutas en los Equipos Comunitarios de Salud Familiar y Especializados – ECO’S – pretendiendo acercar los servicios de rehabilitación al domicilio de las personas (así también la Política de Salud Sexual y Reproductiva ha incluido a distintos grupos vulnerables, entre ellos a las personas con discapacidad); c) reformas a la Ley de Protección al Consumidor, vigentes desde 2013, que reconocen derechos de las y los consumidores con discapacidad. Asimismo, en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, fue incorporado el enfoque de atención a las personas con discapacidad, aunque no se profundizó en el mismo como se hubiere esperado de una normativa post Convención. No obstante lo anterior, tales iniciativas no son suficientes para alcanzar el estándar que demanda al Estado salvadoreño la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Por tal motivo, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al examinar al Estado salvadoreño en septiembre de 2013²⁰¹, realizó un conjunto

amplio de observaciones finales sobre aquellos aspectos que consideró relevantes y urgentes de ser atendidos por el Estado para la progresividad de los derechos de las personas con discapacidad, teniendo hasta finales del año 2017 para su realización. Una de esas observaciones – sustentada en los principios y obligaciones generales de la Convención– es la deuda que deja la saliente administración del Órgano Ejecutivo para el retiro de la reserva genérica al instrumento en referencia, que socava internamente la base de derechos humanos y libertades fundamentales que la Convención contempla, a pesar de haberse planteado reiteradamente esa petición por las personas con discapacidad a través de sus organizaciones y por parte de esta Procuraduría.

Se considera que no será posible avanzar sustancialmente hacia el pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad sin superar antes las barreras actitudinales y la discriminación en su contra. Pero lo más grave es que esa discriminación no se deriva únicamente de la vivencia cotidiana en el ámbito de la educación, la salud, el trabajo, la participación política, la accesibilidad y movilidad, entre otros, sino además del ordenamiento jurídico que utiliza términos ofensivos para referirse a la población con discapacidad y que veda sistemáticamente el ejercicio de su capacidad jurídica al negarles la autonomía de la voluntad y su calidad de sujetos de derechos en la propia toma de decisiones. Es así que la PDDH coincide con el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su recomendación sobre la necesidad de efectuar una urgente y amplia revisión de la normativa interna, para armonizarla con la Convención. Esto demandará el acercamiento y coordinación de acciones entre los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como la participación amplia de las personas con discapacidad, atendiendo además al componente de ruralidad y la inclusión de otros grupos

²⁰¹ 10ª sesión de trabajo del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del 02 al 13 de septiembre de 2013.

vulnerables que también deben ser considerados desde la discapacidad.

Por otra parte, la asignación de presupuestos específicos en las distintas instituciones del Estado—incluyendo las autónomas— es clave para asegurar la ejecución de acciones y programas tendentes a garantizar la inclusión y atención directa de las personas con discapacidad. Por tanto, las medidas de austeridad, como las que se han sostenido durante la saliente gestión del Órgano Ejecutivo, no deben implicar el incumplimiento de las obligaciones estatales en materia de discapacidad.

Para finalizar, se debe recalcar que no es posible aproximarnos al modelo de cumplimiento de los derechos de la población con discapacidad sin contar con un sistema de implementación de la Convención y de supervisión de su observancia, que sea liderado por un ente rector en la materia²⁰² fortalecido en sus atribuciones

²⁰² A la fecha tal rectoría de la política sobre discapacidad está a cargo del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD).

y presupuesto, así como con la capacidad de sinergia de todas las instituciones del Estado y la participación inclusiva de las personas con discapacidad.

Las nuevas autoridades del Órgano Ejecutivo cuentan con el enorme desafío de fortalecer el diálogo inclusivo y participativo con las personas con discapacidad, que constituye la base fundamental para continuar y ampliar las acciones, planes y programas gubernamentales eficaces para la progresividad de los derechos de las personas con discapacidad. Es así como cuenta con las Observaciones Finales emanadas del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como directrices fundamentales que como Estado Parte de la Convención está en la obligación de cumplir ampliamente, en consideración a la transversalidad del colectivo con discapacidad: niñez, mujeres, población indígena, población LGTBI, adultez mayor, población migrante, entre otros grupos igualmente significativos.

Capítulo II

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL



“El Procurador es un funcionario público que goza de independencia, y su función principal es velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos por medio de diferentes facultades legales”

Informe Amicus Curiae presentado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Masacres del Mozote y lugares aledaños, contra el Estado de El Salvador. Abril de 2012.



El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos se reúne con ex trabajadores del Instituto Regulador de Abastecimiento (IRA) quienes solicitan la reactivación de dicho Instituto

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos es una figura institucional creada para cumplir la misión esencial de promover los derechos humanos y velar porque sean respetados²⁰³. Se introduce a nuestro ordenamiento jurídico luego de la finalización del conflicto armado interno, en el marco de la transición hacia la democracia de la sociedad salvadoreña. Su antecedente se encuentra en las reformas constitucionales de los Acuerdos de México, del 27 de abril de 1991, que posteriormente formaron parte de los Acuerdos de Paz de El Salvador, suscritos en Chapultepec, México D.F., del 16 de enero de 1992²⁰⁴.

2.1 Mandato constitucional y legal

Dichas reformas se concretaron en los siguientes artículos de la Constitución de la República: el artículo 191 que incluye al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos como parte del Ministerio Público; el artículo 192 que designa a la Asamblea Legislativa la elección del Procurador por mayoría calificada de los dos tercios de los diputados electos, para un período de tres años y con posibilidad de reelección²⁰⁵; y el artículo 194, romano I que define su misión y funciones.

Cuadro N° 2 Funciones constitucionales Artículo 194, Romano I de la Constitución de la República	
1º	Velar por el respeto y la garantía a los derechos humanos;
2º	Investigar, de oficio o por denuncia que hubiere recibido, casos de violaciones a los derechos humanos;
3º	Asistir a las presuntas víctimas de violaciones a los derechos humanos;
4º	Promover recursos judiciales o administrativos para la protección de los derechos humanos;
5º	Vigilar la situación de las personas privadas de su libertad. Será notificado de todo arresto y cuidará que sean respetados los límites legales de la detención administrativa;
6º	Practicar inspecciones, donde lo estime necesario, en orden a asegurar el respeto a los derechos humanos;
7º	Supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas;
8º	Promover reformas ante los Órganos del estado para el progreso de los derechos humanos;
9º	Emitir reformas ante los Órganos del estado para el progreso de los derechos humanos;
10º	Promover y proponer las medidas que estime necesarias en orden a prevenir violaciones a los derechos humanos;
11º	Formular conclusiones y recomendaciones públicas o privadamente;
12º	Elaborar y publicar informes;
13º	Desarrollar un programa permanente de actividades de promoción sobre el conocimiento y respeto de los derechos humanos;
14º	Las demás que le atribuyen la Constitución o la ley.

Fuente: Constitución de la República

²⁰³ Acuerdos de México. Capítulo II, referido al Sistema Judicial y Derechos Humanos, letra c), del 27 de abril de 1991. Acuerdos de Paz. Capítulo III, referido al Sistema Judicial, apartado 2, Procuraduría Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos, del 16 de enero de 1992.

²⁰⁴ Inicialmente se le denominó "Procurador Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos", derivado de la figura del "Ombudsman", que nace en Suecia en el siglo XVI, designado por el Parlamento para que pudiera controlar la actividad gubernamental y balancear las facultades del Rey y de su Consejo, es a él a quien se le confiere entre otros, la función de convertirse en un contralor de la actividad estatal, en materia de derechos y garantías fundamentales.

²⁰⁵ En este período, la Asamblea Legislativa dejó en acefalía a la PDDH al retrasarse por más de un mes en el procedimiento de nombramiento del titular, lo que generó ciertas dificultades operativas al interior de la misma como la firma de resoluciones que contienen medidas de protección a derechos humanos y la paralización de los procesos de compra de bienes y servicios; ya que de acuerdo al artículo 15 de la Ley de la PDDH, el Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos Humanos no puede asumir las funciones del titular mientras la Asamblea no alcance los consensos políticos necesarios para su elección.

Su mandato es desarrollado en la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos²⁰⁶, que la define como una institución de carácter permanente e independiente, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, cuyo objeto es el velar por la protección, promoción y educación de los derechos humanos. Por lo tanto, se encuentra habilitada para conocer cualquier situación

en la que los derechos humanos estén siendo amenazados o se hayan violado. También para vigilar los procedimientos y plazos legales de los recursos que interponga, presentar propuestas de anteproyectos de leyes para el avance de los derechos humanos, procurar la conciliación entre las personas cuyos derechos han sido vulnerados, entre otras.

Cuadro N° 3 Atribuciones legales Artículos 11 y 12 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos	
1º	Velar por el estricto cumplimiento de los procedimientos y plazos legales en los distintos recursos que hubiere promovido o en las acciones judiciales en que se interesare;
2º	Velar por el respeto a las garantías del debido proceso y evitar la incomunicación de los detenidos;
3º	Llevar un registro centralizado de personas privadas de su libertad y de centros autorizados de detención;
4º	Presentar propuestas de anteproyectos de leyes para el avance de los derechos humanos en el país;
5º	Promover la firma, ratificación o adhesión a tratados internacionales sobre derechos humanos;
6º	Emitir resoluciones de censura pública contra los responsables materiales o intelectuales de violaciones a los derechos humanos;
7º	Procurar la conciliación entre las personas cuyos derechos han sido vulnerados y las autoridades o funcionarios señalados como presuntos responsables, cuando la naturaleza del caso lo permita;
8º	Crear, fomentar y desarrollar nexos de comunicación y cooperación con organismos de promoción y defensa de los derechos humanos, gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales y con los diversos sectores de la vida nacional;
9º	Emitir el reglamento para la aplicación de la presente ley y los reglamentos internos que fueren necesarios;
10º	Nombrar, remover, conceder licencias y aceptar renunciaciones a los funcionarios y empleados de la institución;
11º	Elaborar el proyecto de presupuesto anual y remitirlo a la instancia correspondiente; y
12º	Las demás que le atribuyan la Constitución o la Ley.

Fuente: Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

Además de las anteriores normas, el mandato de esta Procuraduría se complementa con los Principios Relativos al Estatuto de las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de Derechos Humanos, denominados como “Principios de París”, suscritos por representantes de dichas organizaciones en 1991, que contemplan criterios o estándares para su funcionamiento y composición.

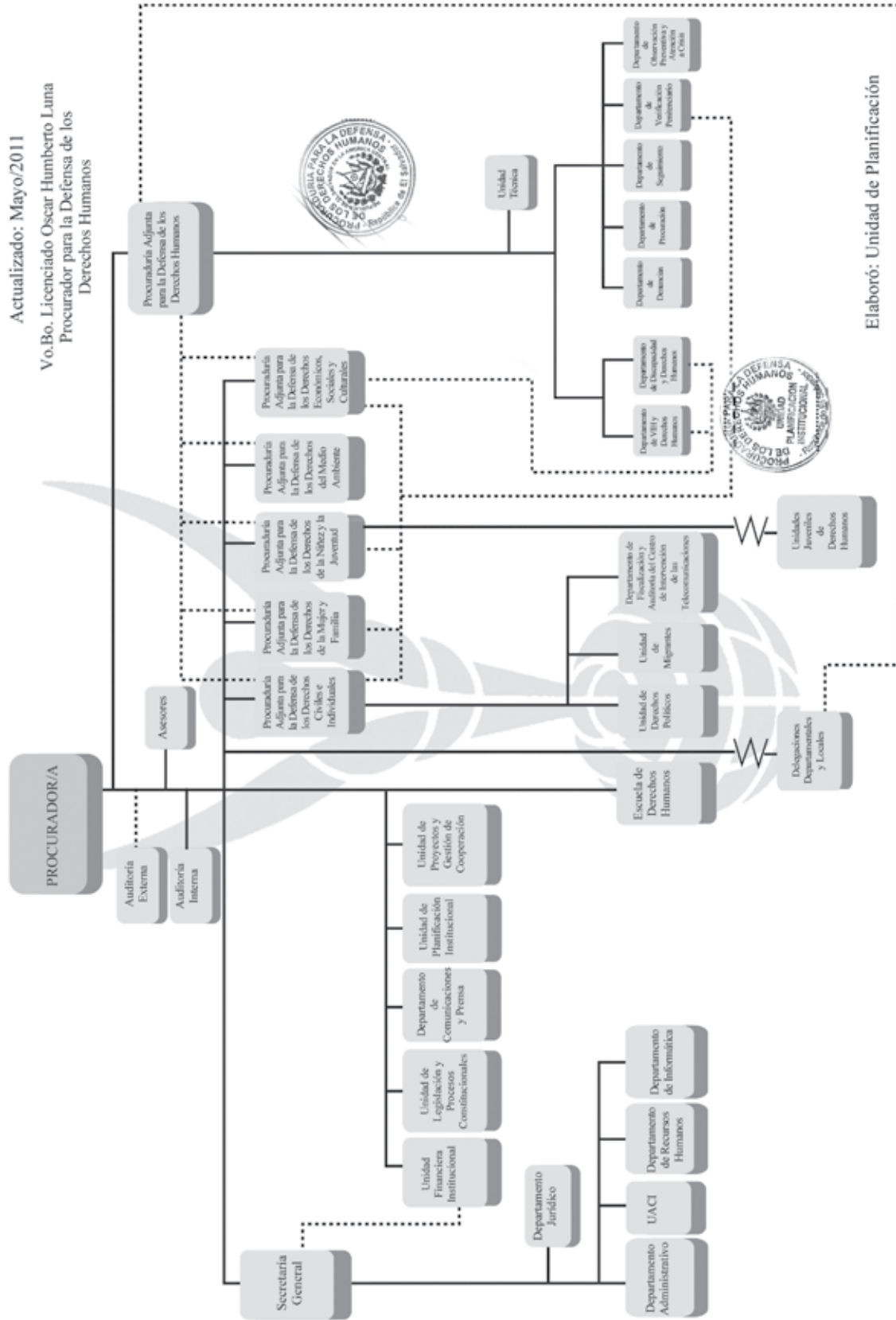
En este sentido, la creación de esta institución

supone uno de los logros más relevantes de los mencionados acuerdos políticos y el de mayor trascendencia en materia de protección institucional de los derechos humanos y libertades fundamentales de la población salvadoreña. Se instaure como un mecanismo nacional de promoción y protección de derechos humanos de orden constitucional, cuya misión primordial es contribuir al reconocimiento de la dignidad humana y desarrollar el Estado Democrático de Derecho.

²⁰⁶ Decreto Legislativo número 183 del 20 de febrero de 1992, publicado en el Diario Oficial número 45, Tomo 314 del 6 de marzo de 1992.

2.2 Estructura organizativa

A continuación se presenta el organigrama vigente hasta esta fecha.



2.3 Personal de la institución

En el período se continuó especializando al personal técnico, administrativo, operativo y ejecutivo, con el objetivo de cumplir debidamente con el mandato constitucional y legal de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos. Actualmente, la PDDH cuenta con una plantilla de 449 funcionarios incluidos en

el presupuesto ordinario, de los cuales el 53% (237) son hombres y el 47% (212) son mujeres.

a) Nuevas contrataciones

Se realizaron 17 contrataciones nuevas de plazas vacantes en Ley de Salarios y Contratos, de las cuales 10 fueron del sexo femenino y 7 del sexo masculino, según el detalle a continuación:

Cuadro N° 4 Nuevas contrataciones por sexo		
Área de asignación	Sexo	Total
Sección Servicios Generales y Mantenimiento	F	1
Departamento de Planificación Institucional	F	1
Departamento Administrativo	F	1
Secretaría General	F	2
Delegación Departamental de Morazán	F	1
Unidad de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia	F	1
Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y Familia	F	1
Procuraduría Adjunta de los Derechos Civiles e Individuales	F	1
Departamento de Recursos Humanos	F	1
Delegación Local de Santa Rosa de Lima	M	1
Sección transporte	M	1
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos	M	1
Sección de Servicios Generales y Mantenimiento	M	1
Unidad Financiera institucional	M	1
Escuela de Derechos Humanos	M	1
Departamento de Educación	M	1
TOTAL		17

Fuente: Departamento de Recursos Humanos, PDDH

Se destaca la elaboración del Manual de Inducción con el fin de dar a conocer al personal de nuevo ingreso aspectos básicos sobre el funcionamiento de la Procuraduría, sus responsabilidades, obligaciones, derechos y prestaciones.

b) Personal por régimen laboral

El total de personal por régimen laboral Ley de Salarios y Contratos es de 449, desglosados por sexo femenino y masculino, según se detalla a continuación:

Cuadro N° 5 Distribución de plazas por régimen salarial y sexo			
Régimen laboral	Sexo		Total
	Femenino	Masculino	
Ley de salario	189	217	406
Contrato	23	20	43
Totales	212	237	449

Fuente: Departamento de Recursos Humanos, PDDH

c) Personal administrativo, técnico y ejecutivo

y delegaciones, juntos suman un total de 212 del sexo femenino y 237 del sexo masculino, desglosados de la manera siguiente:

La PDDH está integrada por personal administrativo, técnico y ejecutivo a nivel central

Cuadro N°6 Distribución de plazas por actividad y sexo			
Clasificación por actividad	Sexo		Total
	Femenino	Masculino	
Ejecutivo	25	35	60
Técnico	104	117	221
Administrativo	83	85	168
Totales	212	237	449

Fuente: Departamento de Recursos Humanos, PDDH



Capítulo
III

PLAN DE TRABAJO
2013-2014



“Como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos reafirmo mi compromiso de trabajar en la verificación e investigación del estado de la impunidad en El Salvador, acompañando las legítimas demandas de verdad, justicia y reparación adecuada”

Mensaje en el marco de la conmemoración del XXXIV aniversario del martirio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, San Salvador, 25 de marzo de 2014.



Conformación de la Asamblea Permanente de Víctimas, cuyo propósito será dar seguimiento a la agenda de recuperación de memoria histórica. 25 de marzo de 2014

Para orientar el ejercicio de su mandato constitucional y legal de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos, la PDDH se apoya en una planificación estratégica que contiene las apuestas y los compromisos institucionales para satisfacer las demandas de promoción y protección de los derechos humanos de la población salvadoreña.

De acuerdo al artículo 25 de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de esta Procuraduría, le corresponde al titular y su equipo gerencial y de jefaturas, establecer la planificación estratégica y un mecanismo de revisión periódica de su cumplimiento, en coordinación con la Unidad de Planificación Institucional; de esta manera, se cuenta con una planificación en cuatro niveles, que se detalla a continuación:

- a) Plan Estratégico Institucional (PEI 2011-2014)²⁰⁷, el cual contiene los objetivos, proyectos y metas de mediano plazo, es decir para el cuatrienio 2011-2014;
- b) Plan Operativo Anual (POA-2013 y POA 2014), contiene los proyectos y metas estratégicas establecidas en el PEI 2011-2014, correspondiente a los años 2013 y 2014;
- c) Planes por Áreas de Gestión (PAG-2013 y PAG-2014), que contienen los planes de cada una de las unidades organizativas institucionales, los cuales contienen los proyectos estratégicos en los planes anuales mencionados, así como las acciones rutinarias y obligatorias de importancia para el quehacer institucional y para el logro de sus objetivos; y
- d) Revisión, seguimiento y evaluación periódica de todos los planes.

En los siguientes párrafos se presenta el pensamiento estratégico desglosado por la misión, la visión y los valores institucionales. Posteriormente, se presenta en cuadros, los objetivos, las estrategias específicas y los resultados alcanzados de los programas y los proyectos institucionales ejecutados en el período. La sistematización de información y el consolidado estadístico de los logros alcanzados en las actividades rutinarias pero de importancia para los objetivos institucionales, se presentará más adelante.

3.1. Pensamiento estratégico

Misión

“Somos una institución de rango constitucional con el mandato de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a través de la protección, promoción y educación de los mismos, para contribuir con el reconocimiento de la dignidad humana y desarrollar el Estado Democrático de Derecho”.

²⁰⁷ Entró en vigencia en la fecha de emisión del Acuerdo Institucional N° 017 del 21 de enero de 2011.

Visión

“Ser la institución del Estado de mayor credibilidad con un amplio reconocimiento de la población y las autoridades a las que dirige su acción en materia de derechos humanos”.

Valores institucionales

Ahora bien, esa visión y misión elaborada con responsabilidad, comprende unos valores de los cuales se debe dar cuenta institucionalmente en la labor cotidiana. Estos valores son los siguientes:

- *Dignidad: Respeto y trato humano hacia los demás.*
- *Justicia: Igualdad y rectitud en el desempeño.*
- *Equidad: Atención con eficiencia y sin distinción.*
- *Solidaridad: Trabajar en equipo e identificados con los demás.*

3.2. Exposición de los objetivos, las metas y los resultados obtenidos

Las apuestas institucionales establecidas en el PEI 2011-2014, están determinadas en cinco áreas estratégicas, a saber:

- *AE1: Protección de los Derechos Humanos;*
- *AE2: Análisis e Incidencia de Políticas Públicas, Normas y Prácticas del Estado;*
- *AE3: Promoción y Educación en Derechos Humanos;*
- *AE4: Acciones y Relaciones Externas; y*
- *AE5: Fortalecimiento Institucional.*

En cada una de estas áreas se han identificado programas, proyectos y actividades que harán posible alcanzar los objetivos institucionales definidos. El PEI 2011-2014 contiene 34 proyectos estratégicos y 61 indicadores de resultados o metas, en sus cinco líneas de trabajo. El actual Plan Operativo 2013, incorpora nuevas apuestas estratégicas de la planificación del año 2012, haciendo un total de 42 proyectos y 63 indicadores de resultados, que constituyen la base de verificación del seguimiento a los resultados obtenidos.

A continuación se presentan los objetivos, las estrategias y las metas cumplidas por cada área estratégica institucional.

Cuadro N° 7 Area Estratégica 1: Protección de los Derechos Humanos					
Objetivo estratégico: Coadyuvar a que las Instituciones del Estado respeten y garanticen los Derechos Humanos y las libertades fundamentales.					
Estrategias Específicas: Mejorar la respuesta en la atención de casos en las diferentes fases; estandarizar y potenciar los mecanismos de los derechos humanos; fortalecimiento de los niveles de coordinación y comunicación internos en el manejo de casos; activación de mecanismos jurisdiccionales; y acercamiento de los servicios de protección a nivel local y comunitario.					
N°	Nombre del Proyecto	Responsable directo	Indicador	Resultados obtenidos	Nivel de ejecución (%)
1.1B	Diseño e implementación de nuevos mecanismos para fortalecer el nivel de respuesta a las presuntas violaciones.	Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos	Estudio elaborado y mecanismos implementados	Se revisó el procedimiento y el modelo de protección, así como la organización de las áreas relacionadas. Se presentaron propuestas para desburocratizar los procedimientos y reorganizar el área de tutela. Se desarrolló un taller de socialización de reorganización de tutela, se elaboraron criterios y directrices para mejorar el nivel de respuesta a las presuntas víctimas; así como una reorganización del Departamento de Denuncias y el Departamento de Seguimiento.	50%
1.3 B	Implementación de la Política de Derechos Humanos de personas viviendo con VIH-SIDA.	Departamento VIH y Derechos Humanos	Política implementada	Se realizaron varias acciones para la implementación de la Política de Derechos Humanos de Personas viviendo con VIH-SIDA: 1) Taller sobre el derecho al consentimiento informado en personas adultas, en niñas, niños y adolescentes, en personas en estado de inconsciencia o grave estado de salud; asimismo, en el tema de confidencialidad, expediente clínico, estigma y discriminación, a 30 personas 19 mujeres y 11 hombres que forman parte de los equipos de Derechos Humanos del Ministerio de Salud de la región paracentral. 2) Taller en el Centro de Altos Estudios Estratégicos de la Fuerza Armada de El Salvador sobre normativa nacional e internacional sobre VIH en el papel de la Fuerza Armada de El Salvador, donde se discutió el enfoque de dicha institución del Estado y su conformidad con el enfoque de derechos, a la vez que se sensibilizó en el tema de estigma y discriminación, en esta actividad participaron 50 oficiales de alto rango (desde tenientes a coroneles) procedentes de las diferentes guarniciones militares del país; 3) Cuatro jornadas de capacitación de tres días cada una, con experto internacional sobre Derechos Humanos y VIH y el respeto de los Derechos Humanos de la población LGBTI; dirigidas al personal técnico y jefaturas de la PDDH, el Ministerio de Salud y organizaciones de la sociedad civil como Poblaciones en Mayor riesgo de adquirir la infección (PEMAR); con la cooperación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD; Tres Talleres en colaboración con la Escuela de Derechos Humanos, sobre temas relacionados a niñez y adolescencia, sistemas de protección de derechos humanos, derechos laborales y VIH, entre otros; y participación en las actividades realizadas por el Ministerio de Salud relativas al 1 de diciembre, en el "Día Mundial contra el Sida".	100%
1.4	Implementar la Política Institucional de Género en los mecanismos de protección a derechos humanos.	Procuraduría Adjunta para la Defensa de la Mujer y Familia	Política implementada	Con la creación de la Unidad de Atención Especializada en el primer semestre de 2014, se da cumplimiento al artículo 25 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Dicha Unidad tendrá además, la función de asesorar técnicamente a las diferentes dependencias de PDDH para incorporar la Política Institucional de Género.	40%

Fuente: elaborado a partir de los insumos institucionales, Unidad de la Realidad Nacional

Cuadro N° 8

Area estratégica 2: Análisis e incidencia de políticas públicas, normas y prácticas del estado

Objetivo estratégico: Demandar un comportamiento estatal respetuoso de la dignidad humana, para que las instituciones del Estado cumplan las obligaciones establecidas en la Constitución de la República y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Estrategias Específicas: Proponer cambios en el comportamiento estatal en materia de derechos humanos y fomentar buenas prácticas estatales, a través del comportamiento de agentes del Estado para la erradicación de conductas violatorias de derechos humanos.

Nº	Nombre del Proyecto	Responsable directo	Indicador	Resultados obtenidos	Nivel de ejecución (%)
2.2	Programa de Observación y Verificación Electoral	Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales; y el Departamento de la Realidad Nacional	Vigilancia del cumplimiento y garantía de los Derechos Políticos	Se desarrolló el mecanismo de protección de derechos humanos verificación y observación electoral para las Elecciones Presidenciales 2014, a través de la elaboración de documentos, directrices giradas a delegaciones y departamentos, manejo de casos relacionados al evento electoral, actividades de coordinación interna e interinstitucional, entre otras acciones. El 15 de mayo de 2014, fue enviada a la Dirección de la Escuela la propuesta de Informe Especial sobre las Elecciones Presidenciales celebradas el 2 de febrero y 9 de marzo del 2014.	100%
2.3	Estudio de factibilidad de creación de un programa observatorio de los derechos humanos	Departamento de la Realidad Nacional	Programa implementado, Protocolo y cartas de entendimiento	Todavía se encuentra en revisión el “Protocolo de funcionamiento del Observatorio de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos”, que pretende ser una guía práctica para implementar los procedimientos adecuados para la obtención de información oportuna, la construcción de análisis pertinentes, la elaboración de sugerencias, recomendaciones o mandatos, e incluso la activación de mecanismos de protección de los derechos humanos de la PDDH. También se han elaborado oficios requiriendo información a diferentes instituciones públicas para dar seguimiento a los indicadores diseñados.	75%
2.8	Construcción de propuestas de incidencia desde las mesas permanentes	Procuradurías adjuntas específicas	<p><u>Propuestas elaboradas:</u></p> <p>La PADCI, junto con la Mesa LGBTI, llevaron a cabo diferentes propuestas de incidencia, tales como monitoreos para la implementación de lineamientos estratégicos para el abordaje de la salud de las personas LGBTI; la presentación de un proyecto de fortalecimiento de la Mesa LGBTI de la PDDH, ante la Embajada de Canadá; organización del Foro “Estigma y Discriminación hacia la Población LGBTI de El Salvador”; coordinaciones con el TSE para fungir como observadores y observadoras del proceso; estudio y actualización de documento sobre las reformas constitucionales a los artículos 32, 33 y 34 de la Constitución de la República.</p> <p>Asimismo, la Mesa Indígena realizó diferentes acciones de incidencia como la solicitud de una audiencia a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea para plantear la necesidad de agilizar la discusión de la futura ratificación de la reforma constitucional sobre pueblos indígenas; seguimiento al cumplimiento a las recomendaciones dadas por el CERD, en cuanto a pueblos indígenas, para la elaboración del correspondiente informe, en vista del examen que dicho Comité realizará al Estado salvadoreño; planificación de la conmemoración del Día Internacional de Pueblos Indígenas; y seguimiento al proceso de ratificación de la reforma constitucional, sobre el reconocimiento de la existencia y de los derechos de los pueblos indígenas de El Salvador, la cual se logró el 12 de junio del año 2014.</p> <p>La PADESC impulsó varias propuestas de incidencias desde las mesas que se encuentran bajo su coordinación como la organización de un Foro sobre “Los Derechos de las Personas Adultas Mayores: Avances y Desafíos”; Taller “Diálogo social para la construcción de una Política Nacional de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor” y propuesta en la que se establecen de forma preliminar los principales ejes temáticos de una política pública para las personas adultas mayores; propuesta de Anteproyecto de Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad; reinicio del proceso de discusión y análisis en la comisión para la formulación de reformas a la Ley de Equiparación de Oportunidades para las personas con discapacidad; participación en el Comité Técnico conformado por la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa para la elaboración del Anteproyecto de Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional. En octubre, se entregó a dicha comisión el documento del anteproyecto de Ley finalizado.</p> <p>La PADMA presentó diferentes piezas de correspondencia a la Asamblea Legislativa en conjunto con las Mesas Permanentes para la ratificación del reconocimiento del derecho humano al agua y a la alimentación.</p>		100%

Cuadro N° 8**Area estratégica 2: Análisis e incidencia de políticas públicas, normas y prácticas del estado**

Objetivo estratégico: Demandar un comportamiento estatal respetuoso de la dignidad humana, para que las instituciones del Estado cumplan las obligaciones establecidas en la Constitución de la República y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Estrategias Específicas: Proponer cambios en el comportamiento estatal en materia de derechos humanos y fomentar buenas prácticas estatales, a través del comportamiento de agentes del Estado para la erradicación de conductas violatorias de derechos humanos.

Nº	Nombre del Proyecto	Responsable directo	Resultados obtenidos	Nivel de ejecución (%)
2.9	Monitorear e incidir en la actividad legislativa, inversión pública y políticas públicas	Procuradurías adjuntas específicas	<p><u>Documentos elaborados:</u></p> <p>La PADCI en el tema de migrantes elaboró un plan de trabajo para la ejecución de convenio marco de cooperación con ACNUR. También tuvo incidencia en aspectos legislativos, de monitoreo para la implementación de buenas prácticas estatales, y emitió una opinión sobre el anteproyecto de Ley de Trata de Personas.</p> <p>La PADESC elaboró varios documentos en los que monitoreó la actividad legislativa e implementación de políticas públicas, entre los que se destacan: Opinión sobre las principales aspectos que hacen necesaria la ratificación del la reforma al artículo 69 de la Constitución de la República, relativa a los derecho a la alimentación adecuada y al agua; Opinión sobre los Anteproyectos de Ley de Indemnización Universal y Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria; Informe Alternativo El Salvador 2008-2013 [para Lista de Cuestiones] “A cinco años de entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”; Informe Alternativo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador (2006 - 2013) (Para Lista de Cuestiones); Opinión sobre el Anteproyecto de Decreto Transitorio para la revisión y reincorporación de los miembros de la Policía Nacional Civil.</p> <p>También ha participado en reuniones para la revisión de observaciones presentadas por distintos sectores al anteproyecto de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Además de acompañar a representantes de la Mesa de Personas Adultas Mayores a una reunión con la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adulto Mayor de la Asamblea Legislativa, en la que se discutieron las principales propuestas de modificación a la Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor.</p> <p>La PADMA realizó acompañamientos y elaboró documentos en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, principalmente en lo relacionado al derecho al agua y a la alimentación.</p>	100%

Fuente: elaborado a partir de los insumos institucionales, Unidad de la Realidad Nacional

Cuadro N° 9

Area Estratégica 3: Promoción y Educación en Derechos Humanos

Objetivo estratégico: Educar, promover y divulgar el conocimiento y acciones de incidencia sobre los Derechos Humanos, para su apropiación por la población, con miras a generar cultura de respeto y garantía en el Estado.

Estrategias Específicas: Fortalecer la educación y promoción en derechos humanos de los diferentes sectores; socialización sistemática de las resoluciones, informes especiales y otros documentos que fortalezcan la generación del conocimiento de la labor institucional; suscripción de Convenios con Universidades, Gobiernos locales y ONG; e incorporar la perspectiva de género en la educación y promoción de derechos humanos.

N°	Nombre del Proyecto	Responsable directo	Indicador	Resultados obtenidos	Nivel de ejecución (%)
3.6	Investigación, desarrollo y difusión de la memoria histórica	Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos	Política institucional elaborada	Procuraduría Adjunta elaboró propuesta de documento base para el diseño de la política. Este proyecto es una prioridad para el actual titular y ha sido replantado.	50%

Fuente: elaborado a partir de los insumos institucionales, Unidad de la Realidad Nacional

Cuadro N° 10

Area Estratégica 5: Fortalecimiento Institucional

Objetivo estratégico: Consolidar institucionalmente a la PDDH, mediante el fortalecimiento de todas las áreas y procesos claves en el ejercicio de sus atribuciones, encaminadas al logro de la eficiencia y eficacia de todo su trabajo.

Estrategias Específicas: Fortalecer la gestión y administración de los recursos con eficiencia; promover acciones que fortalezcan la identificación institucional y compromiso del personal; modernizar la estructura, procesos y sistemas institucionales; desarrollar mecanismos de comunicación estratégica interna y externa; y modernización del marco legal e institucional.

N°	Nombre del Proyecto	Responsable directo	Indicador	Resultados obtenidos	Nivel de ejecución (%)
5.5	Estudio de modernización y reorganización de la PDDH	Unidad de Planificación	Estudio elaborado	Se han realizado varias actividades como la revisión y actualización del marco legal; creación de una Unidad de género institucional en atención especializada para mujeres víctimas de violencia; reorganización del Sistema de Protección; se ha fortalecido al Departamento de Denuncias para dar acompañamiento, gestión y respuesta inmediata a las víctimas.	88%
5.8	Automatización de Biblioteca Institucional	Biblioteca Institucional	Sistema implementado	Levantamiento de inventario actualizado; y disponibilidad del equipo técnico de Biblioteca Institucional.	40%

Fuente: elaborado a partir de los insumos institucionales, Unidad de la Realidad Nacional

Capítulo IV

ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



“La institución nacional dispondrá de una infraestructura apropiada para el buen desempeño de sus funciones, y en particular de créditos suficientes. Esos créditos deberán destinarse principalmente a la dotación de personal y locales propios, a fin de lograr la autonomía respecto del Estado y no estar sujeta a controles financieros que podrían limitar su independencia”

Principios Relativos al Estatuto y Funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos (Principios de París)



Fotografía tomada el 7 de diciembre de 2013, en el evento conmemorativo del 32º Aniversario de la Masacre de El Mozote y el 65º Aniversario de la Aprobación y Proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

4.1 Asignación presupuestaria

Dado que el período de referencia del presente Informe de Labores traslapa los ejercicios fiscales 2013 y 2014, a partir de sendos Presupuestos Votados se ha estimado el presupuesto institucional, para el período, que de acuerdo al artículo 21 de la Ley de la PDDH le permite “adquirir los bienes necesarios para el cumplimiento de los fines de la institución y contratar los servicios que considere convenientes”. En este sentido, el presupuesto institucional para el período comprendido entre el 1 de junio de 2013 y el 31 de mayo de 2014 asciende a nueve millones ochenta y siete mil ochenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América con 72/100 (US \$ 9.087,088.92)

Reconociendo que los últimos años la PDDH ha contado con el apoyo de la Honorable Asamblea Legislativa para incrementar de manera sostenida el presupuesto asignado a la institución, cabe señalar que éste resulta insuficiente para garantizar la concreción de las apuestas estratégicas que esta administración se ha trazado para los siguientes años, dado que se requiere contar con un presupuesto institucional que permita responder al amplio mandato y funciones que la PDDH, ofreciendo servicios con efectividad, calidad y calidez a la población salvadoreña, y lograr una mayor incidencia en la protección de las personas y la institucionalidad del Estado.

La actual administración ha ejecutado con rigor políticas de austeridad y de reestructuración administrativa y técnica, las cuales han permitido maximizar las limitadas economías y los ahorros institucionales para cubrir algunas acciones en áreas desfinanciadas. A esta situación se agregan algunos factores que presionan sobre el limitado presupuesto institucional, como son: el encarecimiento de los bienes y servicios; el surgimiento de nuevas necesidades institucionales; la carencia de un edificio propio; el bajo nivel de inversión; la obsolescencia de los equipos y sistema informáticos, así como de la flota vehicular; los requerimientos de especialización del personal técnico, la cobertura del laudo arbitral; y las nuevas y mayores exigencias de intervención de la PDDH que impone la realidad, entre otras.

El presupuesto de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) votado por la Honorable Asamblea Legislativa para los ejercicios fiscales 2013 y 2014 fueron ocho millones novecientos mil dólares con 00/100 de los Estados Unidos de América (US \$ 8.900,000.00) y nueve millones ciento diecisiete mil cuatrocientos treinta con 00/100 millones de dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 9.117,430.00), respectivamente.

Considerando la estructura presupuestaria de la institución y su correspondiente asignación por rubros se constata que el 75.8% es destinado para Remuneraciones, lo cual es congruente con la funcionalidad de la Institución pues su principal objetivo es la prestación de servicios que propendan a la garantía del cumplimiento de los Derechos Humanos, en cuya función se involucran, desde sus especialidades y diferentes áreas de trabajo, la totalidad del personal de la PDDH.

Gráfico N° 1
Distribución de la Asignación Presupuestaria
PDDH por Línea de Trabajo 01/06/2013 al 31/05/2014



Fuente: Elaboración propia en base de información de la Unidad Financiera Institucional, PDDH

Para la adquisición de Bienes y Servicios durante el período de análisis, se asignó a la PDDH un monto de US \$ 2.115,665.35, que equivale al 23.28% del presupuesto institucional, cifra que resulta insuficiente para sufragar las compras que la institución requiere sin dejar de sacrificar la cobertura y atención que da a las personas usuarias, grupos específicos en situación de vulnerabilidad, incluyendo a las víctimas de violaciones a Derechos Humanos. Entre los principales gastos recogidos en este rubro se incluyen: arrendamiento de inmuebles, gastos de combustible y mantenimiento vehicular, y servicios de vigilancia, principalmente.

Poco menos del 1.0% del presupuesto es destinado para la Inversión en Activos Fijos (0.46%), Transferencias Corrientes (0.02%) y Gastos Financieros (0.44%). El rubro de Inversión en Activo Fijo comprende la adquisición de mobiliario y equipo necesario para el normal funcionamiento de las Delegaciones Departamentales y Locales, las oficinas de Tutela y administrativas; al igual que la adquisición de equipo informático y la adquisición de unidades de transporte, elementos fundamentales para fortalecer las capacidades institucionales de cara a brindar un adecuado servicio a la población demandante.

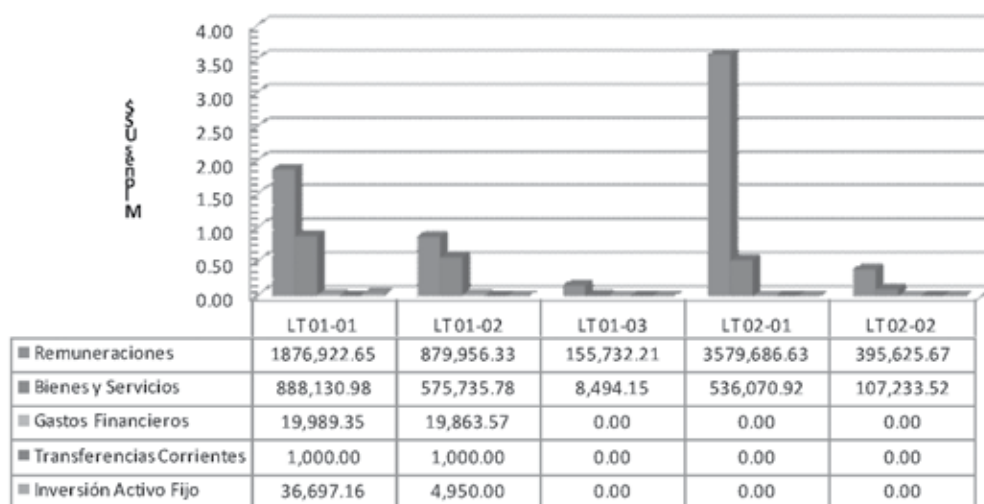
Entre el año fiscal 2013 y 2014 se han registrado pequeños cambios en la estructura del presupuesto

institucional que merecen comentarse para dar un mejor seguimiento a la ejecución presupuestaria. El presupuesto votado 2013 estaba integrado por seis líneas de trabajo, agrupadas en tres unidades presupuestarias: Dirección y Administración Institucional (01), Defensa, Protección, Vigilancia y Educación de los Derechos Humanos (02) y Financiamiento de Gastos Imprevistos (03). La primera incluía tres líneas de trabajo: Dirección superior (LT 01-01), Administración General (LT 01-02) y Unidad Financiera Institucional (LT 01-03); en la segunda unidad presupuestaria se incluían: Monitoreo y Protección de los Derechos Humanos (LT 02-01) y Educación, Promoción e Investigación de los derechos humanos (LT 02-02); y la tercera unidad presupuestaria, le correspondía la línea de Gastos Imprevistos (LT 03-01)

Luego, a partir de enero de 2014 y con el propósito de evitar la dispersión de fondos en múltiples líneas de trabajo de carácter homogéneo, de la Unidad Presupuestaria 01 se fusionaron las tres líneas de trabajo en una sola denominada Dirección Superior. Por lo demás, la estructura vigente continúa igual, estructurada en tres unidades presupuestarias y ahora con cuatro líneas de trabajo²⁰⁸.

²⁰⁸ Cabe mencionar que dado al carácter de la línea de Gastos Imprevistos, su nivel de ejecución es cero, ya que los fondos son ejecutados en otras necesidades institucionales para las cuales el presupuesto aprobado no es suficiente, tal como lo define la naturaleza de esta línea y unidad presupuestaria.

Gráfico N° 2
Distribución de la Asignación Presupuestaria
PDDH por Rubro y Línea de Trabajo 01/06/2013 al 31/05/2014



Fuente: Elaboración propia en base de información de la Unidad Financiera Institucional, PDDH

El presupuesto institucional se concentra principalmente en la línea de trabajo 02-01, que absorbe el 42.3% del presupuesto total para financiar las actividades de monitoreo y protección de los derechos humanos, que está asociado con uno de los dos objetivos misionales de la PDDH. El 31.1% corresponde a la Dirección Superior, el 16.3% a la Administración General, y el 1.8% para la Unidad Financiera Institucional y el 5.5% complementario está asignado a Educación, promoción e investigación de derechos humanos, que está referido al otro objetivo misional de la institución.

4.2 Ejecución presupuestaria

Durante el período junio de 2013 a mayo de 2014, la PDDH ejecutó US \$ 8.583,158.86 de su presupuesto asignado, lo cual representa un nivel de ejecución del 94.14%. Si consideramos la ejecución por rubro tenemos los siguientes

niveles de ejecución: 97.15% en Remuneraciones, 85.54% en Bienes y Servicios, 95.7% en Gastos Financieros, 100% en Transferencias Corrientes y 99.88% en Inversiones en Activos Fijos.

Cabe señalar que durante la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2013 se enfrentaron algunas situaciones que incidieron negativamente en la programación de la ejecución presupuestaria durante el período. Uno de los principales factores a tener en cuenta es que según lo establecido en el art. 13 de la Ley General de Presupuesto 2013, fueron congelados US \$ 218,098.50, equivalentes al 10.0% de las asignaciones del presupuesto votado en el rubro 54, destinado para adquisiciones de bienes y servicios; razón por la cual no pudieron ser invertidos en las actividades institucionales programadas y consecuentemente incidieron en el bajo nivel de ejecución presupuestaria de este rubro: 85.54%.

Cuadro N°11
Ejecución Presupuestaria PDDH 01/06/2013 al 31/05/2014

Rubro	Concepto	LT 01-01	LT 01-02	LT 01-03	LT 02-01	LT 02-02	Total
		Dirección superior	Administración general	UFI	Monitoreo y protección DDHH	Educación, Promoción e Investigación DDHH	
51	Remuneraciones	1743,381.56	872,311.20	155,091.61	3535,381.33	385,546.29	6691,711.99
54	Bienes y Servicios	735,005.86	470,491.58	7,664.59	498,082.92	98,445.22	1809,690.17
55	Gastos Financieros	19,989.35	18,168.03	0	0	0	38,157.38
56	Transferencias Corrientes	1,000.00	1,000.00	0	0	0	2,000.00
61	Inversiones Activo Fijo	36,649.32	4,950.00	0	0	0	41,599.32
TOTAL		2536,026.09	1366,920.81	162,756.20	4033,464.25	483,991.51	8583,158.86

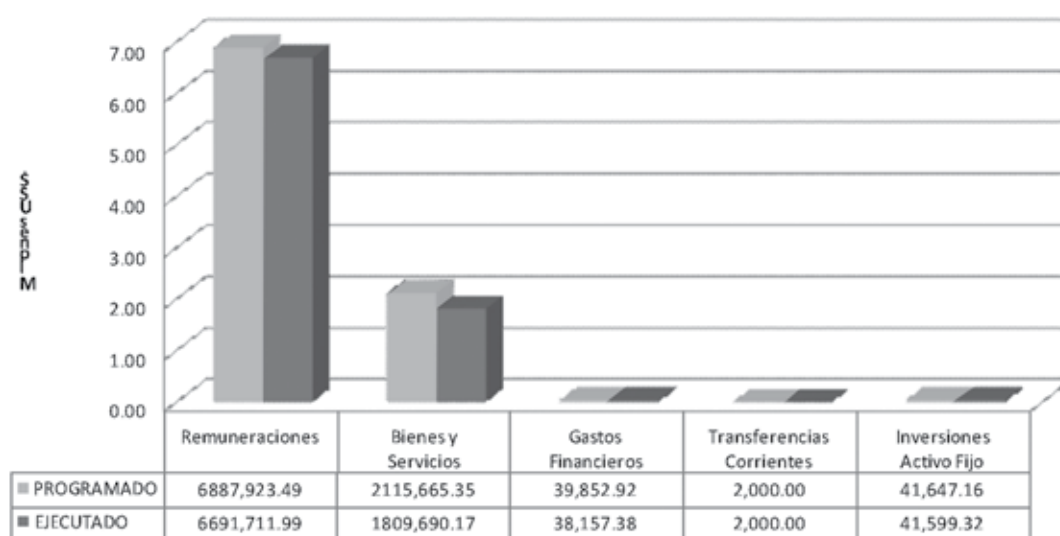
Fuente: Elaboración propia en base de información de la Unidad Financiera Institucional, PDDH

Aunado a lo anterior, entre los meses de julio y agosto 2013, la institución se encontró en un periodo de acefalía, por la falta de nombramiento del titular, que dificultó en gran medida el desarrollo normal de las actividades institucionales, incluyendo la ejecución presupuestaria. Ambas

situaciones incidieron negativamente en una mejor ejecución presupuestaria durante el periodo de junio a diciembre 2013, de manera que el total de fondos no utilizados durante el año pasado ascendió a US \$ 326,818.41.

112

Gráfico N° 3
Ejecución Presupuestaria PDDH
01/06/2013 al 31/05/2014



Fuente: Elaboración propia en base de información de la Unidad Financiera Institucional, PDDH

Para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de mayo de 2014, los saldos pendientes de ejecución reflejan un monto de US \$ 177,111.65, el cual ha sido generado a base de medidas internas de austeridad para atender necesidades estratégicas de mejoramiento institucional.

Según la información procesada por la Unidad Financiera Institucional (UFI) de la PDDH, y pese a las limitaciones previamente expuestas, esta institución del Estado tiene un eficiente nivel de ejecución presupuestaria.

4.3 Cooperación externa

Durante el período informado, la PDDH ejecutó tres proyectos gestionados con la organismos de cooperación internacional por un monto de

US \$ 38,218.14, los cuales están orientados a fortalecer capacidades técnicas institucionales para fortalecer el proceso de tutela de los derechos humanos de personas viviendo con VIH-SIDA; la elaboración de un informe especial sobre impacto de la violencia en la protección de los derechos humanos de la niñez y el análisis de contexto de derechos humanos y la situación de grupos específicos en el país.

Los organismos que apoyaron durante el período estas acciones de la PDDH son el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Los proyectos, con su respectiva denominación, código y monto ejecutado se presentan en la tabla siguiente:

Cuadro N°12
Ejecución Presupuestaria Proyectos de Donación
Período Mayo 2013 a Junio 2014

CÓDIGO	PROYECTO	EJECUCIÓN
40620	ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORT. EL PROCESO DE TUTELA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONA CON VIH	\$ 13,424.04
40640	INFORME ESPECIAL SOBRE EL IMPACTO DE LA VIOLENCIA EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ	\$ 18,994.10
40687	ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE EL ANÁLISIS DE CONTEXTO DE DERECHOS HUMANOS Y LA SITUACIÓN DE GRUPOS ESPECÍFICOS EN EL SALVADOR	\$ 5,800.00
	TOTAL DE EJECUCIÓN	<u>\$ 38,218.14</u>

4.4 Gestiones de compra y contrataciones

Durante el período de este Informe de Labores la PDDH, a través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), realizó

326 procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios, de los cuales 6 corresponden a Licitaciones Públicas, una Compra Directa y se autorizaron 319 órdenes de compra bajo la modalidad de Libre Gestión.

Cuadro N° 13
Gestiones de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales
1 de junio 2013 al 31 de mayo 2014

Tipo de Gestión	Libre gestión	Compra Directa	Licitación Pública	Total gestiones	Porcentajes tipo de fondos
Fondos GOES	313	1	6	320	88.6%
Fondos de Cooperación Externa	6	0	0	6	11.4%
Total	319	1	6	326	100%
Porcentaje	97.85%	0.31%	1.84%	100%	

Fuente: Elaboración propia en base a información de la UACI de la PDDH

El 97.85% de los procesos gestionados se realizaron por Libre Gestión, 1.84% por Licitaciones Públicas y 0.31% por Compra Directa. Además, del total de procesos gestionados, 320 provienen de Fondos GOES, que equivalen al 88.6%, y 6 provienen de Fondos de Cooperación Externa, representando el complementario 11.4%.

Los principales rubros atendidos son alquiler de inmuebles, servicios básicos, mantenimiento y reparación de vehículos, servicios de vigilancia y combustible y lubricantes.

Capítulo
V

LOGROS PRINCIPALES POR ÁREAS ESTRATÉGICAS



“Como producto de la verificación desarrollada en las dos jornadas electorales, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos declara que no se encontraron evidencias de fraude ni graves irregularidades que afectasen los estándares de limpieza y transparencia que acompañaron de inicio a fin el proceso electoral ”

Comunicado público en relación al escrutinio final de la segunda jornada para la elección del Presidente y Vicepresidente de la República, San Salvador, 19 de marzo de 2014



Personal de PDDH realiza verificación de los actos de protesta de militantes descontentos con el resultado del escrutinio final de actas, llevado a cabo en las veintitrés mesas de trabajo instaladas en la sede del Tribunal Supremo Electoral

En este apartado se destacan los principales logros institucionales alcanzados en el período que comprende este Informe de Labores, que se encuentran en función de las cinco áreas estratégicas de la planificación institucional presentadas en el capítulo anterior. El objetivo del capítulo es comentar la ejecución de proyectos, mostrar datos estadísticos de las actividades rutinarias y el número de población beneficiada de los servicios prestados por esta Procuraduría.

5.1. Protección de los derechos humanos

En este período se reportaron logros importantes en el área de protección de los derechos humanos, correspondiente al Plan Estratégico Institucional 2011-2014, los cuales se orientaron en general a: mejorar la respuesta institucional en la atención de casos y situaciones; elaborar políticas internas para el abordaje de temáticas específicas; elaborar estudios para activar mecanismos de protección nacionales e internacionales de derechos humanos; e implementar estrategias de atención a víctimas.

Sin desconocer el abordaje individual para dar trámite a las denuncias recibidas por esta Procuraduría de acuerdo a su mandato, en los siguientes años se impulsará un proceso de transformación que fortalezca este modelo de protección, de manera tal que éste pueda brindar respuestas más efectivas y oportunas a las víctimas de violación a derechos humanos e incidir en las políticas públicas, por medio de una gestión eficiente, integral y articulada con las organizaciones de la sociedad civil, las demás instituciones del Estado y los organismos internacionales sobre la materia.

Tomando en cuenta lo anterior, la Procuraduría se ha fortalecido a través del impulso de estrategias como la aplicación de nuevas relaciones con la población y organismos internacionales de derechos humanos, optimización en el uso de los recursos, adecuación de los procedimientos de protección para dar respuestas efectivas a las denuncias sobre casos individuales de violación a derechos humanos, a la vez que ha impulsado el análisis situacional y la emisión de recomendaciones de incidencia en las políticas de gobierno o el comportamiento de las instituciones.

En tal sentido, se ha iniciado un proceso de revisión del modelo organizacional y de los procedimientos de protección a derechos humanos, lo cual ha implicado la adopción de algunas medidas como la reorganización de algunas áreas en la sede central con el propósito de dar respuesta efectiva y oportuna a las presuntas víctimas de violación a derechos humanos; realización de inventarios para identificar la mora de casos de expedientes y dictar criterios para su tramitación y resolución; identificación y estandarización de los procesos institucionales y revisión de la normativa interna para adecuarla a las necesidades institucionales y a las demandas de la realidad nacional.

A continuación, se presentan los resultados de las actividades rutinarias pero indispensables para alcanzar los objetivos de protección derechos humanos, de acuerdo al funcionamiento de los mecanismos, procedimientos y acciones que forman parte del Sistema de Protección de Derechos Humanos de la PDDH, en las que participan las siguientes unidades organizativas: Departamento de Denuncias; Departamento de Procuración; Departamento de Seguimiento; Departamento de Verificación Penitenciaria e Internamiento de Menores; Departamento de Verificación y Observación Preventiva; Departamento de VIH y Derechos Humanos; Departamento de Personas con Discapacidad y Derechos Humanos; Unidad Técnica del Despacho; Unidad de Control de Procedimientos; Unidad de Migrantes; Departamento de la Realidad Nacional; Delegaciones Departamentales y Locales; Procuradurías Adjuntas Específicas; Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos; y Despacho del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.

a) Tramitación de casos de presuntas violaciones a derechos humanos

De acuerdo a la obligación legal de rendir anualmente a la Asamblea Legislativa un informe en el que se detallen las actuaciones en la protección de los derechos humanos, artículo 49 de la Ley de la PDDH,

se presenta un detalle consolidado de las acciones ejercidas en el mecanismo de tramitación de casos de presuntas violaciones a derechos humanos, que forma parte del Sistema de Protección de los Derechos Humanos de la PDDH, en el período que comprende el presente Informe Anual.

Los resultados se obtienen de dos fuentes principales, el primero por los reportes automáticos generados por el “Sistema Informático Integrado de Gestión (SIIG)”, que contiene una base de datos sobre denuncias admitidas y resoluciones iniciales y finales que son filtrados en consolidados a nivel nacional, departamental y municipal. Y en segundo lugar, los informes de actividades realizadas por las unidades operativas del Sistema de Protección. En los siguientes párrafos, se presentarán análisis

sobre el trámite de expedientes abiertos y archivados en el período del 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014.

En el siguiente cuadro se presenta un consolidado nacional sobre la cantidad de denuncias recibidas en orden numérico descendente respecto al número de denuncias admitidas, luego se analizarán las modalidades de atención y los tipos de resoluciones de acuerdo a las variables de análisis que brinda el SIIG. Se advierte, que la cantidad de expedientes o casos no concuerdan con la cantidad de derechos e instituciones, porque cada expediente o caso puede contener más de una víctima señalada, más de un derecho humano presuntamente afectado y más de una autoridad señalada o recomendada.

Cuadro N° 14
Reporte de orientaciones y trámite de expedientes a nivel nacional

Delegación	Orientaciones Legales	Denuncias Admitidas	Con Oficio	Resolución Inicial	Resolución Final	Archivo	Buenos Oficios	Medida Cautelar
Ahuachapán	589	134	291	5	71	34	0	0
Cabañas	181	58	141	10	19	0	0	0
Chalatenango	234	71	157	13	43	0	0	0
Cuscatlán	307	105	168	14	2	0	0	2
La Libertad	501	84	53	65	26	0	0	0
La Paz	615	181	505	17	50	0	0	0
La Unión	329	100	181	1	17	9	2	0
Morazán	271	114	211	6	84	0	0	0
San Miguel	496	258	357	38	22	0	0	1
San Salvador	544	369	25	49	4	0	0	2
San Vicente	359	153	129	24	21	0	0	0
Santa Ana	683	319	369	40	152	0	0	0
Sonsonate	570	153	360	12	64	0	0	0
Usulután	1109	174	346	6	117	0	0	0
Santa Rosa de Lima	330	57	165	6	16	0	0	1
Apopa	537	65	44	56	0	0	0	0
Soyapango	288	84	135	0	22	0	0	0
Metapán	264	70	211	25	89	0	0	0
TOTAL	8,207	2,549	3,848	387^(a)	819^(a)	43	2	6

Fuente: Informes de actividades de las delegaciones departamentales y locales, así como reportes del Sistema Informático Integrado de Gestión.

(a) Estos totales se refieren a proyectos de resoluciones iniciales y finales pendientes de firma, como a resoluciones ya firmadas por el Procurador.

i. Orientaciones legales

La figura de la orientación legal se encuentra regulada en los artículos 194, romano I, ordinal 3º de la Constitución; artículos 11, ordinal 3º y 26 ordinal 3º de la Ley de la PDDH; 6 y 18 letra a) del Reglamento para la Aplicación de Procedimientos del Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (en adelante, “Reglamento para la Aplicación de Procedimientos”²⁰⁹).

Esta modalidad de atención se aplica cuando los hechos denunciados no son competencia de la institución, pero se estima necesario asesorar a las personas usuarias sobre la activación oportuna de instancias administrativas o jurisdiccionales. Esta facultad legal puede llevar incluso, según la naturaleza de la orientación, a buscar una comunicación directa con las autoridades señaladas por medio de oficio, a fin de que éstas adopten las medidas de su competencia e informen sobre las mismas.

En este período, el personal jurídico atendió a nivel nacional a 10,756 casos, de los cuales 8,207 correspondieron a orientaciones legales y 2,549 a denuncias admitidas, aproximadamente el 76% y el 24%, respectivamente. En relación al período anterior, se experimentó una disminución de 952 casos, de los cuales 445 pertenecieron a orientaciones legales y 507 a denuncias. Lo anterior, estarían indicando que las orientaciones legales continúan siendo una de las principales actividades institucionales de prevención de violaciones a los derechos humanos.

ii. Denuncias admitidas

La fase inicial del mecanismo de protección se encuentra regulada en los artículos del 4

al 31 del Reglamento para la Aplicación de Procedimientos. Comienza con la apertura de casos mediante denuncia o de manera oficiosa sobre hechos que impliquen presuntas afectaciones a derechos humanos, incluyendo un examen preliminar, el pronunciamiento inicial y otras comunicaciones oficiales.

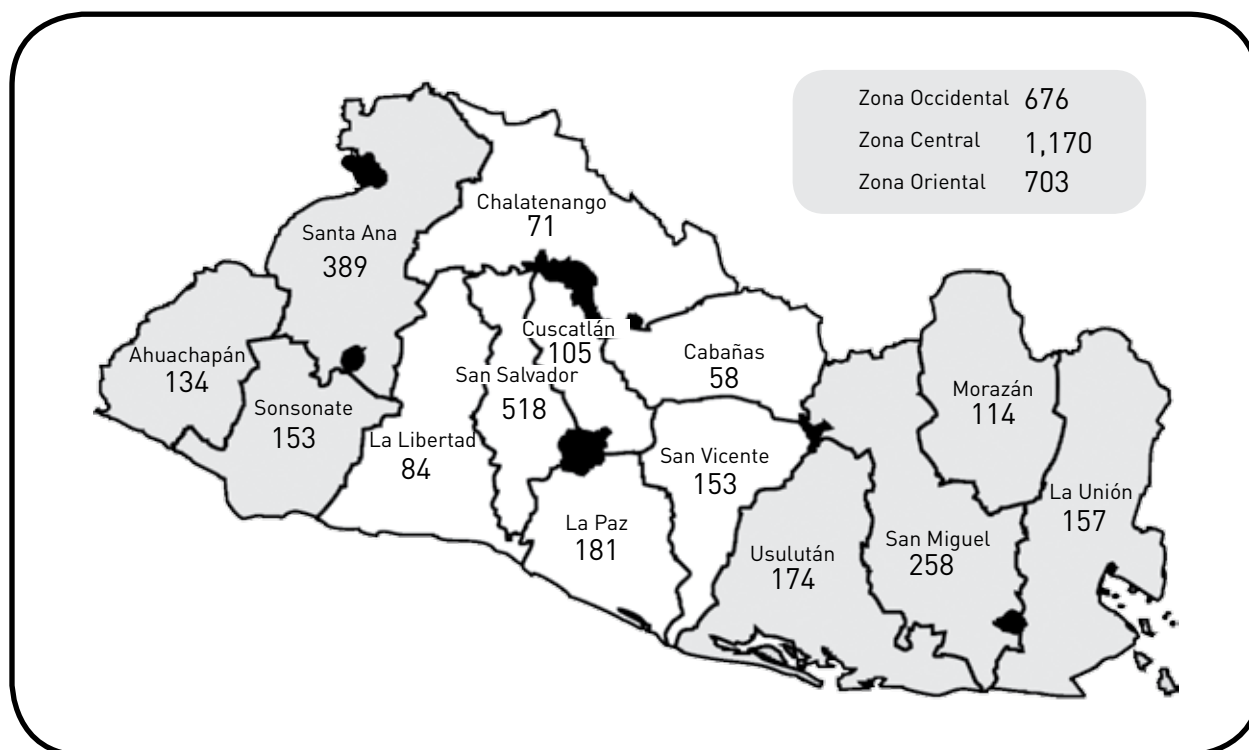
En este período, a nivel nacional se admitieron 2,549 denuncias, de las cuales 2,350 fueron interpuestas de manera personal, telefónica, carta, electrónica y fax; y 199 por oficio, ya sea por medio de informes, monitoreo de medios de comunicación y aviso.

El perfil de las personas denunciantes y las víctimas continuaron repitiendo la misma caracterización de años anteriores. En la mayoría hombres, duplicando los casos donde fueron mujeres; la naturaleza de los casos presentados o iniciados por oficios en su mayoría fue de naturaleza individual; de acuerdo al rango de edad, la mayoría de las víctimas se ubicaron entre las edades de 0 a 18 años; es decir, referido principalmente a la población infantil, niños, niñas y adolescentes, seguido del grupo entre 25 a 60 años; en el caso de los denunciantes, diferente a la anterior relación se ubicó preferentemente en el rango de 25 a 60 años. Respecto a su profesión u ocupación, en la mayoría de los casos fueron amas de casas, empleados, comerciantes, estudiantes, agricultores y abogados.

A nivel geográfico, el siguiente mapa presenta la distribución de denuncias admitidas por las diecisiete delegaciones departamentales y locales, así como las de sede central por medio de los Departamentos de Tutela, Procuradurías Adjuntas Específicas, Departamento de Verificación Penitenciaria, Departamento de Observación Preventiva y Atención de Crisis, Unidad de Migrantes, Unidad de Derechos Políticos y personal jurídico de turno.

²⁰⁹ Publicado en el Diario Oficial número 32, del 16 de febrero de 2010, tomo N° 386, páginas 167 a la 187.

Ilustración N°2
Mapa sobre denuncias admitidas por departamentos y regiones



Fuente: Reporte SIIG y Delegaciones Departamentales y Locales

120

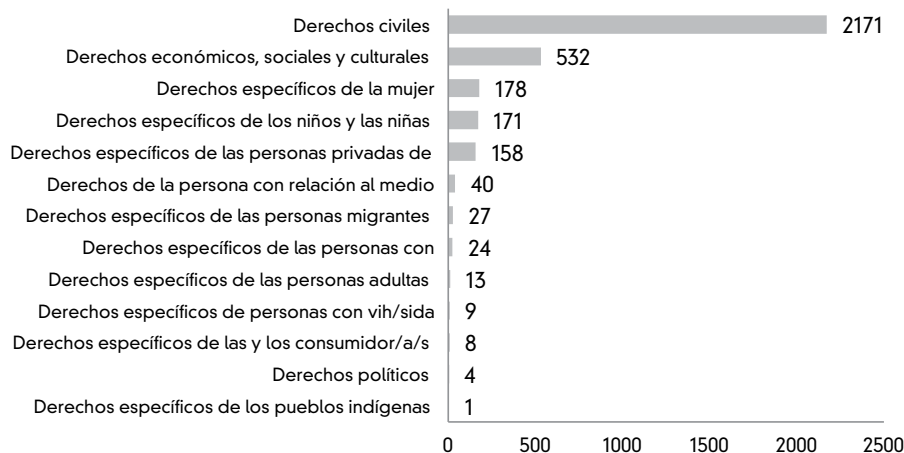
El anterior mapa visualiza el número de denuncias admitidas por zonas y departamentos. A nivel nacional, la zona central del país concentra la mayor cantidad de denuncias con 1,170. El Departamento de San Salvador se ubica con el mayor número de denuncias con 518 casos que incluyen los resultados obtenidos de las Delegaciones Locales de los Municipios de Soyapango y Apopa, que reportaron 84 y 65 respectivamente.

Luego, la zona oriental con 703, visualizando el trabajo de la Delegación Local de Santa Rosa de Lima, ubicada en el Departamento de La Unión, reportando en este período 57 denuncias. Finalmente, la zona occidental con 676, destacando el trabajo de otras de las Delegaciones Locales para este mismo período, ubicada en el Municipio de Metapán, Departamento de Santa Ana, reportando para este período 70 denuncias.

▪ *Derechos humanos más denunciados*

En este período, respecto a la clasificación de derechos humanos y libertades fundamentales, se ubicaron nuevamente con la mayoría de denuncias los derechos civiles con 2,717, seguido de los derechos económicos, sociales y culturales con 532; derechos específicos de la mujer con 178; derechos específicos de los niños, niñas y adolescentes con 171; derechos de las personas privadas de libertad con 158; derechos de la persona con relación al medio ambiente con 40; derechos de las personas migrantes con 27; derechos de las personas con discapacidad 24; derechos de las personas adultas mayores con 13; derechos de las personas con VIH/SIDA9; derechos de las personas consumidoras con 8; y los derechos políticos con 4. A continuación, se presentan en una gráfica los anteriores datos.

Gráfica N° 4
Recepción de casos más denunciados por área temática
1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014



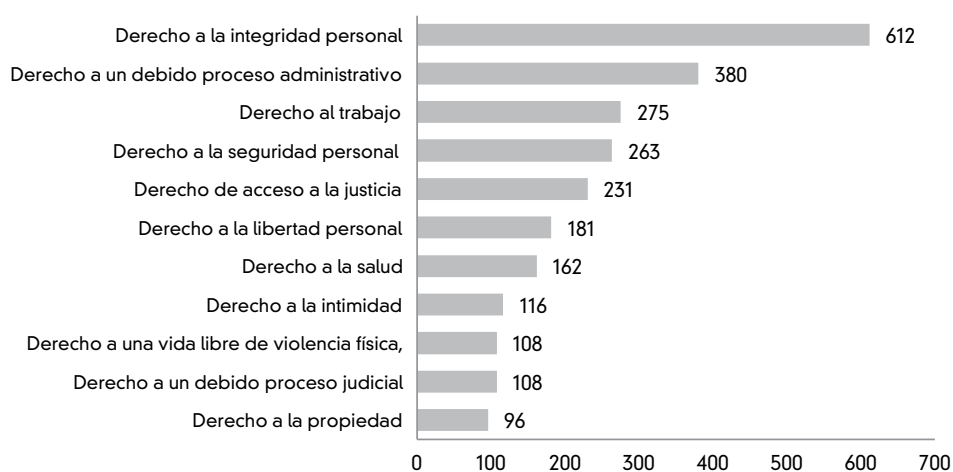
Fuente: Reporte de denuncias SIIG

A nivel particular, se reportaron más denuncias sobre los derechos humanos tradicionalmente denunciados y el escalonamiento de algunos derechos a las primeras posiciones. Tal como se presenta en la siguiente gráfica, el derecho a la integridad personal se ubica como el más señalado con 612 denuncias admitidas; luego el derecho al debido proceso administrativo con 380; el derecho al trabajo con 275; el derecho a la seguridad personal con 263; el derecho de acceso a la justicia con 231, la libertad personal con 181; el derecho a la salud con 162; derecho a la

intimidad con 116; derecho a un debido proceso judicial y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual con 108 cada uno, y derecho a la propiedad con 96; entre otros.

A continuación, se presenta en una gráfica los datos mencionados anteriormente, cabe indicar que esta lista de derechos humanos no se agota, pero por motivos de espacio solamente se relacionan los que reportan mayor frecuencia en la recepción de denuncias.

Gráfica N° 5
Recepción de casos más denunciados por derechos específicos
1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014



Fuente: Reporte de denuncias SIIG

En la recepción de casos se identifican uno o varios hechos violatorios, a continuación se enuncian los hechos de los primeros cinco derechos de la gráfica anterior. Respecto al derecho a la integridad personal ubicado como el principal derecho denunciado, casi la mayoría de casos son atribuidos a los hechos violatorios de malos tratos con 434; uso desproporcionado de la fuerza con 77; tratos crueles, inhumanos o degradantes con 38; tortura con 6. En el caso del derecho a un debido proceso administrativo fue denunciado por inobservancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica con 95, inobservancia del derecho de defensa con 56, del derecho de audiencia con 52, transparencia con 51, inobservancia del principio de imparcialidad con 17, inobservancia del principio de igualdad y no discriminación y de celeridad procesal con 14, eficacia procesal con 11; entre otros.

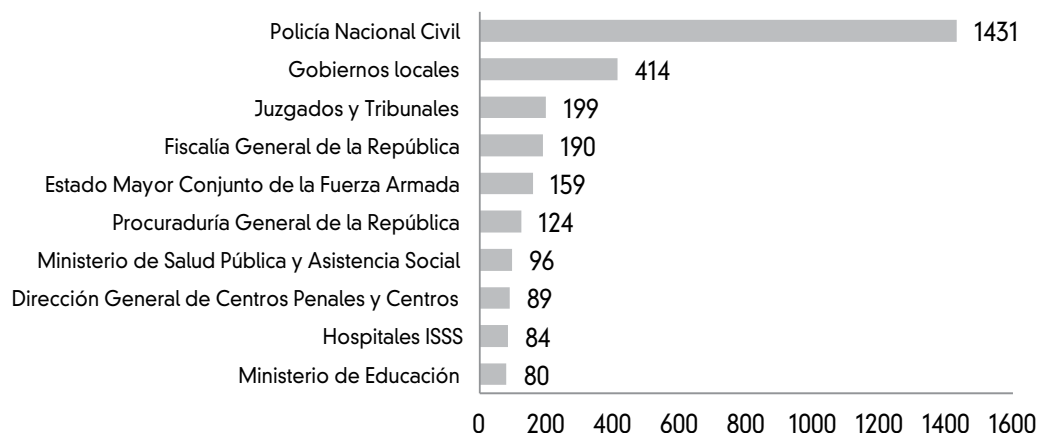
Asimismo, el derecho al trabajo por actos ilegales o atentatorios contra la estabilidad laboral con 111; denegación de prestaciones o derechos laborales con 24; discriminación laboral con 20; acoso laboral ejercido en los centros de trabajo con 17; malos tratos con 16, entre otros. El derecho a la seguridad personal por persecuciones o indagaciones ilegales con 120; intimidación con 72 y coacción con 33.

El derecho de acceso a la justicia por omisiones o negligencia de funcionarios o agentes del Estado frente a la reclamación de una persona para la protección de derechos con 130; negligencia o retardación injustificada en la investigación por parte de las instituciones competentes con 31; por denegación indebida del acceso a la justicia constitucional y administrativa con 14; dilaciones indebidas para juzgar y hacer cumplir lo juzgado con 11; entre otros.

■ *Instituciones estatales más denunciadas*

Por otro lado, al observar el reporte por institución denunciada, el sistema refleja que la institución que más ha sido señalada como presunta violadora de derechos humanos sigue siendo la Policía Nacional Civil (PNC) con 1,431; seguido de los Gobiernos locales con 414; los Juzgados y Tribunales con 199; la Fiscalía General de la República (FGR) con 190; el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada con 159; la Procuraduría General de la República (PGR) con 124; el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con 96; la Dirección General de Centros Penales y Centros Penitenciarios Específicos con 89; el Instituto Salvadoreño del Seguro Social con 84; y el Ministerio de Educación (MINED) con 84.

Gráfica N° 6
Recepción de casos más denunciados por instituciones públicas
1 de junio de 2013 a 31 de mayo de 2014



Fuente: Reporte de denuncias SIIG

Esta Procuraduría acumuló gran cantidad de denuncias por presuntas violaciones a los derechos civiles, tal como se ha mencionado anteriormente; esta tendencia se observa también a nivel de instituciones públicas denunciadas. A continuación, se hace el desglose de las tres instituciones con mayor nivel de denuncias por hechos violatorios.

En primer lugar, se ubica la Policía Nacional Civil con 1,431 denuncias, de las cuales 487 fueron por integridad personal; 237 por seguridad personal; 156 por libertad personal; 101 por derecho a la intimidad; 61 por un debido proceso administrativo; 51 por el derecho a la verdad; 50 por el derecho a la mujer a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual; 42 por derecho a la propiedad; 31 por el derecho a no recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes, y 29 por acceso a la justicia sin discriminación, entre otros.

En segundo lugar, se posicionan para este período, los Gobiernos locales con 414, en particular, se recibieron 124 denuncias por el derecho a un debido proceso administrativo; 90 por derecho al trabajo; 40 por integridad personal; 35 por el derecho a la propiedad; 23 por el derecho a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual; 22 por el derecho de petición; 14 por protección al medio ambiente; 7 por vivienda y 5 seguridad personal y por acceso al agua, entre otras.

En tercer lugar, se ubican los juzgados y tribunales con 199 denuncias que tienen que ver en gran medida con el derecho a un debido proceso judicial con 80; acceso a la justicia con 28 casos; derecho a un debido proceso administrativo con 11; garantías al debido proceso con 9; derecho a la libertad personal con 8; derecho a la integridad personal con 7, entre otros.

iii. Oficios

Los Oficios pretenden ser un documento de comunicación simple o sencillo entre

la Procuraduría y las autoridades señaladas como violadoras de derechos humanos, con la finalidad de hacer cesar o adoptar medidas de manera rápida una afectación de derechos humanos; también cumplen con la función de solicitar información adicional para completar datos sobre la denuncia recibida que permitan establecer argumentos suficientes para admitirla.

Este medio de comunicación ha sido utilizado mucho en las Delegaciones Departamentales y Locales agilizando el procedimiento normal, el cual establece que después de admitida la denuncia se procede a la elaboración de una resolución inicial pasando necesariamente por el filtro de la Unidad Técnica del Despacho que le compete revisar y retomar la doctrina institucional y jurisprudencia nacional e internacional, para luego enviarlo a firma al Despacho del señor Procurador.

La práctica ha indicado que en el caso de las Delegaciones Departamentales y Locales, el trámite de denuncias por medio de oficios ha permitido dar una respuesta más efectiva a las víctimas. De esta manera, tal como se ha constatado en el cuadro inicial de tramitación de expedientes, se puede observar que los oficios reportan 3,848 casos, superando inclusive a las mismas resoluciones iniciales. La razón de este incremento, además de inyectar mayor celeridad al proceso y respuesta a las víctimas, se debe a que en cada oficio sólo se notifica a una autoridad, en cambio en las resoluciones puede incluir más de una autoridad, incrementándose el número de oficios por tantas instancias gubernamentales tengan que ver con la posible violación a derechos humanos.

iv. Resoluciones iniciales

En la fase inicial del mecanismo de protección de derechos humanos, luego de la apertura de los casos, se emite un pronunciamiento, el cual puede consistir en una resolución u otro tipo de

comunicación. En este caso, nos referimos a las resoluciones iniciales que tienen por objetivo solicitar información a las autoridades públicas denunciadas y ejercer acciones de protección cuando se estime necesario y oportuno.

La resolución inicial contiene las siguientes acciones: declara la admisibilidad del caso, salvo aquellos iniciados de oficio; solicita informe a las autoridades señaladas sobre los hechos y las medidas adoptadas; solicita informes o cooperación a otras autoridades o instituciones; dicta recomendaciones y medidas adecuadas a las autoridades señaladas para promover la investigación de los hechos; promueve el cese de la presunta violación denunciada, previene daños graves e irreparables para la presunta víctima y activa el cumplimiento de los deberes del Estado; recomienda la reparación integral del daño causado; e informa sobre los hechos a otras autoridades competentes para la adopción de medidas.

En este período, se emitieron 387 resoluciones iniciales de las cuales 226 ya han sido firmadas y las restantes en proceso. El análisis estadístico puede realizarse a través de dos variables principales: por derecho humano presuntamente

afectado y por institución pública recomendada y notificada.

■ *Derechos humanos más señalados en resoluciones iniciales*

El derecho a la integridad personal fue el derecho más señalado en resoluciones iniciales con 96 casos; seguido del derecho al trabajo con 88 casos; derecho a la seguridad personal con 86 casos; derecho al debido proceso administrativo con 77; derecho a la salud con 56; derecho al acceso a la justicia con 41; derecho a la libertad personal 40; derecho de la mujer a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual con 35; derecho a la vida con 29; derecho a la propiedad y derecho a la integridad con 25 cada uno; entre otros.

A continuación se presentan en una gráfica, los derechos humanos presuntamente más vulnerados a partir de resoluciones iniciales, se advierte que la frecuencia de recomendaciones y notificaciones por derecho humano, no corresponde con el total de resoluciones iniciales, debido a que en cada expediente puede existir más de un señalamiento de presuntas violaciones a derechos humanos.

Gráfica N° 7
Derechos humanos más señalados en resoluciones iniciales
1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014



Fuente: Datos proporcionados por el Departamento de Seguimiento, PDDH

En el período, el área temática que reportó mayor frecuencia en la elaboración de resoluciones iniciales fueron los *derechos económicos, sociales y culturales*, entre los hechos violatorios más destacados se encuentran: actos ilegales atentatorios contra la estabilidad laboral; denegación de prestaciones o derechos laborales; acoso laboral ejercido en los centros de trabajo; tolerancia estatal ante condiciones indignas de trabajo; hostigamiento y/o violencia sexual en los centros de trabajo; discriminación laboral, negligencia médica, desabastecimiento de medicamentos, denegación de asistencia médica, entre otras.

En segundo lugar, se ubican los *derechos civiles*. Entre los hechos violatorios más destacados se encuentran: malos tratos; persecuciones o indagaciones ilegales; realización de registros indebidos; uso desproporcionado de la fuerza; tratos crueles inhumanos o degradantes; allanamiento de morada o registros de manera ilegal o arbitraria; detención arbitraria e ilegal; coacción e intimidación; persecuciones o indagaciones policiales; omisión o negligencia de funcionarios o agentes del Estado frente a la reclamación de una persona para la protección de sus derechos; entre otros.

En tercer lugar, se ubican los *derechos específicos de niñez y adolescencia*, los hechos violatorios más destacados se encuentran: tratos crueles, inhumanos o degradantes; malos tratos; detención ilegal y arbitraria; tolerancia u omisión del Estado ante abusos, descuido o maltrato ocurrido en el seno familiar, en centros públicos o privados responsables de su cuidado personal; permanencia junto con adultos durante la detención administrativa; tolerancia, negligencia y omisión del Estado para prevenir, investigar y sancionar todo tipo de abuso, descuido o maltrato; omisión o negligencia del Estado para la investigación de la desaparición, entre otros.

En cuarto lugar, se ubican los *derechos específicos de las mujeres*, los hechos violatorios más destacados

se encuentran: actos ilegales o atentatorios contra la estabilidad laboral; acoso laboral ejercido en los centros de trabajo; maltrato físico, psicológico o moral ejercido por agentes del Estado prevaleciendo de sus prerrogativas; acoso o abuso sexual ejercido por agentes del Estado prevaleciendo de sus prerrogativas; acoso policial; malos tratos, entre otros.

En quinto lugar, se ubican los *derechos específicos de las personas privadas de libertad*, más destacados se encuentran: tratos crueles, inhumanos y degradantes; privación de acceso a la alimentación; trato degradante; malos tratos; inobservancia del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; negación de las autoridades a suministrar el régimen alimenticio adecuado para la preservación de la salud, entre otros.

En sexto lugar, se ubican los *derechos de la persona con relación al medio ambiente*, entre los hechos violatorios más destacados se encuentran: contaminación del medio ambiente; omisión de proteger contra toda forma de conducta que tenga como resultado la destrucción, deterioro y degradación del medio ambiente; omisión o negligencia para regular actividades que provoquen contaminación electromagnética; omisión del Estado para prevenir y reducir la contaminación del medio ambiente; omisión o negligencia en la regulación y control de manejo y disposición de desechos tóxicos; entre otros.

En séptimo lugar, se ubican los *derechos específicos de las personas adultas mayores*, entre los hechos violatorios más destacados se encuentran: acceso preferente a los servicios de salud; maltrato o abuso por personas encargadas de su cuidado en instituciones del Estado o de instituciones privadas vigiladas por el Estado; denegación ilegal o arbitraria de los beneficios o prestaciones de la seguridad social, entre otros.

En octavo lugar, se ubican los *derechos específicos de las personas con discapacidad*, los hechos violatorios más destacados se encuentran: tolerancia u

omisión del Estado frente a la ausencia total o parcial de formación y readaptación profesional de personas con discapacidad; denegación ilegal o arbitraria de los beneficios o prestaciones de seguridad social; denegación o retardación estatal de prestar los servicios o tratamientos médicos adecuados y oportunos; denegación de tratamientos de rehabilitación y medicamentos especializados para las personas con discapacidad.

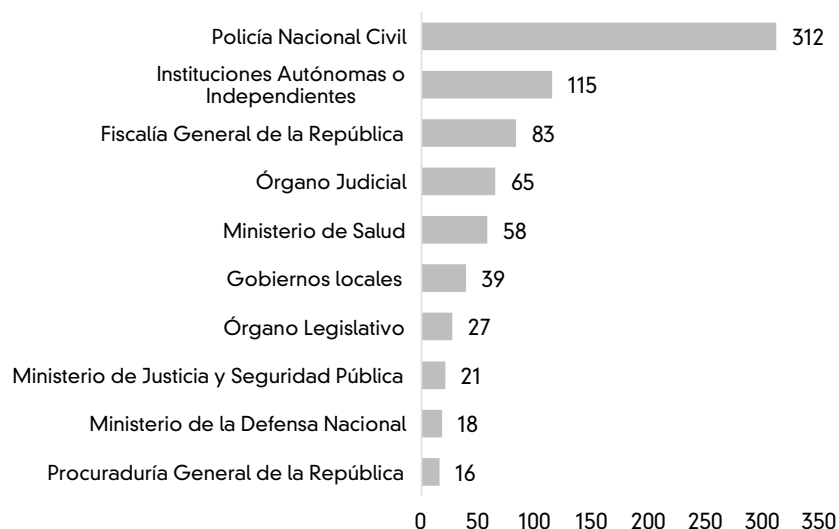
En noveno lugar, se ubican los *derechos específicos de las personas migrantes*, el hecho violatorio más destacado se encuentra la falta de acciones para que los salvadoreños y salvadoreñas migrantes o sus familiares cuenten con mecanismos de asistencia y asesoría legal efectiva en caso de vulneración a derechos humanos en el país de tránsito o destino.

- *Instituciones estatales más señaladas y notificadas en resoluciones iniciales*

En cuanto a las instituciones estatales que han sido señaladas como presuntas violadoras a derechos humanos, la Policía Nacional Civil se ubicó en el primer lugar con 312; seguida de las Instituciones autónomas o independientes con 115; Fiscalía General de la República con 93; el Órgano Judicial con 65; el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con 58; los Gobiernos locales con 39; el Órgano Legislativo con 27; el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública con 21; el Ministerio de la Defensa Nacional con 18; la Procuraduría General de la República con 16, entre otras.

Se advierte que en la siguiente gráfica, la frecuencia de los señalamientos sobre las instituciones públicas que presuntamente han cometido violaciones a los derechos humanos, no corresponde con el total de resoluciones iniciales debido a que en cada expediente puede existir más de un señalamiento a una o varias instituciones.

Gráfica N° 8
Instituciones públicas más recomendadas y notificadas en resoluciones iniciales
1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014



Fuente: Datos proporcionados por el Departamento de Seguimiento, PDDH

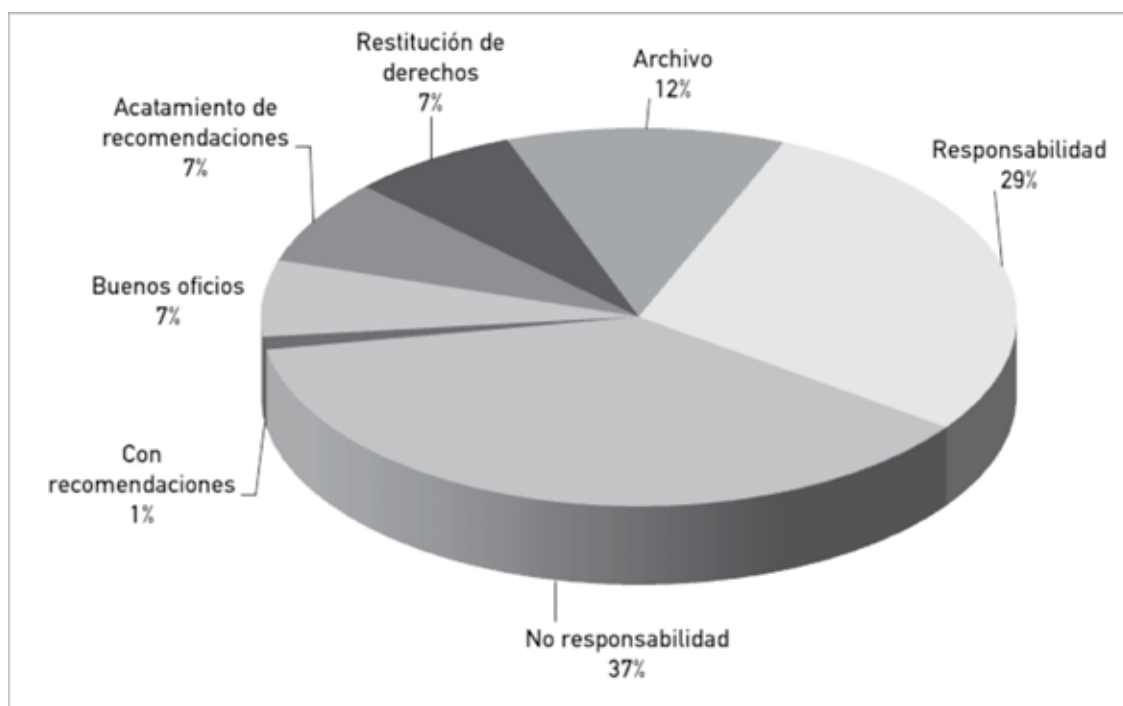
v. Resoluciones finales

La resolución final es un pronunciamiento que se emite en la fase de investigación en la que se declara la responsabilidad o no responsabilidad por violación a derechos humanos, ya sea por el incumplimiento del deber de respeto o garantía, la restitución del derecho por la gestión de buenos oficios, el acatamiento o incumplimiento de las recomendaciones iniciales emitidas, la inobservancia a la Ley de la Procuraduría o el archivo del caso. Lo anterior no limita las posibilidades declarativas y resolutivas, ni impide activar las demás facultades constitucionales

y legales de esta Institución para una efectiva protección de los derechos humanos y libertades fundamentales.

Dentro del período analizado, la cantidad de resoluciones finales firmadas y notificadas a las autoridades señaladas, víctimas y denunciantes asciende a 276 resoluciones. De las cuales, 103 fueron resoluciones de no responsabilidad; 79 resoluciones de responsabilidad; 33 de archivo; 20 de restitución de derechos y 20 para las resoluciones de acatamiento de recomendaciones; 18 de buenos oficios; y 3 con recomendaciones.

Gráfico N° 9
Tipo de resolución final emitida
1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014



Fuente: Reporte del Departamento de Seguimiento, PDDH

A continuación, se presenta en un cuadro, las actividades de investigación realizadas por el Departamento de Procuración en el período analizado, por tipo de diligencias de investigación

y derechos específicos, es de aclarar que en una resolución final se pueden realizar diferentes tipos de diligencias de investigación.

Cuadro N° 15
Diligencias de investigación por derechos específicos en el Departamento de San Salvador
1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014

Nombre de la Institución/ Diligencia de investigación	Entrevistas	Estudio de expedientes administrativos	Estudio de expedientes judiciales	Inspecciones	Oficios	Reuniones	Verificación de audiencias	Verificación <i>in situ</i>	Otros	Total
Derechos civiles y políticos ^(a)	94	124	16	0	15	1	11	14		275
Derechos de la niñez y adolescencia	74	65	9	0	6	0	6	1		161
Derecho a la protección del medio ambiente	6	3	2	1	2	1	1	1		17
Derechos económicos, sociales y culturales	72	3	1	0	32	0	0	0	4	112
Derechos humanos de las mujeres	15	16	1	0	6	2	0	0	0	40
Derechos específicos de las personas viviendo con VIH/ SIDA	2	0	0	0	2	0	0	0	0	4
Derechos de las personas con discapacidad	3	0	0	0	0	1	0	0	0	4
Derechos de la Comunidad LGBTI	2	0	2	0	0	1	1	0	0	6
Totales	269	212	31	1	64	6	19	16	4	622

Fuente: Reporte Departamento de Procuración y Procuradurías Adjuntas Específicas.

(^a) Los derechos específicos de las personas privadas de libertad van incluidos en este grupo de derechos.

En el cuadro anterior, se observa que de las 622 diligencias de investigación a instituciones estatales señaladas como presuntas violaciones a derechos humanos, los derechos civiles y políticos aglutinan el mayor número de diligencias con 275, seguido de los derechos de la niñez y adolescencia con 161, los derechos económicos, sociales y culturales con 112, y los derechos específicos de la mujer con 40. Asimismo, las

entrevistas ocupan el primer lugar en las acciones de investigación con 269, seguido de los estudios de expedientes administrativos con 212, oficios con 64, estudio de expedientes judiciales con 31, verificaciones de audiencias con 19, verificación *in situ* con 16 reuniones con 6.

A continuación, el detalle de verificaciones realizadas a instituciones públicas en este período.

Cuadro N° 16 Verificaciones a instituciones públicas en el Departamento de San Salvador 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014										
Nombre de la Institución/Diligencia de investigación	Entrevistas	Estudio de expedientes administrativos	Estudio de expedientes judiciales	Inspecciones	Oficios	Reuniones	Verificación de audiencias	Verificación <i>in situ</i>	Otros	Total
PNC	63	101	0	2	10	0	1	1	0	178
FGR	31	39	3	0	8	0	0	0	0	81
ISSS	42	2	0	0	2	4	0	0	1	51
INSPECTORÍA GENERAL DE LA PNC	8	23	0	0	1	1	0	0	9	42
MINSAL	13	3	0	0	6	0	0	0	0	22
PGR	10	4	0	0	4	3	0	0	0	21
MINISTERIO RR. EE.	17	4	0	0	0	0	0	0	0	21
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	13	0	0	0	4	0	0	0	0	17
ENTREVISTAS DENUNCIANTES	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	5	4	4	0	2	0	0	0	0	15
JUNTAS DE PROTECCIÓN	3	8	0	0	0	0	0	0	0	11
CENTROS INTERNAMIENTO DE MENORES	9	2	0	0	0	0	0	0	0	11
ALCALDÍAS	3	2	0	0	2	3	0	0	0	10
MESA DE LA DEFENSA NACIONAL	4	5	0	0	0	0	0	0	0	9
FAES	3	5	0	0	1	0	0	0	0	9
ISNA	7	0	0	0	0	1	0	0	0	8
INPEP	2	0	0	0	1	3	0	0	0	6
IPSFA	4	0	0	0	0	1	0	0	1	6
MOP	2	0	0	0	1	1	0	1	0	5
JUZGADOS	5	0	21	0	1	0	20	0	0	4
HOSPITAL DE MATERNIDAD	2	1	0	0	0	0	0	1	0	4
ISTA	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	3
CNJ	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3

Cuadro N° 16
Verificaciones a instituciones públicas en el Departamento de San Salvador
1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014

Nombre de la Institución/Diligencia de investigación	Entrevistas	Estudio de expedientes administrativos	Estudio de expedientes judiciales	Inspecciones	Oficios	Reuniones	Verificación de audiencias	Verificación <i>in situ</i>	Otros	Total
MINISTERIO DE TRABAJO	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3
HOSPITAL POLI-CLÍNICO	1	0	0	0	2	0	0	0	0	3
SECRETARÍA DE CULTURA	1	0	0	0	2	0	0	0	0	3
DGCP	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TRIBUNAL DE APELACIONES PNC	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
PROBÚSQUEDA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
VMT	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
FONDO DE LISIADOS DE GUERRA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
JUNTA DE LA CARRERA DOCENTE	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
HOSPITAL NACIONAL ROSALES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ISDEM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
ISDEMU	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
CRUZ ROJA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MINISTERIO DE AGRICULTURA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
CONSEJO SUPERIOR DE SALUD	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
TRIBUNAL DISCIPLINARIO PNC	1	0	0	0	0	0	0	0		1
TOTAL	281	210	28	2	55	19	21	3	11	630

Fuente: Reporte de verificaciones a instituciones públicas, Departamento de Procuración, PDDH

El anterior cuadro refleja que la mayoría de las diligencias de investigación se encuentran dirigidas a las instituciones públicas más denunciadas y señaladas por medio de resoluciones iniciales. De esta manera, se posiciona nuevamente como la principal entidad estatal más investigada a la Policía Nacional Civil con 178 diligencias; seguido por la Fiscalía General de la República con 81; el Instituto Salvadoreño del Seguro Social con 51; la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil con 42; el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con 22; la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores con 21 cada una, entre otras.

A continuación se destacan algunos casos atendidos por las procuradurías adjuntas específicas ante diferentes instancias públicas solicitando información e instando a la adopción de medidas para proteger o garantizar los derechos humanos.

La Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, realizó gestiones para atender diferentes problemáticas, entre los casos emblemáticos en materia laboral, se puede mencionar la atención de las demandas de un grupo de ex miembros de la Policía Nacional Civil, quienes alegan violación al derecho al trabajo y demandan ser reincorporados a la PNC, ya que fueron víctimas de procesos disciplinarios ilegales. Asimismo, se han atendido las denuncias de distintos sindicatos (en su gran mayoría del sector público) como el Sindicato para la Defensa de los Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIDETISS), el Sindicato de la Corte de Cuentas (SITCCOR), el Sindicato de Trabajadores de la Salud (SITRASALUD), el Sindicato de Trabajadoras del Hogar, el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), la Federación Salvadoreña de Boxeo, el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE),

el Ministerio de Educación (MINED), el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y distintos hospitales del sistema público de salud por múltiples violaciones a los derechos laborales y libertades sindicales. Al respecto, se han sostenido reuniones que con las personas o grupos denunciantes y se ha solicitado informe a las autoridades sobre los hechos denunciados. En cuanto a seguridad social, se han analizado y abordado distintas denuncias originadas por casos de suspensión de la pensiones por errores administrativos, denegación ilegal o arbitraria de beneficios o prestaciones y por deficiencias en el quehacer estatal para garantizar el derecho a la seguridad social.

En materia de derecho a la salud, se ha continuado coordinando el proceso de mediación entre la Asociación para la Defensa de la Salud y el Medio Ambiente “Corina Isabel Pérez Alfaro” (ADESAM- CORIBEL) y distintas instituciones estatales como el Ministerio de Salud (MINSAL), el ISSS, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR), debido a múltiples denuncias por casos de mala praxis médica en el sistema de salud del país. A la fecha, se ha logrado obtener la manifestación de compromiso por parte de las autoridades de dar seguimiento a los casos expuestos, y en varios casos se ha recibido informes de las investigaciones realizadas.

También se ha establecido un proceso de mediación a raíz de peticiones de distintos grupos de comerciantes informales, quienes manifiestan que están siendo afectados por el proyecto del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS).

La Procuraduría Adjunta para la Defensa del Derecho del Medio Ambiente, realizó gestiones para atender casos relacionados con diferentes problemáticas ambientales y de riesgo de

desastre a nivel nacional, entre las que se mencionan: en relación al tema de los proyectos mineros metálicos, la PDDH ha mantenido un seguimiento y posición constante sobre el tema, analizando el impacto en los derechos humanos de la población y acompañando a diferentes organizaciones de la sociedad civil en sus demandas ante el Estado salvadoreño para la prohibición de esta industria. Sobre la problemática minera transfronteriza, se ha dado seguimiento al informe emitido por la PDDH en 2013 sobre el proyecto minero “Cerro Blanco” y las potenciales vulneraciones a derechos humanos en la población salvadoreña.

Por otra parte, se atendieron y giraron directrices en relación a los casos de instalación de antenas de telefonía celular a nivel nacional; en problemáticas generadas por rellenos sanitarios, como el construido en el departamento de Santa Ana conocido como relleno sanitario “El Zompopo”; el seguimiento al caso de contaminación por plomo en el municipio de Sitio del Niño, municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad, a consecuencia del funcionamiento de la ex fábrica de baterías Record. Sobre la atención de situaciones de emergencia durante la época invernal 2013, merece destacarse la atención y seguimiento, a partir del mes de diciembre del año dos mil trece, que se ha brindado a la situación de emergencia generada por la erupción del Volcán Chaparrastique, ubicado en el departamento de San Miguel.

En relación a la problemática de contaminación por agroquímicos, la PDDH de forma oportuna se posicionó respecto a la necesidad de dar atención en salud a las personas padeciendo la enfermedad renal crónica en el municipio de San Luis Talpa, así como el retiro, traslado, tratamiento y disposición final del material tóxico abandonado en una bodega en el mismo

municipio. En relación a la situación de riesgo de desastre a nivel nacional también se destaca la labor de mediación de esta Procuraduría en problemáticas generadas por la formación de cárcavas en el municipio de San Martín, Soyapango y en la comunidad Santa Carlota, San Salvador.

La Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y Familia, interpuso sus buenos oficios ante instituciones públicas que les corresponden velar por los derechos de las mujeres, en casos de violencia intrafamiliar y violencia psicológica; acciones de protección a favor de los derechos de las mujeres relacionados con el debido proceso judicial. Además, se creó la Unidad de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia, por medio del Acuerdo Institucional No. 018, de fecha de 24 de enero de 2014. Las funciones principales de la Unidad serán: (a) Brindar atención especializada a las mujeres que denuncias hechos de violencia y (b) Será la encargada de asesorar técnicamente a las diferentes Dependencias y Unidad de PDDH en la transversalización de la Política Institucional de Género.

La Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez y Juventud, realizó gestiones para atender casos en el que se protegieron los derechos de la niñez y juventud, tales como la revisión de procedimientos específicos para la tramitación de denuncias para lo cual se sostuvieron reuniones con otras dependencias de esta Procuraduría para evaluar contestación a revisión final en la que se declaró la responsabilidad por vulneración a derechos humanos de la niñez y adolescencia a un Juzgado y una Cámara de Niñez y Adolescencia. En lo que se refiere al acompañamiento y conducción de casos atendidos directamente o en conjunto con otras dependencias, se abrieron cinco expedientes los cuales tratan sobre diversa posibles violaciones a

derechos humanos de personas menores de edad. Con relación a otras actividades de protección se destacan las gestiones realizadas para lograr que la Relatora de Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señora Rosa María Ortiz, realizara una visita oficial al país con la finalidad de monitorear las acciones estatales realizadas para combatir la violencia contra las niñas, niños y adolescentes.

La Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales, brindó insumos para la elaboración de las medidas cautelares en el caso del Cierre de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado. También coordinó con el área de tutela lo relativo a la atención de casos de presuntas violaciones a los derechos humanos de personas privadas de libertad, incidiendo ante las autoridades denunciadas, para palear la situación.

En lo relativo a la protección de derechos de las personas migrantes, esta Procuraduría Adjunta participó en la elaboración de actas notariales donde se hace constar el proceso de toma de muestras de los donantes, asistencia a familiares de migrantes no localizados, toma de antecedentes o entrevistas a familiares. También en la coordinación interinstitucional con Equipo Argentino de Antropología Forense EAAF, Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador COFAMIDE y Ministerio de Relaciones Exteriores (Convenio Interinstitucional), pudiendo realizarse un total de 71 muestras a un total de 24 familias de migrantes no localizados (MNL). Posteriormente, también se dieron las notificaciones a los familiares y se dio acompañamiento a cinco familias en el proceso de repatriación y entrega de los restos.

Con relación a la verificación y observación electoral, se tuvo participación en la elaboración y

ejecución del Plan de Verificación y Observación Electoral 2013-2014 el cual incluía presupuesto, propuestas de participación de observadores voluntarios; en las orientaciones para la calificación y trámites de casos sobre violaciones a derechos humanos en el contexto del proceso electoral y en la estrategia de seguimiento al pacto de entendimiento entre partidos políticos para prevenir la violencia electoral. Se atendieron casos relacionados con el evento electoral tales como una denuncia por amenazas a la alcaldesa de Caluco, demandas en diferentes instituciones contra precandidatos presidenciales y demandas por campaña ilegal.

A continuación, se detalla el derecho humano e institución pública mayormente señalada con responsabilidad, por considerar que son los señalamientos de mayor gravedad.

▪ *Derechos humanos más violentados en resoluciones finales*

El resultado de las investigaciones y el consolidado de declaraciones de responsabilidad pública por violaciones a los derechos humanos en las resoluciones finales, ubicaron al derecho al debido proceso administrativo como el principal derecho más violentado con 18 declaraciones de responsabilidad, seguido del derecho al trabajo con 13; incumplimiento de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos por incumplimiento de medida cautelar dictada y por omisión de rendir informe requerido con 7; entre otros.

▪ *Instituciones públicas mayormente señaladas con responsabilidad en resoluciones finales.*

En el período, los Gobiernos Locales se posicionaron como la primera instancia que fue mayormente señalada con responsabilidad

en resoluciones finales con 18 casos; seguido por la Policía Nacional Civil con 13; el Órgano Judicial con 12; Instituciones Autónomas o Independientes con 11; la Fiscalía General de la República con 8, el Ministerio de Educación con 7; entre otros.

▪ *Función revisora de proyectos de resolución*

La función revisora se define como un mecanismo de control de calidad que tiene como objetivo verificar que los proyectos se encuentren redactados formal y sustancialmente aptos para la firma del Procurador o Procuradora o de quien realice sus funciones. De acuerdo a la reglamentación interna, los proyectos pueden ser revisados o corregidos de conformidad con las directrices emanadas del titular o las Procuradurías Adjuntas, por la Unidad Técnica o persona delegada para tal efecto.

En el caso de los proyectos de resolución, el señor Procurador ha delegado a la Unidad Técnica del Despacho (UTD) la revisión de los proyectos elaborados por las diferentes dependencias operativas del Sistema de Protección de Derechos Humanos. En el período que comprende este informe, la UTD recibió en total 966 proyectos de resolución, de los cuales se trabajaron 583 y se enviaron a firma del señor Procurador 577. Este último dato, se desglosa de la siguiente manera: 181 resoluciones iniciales y 396 resoluciones finales, entre las que se encuentran resoluciones de archivo, buenos oficios, revisión, restitución y rectificaciones.

vi. Seguimiento a las recomendaciones emitidas en resoluciones finales e informes especiales

En la fase de seguimiento se verifica el cumplimiento de las recomendaciones emitidas

en resoluciones finales, posicionamientos públicos, informes especiales y situacionales u otro tipo de pronunciamiento. Excepcionalmente, el seguimiento incluye las recomendaciones emitidas en resoluciones iniciales, en el caso se haya comprobado en esta etapa la violación a derechos humanos.

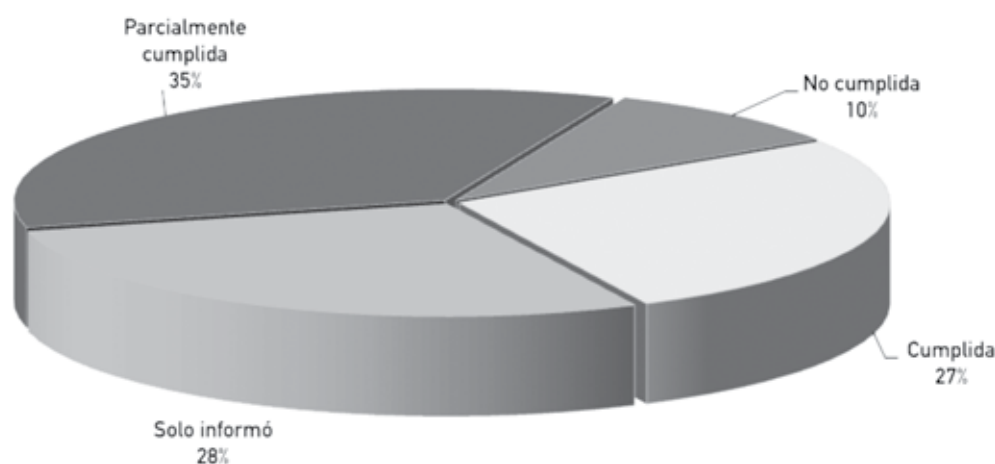
En la labor de verificación participan el Departamento de Seguimiento en San Salvador y las Delegaciones Departamentales y Locales en su comprensión territorial, quienes realizan las siguientes acciones: solicitar informes; entrevistar denunciantes, víctimas, funcionarias y funcionarios o agentes del Estado; verificar procesos judiciales o administrativos; realizar inspecciones; y todas aquellas que se consideren necesarias para verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas.

El resultado de estas acciones se traduce en el grado de cumplimiento de las recomendaciones dictadas por esta Procuraduría, desglosadas en cuatro categorías, a saber: cumplimiento, no cumplimiento, parcialmente cumplida y emisión de informes.

Así, en el período que comprende este Informe, se constató el cumplimiento parcial de 30 recomendaciones; seguido por 24 casos en los que solamente se informó de lo actuado²¹⁰; el cumplimiento de 23 y el no cumplimiento de 8. En la siguiente gráfica se presenta la proporción de los distintos grados de acatamiento:

²¹⁰ Véase el detalle en el apartado a anexos.

Gráfica N° 10
Grado de acatamiento de recomendaciones en resoluciones finales
1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014



Fuente: Datos proporcionados por el Departamento de Seguimiento, PDDH

A continuación, se presentan en un cuadro las respuestas a las recomendaciones de las principales autoridades públicas recomendadas y notificadas.

Cuadro N° 17 Grado de acatamiento de recomendaciones en resoluciones finales por instituciones públicas mayormente señaladas 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014				
Autoridad recomendada	Cumplida	No cumplida	Parcialmente cumplida	Sólo Informe
Inspección General de la Policía Nacional Civil	9	0	6	7
Policía Nacional Civil	0	1	3	3
Dirección General de Centros Penales y Centros de Readaptación	3	1	0	1
Instituto Salvadoreño del Seguro Social	1	3	1	2
Corte Suprema de Justicia	0	1	3	1
Gobiernos Locales	1	0	3	0
Ministerio de la Defensa Nacional	2	1	0	0
Universidad de El Salvador	2	0	0	0
Total	18	7	16	14

Fuente: Datos proporcionados por el Departamento de Seguimiento, PDDH

El anterior cuadro refleja que en su mayoría, las instituciones estatales cumplen con las recomendaciones dictadas por esta Procuraduría. Sin embargo, se observa que hay una frecuencia importante respecto a las recomendaciones parcialmente cumplidas, es decir, hay una cierta tendencia de las autoridades señaladas de no adoptar todas las medidas necesarias para acatar las recomendaciones emitidas.

En cuanto al seguimiento a otro tipo de pronunciamientos públicos, se verificó el cumplimiento de recomendaciones en un informe especial, cinco pronunciamientos y dos posicionamientos. La tendencia de la actuación estatal fue de cumplimiento a los señalamientos emitidos. A continuación el detalle:

- Primer Informe sobre las Elecciones Presidenciales 2014;
- Pronunciamiento en el Marco del Día Mundial del Medio Ambiente 2013;
- Pronunciamiento ante la situación de abandono de barriles conteniendo catorce toneladas de tóxicos;
- Pronunciamiento en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, 28 de mayo 2013;
- Pronunciamiento en el día de la Igualdad Jurídica de las Mujeres Salvadoreñas;

- Pronunciamiento sobre la afectación de los servicios en la red pública de salud, por suspensión de labores a causa de posible ausencia de financiamiento del escalafón salarial para el año 2014;
- Posición respecto a los derechos al agua y a la alimentación adecuada en la actual coyuntura salvadoreña;
- Posicionamiento sobre la situación de inseguridad en el país y las políticas estatales de seguridad.

■ *Incumplimiento de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos*

El seguimiento a las recomendaciones también evidenció el incumplimiento de las obligaciones de colaboración de las instituciones públicas a la labor de protección de derechos humanos realizada por esta Procuraduría. En este sentido, se observaron entidades públicas que obstaculizaron la labor institucional, ya sea no enviando informes solicitados o no colaborando con las acciones de protección promovidas por esta Institución. Así, en el período que abarca este informe se emitieron un total de 79 resoluciones de responsabilidad. A continuación, un cuadro sobre las instituciones incumplidoras de la Ley de la PDDH.

Cuadro N° 18
Reporte de resoluciones finales firmadas de responsabilidad en las que
se señaló el incumplimiento a la Ley de la PDDH
1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014

Nº	Autoridad	Frecuencia
1	Inspectoría General de la PNC	2
2	Fiscalía General de la República	2
3	Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena en San Salvador	1
4	Oficina Fiscal de Apopa	1
5	Arzobispado de San Salvador	1
Total		7

Fuente: Datos proporcionados por el Departamento de Seguimiento, PDDH

vii. Medidas cautelares

La facultad de emitir medidas cautelares se encuentra regulada en el artículo 36 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Dichas medidas se aplican en casos o situaciones de extrema gravedad o urgencia, con la finalidad de evitar que se consuman daños irreparables a la dignidad de las personas. En la doctrina institucional, también son denominadas como “garantías cuasi jurisdiccionales de carácter preventivo”, que no prejuzgan la investigación y la declaración de responsabilidad en la resolución final²¹¹.

Para este período, se emitieron 6 resoluciones con medidas cautelares dirigidas a diversas autoridades públicas que evitaron la consumación de daños irreparables en casos o situaciones relacionados con los siguientes derechos:

- Derecho a la propiedad y a la alimentación;
- Derecho al debido proceso administrativo, al trabajo y a la no discriminación;
- Derecho a la vivienda;
- Derecho a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos en perjuicio de los defensores y defensoras de derechos humanos;

A continuación, se presentan breves comentarios sobre dichas resoluciones emitidas.

Medida cautelar emitida para evitar que se consuman daños irreparables a personas que se encuentran en inmueble objeto de desalojo de la Cooperativa “La Marañonera”, cantón Tierra Blanca, jurisdicción de Chirilagua, departamento de San Miguel. Expediente: SM-0004-2014, del 13 de enero de 2014.

El Juez de Paz del Municipio de Chirilagua, departamento de San Miguel, mediante oficio número 564-13 de fecha 13 de diciembre de 2013, solicitó a esta Procuraduría que verificara diligencia de desalojo de un inmueble ubicado en el cantón Tierra Blanca, jurisdicción de Chirilagua, departamento de San Miguel, en el que serían afectadas un aproximado de trescientas familias, de acuerdo a expediente judicial número 02-2009.

Esta Procuraduría en el ejercicio de sus facultades legales emitió las siguientes medidas cautelares al Juez de Paz de Chirilagua:

- Suspender la diligencia programada para el día catorce de enero de dos mil catorce, para evitar que se consumen daños irreparables a las personas y concederles un tiempo prudencial no solo para conocer el resultado de los procesos que están en trámite aún, sino también para que esta Institución pueda encontrara a través del mecanismo de diálogo, junto a los representantes de la Cooperativa “La Marañonera” y las personas que se encuentran en el inmueble objeto de desalojo, alternativas de solución en el presente caso, con lo que también se estarían previniendo graves afectaciones a los derechos humanos de las familias sujetas al desalojo.

Medidas cautelares emitidas con el fin de que se faciliten las condiciones necesarias para que la señora Antonia de Jesús Bonilla de Medrano continúe ejerciendo su trabajo. Expediente: LU-0188-2013, del 23 de diciembre de 2013.

Mediante denuncia interpuesta ante esta Procuraduría se tuvo conocimiento de una presunta violación al debido proceso administrativo y al derecho al trabajo en perjuicio de la señora Antonia de Jesús Bonilla

²¹¹ Resolución de medidas cautelares, Expediente CA-0025-2011.

de Medrano por parte del señor Jorge Luis Rosales Ríos, Alcalde Municipal de Santa Rosa de Lima. A la mencionada señora se le asignó un puesto de ventas de productos pirotécnicos antes de cumplir con los requisitos exigidos por dicha municipalidad. Por ello, el veintidós de diciembre de dos mil trece, llegaron a dicho puesto de venta siete agentes de la Policía Municipal quienes le expresaron a la señora que llevaban órdenes del señor Alcalde para desalojarla.

El veintitrés de diciembre de dos mil trece, personal de esta Procuraduría acompañó a la señora Bonilla de Medrano a la Alcaldía para que se le explicaran los motivos de la orden de desalojo y para tratar de buscar un arreglo amistoso entre las partes; sin embargo ello no fue posible dada la actitud amenazante del señor Alcalde.

Esta Procuraduría en el ejercicio de sus facultades legales emitió las siguientes medidas cautelares dirigidas al Alcalde Municipal de Santa Rosa de Lima, señor Jorge Luis Rosales Ríos:

- Abstenerse o dejar sin efecto la decisión adoptada contra la señora Antonia de Jesús Bonilla de Medrano y facilitarle las condiciones necesarias para que pueda continuar ejerciendo su trabajo.

Medida cautelar emitida para evitar que se consuman daños irreparables a las familias que viven en el inmueble denominado “Finca El Carmen”, cantón Nance Verde, municipio de Candelaria, departamento de Cuscatlán. Expediente CU-0086-2013, del 25 de noviembre de 2013.

La Procuraduría ha estado dando seguimiento al proceso referencia 1-2010-1 que se sigue en el Juzgado de Paz de Candelaria, departamento de Cuscatlán, por parte del Juez Guillermo del Carmen Abarca Tobar, respecto del inmueble denominado “Finca El Carmen”, ubicado en cantón Nance Verde, Municipio de Candelaria,

departamento de Cuscatlán del cual, en fecha veintidós de noviembre de dos mil trece, se ordenó el “desalojo de invasores” a realizarse el veinticinco de noviembre del mismo año.

La situación expuesta generó incertidumbre para las familias que viven en el inmueble mencionado respecto a las condiciones de vida que actualmente poseen, ya que de realizarse dicho desalojo, estarían siendo privados de su derecho a la vivienda, lo cual es vital no solo para lograr un nivel de vida adecuado, sino también para el cumplimiento de otros derechos humanos fundamentales como la seguridad, alimentación, salud, educación, trabajo, entre otros.

Esta Procuraduría en el ejercicio de sus facultades legales emitió la siguiente medida cautelar a la Juez de Paz de Candelaria, departamento de Cuscatlán:

- Suspender la diligencia programada para el veinticinco de noviembre de dos mil trece, concediendo un tiempo prudencial en el que las instituciones del Gobierno Central puedan encontrar alternativas de solución en el presente caso, con lo que también se estaría previniendo graves afectaciones a los derechos humanos de las familias sujetas al desalojo.

Medida cautelar emitida para evitar daños irreparables a la vivienda de las personas que habitan en la propiedad denominada Hacienda Los Gramales, cantón San Lucas, municipio de Suchitoto, departamento de Cuscatlán, un nivel de vida adecuado. Expediente: CU-0069-2013.

Mediante oficio N° 27-A de fecha quince de enero de dos mil catorce, girado por la licenciada Astrid Vanessa Landaverde Méndez, Secretaria del Juzgado Segundo de Paz de Suchitoto, esta Procuraduría tuvo conocimiento de programación de diligencias de desalojo de veinticinco personas que habitan en la propiedad

denominada Hacienda Los Gramales, cantón San Lucas, Municipio de Suchitoto, departamento de Cuscatlán, para el veinte de enero de dos mil catorce.

En virtud de verificación realizada por esta Institución, se tuvo conocimiento que en el proceso judicial, específicamente en la resolución que declara a lugar la petición del lanzamiento, no se logró determinar con certeza la ubicación del inmueble objeto del mismo, ni a los correspondientes propietarios.

Esta Procuraduría en el ejercicio de sus facultades legales emitió las siguientes medidas cautelares a la señora Jueza Segunda de Paz de Suchitoto, departamento de Cuscatlán:

- Suspendir la diligencia programada para el veinte de enero de dos mil catorce con el fin de garantizar un nivel de vida adecuado y evitar que se consumen daños irreparables a las personas.

Medida cautelar emitida para evitar afectaciones graves de las garantías de preservación de los archivos de Tutela Legal del Arzobispado, así como de las garantías para la administración de los mismos en orden a facilitar su consulta bajo los estándares de seguridad necesarios y garantizar la debida cooperación con los tribunales y otras entidades oficiales de investigación. Expediente: SS-0478-2013, del 2 de octubre de 2013.

Esta Procuraduría tuvo conocimiento del cierre súbito de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado y el despido de su personal técnico y administrativo sin previo aviso. El cierre de dicha Oficina afectará a muchas comunidades vulnerables que recibían servicio de la misma, como asistencia gratuita, recepción de denuncias e investigación en casos de violación a derechos humanos, programas de prevención de violencia, atención a la niñez y juventud, así como educación en derechos humanos. Asimismo, representa preocupación por el destino de los archivos históricos de la entidad, pues

contienen abundante información sobre graves violaciones a los derechos humanos acaecidas durante el conflicto armado interno salvadoreño, incluyendo información confidencial sobre víctimas y testigos que podrían ver en riesgo su seguridad, en caso de no administrarse adecuadamente el archivo.

Esta Procuraduría en el ejercicio de sus facultades legales emitió las siguientes medidas cautelares al señor Arzobispo de San Salvador:

- Como responsable de la Arquidiócesis de San Salvador, debe garantizar la preservación de los archivos históricos de Tutela Legal del Arzobispado, así como debe adoptar medidas de administración del mismo a los efectos de facilitar su consulta bajo los criterios de seguridad necesarios y garantizar la cooperación con los tribunales de justicia y la Fiscalía General de la República.
- Para los efectos de la aplicación de la Medida Cautelar, el señor Arzobispo de San Salvador debe autorizar la inspección física de las instalaciones de los archivos por parte de una Comisión designada por el Procurador, en el marco de sus facultades constitucionales y legales, a la cual deberá proporcionar toda la información detallada sobre las medidas de preservación y administración del archivo que hayan sido adoptadas y permitir las condiciones y tiempo necesario para desarrollar su labor.

Medida cautelar emitida por la alta vulnerabilidad en la que continúan los archivos de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado y la información de víctimas, familiares y testigos de graves violaciones a derechos humanos, acumulada a lo largo de más de treinta y un años de trabajo de Tutela Legal por la defensa y promoción de los derechos humanos. Expediente: SS-0478-2013, del 18 de octubre de 2013.

El dieciocho de octubre de dos mil trece se difundió en los medios de comunicación y

redes sociales que la Fiscalía General de la República se disponía a practicar allanamiento en las instalaciones de la disuelta Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, con el objeto de sustraer los archivos históricos de la mencionada oficina. Ante tal situación, el Procurador realizó llamada telefónica al señor Fiscal General de la República, licenciado Luis Antonio Martínez González, quien confirmó los hechos y negó toda posibilidad de coordinación institucional. Inmediatamente, personal de esta Procuraduría se presentó en la sede del Arzobispado de San Salvador para verificar el desarrollo de la diligencia fiscal, pero se les impidió el ingreso.

Estos hechos preocupan por la vulnerabilidad a la que fueron expuestos los citados registros; razón por la que esta Institución se mantendrá alerta y vigilante ante la situación.

La Procuraduría, en el ejercicio de sus facultades legales, emitió las siguientes medidas cautelares al señor Fiscal General de la República:

- Realizar acciones que garanticen la preservación de los archivos históricos de Tutela Legal del Arzobispado y que gire instrucciones para que se permita la verificación del procedimiento por parte de esta Procuraduría.
- Instar a cumplir la medida de preservación dictada y facilitar a la brevedad posible la realización del inventario dispuesto por SECULTURA, mediante su resolución inicial No. 001/2013, de fecha once de octubre de dos mil trece.

b) Vigilancia de la situación de las personas privadas de libertad

Toda persona detenida, sin distinción de edad, tiene derecho a vivir en condiciones de detención en las que se respete sus derechos y es el Estado quien debe garantizar el derecho a la vida, a la integridad personal y al respeto de

su dignidad humana. Es así como la PDDH se encarga de vigilar la situación de las personas que se encuentran cumpliendo una pena privativa de libertad, ya que le corresponde ser notificada de todo arresto y a cuidar que sean respetados los límites legales de la detención administrativa, de acuerdo a los artículos 194, romano I, ordinal 5º y 6º de la Constitución de la República; 11 ordinal 5º y 12 ordinal 3º y del 40 al 44 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

La PDDH tiene la potestad para ingresar, sin previo aviso, al centro penitenciario, cárcel o cualquier lugar público donde se presuma que se encuentra una persona privada de su libertad, a fin de garantizar el respeto de sus derechos; además, le faculta para entrevistar a personas detenidas, sin interferencias y en forma privada.

Asimismo, se mantiene vigilante de la situación de las personas privadas de libertad como un mecanismo de protección dentro del Sistema de Protección de los Derechos Humanos. Este mecanismo que se concretiza en llevar un monitorio periódico y realizar verificaciones, tiene por finalidad supervisar y vigilar las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad, así como realizar acciones dirigidas a corroborar, en un caso o situación particular, la existencia o no de violaciones a los derechos humanos de las mismas.

En este período que comprende el presente Informe, la Procuraduría ha realizado monitoreos y verificaciones permanentes en los diferentes centros penales, bartolinas policiales, centros hospitalarios, instalaciones militares, centros de reeducación para menores, resguardos u otros lugares en los que se encuentran personas privadas de libertad o sometidas a medidas de colocación institucional, juzgados de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena, consejos criminológicos, oficinas de traslado de reos y de todas aquellas instancias relacionadas con el sistema penitenciario en todo el territorio nacional. Teniendo como resultado lo siguiente:

Cuadro N° 19 Verificaciones a instituciones estatales responsables de las personas privadas de libertad 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014							
Delegaciones	Centros peniten- ciarios	Centros de internamiento para menores infractores	Centros de Resguardo y detención Adminis- trativa y Bartolinas	Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena	Pabel- lones de reos en hospitales	Otras Insti- tuciones Públicas Visitadas	Total
San Salvador ^(b)	16	6	95	53	13	6	189
San Miguel	17	63	65	6	12	35	198
Chalatenango	25	0	90	0	3	2	120
Soyapango ^(a)	16	1	97	0	0	0	114
Usulután	32	0	109	6	0	4	151
Cabañas	21	43	76	4	6	0	150
La Paz	15	0	54	0	0	0	69
Cuscatlán	28	0	33	7	0	24	92
La Unión	17	0	27	0	3	0	47
San Vicente	12	0	32	4	0	12	60
Santa Ana	37	0	53	2	3	26	121
Apopa ^(a)	7	7	39	0	0	0	53
Morazán	22	0	36	0	0	0	58
Ahuachapán	0	4	18	0	0	0	22
La Libertad	7	0	48	0	5	0	60
Sonsonate	51	1	16	0	0	0	68
Metapán ^(a)	12	0	8	0	0	3	23
Santa Rosa de Lima ^(a)	1	0	3	0	0	0	4
Totales	336	125	899	82	45	112	1,599

Fuente: Datos proporcionados por las Delegaciones Departamentales y Locales (a); y el Departamento de Verificación Penitenciaria e Internamiento de Menores (b)

El anterior cuadro refleja que durante este período se realizaron un total de 1,599 verificaciones a las diferentes instituciones responsables de las personas privadas de libertad. La mayor parte de verificaciones llevadas a cabo a nivel nacional fueron en los Centros de Resguardo o Detención Administrativa con 899 visitas, seguido de los Centros Penitenciarios con 336, luego los Centros de Internamiento para Menores Infractores con 125. En la Delegación Departamental de San Miguel se acumuló la mayor cantidad de verificaciones con 198,

seguido de la sede central en San Salvador con 189, y luego la Delegación Departamental de Usulután con 151 verificaciones. El número de verificaciones por recintos penitenciarios se presentan a continuación.

i. Centros Penitenciarios

La Constitución de la República de El Salvador señala que el Estado organizará los centros penitenciarios con el objeto de corregir las conductas delictivas de las personas ahí

internadas, así como educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación social y la prevención de los delitos. La finalidad es brindar al condenado, por medio de la ejecución de la pena, las condiciones favorables para su desarrollo personal, que le permitan una armónica integración a la vida social al momento de recobrar su libertad.

En este contexto, ésta Procuraduría se mantiene constantemente vigilando las acciones públicas en los diversos recintos penitenciarios a nivel nacional. El sistema penitenciario cuenta con 21 Centros y 4 Pabellones de reos en hospitales, clasificados según su función establecida en el artículo 68 de la Ley Penitenciaria. En el siguiente cuadro se detalla la frecuencia de las verificaciones realizadas:

Cuadro N° 20		
Verificaciones realizadas por clasificación de centros penitenciarios		
Tipo	Nombre	Frecuencia
Centros Preventivos	La Unión	3
	Sonsonate	3
	Jucuapa	4
	Cojutepeque	3
Centros de cumplimiento de penas	Usulután	3
	Sensuntepeque	3
	Santa Ana	3
Centros Mixtos	Centro de Readaptación para Mujeres-Ilopango (Soyapango)	14
	Apanteos (Santa Ana)	3
	Centro Penitenciario “La Esperanza” (San Salvador)	39
	San Vicente	3
	Chalatenango	2
	Quezaltepeque (La Libertad)	2
	Metapán	3
	San Miguel	3
	Ciudad Barrios (San Miguel)	3
	Izalco (Sonsonate)	3
Centros de Seguridad	Zacatecoluca (La Paz)	2
	San Francisco Gotera (Morazán)	2
Centros Abiertos	Centro Penitenciario “La Esperanza”	2
Pabellones de reos en hospitales	Hospital Nacional Rosales (San Salvador)	6
	Hospital Nacional Psiquiátrico de Soyapango - San Salvador	6
	Hospital Nacional San Bartolo	1
Total		116

Fuente: Datos proporcionados por las Delegaciones Departamentales y Locales y el Departamento de Verificación Penitenciaria e Internamiento de Menores

El anterior cuadro muestra que los Centros Mixtos acumulan la mayor cantidad de verificaciones, seguido por los Centros Preventivos y luego los Pabellones de reos en hospitales. Específicamente el Centro Penitenciario “La Esperanza” de San Salvador recibió 39 verificaciones, que contabiliza la mayor cantidad de diligencias, luego el Centro de Readaptación para Mujeres en Ilopango contabiliza 14 visitas y en los pabellones de reos de los hospitales Rosales y Psiquiátrico se realizaron 6 visitas en cada lugar.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, por medio del Departamento de Verificación Penitenciaria, realiza constante monitoreo del sistema penitenciario. A pesar de haber algunos avances, persiste la situación precaria de las personas internas la cual no solo es contraria a lo exigido en los preceptos constitucionales que protegen la dignidad del ser humanos, sino que se ha deteriorado en la medida en que las acciones gubernamentales para combatir la criminalidad han desbordado la capacidad que tienen las cárceles para albergar a más personas. Como consecuencia de ello, es necesario que se analice, planifique e invierta lo necesario para atender las enormes necesidades que actualmente demanda el sistema.

Así, en el tema de salud el principal problema que enfrenta la población interna a nivel nacional es la falta de atención a enfermedades graves, la falta de acceso a medicamentos especiales sobre todo para los internos con VIH, y la proliferación de enfermedades infecto contagiosas. El traslado de los internos e internas a consultas médicas e incluso emergencias se ve mermado por la falta de disponibilidad de transporte, por lo que las autoridades se ven en la necesidad de apoyarse con la Policía Nacional Civil para dar la asistencia médica necesaria.

Esta Procuraduría también ha constatado escases de medicamentos; no obstante, la Dirección General de Centros Penales a través de brigadas médicas y en coordinación con diferentes Unidades de Salud de cada localidad, ha gestionado que se atienda a la población interna facilitando las consultas de medicina general, odontología, toma de exámenes de basiloscopía, tamisajes en coordinación con CONASIDA, y también se han realizado fumigaciones para el combate de plagas.

ii. Centros de internamientos para menores infractores

El Art. 3 de la Ley Penal Juvenil prescribe los principios orientadores de la justicia juvenil, y los detalla de la siguiente manera: la protección integral de la niñez y adolescencia, su interés superior, el respeto a sus derechos humanos, su formación integral y la reinserción en su familia y en la sociedad. En ese contexto, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos humanos es la encargada de velar por el respeto de los derechos humanos de estas niñas, niños y adolescentes privados y privadas de libertad en los diferentes centros de internamiento, por lo que toda persona detenida, sin distinción de edad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad.

Por lo anterior, la Procuraduría realiza monitoreo con el afán de verificar la situación en la que se encuentran los internos y las internas. En el período reportado, se realizaron un total de 6 verificaciones a los Centros de Internamiento y Centros de Reeducción. A continuación, se presenta el detalle de estas dependencias y la frecuencia de las visitas:

Cuadro N° 21 Verificaciones realizadas a centros de internamiento: reeducación y alternativos para jóvenes infractores de la Ley Penal 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014		
Tipo	Nombre	Frecuencia
Centros de Reeducación	Centro de Menores “Sendero de Libertad” de Ilobasco (Ilobasco - Cabañas)	1
	Centro de Menores de Tonacatepeque (Apopa)	2
	Centro de Menores “El Espino” de Ahuachapán	1
	Centro de Reinserción Femenina de Ilopango (Soyapango - San Salvador)	1
	Centro Intermedio de Tonacatepeque	1
Total		6

Fuente: Datos proporcionados por las Delegaciones Departamentales y Locales y el Departamento de Verificación Penitenciaria e Internamiento de Menores

Según el más reciente diagnóstico realizado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en el país se cuenta con el funcionamiento de cuatro Centros de Inserción, uno de ellos Femenino, y dos Centros Intermedios, uno que resguarda a jóvenes de la pandilla “MS” y otro para los de la pandilla “18”.

En total, y en condición de internamiento, se contabilizan 1,112 niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal juvenil. De esta cantidad 259 cumplen una medida de internamiento provisional, y 393 permanecen con carácter definitivo. Lo anterior, en los centros que todavía resguardan a niñez y adolescencia ya que en los Centros Intermedios todos cumplen la medida definitiva. Un dato que a todos los directores de los Centros de Inserción les preocupa es la cantidad de jóvenes que ya cumplieron la mayoría de edad, porque es la parte de la población que mantienen una expectativa de inestabilidad de los Centros, y en cada uno de ellos representan por lo menos el cincuenta por ciento del total.

Por otra parte, los Directores de estos centros reconocen que el proyecto de la “granja” para Centros Intermedios está listo, sin embargo se carece de directrices específicas sobre su funcionamiento e incorporación de los jóvenes a la misma. Un aspecto a destacar y que resulta preocupante según manifestó la directora

del Centro de Inserción Femenino, es que se desconoce si en este proyecto se ha contemplado recibir a jóvenes mujeres.

En cuanto al hacinamiento, todos los Centros cuentan con el mayor porcentaje de camas dobles o catres, a excepción del Centro Intermedio de Tonacatepeque, Sendero de Libertad, y el de Inserción de Tonacatepeque. En el primero de ellos porque se supera la capacidad instalada del recinto por treinta y dos jóvenes, y en el Centro de Inserción de Ilobasco, porque la mayoría de casas están semi o completamente destruidas; actualmente solo se habitan cuatro de más de diez que tiene a disposición el Centro. Sin embargo, se ha constatado que muchos de los catres no se encuentran en condiciones óptimas de uso, pues hasta los reforzamientos o soldaduras se encuentran vencidos.

El acceso a atención médica es complicado ya que solamente uno de los dos Centros Intermedios cuenta con clínica, y de los de Inserción dos de los cuatro. Aunque en el cincuenta por ciento de cada uno de los dos tipos de Centros se tiene a disposición personal médico y de enfermería, no se cubren horarios amplios de consulta, lo cual evita que la población goce de mejor salud.

En el Centro Intermedio de Ilobasco existen las instalaciones, pero no se cuenta con personal

permanente. A pesar de ello, la Unidad de Salud de Municipio colabora poniendo a disposición a un doctor los miércoles de cada semana. En el Centro de Inserción El Espino, la atención se brinda por dos horas los lunes y viernes; y el Centro de Inserción Sendero de Libertad la atención es brindada de lunes a miércoles por un lapso de cuatro horas.

En todos los Centros de Internamiento e Inserción funciona un Centro Escolar y, en total, hay 187 alumnos matriculados en primaria, 426 en secundaria, 106 en primer año de bachillerato y 138 en segundo año de bachillerato, haciendo un total de 857 alumnos. Menos de la cuarta parte de la población interna no está incorporada en actividades educativas, pero participan en diferentes talleres ocupacionales como panadería, sastrería, pintura o artesanía, obra de banco, agricultura, cerámica y computación. Hay un total de 979 jóvenes que participan en estos talleres.

En cuanto a la alimentación y la calidad de la comida, los directores de Centros y personal de los equipos técnicos explicaron que el grado de cocción en los alimentos para lograr un sabor y consistencia aptos para el consumo de todos los internos a veces no se logra a gran satisfacción.

Como un paliativo para solventar esta problemática, mediante solicitud autorizada, se les permite el ingreso de mini cocinas eléctricas de una resistencia para que de los mismos alimentos que ahí les sirven o de los permitidos de ingreso por su familia los puedan cocinar, teniendo en cuenta la adopción de todas las medidas de seguridad necesarias.

iii. Centros de resguardo de detención administrativa y bartolinas

A través del monitoreo constante de parte de esta Procuraduría en las bartolinas policiales, se ha constatado que el problema de hacinamiento

en que se encuentran los centros penales ha tenido efecto directo en las condiciones en que se encuentran miles de personas detenidas. Las bartolinas han pasado de ser lugares en que la detención era de corta duración (detención administrativa y el término de inquirir), convirtiéndose en cárceles en donde se alojan a personas que están siendo investigadas procesalmente, e incluso hay personas ya condenadas.

Otra situación preocupante es que las bartolinas policiales no cuentan con las condiciones necesarias para asegurar que los internos e internas estén separados por sexo, edad, gravedad del delito, etc. En la práctica, las personas están confinadas en celdas separadas por barrotes o delgadas divisiones de lámina o ladrillos, lo cual hace frágil la seguridad de las y los detenidos.

c) Atención a grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad

Es un mecanismo de protección de derechos humanos regulado en el Reglamento de Aplicación de Procedimientos y que considera como personas vulnerables o en situación de vulnerabilidad a aquellas personas que individual o colectivamente se encuentran en desventaja en el goce de cualesquiera de sus derechos humanos en razón del sexo, edad, religión, nacionalidad, discapacidad, estado familiar, estado de salud, idioma, pertenencia a un pueblo originario, situación de privación de libertad, orientación sexual, opinión política, posición económica y cualquier condición social.

En los últimos en la Procuraduría se han creado varios departamentos y unidades especializadas que brindan apoyo técnico y colaboración sobre temáticas que tienen que ver con estos sectores poblacionales excluidos del desarrollo. Entre las funciones que se les han encomendado se encuentran: atender con prontitud las solicitudes para participar en las diferentes

fases de la tramitación de expedientes; brindar acompañamiento a las víctimas debiendo realizar las acciones inmediatas de protección que procedan tales como la gestión de buenos oficios, monitoreo permanente de hechos y situaciones relacionadas con su área de trabajo, monitoreo interno y control centralizado de los expedientes abiertos a nivel nacional sobre las temáticas de sus respectivas áreas. Deberán, además, elaborar reportes periódicos y hacer recomendaciones o propuestas para la mejora de los mecanismos de protección y promoción de los derechos humanos.

A continuación se presentan las principales acciones de protección específicas a personas vulnerables o en situación de vulnerabilidad.

i. Atención a personas con VIH

El Departamento de VIH y Derechos Humanos fue creado en octubre de 2010 y es la instancia comprometida en la atención de los derechos de las personas con VIH. Busca, además, contribuir con el cambio de los paradigmas sociales, disminuir el estigma y la discriminación y apoyar en la prevención de la expansión del virus y las fatales consecuencias que genera la exclusión social de este sector de población en situación de vulnerabilidad.

En el período, la referida dependencia especializada brindó asistencia técnica a los Departamentos y Unidades del área de tutela que lo requirieron, resultando la emisión tres opiniones de proyectos de resoluciones finales sobre vulneraciones a derechos humanos de personas con VIH; asimismo, en el Departamento se elaboraron cuatro proyectos de resolución final en el tema de VIH y tres proyecto de resolución inicial. Además, se ingresaron dieciséis orientaciones a personas con VIH que acudieron al Departamento por ser presuntas víctimas de discriminación de parte de particulares y de empresas privadas, por lo que se les remitió a las instituciones competentes para que se le diera trámite a sus peticiones.

Por otra parte, en el periodo analizado se realizaron diecisiete diligencias de verificación y seguimiento de casos y de recopilación de información para sustentar las resoluciones finales. Entre las acciones inmediatas que se realizaron fueron al Hospital de San Bartolo, Hospital de San Miguel y de La Unión, bartolinas de la Policía Nacional Civil en Ciudad Futura y Cuscatancingo, y en el Centro Penal “La Esperanza”, en estos últimos lugares se logró que a las personas con VIH privadas de libertad se les garantizara el acceso a la atención médica y terapia antirretroviral.

ii. Atención a personas con discapacidad

El Departamento de Personas con Discapacidad y Derechos Humanos inició formalmente sus labores a partir del 28 de septiembre de 2011, desde ese momento, le ha correspondido dar seguimiento a las acciones de las instancias públicas que tienen por función garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

Este Departamento ha brindado asistencia técnica a diferentes unidades de las áreas de Tutela, así como a Delegaciones Departamentales y Locales que lo solicitan, consistiendo esta en emitir opiniones técnicas sobre proyectos de resolución y asesoría en el tratamiento de casos en cuanto a enfoque sobre los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo se ha mantenido una comunicación constante con otras unidades y personas usuarias para el acompañamiento y seguimiento de sus casos.

De igual forma se han brindado orientaciones jurídicas a personas con discapacidad que lo solicitan en este Departamento, realizado gestiones de acompañamiento en la realización de diligencias en instituciones gubernamentales, así como gestiones directas independientes de los acompañamientos a usuarios o usuarias. Además, se han realizado acciones de activación de instancias competentes en la protección de derechos de personas con discapacidad.

También se han realizado mediaciones con diferentes instituciones, solicitadas por personas con discapacidad o sus familiares. Las instituciones y autoridades con las que se han realizado dichas mediaciones y verificaciones son el Hospital Nacional General y de Psiquiatría, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Tribunal Disciplinario de la Policía Nacional Civil, la Escuela de Educación Inclusiva de Tiempo Pleno “República de Panamá”, la Procuraduría General de la República Auxiliar de La Libertad y de sede central, el Hospital Nacional Rosales, entre otras, con el fin de solventar problemáticas específicas sobre personas con discapacidad, así como recabar información sobre posibles vulneraciones a derechos de las personas con discapacidad.

Se destaca la verificación hecha en el Hogar “Vito Guarato”, a fin de establecer las condiciones en las que se encontraban niñas, niños, adolescentes y personas adultas con discapacidad viviendo en el lugar, lo cual requirió de una serie de diligencias en coordinación con otras áreas como la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez y Juventud y con la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Sobre el caso se preparó un informe técnico que solicitó la Comisión de Asamblea Legislativa, sobre las gestiones realizadas por esta Procuraduría sobre el caso relativo a la Asociación Padre Vito Guarato y particularmente sobre el Hogar. Para su realización fue sostenida reunión con miembros de la Junta Directiva de la Asociación “Vito Guarato” y llevada a cabo verificación en el Hogar, así como también se requirió información a las autoridades del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia – CONNA – y del Instituto Salvadoreño para la Atención Integral de la Niñez y la Adolescencia – ISNA.

Por otra parte, el caso del Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia viuda de Dueñas”, requirió un conjunto de diligencias y reuniones con

autoridades del mismo, así como del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral – ISRI, del cual depende dicho Centro. Se realizó supervisión en las instalaciones del Centro de Rehabilitación y en la Escuela de Ciegos junto a representantes del Pleno del CONAIPD y de asociaciones de personas ciegas, así como de personas usuarias del Centro de Rehabilitación.

iii. Atención a personas migrantes y sus familiares

La Unidad de Migrantes, dependencia adscrita a la Procuraduría Adjunta de Derechos Civiles e Individuales, atendió en el período: 32 orientaciones legales, 27 denuncias, 25 oficios y 2 resoluciones iniciales de diversa naturaleza migratoria.

Por otra parte, se deben destacar las gestiones de buenos oficios que este Departamento realiza, ya que en el periodo que nos ocupa se realizaron cerca de 25 gestiones de apoyo a personas usuarias, activando instancias y brindando asesoría para que acudan a las instituciones idóneas, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, Fiscalía General de la República, Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional contra la Trata de Personas y el CONMIGRANTES, para que dentro de sus facultades y funciones apoyen las peticiones y acciones de estas personas y les brinden el acompañamiento respectivo.

En cuanto a las tomas de muestras de ADN, en el periodo que nos ocupa se realizaron 4 jornadas entre los meses de julio a diciembre del año 2013 y una jornada en los primeros días de abril de 2014, obteniendo el ingreso de 46 casos de migrantes no localizados en dichas jornadas. Además, se ha institucionalizado que la toma de muestra de ADN se realice en El Salvador, en sede de Procuraduría.

En cuanto a los familiares donantes, de las partes que conforman el Banco de Datos atendieron un total de 70 mujeres y niñas, y 46 hombres.

Sin embargo, las jornadas de toma de muestras no solo implican la obtención de ADN, sino también brindarles transporte, alimentación, refrigerio, atención psicológica en algunos casos, apoyo que también se les proporciona cuando se realiza la notificación de informe de identificación de restos a las familias.

Los registros del Banco de Datos indican que a la fecha se cuenta con 244 casos de migrantes no localizados, y un total de 688 muestras de ADN. En el periodo de este informe se efectuó la ubicación, localización e identificación de 6 migrantes que dieron positivos los resultados de ADN. Por otra parte, y como complemento de dicho proceso, se contó con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador para la repatriación de los restos de 9 compatriotas fallecidos.

d) Fiscalización y Auditoría del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones

Desde la entrada en vigencia de la Ley Especial para la de Intervención de las Telecomunicaciones, aprobada mediante decreto 285 de fecha dieciocho de febrero de 2010, y publicada en el D.O 51, Tomo 386 de 15 de marzo del mismo año, se señala que esta constituye un instrumento útil y de carácter excepcional en la persecución del delito, en particular contra la criminalidad organizada, pero su utilización debe estar resguardada por garantías que eviten abusos a la intimidad de las personas. En tal sentido, desarrolla una serie

de principios y procedimientos para garantizar, por un lado, el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, y por otro, que las intervenciones en las comunicaciones estén controladas por la autoridad judicial competente y bajo la fiscalización de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

La Ley Especial, además de regular lo pertinente sobre el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones, también establece que es el ente adscrito a la Fiscalía General de la República encargado de ejecutar las intervenciones autorizadas por los jueces. Es por ello que entre los mecanismos de garantía contra violaciones a derechos humanos, la Ley Especial establece que la Procuraduría debe realizar las funciones de fiscalización y auditoría del Centro de Intervención a las Telecomunicaciones (CIT).

Entre las principales actividades que ha realizado por el Departamento de Fiscalización y Auditoría del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones, destacan los siguientes: realización de la Primera Auditoría en el Centro de Intervención a las Telecomunicaciones de la FGR; elaboración del Primer Informe Anual de la Auditoría realizada, Presentado a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa; y la firma del Protocolo entre Fiscalía General de la República y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para el desarrollo de las atribuciones conferidas en el Art. 33 de la Ley Especial de Intervención a las Telecomunicaciones.

5.2. Análisis e incidencia en políticas, normas y prácticas del Estado

El área estratégica de análisis e incidencia de políticas, normas y prácticas del Estado tiene como objetivo promover el comportamiento estatal respetuoso de la dignidad humana, exigiendo a las instituciones del Estado que cumplan las obligaciones contenidas en la Constitución y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Se trata de una actividad de obtención, verificación y utilización inmediata de información para atender problemas de derechos humanos y prevenir su violación en el futuro. Las estrategias que se utilizan son: monitoreo permanente de las tendencias del entorno relacionadas con la vigencia de los derechos humanos; producción de posicionamientos y propuestas para promover un comportamiento estatal respetuoso de la dignidad humana; y fomento de buenas prácticas de gobierno, por medio del acompañamiento de personas funcionarias públicas para la erradicación de conductas violatorias de derechos humanos.

a) Informes especiales y situacionales

La PDDH se encuentra facultada para emitir informes con la finalidad de verificar la existencia de prácticas, políticas públicas y normas violatorias de los derechos humanos y libertades fundamentales, en orden a promover medidas para erradicar o eliminar sus causas, así como prevenir violaciones a los mismos y propiciar las condiciones para su eficaz ejercicio.²¹²

Durante el período incluido en el presente documento, la PDDH realizó 6 informes relacionados con la situación de los derechos

humanos en el país. Algunos de estos, fueron presentados ante organismos internacionales o redes regionales de promoción y protección de derechos humanos, contando con el apoyo de diferentes sectores de la sociedad civil. (Ver listado anexo)

Este aporte institucional facilitó al Sistema Universal de Protección, el acceso a información sobre el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los principales tratados sobre derechos humanos, convirtiéndose en un insumo fundamental para evaluar los informes presentados por el Estado salvadoreño. De igual manera, otros informes abordaron temas de trascendencia nacional como los derechos de personas migrantes en zonas fronterizas y el derecho a la protección del medio ambiente.

Cuadro N° 22 Informes especiales y situacionales 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014	
Área Temática	Total Documentos
Derechos civiles	1
Derechos económicos, sociales y culturales	4
Derecho a la protección del medio ambiente	1
Total	6

Fuente: Datos proporcionados por las Procuradurías Adjuntas Específicas.

Se destaca la elaboración del “Informe Alternativo sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador” enviado al Comité de Expertos Independientes de la Organización de Naciones Unidas que supervisa la aplicación de dicho Pacto. En el referido documento se establece la posición institucional sobre el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales en el país, los avances y desafíos observados y las recomendaciones al Estado salvadoreño al respecto.

²¹² Artículos 42 y 43 de la Ley de la PDDH y artículo 39 del Reglamento para la Aplicación de los Procedimientos del Sistema de Protección de Derechos Humanos.

Asimismo, se elaboró el “Informe Alternativo El Salvador 2008 – 2013. A cinco años de entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” Dicho documento fue el resultado de un proceso de coordinación con las organizaciones de la sociedad civil que pertenecen a la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad de la PDDH²¹³ y fue presentado por una delegación conjunta en el décimo periodo de sesiones del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

En materia ambiental destaca el Informe presentado a la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) en el que se analiza la situación nacional sobre la protección al medio ambiente y en el cual se establecen recomendaciones sobre la gestión de riesgos, cambio climático, minería, entre otros.

Finalmente, en virtud de la coordinación establecida con el Programa de Atención a Refugiados de El Salvador (PARES), se emitió el Primer Informe del Plan de Monitoreo de Fronteras, el cual identifica actores locales y acciones implementadas para la atención de la población migrante en zonas fronterizas y localidades respectivas.

b) Posicionamientos públicos

El posicionamiento público, es una atribución de la PDDH relacionada a temáticas específicas, situaciones de especial interés para la institución, fechas conmemorativas de los derechos humanos, entre otros.

Durante el período que informa el presente documento, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos emitió un total de

²¹³ La Mesa Permanente de Personas con Discapacidad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, es el espacio de participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones. Ésta surgió en el año 2006, siendo fundada aproximadamente por treinta organizaciones y por personas independientes, con el propósito de unificar esfuerzos a favor de los derechos de las personas con discapacidad.

18 pronunciamientos, referidos a las distintas materias de protección y promoción de los derechos humanos. A continuación el detalle:

Cuadro N° 23 Pronunciamientos por área temática 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014	
Área Temática	Total Documentos
Derechos civiles y políticos	6
Derecho a la protección ambiental	6
Derechos económicos, sociales y culturales	2
Derechos humanos de la niñez y adolescencia	2
Derechos humanos de las mujeres	2
Total	18

Fuente: Datos proporcionados por las Procuradurías Adjuntas Específicas

En materia de derechos económicos, sociales y culturales, la PDDH se pronunció sobre la entrada en vigor de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo facultativo y en razón de la celebración del Día Nacional de la Solidaridad hacia las personas con VIH.

Asimismo, se estableció la posición institucional con respecto al retraso en la elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República y en materia laboral sobre la afectación de los servicios en la red pública de salud, por suspensión de labores a causa de posible ausencia del financiamiento del escalafón salarial para el año 2014.

De igual forma se emitieron diferentes pronunciamientos en relación al derecho humano a la protección del medio ambiente, entre los que destacan los referidos a fechas conmemorativas, como el Día Mundial del Medio ambiente y el Día Mundial del Agua.

De la misma forma, se ha atendido la temática de memoria histórica, emitiendo comunicados públicos en torno al atentado en contra de la Asociación Pro búsqueda y las conmemoraciones del martirio de Monseñor Romero y los habitantes masacrados en El Mozote.

Finalmente, en relación a los derechos humanos de las mujeres, se emitió el Comunicado Público expresando preocupación por la grave situación de violencia contra las mujeres en El Salvador, 20 de febrero de 2014, abordando aspectos como la violencia feminicida y la demanda a la Fiscalía General de la República, para que de acuerdo a sus competencias, otorgue prioridad a la investigación y esclarecimiento de los hechos registrados así como de otros relacionados con la violencia de género; asimismo, se solicitó a las autoridades del Sector Justicia, el cumplimiento de la obligación de la debida diligencia a fin de garantizar el derecho fundamental a la vida y otras facultades inherentes, evitando la impunidad.

c) Opiniones sobre proyectos de ley, posicionamientos sobre normativas y propuestas de reforma

La normativa institucional faculta la emisión de opiniones sobre normativas o políticas públicas, a fin de promover y proponer las medidas que estime necesarias para prevenir violaciones a derechos humanos y garantizar el pleno goce de los mismos²¹⁴.

En el presente período, se emitieron un total de 17 documentos relacionados con normativas específicas, entre las que destacan las opiniones institucionales que promueven la incorporación de los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos a la legislación nacional y aquellas vinculadas a la regulación

de problemáticas que afectan la promoción y protección de los mismos (Ver listado anexo).

El criterio de la PDDH, en los procesos de formulación de leyes, contribuye al conocimiento y la admisión de la perspectiva de los derechos humanos en la normativa nacional, avanzando paulatinamente en la armonización con la base jurídica de los derechos humanos.

Cuadro N° 24 Opiniones sobre proyectos de ley, posicionamientos sobre normativas y propuestas de reforma de ley por área temática 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014	
Área Temática	Total Documentos
Derechos civiles	11
Derechos económicos, sociales y culturales	3
Derechos de la niñez, adolescencia y juventud	2
Derechos humanos de las mujeres	1
Total	17

Fuente: Datos proporcionados por las Procuradurías Adjuntas Específicas.

Un esfuerzo importante ha sido el trabajo dentro del comité técnico intersectorial conformado por la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa para la elaboración del Anteproyecto de Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional. De manera similar, se han realizado aportes en la Comisión Nacional Contra el SIDA (CONASIDA) para la elaboración de la Ley de respuesta integral a la epidemia de VIH en El Salvador.

De igual manera, se emitió la Opinión sobre los “Principales aspectos que hacen necesaria la reforma del artículo 69 de la Constitución de la República relativa a los derechos a la alimentación adecuada y al agua”

²¹⁴ Arts. 83-86 del Reglamento para la Aplicación de los Procedimientos del Sistema de Protección de los Derechos Humanos.

Por otro lado, la PDDH emitió importantes opiniones sobre el Anteproyecto de Ley contra la Trata de Personas, que incluye la perspectiva sobre derechos humanos de las mujeres y la niñez y el Proyecto de ley de creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños desaparecidos durante el conflicto armado interno. Asimismo, se realizó la opinión sobre los anteproyectos de ley de Indemnización Universal y la Ley Reguladora de la Prestación económica por renuncia voluntaria.

Finalmente, se elaboraron documentos sobre los instrumentos internacionales pendientes de ratificación, entre estos: el Convenio N° 169 de la OIT; el Protocolo Facultativo de la Convención

contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes; el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

d) Actividades de observación preventiva y atención de crisis

Durante el período que comprende al presente informe, la PDDH realizó a nivel nacional un total de 1630 **acciones de protección** relacionadas con la observación preventiva, diligencias de buenos oficios y mediaciones.

Cuadro N° 25				
Detalle de diligencias de observación preventiva realizadas y atención a crisis				
1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014				
Unidad	Observación preventiva	Buenos Oficios	Mediaciones	Total
San Salvador	143	-	179	322
La Libertad	5	46	19	70
Soyapango*	5	9	43	57
Apopa*	12	160	15	187
Usulután	19	92	18	129
Cuscatlán	8	12	2	22
Santa Rosa de Lima*	9	20	27	56
Ahuachapán	16	15	16	47
San Miguel	12	216	10	238
Santa Ana	20	53	6	79
Metapán*	35	35	9	79
La Paz	3	7	17	27
San Vicente	35	14	3	52
Morazán	2	11	2	15
Chalatenango		77	2	79
La Unión	13	20	8	41
Cabañas	2	29	17	48
Sonsonate	64	1	17	82
Total	403	817	410	1630

Fuente: Reportes de las Delegaciones Departamentales y Locales, PDDH.*

i. Observación preventiva y atención de crisis

La observación preventiva y atención de crisis es un mecanismo de protección que tiene por objeto, prevenir violaciones a derechos humanos y atender situaciones de crisis o conflictos a nivel local, regional o nacional; sean éstos económicos-sociales, penitenciarios, ambientales o de otra naturaleza, que puedan desembocar en vulneraciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, entre ellas, movilizaciones, protestas y concentraciones colectivas en lugares públicos o privados; amotinamientos o riñas en centros de detención, toma de edificios públicos o privados, y crisis derivadas de la confrontación o conflictos surgidos entre colectividades y autoridades públicas²¹⁵.

Según lo establecido en el Reglamento para la Aplicación de Procedimientos la observación preventiva y atención de crisis comprende la aplicación técnica de los diferentes métodos alternos de solución de conflictos, tales como el diálogo, la negociación, la conciliación y la mediación, desde la estricta perspectiva de los derechos humanos y del mandato constitucional y legal del Procurador o Procuradora; promoviéndose en todo momento, la prevención o solución de las diferentes problemáticas atendidas²¹⁶.

En el período que comprende al presente informe, la PDDH realizó 403 diligencias relacionadas con la observación preventiva y atención de crisis.

ii. Interposición de buenos oficios

Los buenos oficios, son las gestiones que el Procurador o Procuradora, quien realice sus funciones, o quien tuviere delegación para ello realizan a petición de la presunta víctima o denunciante con la anuencia de aquella, ante

²¹⁵ Art. 61 del Reglamento para la Aplicación de los Procedimientos del Sistema de Protección de los Derechos Humanos

²¹⁶ Art. 63 del Reglamento.

la autoridad denunciada o competente, con el objetivo de restituir o reparar integralmente y de manera inmediata los derechos presuntamente afectados. La interposición de buenos oficios es procedente siempre que la gestión no implique un menoscabo a otros derechos de la presunta víctima o de otras personas afectadas.

Durante el período que corresponde al presente informe, esta Procuraduría realizó un total de 817 diligencias de buenos oficios ante distintas autoridades públicas. En las Delegaciones Departamentales, la gestión de buenos oficios, se realizó mayormente en procedimientos administrativos y judiciales; seguidos de las problemáticas laborales y aquellas relacionadas con el trabajo del sector informal. En San Salvador, los temas laborales y de comercio informal también predominaron en la activación de los buenos oficios.

iii. Mediaciones

El Reglamento para la Aplicación de Procedimientos establece que la mediación es un mecanismo potestativo que tiene como objetivo buscar la solución negociada de un conflicto, generalmente de naturaleza colectiva. La mediación es especialmente impulsada por la Procuraduría para facilitar la comunicación y el entendimiento entre las partes en conflicto, quienes deciden y proponen las condiciones para resolverlo (Art. 20).

Es por ello, que la labor de mediación, representa para la PDDH una actividad de primer orden, en el marco de su interés por propiciar el ejercicio del diálogo y las soluciones democráticas en el país. En ese sentido, entre el 1 de junio de 2013 y el 31 de mayo de 2014, esta Procuraduría realizó un total de 410 mediaciones a nivel nacional.

Nuevamente, las problemáticas relacionadas con los derechos laborales y los procedimientos administrativos y judiciales fueron las que más originaron las actividades de mediación de la PDDH.

5.3. Promoción y educación en derechos humanos

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ha coincidido con las declaraciones internacionales, en que la promoción de los derechos humanos mediante “la educación, la capacitación, la información y difusión es un proceso fundamental para establecer relaciones de comprensión, tolerancia, igualdad y justicia entre las personas, con lo cual se va generando una sociedad de respeto y protección de la dignidad humana”²¹⁷. Asimismo, se construye un sólido Estado de Derecho, donde las instituciones desempeñen conductas acordes al marco jurídico y al más relevante reconocimiento de la dignidad humana. Ese es el espíritu del mandato de “Desarrollar un programa permanente de actividades de promoción sobre el conocimiento y el respeto de los derechos humanos”, prescrito en el artículo 194, romano I, ordinal 13º de la Constitución de la República.

En concordancia con lo anterior, a continuación se presentarán los logros de las actividades de promoción y educación en derechos humanos realizadas en el período de este Informe. Ante la cantidad importante de actividades ejecutadas, será justo considerar que detrás del éxito de cada una de ellas, yace un conjunto de esfuerzos y entendimientos previos necesarios que lo ha permitido. Asimismo, es de reconocerse que estas labores de comento, son el resultado de un trabajo de equipo, donde ha operado un sistema institucional que ha interrelacionado esfuerzos propios con apoyos de otras instituciones

públicas, sociales y privadas. Tanto los esfuerzos previos como este trabajo han posibilitado el logro de la concreción exitosa de los objetivos del área estratégica de promoción y educación en derechos humanos: a saber: 1, fortalecer la educación y promoción en derechos humanos en diversos sectores sociales; 2, socializar las resoluciones, informes especiales, entre otros documentos; 3, suscripción de convenios con universidades, gobiernos locales y organizaciones; 4, extender la perspectiva de género en la promoción de derechos humanos²¹⁸.

a) Datos estadísticos a nivel nacional

El total de actividades de promoción y educación de derechos humanos, en este período a nivel nacional fue de 2,896 con las cuales se beneficiaron a 59,271 personas. De esta población, el 51.1% fueron mujeres. En relación a la edad, 56% de las personas beneficiadas fueron adultos y los jóvenes y la niñez representaron el segundo grupo más atendido con el 44%. En las delegaciones departamentales y locales se efectuó el 70.5% (2,042) de las actividades de promoción y educación, y en la sede central, en San Salvador, se ejecutó el 29.5 % (954).

Sobre las actividades específicamente educativas, éstas representaron 1,645 equivalente al 56.8% del total de acciones. En este tema se contemplaron talleres, cursos, panel fórum, diplomados, materiales pedagógicos, y otras actividades, que pretendían dejar un contenido formal de los derechos humanos, comprensible y asimilable en la conciencia de las personas que han participado en la educación. La cantidad de personas beneficiadas con las actividades educativas fueron 33,529.

²¹⁷ ONU. Declaración y programa de acción de Viena, aprobada por la conferencia mundial de derechos humanos. 25 de junio de 1993. Doc. A/CONF. 157/23 (1993). Párrafo 78, letra “d”.

²¹⁸ PDDH. Informe de Labores 2012-2013.

Las actividades de promoción fueron 1,251 correspondiente al 43.2 % del total de acciones realizadas en esta área estratégica. Como se ha indicado en informes pasados²¹⁹, la promoción contempla la realización de conferencias, conversatorios, participación en medios de comunicación social, divulgación de informes especiales y situacionales, foros, seminarios, ferias, festivales, celebración de días conmemorativos, reuniones de seguimiento, acompañamiento a comunidades, promoción del mandato del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y actividades de difusión sobre temas importantes como la memoria histórica y los derechos de grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad.

Como se planteó, uno de los objetivos específicos de este eje estratégico de la promoción de los derechos humanos, en la realizaciones de este conjunto de actividades, fue fortalecer la educación y promoción en derechos humanos en diversos sectores sociales como el sector educativo formal²²⁰; el sector de los servidores públicos²²¹; de las organizaciones sociales²²² y

²¹⁹ PDDH. Informe Anual de Labores 2012-2013.

²²⁰ Comprende estudiantes del nivel de educación básica, media y superior.

²²¹ Docentes, personal de salud, policías, militares, municipales, otros.

²²² Sindicatos, ONG's, gremios, comunidades, colectivos, movimientos.

de los grupos en situación de vulnerabilidad²²³, entre otros sectores. Asimismo, en la práctica formativa se ha difundido y socializado el quehacer de esta Procuraduría que se materializa en muchos casos en resoluciones, informes especiales y otros documentos como opciones ilustrativas relacionadas a proyectos de leyes, a adhesiones a instrumentos internacionales como en el caso de la Corte Penal Internacional que establece el Estatuto de Roma.

Es de subrayar, que la Procuraduría cuenta con una política de educación en derechos humanos y con una Escuela de Derechos Humanos, lo cual contribuye al buen desempeño de la labor educativa y la labor de difusión y promoción en general de los derechos y libertades fundamentales.

A continuación se presenta un cuadro sinóptico, que informa de manera general y estadística la labor de educación y promoción que se ha ejecutado en cada dependencia de esta Procuraduría. Están plasmadas el número de actividades y de beneficiados por cada dependencia en el territorio del país.

²²³ Personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas con VIH, pueblos indígenas, comunidad LGBTI, víctimas del conflicto armado, otros

Cuadro N° 26
Actividades de promoción y educación a nivel nacional

	Educación		Promoción		Materiales	Totales de actividades y personas beneficiadas	
	Actividades	Personas beneficiadas	Actividades	Personas beneficiadas	Cantidad de materiales	Total de actividades	Total personas beneficiadas
I. Delegaciones locales							
Apopa	30	582	12	397	n/d	42	979
Metapán	30	549	38	1,488	300	68	2,037
Santa Rosa de Lima	32	320	139	279	n/d	171	599
Soyapango	112	2,247	41	1,808	n/d	153	4,055
II. Delegaciones departamentales							
Ahuachapán	63	1,394	94	1,384	192	157	2,778
Cabañas	40	380	76	283	n/d	116	663
Chalatenango	43	1,588	--	--	n/d	43	1,588
Cuscatlán	50	1,709	27	544	n/d	77	2,253
La Libertad	59	2,274	91	2,912	n/d	150	5,186
La Paz	43	1,074	66	456	n/d	109	1,530
La Unión	70	1,822	62	1,128	300	132	2,950
Morazán	24	1,466	43	2,075	n/d	67	3,541
Santa Ana	9	111	86	2,724	n/d	95	2,835
San Miguel	34	2,578	102	2,389	n/d	136	4,967
San Vicente	94	2,527	51	1,742	n/d	145	4,269
Sonsonate	71	1,637	86	2,083	n/d	157	3,720
Usulután	99	1,477	125	1,536	51	224	3,013
III. Sede Central y Escuela de Derechos Humanos							
Unidad de educación	159	4,411	n/d	n/d	48,000	159	4,411
Unidad cultura y promoción	n/d	n/d	33	1533	n/d	33	1,533
Biblioteca institucional	433	434	6	981	n/d	439	1,415
Unidades Juveniles	89	4,011	n/d	n/d	n/d	89	4,011
Depto. de Comunicaciones	n/d	n/d	73	n/d	18,000	73	n/d
Unidad Realidad Nacional	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Unidad Derechos Políticos	13	596	n/d	n/d	n/d	13	596
Unidad de Migrantes; Dpto. de Discapacidad y DH; Dpto. de VIH y DH; Unidad de Acceso a la Información Pública ²²⁴	16	246	14	100	n/d	30	346
IV. Procurador							
Procurador	18	n/d	n/d	n/d	n/d	18	n/d
Totales	1,645	33,529	1,251	25,742	66,843	2,896	59,271

Fuente: reporte de actividades dependencias, PDDH.

²²⁴ Unidad de Migrantes; Departamentos de Discapacidad y Derechos Humanos, Departamento de VIH y Derechos Humanos; Unidad de Acceso a la Información Pública (Transparencia), son entidades que realizan también actividades de promoción y educación.

De acuerdo a los datos reflejados en el cuadro sinóptico sobre las actividades realizadas, puede identificarse que los datos están organizados en delegaciones locales, delegaciones departamentales, en la sede central de San Salvador y un apartado sobre las actividades del

Titular en materia de enseñanza de derechos humanos. A continuación se realiza una breve reflexión por algunas secciones de los datos organizados en el orden que aparecen en el cuadro de comento.

b) Delegaciones Locales

Cuadro N° 27							
Actividades de promoción y educación en las Delegaciones Locales							
	Educación		Promoción		Materiales	Totales de actividades y personas beneficiadas	
	Actividades	Personas beneficiadas	Actividades	Personas beneficiadas	Cantidad de materiales	Total de actividades	Total personas beneficiadas
Apopa	30	582	12	397	n/d	42	979
Metapán	30	549	38	1488	300	68	2037
Santa Rosa de Lima	32	320	139	279	n/d	171	599
Soyapango	112	2247	41	1808	n/d	153	4055
Totales	204	3,698	230	5,463	300	434	7,670

Fuente: reporte de actividades dependencias, PDDH.

En las delegaciones locales de Apopa, Metapán, Santa Rosa de Lima y Soyapango, se logró efectuar el 15 % de las acciones de promoción y educación, lo que en términos reales equivalió a 434 actividades. La población beneficiada ascendió a la cantidad de 7, 670, es decir, al 12.9% del total de personas beneficiadas a nivel nacional en el período de reporte. Un logro importante de estas delegaciones, ha sido cumplir con sus objetivos más allá de lo planificado. Lo cual ha sido posible en algunos casos al establecimiento de coordinaciones y

apoyos con las instituciones públicas y sociales. Lo cual va en sintonía con los objetivos relacionados al establecimiento de convenios y relaciones de cooperación comprendidas en el eje estratégico de la promoción y educación de derechos humanos. Las delegaciones en general, en materia de educación y promoción, se han coordinado con la Escuela de Derechos Humanos de PDDH, desde donde se les dio asesoría, apoyo en materiales y orientaciones sistemáticamente.

c) Delegaciones Departamentales

Cuadro N° 28							
Actividades de promoción y educación en las Delegaciones Departamentales							
	Educación		Promoción		Materiales	Totales de actividades y personas beneficiadas	
	Actividades	Personas beneficiadas	Actividades	Personas beneficiadas	Cantidad de materiales	Total de actividades	Total personas beneficiadas
Ahuachapán	63	1394	94	1384	192	157	2778
Cabañas	40	380	76	283	n/d	116	663
Chalatenango	43	1588	--	--	n/d	43	1588
Cuscatlán	50	1709	27	544	n/d	77	2253
La Libertad	59	2274	91	2912	n/d	150	5186
La Paz	43	1074	66	456	n/d	109	1530
La Unión	70	1822	62	1128	300	132	2950
Morazán	24	1466	43	2075	n/d	67	3541
Santa Ana	9	111	86	2724	n/d	95	2835
San Miguel	34	2578	102	2389	n/d	136	4967
San Vicente	94	2527	51	1742	n/d	145	4269
Sonsonate	71	1637	86	2083	n/d	157	3720
Usulután	99	1477	125	1536	51	224	3013
Totales	699	20,037	909	19,256	543	1,608	39,293

Fuente: reporte de actividades dependencias, PDDH.

En las sedes o delegaciones departamentales, en su conjunto, se logró ejecutar 1,608 actividades correspondiendo al 55.5% de las acciones de promoción y educación en derechos humanos a nivel nacional. Las personas beneficiadas fueron 39,293, siendo el 66.3% del total de beneficiarios y beneficiarias en el período en todo el país.

Las delegaciones departamentales, al igual que en las delegaciones locales, realizan actividades de promoción, educación y de difusión coordinándose con las Unidades Juveniles y con la Escuela de Derechos Humanos, mismas que tienen su sede en San Salvador.

Se ha identificado como un logro importante de la labor de promoción y educación en derechos humanos, la introducción de la perspectiva

de género. Lo cual es importante para ir fortaleciendo la igualdad entre las mujeres y hombres. En el pasado y en el presente, el machismo y antropocentrismo ha sido fuente de desigualdades e injusticias contra las mujeres, mismos que deben desterrarse desde la apuesta por la educación, la conciencia sobre el valor de la dignidad humana y la defensa y protección de sus propios derechos..

Por otro lado, es relevante señalar la necesidad de recursos financieros, humanos y técnicos, para ir elevando los niveles de conciencia, profundidad y progresividad de la educación y promoción sobre los derechos humanos. En este período, pese a los limitados recursos, se ha podido atender a miles de personas.

d) Escuela de Derechos Humanos y Departamentos de la Sede Central San Salvador

Cuadro N° 29 Actividades de promoción y educación en la Escuela de Derechos Humanos y los Departamentos de la Sede Central							
	Educación		Promoción		Materiales	Totales de actividades y personas beneficiadas	
	Actividades	Personas beneficiadas	Actividades	Personas beneficiadas	Cantidad de materiales	Total de actividades	Total personas beneficiadas
Unidad de educación	159	4411	n/d	n/d	48,000	159	4,411
Unidad cultura y promoción	n/d	n/d	33	1533	n/d	33	1,533
Biblioteca institucional	433	434	6	981	n/d	439	1,415
Unidades Juveniles	89	4,011	n/d	n/d	n/d	89	4,011
Depto. de Comunicaciones	n/d	n/d	73	n/d	18,000	73	n/d
Departamento de Realidad Nacional	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Unidad Derechos Políticos	13	596	n/d	n/d	n/d	13	596
Unidad de Mi-grantes; Depto. de Discapacidad y DH, Depto. de VIH y DH; Unidad de Acceso a la Información Pública ²²⁵	16	246	14	100	n/d	30	346
Totales	724	9,794	112	2,514	66,000	836	12,308

Fuente: reporte de actividades dependencias, PDDH.

En materia de educación y promoción en derechos humanos, la Escuela de Derechos Humanos juega un rol fundamental. Implementa la política institucional de educación en derechos humanos y desde una perspectiva de sistema, coordina y entrega directrices para el mejor desempeño de esta área estratégica de comento.

La Escuela de Derechos Humanos y las dependencias de la sede central como la Unidad de Educación, la Unidad de Cultura y Promoción, la Biblioteca Institucional, las Unidades Juveniles, el Departamento de Comunicaciones,

²²⁵ Unidad de Migrantes; Departamentos de Discapacidad y Derechos Humanos, Departamento de VIH y Derechos Humanos; Unidad de Acceso a la Información Pública (Transparencia), son entidades que realizan también actividades de promoción y educación.

el Departamento de Realidad Nacional, la Unidad de Derechos Políticos, la Unidad de Migrantes; el Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos, el Departamento de VIH y Derechos Humanos y la Unidad de Acceso a la Información, han realizado 724 actividades educativas beneficiando a 9, 794 personas. Asimismo, ha ejecutado 112 acciones de promoción y difusión, lo cual ha cubierto a 2,514 personas, en su mayoría mujeres. En estadísticas generales, en relación a la suma total de actividades educativas y de promoción, se realizaron 836 acciones y se beneficiaron a 12, 308 personas, representando respectivamente, el 28.9% y el 20.8% del total nacional realizado en el período.

i. Dirección de la Escuela de Derechos Humanos

La Dirección de la Escuela de Derechos Humanos ha coordinado apoyos para las distintas dependencias de PDDH que realizan funciones de educación y promoción; ha dado seguimiento a los convenios de cooperación suscritos en los últimos años. Ha propuesto temas de investigación de interés para la sociedad y los derechos humanos.

Ha recibido peticiones de personas externas que han planteado necesidades específicas en educación y promoción de derechos humanos, ante lo cual se han hecho las consideraciones pertinentes y se ha dado respuesta hasta donde los recursos materiales y financieros como humano han permitido. De igual manera el Titular de la Procuraduría ha acompañado de cerca el quehacer de la educación y promoción que impulsa la Escuela de Derechos Humanos, e incentiva a que cada vez más se realicen iniciativas que fortalezcan estas funciones fundamentales.

Desde la Escuela de Derechos Humanos y la labor educativa, se ha fortalecido, se profundiza y se apuesta con férrea convicción en que mediante esta labor educativa, se garantiza la prevención de la violación a derechos humanos, en la medida que se construye una cultura de respeto, tolerancia y comprensión de estas garantías.

ii. Unidad de Educación

La función fundamental de la Unidad de Educación es impartir cursos, talleres, conferencias. Dar apoyo a las diferentes dependencias que solicitan algún tipo de formación concreta y material específico. En el presente período, esta unidad realizó 159 actividades educativas, con una cobertura de 4,411 personas beneficiadas. Reprodujo siete documentos, sumando un total de 48,000 unidades de material de apoyo educativo, cuyos temas se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 30 Material reproducido para la Educación en Derechos Humanos	
Título	Número de ejemplares
1. Constitución de la República	2,000
2. Declaración Universal de Derechos Humanos	10,000
3. Declaración sobre las víctimas de delitos y abusos de poder	10,000
4. Declaración de los Defensores de Derechos Humanos	10,000
5. Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley	5,000
6. Constitución de la República	10,000
7. Declaración Universal de Derechos Humanos	1,000
Total	48,000

Estos materiales reproducidos se distribuyen en las delegaciones de PDDH y dependencias que lo han requerido para el área estratégica en comento. Con frecuencia la Escuela ha realizado su función mediante cursos cortos por sus limitados recursos.

Los programas de educación que se han desarrollado son los siguientes:

- *Programa de educación en derechos humanos en el área de educación formal:* en el que se pretendió introducir y dar seguimiento a la educación de derechos humanos en la educación formal. Capacitando maestros y maestras como un medio eficaz para lograr el objetivo.
- *Programa de educación en derechos humanos dirigido a la ciudadanía:* se persiguió el desarrollo de procesos de formación dirigidos a la población en general como herramienta para la defensa y protección de sus derechos, implementando metodologías participativas para la multiplicación de los contenidos, con un carácter inclusivo y de igualdad responsable.

- *Programa de capacitación en derechos humanos para funcionarios públicos:* los funcionarios y funcionarias públicas, han sido beneficiados con este programa, particularmente maestras, maestros, militares, y personal de varios ministerios.
- *Programa de capacitación para el personal de la institución:* el objetivo ha sido fortalecer los conocimientos y competencias del personal institucional de PDDH para un mejor desempeño y concreción del mandato constitucional de velar por los derechos humanos.
- *Programa de formación de agentes multiplicadores:* orientado a diversas instituciones y dependencias relacionadas con la promoción y educación de derechos humanos.

iii. Unidad de Cultura y Promoción

En el período de informe, se realizaron 33 acciones de promoción, difusión e información, beneficiando con dichas labores a 1,533 personas. Se visitó centros escolares y ferias académicas para dar a conocer el tema de los derechos humanos, el mandato constitucional del Procurador. Año con año se ha trabajado sobre la cultura de los derechos humanos, sobre el cómo adoptar pautas conductuales que permitan construir una sociedad sin violaciones a derechos humanos, con más tolerancia y sin discriminación. Para tener más garantía de expandir y profundizar dicha cultura es menester procurar urgentemente más recursos que permitan mantener campañas a través de diversos medios.

En el período de informe la promoción se trabajó a partir de los programas siguientes: Promoción del mandato del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos; Organización de actividades conmemorativas en materia de derechos humanos; y Diseño, producción y distribución de materiales educativos de derechos humanos.

iv. Biblioteca Institucional

El servicio personalizado que ha ofrecido la Biblioteca Institucional de PDDH es muy apreciado por las personas usuarias y ofreció una imagen muy positiva de la atención que presta la PDDH. Esta dependencia administra textos especializados, pero además, divulga sus adquisiciones así como su acervo bibliotecológico mediante ferias, visitas a centros escolares, ha establecido coordinaciones con otras instancias externas.

Se informa que esta dependencia ha desarrollado 439 actividades, beneficiando a 981 personas. Ha sostenido coordinaciones con la Escuela de Derechos Humanos y ha apoyado a instancias como a jóvenes de las unidades juveniles, jurídicos de PDDH y personas usuarias en general.

v. Departamento de la Realidad Nacional

En el período, el Departamento de la Realidad Nacional continuó desarrollando sus atribuciones de participar en la elaboración de documentos de análisis, sistematizar las actividades institucionales y realizar acciones de investigación en materia de derechos humanos.

Así, coordinó la elaboración de los siguientes documentos: Informe Anual de Labores 2012-2013 (18 de julio de 2013); Informe Trimestral sobre la Situación de los Derechos Humanos en El Salvador, abril a junio de 2013 (agosto de 2013); Primer Informe del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos sobre las Elecciones Presidenciales 2014 (20 de enero de 2014); Segundo Informe del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la jornada electoral celebrada el 02 de febrero del 2014 (20 de febrero de 2014); Contribución individual del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, para el Examen Periódico Universal al Estado de El Salvador, Segundo Ciclo, 20ª Sesión, Octubre 2014 (15 de marzo de 2014); y el Informe Especial del Señor Procurador para la Defensa

de los Derechos Humanos sobre las Elecciones Presidenciales celebradas el 2 de febrero y 9 de marzo del 2014 (15 de mayo de 2014).

También generó aportes técnicos para el análisis de sentencias y elaboración de pronunciamientos públicos, tales como: la sentencia de la Sala de lo Constitucional que invalidó el nombramiento del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Salomón Padilla, Inc. N° 77-2013/97-2013, del 14 de octubre del 2013 (11 de noviembre de 2013); pronunciamiento sobre la situación de los derechos humanos en el año 2013 (diciembre de 2013); pronunciamiento en ocasión al Día Nacional e Internacional de la Mujer (8 de marzo de 2014); posicionamiento sobre la situación de inseguridad en el país y las políticas estatales de seguridad (12 de mayo de 2014); comunicado público en ocasión a la “Semana Mundial del Detenido Desaparecido” (29 de mayo de 2014); y redacción de diversos reportes, pronunciamientos y balances de las jornadas electorales y verificación especial al escrutinio final (2 de febrero y 9 de marzo de 2014).

Por otro lado, continuó sistematizando la doctrina institucional sobre pronunciamientos públicos, mensajes, opiniones, informes especiales y situacionales, y resoluciones emblemáticas, del año 2013. Se remitieron a la Dirección de la Escuela, las propuestas de publicación para que la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales las tomara en cuenta en su plan de compra para el año 2015. Asimismo, se realizaron dos jornadas de retroalimentación de los documentos elaborados por el Departamento de la Realidad Nacional, dirigidas al personal de la Escuela de Derechos Humanos (junio y diciembre de 2013). Se tuvo participación en jornadas de discusión para reformar algunos artículos del Reglamento de Organización y Funciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, aporte que será incluido en la próxima planificación institucional.

En el área de investigación tuvo incidencia en la elaboración de metodologías, indicadores e

instrumentos para desarrollar el Observatorio Electoral 2014; en este marco, se logró recoger una muestra representativa del cumplimiento de los procedimientos legales en los tres momentos de la votación, abarcando la mitad de los municipios del país y en un tercio de los centros de votación instalados para las dos elecciones presidenciales. Paralelamente, se continuó alimentando los indicadores de campaña electoral de acceso de personas candidatas y partidos políticos a los medios de comunicación, con el apoyo de estudiantes de servicio social. También, se revisó la metodología de monitoreo de medios de prensa sobre temas en derechos humanos, actualizando las fichas de información y ampliando la observación a medios electrónicos. Se realizó una propuesta de seguimiento a la cobertura mediática con enfoque de derechos humanos, que servirá de base para el Premio Nacional de los Derechos Humanos.

En esta misma línea, se elaboraron aportes para el Informe sobre Patrones Sistemáticos de violaciones a Derechos Humanos, a partir de la activación del Sistema de Protección de Derechos Humanos de la PDDH; y se presentó una propuesta de temas que servirán para construir una agenda de investigación en materia de derechos humanos al corto, mediano y largo plazo. En ambos documentos se tomaron en cuenta los datos generados por el Sistema Informático de Gestión de la PDDH, así como la doctrina institucional como resoluciones, pronunciamientos, informes, entre otros documentos.

Finalmente, se continuó participando en la Comisión de Seguimiento para la elaboración de un estudio “Análisis de Contexto- Derechos Humanos y Situación de Grupos con necesidades específicas de protección en El Salvador”, actividad objeto del Convenio de Cooperación firmado entre el ACNUR y la PDDH. Se remitieron observaciones al primer borrador del referido estudio, quedando pendiente la revisión final para el segundo semestre del presente año.

vi. Unidades Juveniles de Difusión

Los jóvenes durante muchos años han sido una preocupación y prioridad para la PDDH. Lamentablemente, no se ha contado con suficientes recursos para extender y ahondar la atención a este sector social que constituye uno de los grupos en condiciones de vulnerabilidad que el Estado debería cuidar con más seriedad.

La PDDH sigue siendo la única institución del Estado salvadoreño que cuenta en su organigrama con una estructura territorial conformada con jóvenes voluntarios y voluntarios, al amparo del artículo 17 de su ley orgánica. Son jóvenes dispuestos a realizar principalmente actividades de promoción, difusión, monitoreo y contraloría juvenil del cumplimiento de los derechos humanos especialmente los de la niñez y la juventud.

En relación a la educación y promoción de los derechos humanos, los principales resultados se obtuvieron por medio del desarrollo de cinco proyectos dirigidos desde la coordinación de las Unidades Juveniles. Los mismos fueron: 1) Prevención de los Riesgos de la Migración Indocumentada; 2) Replicando el empoderamiento de adolescentes y jóvenes en el contexto del VIH para la promoción y defensa de sus derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en la equidad de género; 3) Fortalecimiento de las Capacidades de Adolescentes y Jóvenes de las Unidades Juveniles, en SSR y la Prevención del VIH-SIDA; 4) Cambiando paradigmas para la prevención de la Trata de Personas; 5) Seguimiento a los procesos y mecanismos de contraloría juvenil hacia el Estado, sobre las demandas de las juventudes salvadoreñas y los compromisos incluidos en la Declaración Ministerial

En resumen, las Unidades Juveniles realizaron en este año de informe, 89 actividades de educación, llegando sus beneficios a 4,011 personas jóvenes, niñas y niños en su mayoría.

vii. Departamento de Comunicaciones y Prensa

El Departamento de Comunicaciones desarrollo 73 acciones de promoción y reprodujo un estimado de 18,000 unidades de material divulgativo. Un logro importante ha sido el sostenimiento de la coordinación con los diferentes medios de comunicación masiva escrita, radial y televisada, lo cual ha permitido una importante y constante cobertura mediática de los temas de derechos humanos. Por caso, temas preocupantes como la violación a los derechos humanos de las personas de grupos en condiciones de vulnerabilidad. Otro caso ha sido el tema de los derechos políticos en el marco de las pasadas elecciones presidenciales, entre otros temas. Este departamento también ha dado mantenimiento y ha actualizado la página web institucional, facilitando el acceso de las personas usuarias a la información institucional.

5.4. Acciones y relaciones externas

El área de acciones y relaciones externas tiene como objetivo estratégico la consolidación de los espacios de interacción y vinculación con las instituciones del Estado, la sociedad civil y actores internacionales involucrados en la protección y promoción de los derechos humanos. Se han formulado diferentes estrategias tales como la suscripción de convenios, la promoción de mecanismos de participación de diversos sectores sociales en la protección de los derechos humanos y fortalecer las funciones institucionales de gestión de cooperación.

Esta actividad se fundamenta en lo establecido en el Reglamento para la Aplicación de Procedimientos, el cual dispone que en virtud de la relación que existe entre el Sistema de Protección de Derechos Humanos y los diferentes sectores vinculados con temáticas específicas a los derechos humanos, la Procuraduría puede mantener comunicación y cooperación con diversos organismos a través de dichas actividades.

a) Mesas temáticas de trabajo

La adopción de las Mesas Temáticas de Trabajo, es uno de las estrategias impulsadas por la Procuraduría para promover la participación de los diferentes sectores de la sociedad civil e instituciones públicas, con el objetivo de propiciar una mayor coordinación en lo relativo a la protección de los derechos humanos a través de la construcción de propuestas, posicionamientos públicos, entre otros.

Durante el período, a través de las procuradurías adjuntas y por medio de 5 Mesas Temáticas de Trabajo en las distintas áreas de protección de los derechos humanos, se realizaron a nivel nacional, reuniones con los diferentes sectores y organizaciones que componen dichos espacios.

i. Mesa Permanente de Personas Adultas Mayores

Se encuentra a cargo de la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y entre sus principales actividades y logros para el presente período se encuentran: siete reuniones en las que se ha evaluado el cumplimiento del plan de trabajo 2013, además de la elaboración del plan de trabajo 2014 y la continuidad del trabajo en distintas comisiones para promover reformas a la Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor, preparar un programa de actividades de formación y plantear los principales ejes temáticos de una política pública para las personas adultas mayores. Cabe señalar que como fruto del cabildeo realizado por representantes de la Mesa dentro de la Asamblea Legislativa, se sostuvo una reunión con la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adulto Mayor a finales de mayo, con el propósito de impulsar la aprobación de reformas a la Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor. Aunado a esto, se han realizado gestiones con la Escuela de Derechos Humanos para facilitar la participación de personas adultas mayores en actividades de formación. .

ii. Mesa Permanente de Personas con Discapacidad

La conducción de esta Mesa ha sido supervisada y acompañada por el Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos destacando en el presente periodo logros tales como la coordinación y realización de un taller de evaluación y proyecciones de la Mesa, en el cual participaron un total de treinta y cinco representantes de organizaciones en el mismo se evaluó el trabajo de este espacio a partir de su creación en el año 2006.

Asimismo fueron expuestos los retos y compromisos a asumir. Del mismo modo se coordinó jornada de trabajo con asociaciones de personas sordas, que tuvo como objetivo hacer una presentación del contenido general de la Ley de Inclusión de las personas con discapacidad, con énfasis en el articulado que atañe directamente a la comunidad sorda.

En ese mismo orden se organizaron otros talleres, entre los cuales se destaca el de redacción del Informe Alternativo, el cual dio como resultado el borrador al documento de Informe de respuestas a la lista de cuestiones realizadas por el Comité al Estado de El Salvador en el primer examen del cumplimiento de la Convención; de igual forma se llevaron a cabo dos de socialización y aval a la propuesta de anteproyecto de Ley de Inclusión de las personas con discapacidad; así como un Diplomado de Derechos Humanos dirigido a 25 integrantes de la Mesa en coordinación con la Unidad de Educación de esta institución.

iii. Mesa Permanente de Niñez, Adolescencia y Juventud

Este espacio de participación conjunta entre la PDDH y las organizaciones que trabajan el tema de niñez y juventud, se encuentra a cargo de la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez y Juventud en el periodo que se informa se reunió en cinco ocasiones, siendo uno de los principales logros

la organización de un foro con los candidatos a la presidencia de la República, cuyo lema fue “La niñez, adolescencia y juventud primero en las Políticas Públicas”, asimismo, se creó la “Plataforma Niñez, Adolescencia y Juventud”.

iv. Mesa Permanente sobre derechos de los Pueblos Indígenas

Esta mesa trabaja por mejorar las condiciones y el reconocimiento de los pueblos indígenas en El Salvador, se encuentra coordinada desde la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales, sosteniendo a lo largo del periodo que se informa siete reuniones dentro de las cuales se ha evaluado el cumplimiento del plan de trabajo 2013, además de la realización de diversas actividades tales como el Foro sobre las Mujeres Indígenas en El Salvador.

v. Mesa Permanente sobre derechos humanos de la Comunidad LGBTTTI.

El objetivo general de la mesa es el de incidir para que la población de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero travestís e intersexuales tengan acceso al pleno goce de sus derechos humanos, además de llevar a cabo otras acciones tales como; analizar la situación de la población LGBTTTI en nuestro país, establecer e implementar los procesos de sensibilización para los funcionarios encargados de la administración de justicia hacia dicha población, sentar las bases para la elaboración de una ley para la erradicación de cualquier forma de discriminación, entre otras.

Entre las actividades y logros más destacados para el presente periodo se encuentran once reuniones, entre ellas, una sostenida con el Embajador de Canadá, con el objeto de presentar el proyecto de fortalecimiento de la Mesa y gestionar fondos, además se mantuvo acercamiento con la Dirección del ISSS con la finalidad de tratar el tema sobre el uso de la expresión de género en la fotografía de la tarjeta del ISSS y coordinar

acciones de inclusión de la población trans, tales como el respeto a la identidad de género de las personas trans y promover políticas para la atención de dicha población LGBTI; de igual manera se organizó reunión con la Mesa Penitenciaria, convocada por la Dirección de Diversidad Sexual de la SIS, para tratar la situación de la población trans privada de libertad, en el Penal de Sensuntepeque, Cabañas.

b) Convenios suscritos

En el ejercicio de su mandato constitucional y legal de velar por el respeto y protección de los derechos humanos, esta Procuraduría ha impulsado la suscripción de convenios con diferentes organismos de la sociedad civil e instituciones públicas cuyas actividades y atribuciones se relacionan con las temáticas abordadas por esta institución. En ese sentido, durante el presente período, se suscribieron nueve Convenios, los cuales se detallan a continuación:

- Convenio Marco de Cooperación con Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR. Octubre de 2013.
- Convenio de Cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR para la elaboración de estudio de Análisis de Contexto-Derechos Humanos y Grupos con Necesidades Específicas en El Salvador. Noviembre de 2013.
- Firma de Carta Compromiso. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México, COFAMIDE, PDDH sobre el Proyecto Red Derechos Humanos de la Personas Migrantes.

c) Asistencia a eventos organizados por diversas instituciones y otras acciones de colaboración

En el periodo que comprende al presente Informe, se tuvo participación en diversos eventos de organizaciones e instituciones

relacionadas con la temática de derechos humanos, registrando asistencias a conferencias, talleres, foros y otras actividades externas. A nivel internacional se registraron un total de 15 asistencias a eventos internacionales entre los que destaca la participación del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y otros funcionarios en las siguientes actividades nacionales e internacionales.

Entre las que se destacaron: Taller Consular para la implementación del programa para la Protección de Derechos Humanos y Asistencia Legal de la Población Salvadoreña, los días 19 y 20 de septiembre de 2013 en los Estados Unidos de Norte América; Participación como miembro de la FIO en el XVIII Congreso y Asamblea General de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, del 4 al 8 de noviembre de 2013 celebrado en Puerto Rico; Reunión de puntos focales de la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas, 11 de noviembre de 2013 llevada a cabo en Argentina; Foro Internacional “Estrategias regionales para el fortalecimiento de organismos públicos y organizaciones de derechos humanos en la protección de personas migrantes en México y Centroamérica. Propuestas y articulaciones con perspectiva regional del 26 al 28 de noviembre de 2013 en México D.F.; Panel “Derechos Humanos, Amnistía y los Archivos Históricos de el Salvador, 10 de diciembre de 2013 en Estados Unidos de Norte América; Segunda Consulta sobre Desplazamientos Transfronterizos y Desastres Naturales en Costa Rica los días 1, 2, y 3 de Diciembre de 2013; Encuentro de la Federación Iberoamericana de Ombudsman. (FIO) en el tema de personas migrantes y Víctimas de Trata de Personas, realizado en Puerto Rico del 8 al 11 de abril de 2014.

Por otro lado, a nivel nacional se asistió a 128 actividades organizadas por distintas organizaciones sociales e instituciones públicas, entre las cuales se destaca la Presentación de Recurso de Amparo por cierre de Tutela Legal

organizado por las Víctimas de violaciones de Derechos Humanos; Presentación de la nueva “Tutela Legal María Julia Hernández”; Día Internacional en conmemoración de las víctimas del Holocausto; Conmemoración del Día Internacional y Nacional de la Mujer y firma del Procurador David Morales, como Testigo de Honor en Pacto por la Defensa de los Derechos Civiles y Políticos; Conmemoración del día de la Niñez Desaparecida, Panel Foro, “Racismo y Diversidad Cultural en El Salvador; Conferencia “Mujeres Indígenas de Cuscatlan”; Participación en evento “*SOY INDIGENA, NO LO NIEGO*”, organizado por el Consejo de los Pueblos Originarios Nahuat-Pipil de Nahuizalco; Presentación de investigación “Infancia y adolescencia como noticia en El Salvador”, Democratización de los Medios de Comunicación; Reivindicando la Gestión Pública del Agua; Ley de Prohibición sobre Minería Metálica y la presentación del Primer Plan Nacional de Cambio Climático del MARN, entre otros.

d) Reuniones sostenidas con autoridades públicas, representantes de organismos internacionales, organizaciones sociales, entre otros

Finalmente, en seguimiento a su mandato constitucional de velar por el respeto de los derechos humanos de la población salvadoreña, esta Procuraduría también ha desplegado su actuación de promoción y protección de derechos humanos por medio de la convocatoria a reuniones a funcionarios y funcionarias públicas, representantes de organizaciones sociales y organismos internacionales, entre otros, para tratar sobre casos que requieren de una inmediata respuesta institucional.

Entre estos funcionarias y funcionarios de instituciones se encuentran las siguientes: Ministra y Viceministra de Salud, Viceministro de Hacienda, Organismo Colegiado del TSE, Diputadas y Diputados de la Asamblea Legislativa

pertenecientes a diferentes Comisiones, Consejo Instituto de Medicina Legal, Titulares del Ministerio Público y Corte de Cuentas de la República, Equipo Técnico de todas las instituciones que conforman el Banco Forense, Representantes de ONG'S Memoria Histórica, Representante Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, Ministro de Justicia y Seguridad Pública, entre otros y otras.

5.5. Fortalecimiento institucional

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a partir de su planificación estratégica, aspira a fortalecer las áreas y los procesos claves en el ejercicio de sus atribuciones, a fin de lograr la eficiencia y la eficacia laboral. Para alcanzarlo cuenta con varias estrategias específicas: fortalecer la gestión y administración de los recursos con eficiencia; promover acciones que fortalezcan la identificación institucional y compromiso del personal; modernizar la estructura, procesos y sistemas institucionales; desarrollar mecanismos de comunicación estratégica interna y externa; y modernización del marco legal e institucional.

Las unidades institucionales que les corresponde cumplir con las actividades vinculadas a esta área estratégica son: Secretaría General, Departamento de Recursos Humanos, Departamento Administrativo, Departamento de Informática, Departamento Jurídico, Departamento de Comunicación y Prensa, Unidad de Proyectos y Gestión de Cooperación, Unidad de Planificación Institucional y Unidad de Acceso a la Información Pública. A continuación, el resumen de las actividades y logros alcanzados por dichas unidades organizativas en el período que comprende este informe.

a) Secretaría General

Es la responsable de la dirección administrativa de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y como órgano de comunicación interna y externa de la entidad, apoya en la

preparación, registro y control de los Acuerdos Institucionales, así como en el resguardo y distribución interna y externa de los mismos y de los documentos y correspondencia institucional.

Los principales esfuerzos realizados por la Secretaría General para impulsar el fortalecimiento institucional, fueron los siguientes:

i. Revisión de manuales e instructivos institucionales

Se revisó el Manual de Organización y Puestos en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos y la Unidad de Planificación Institucional, las modificaciones realizadas se encuentran en proceso de aprobación. Se elaboró el Manual de Gestión, Salud y Seguridad Ocupacional de la PDDH en coordinación con el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional institucional, actualmente en revisión para su posterior aprobación.

ii. Participación en diferentes comités y comisiones especiales

Se contó con la participación permanente en la Comisión especial de Seguimiento al Laudo Arbitral con carácter de Contrato Colectivo de Trabajo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Sindicato de Empleados y Empleadas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (SEPRODEHES). De igual manera se continúa participando en el Comité Especial Presupuestario Institucional.

iii. Apoyo a la realización de eventos institucionales

Se apoyó a la organización de los siguientes eventos institucionales: Día de la Niñez y Juventud; Conmemoración del 65° Aniversario de la aprobación y proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 32° Aniversario de la Masacre de El Mozote; Día Internacional por el Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas; y el

34° Aniversario del martirio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero.

Asimismo, se brindó apoyo logístico al Plan del Observatorio Electoral en el marco del proceso de elección presidencial 2014 en primera y segunda vuelta; además en coordinación con la Unidad de Acceso a la Información Pública se impartió capacitación a las Jefaturas, Delegados Departamentales y Locales sobre aspectos básicos de la Ley de Acceso a la Información Pública.

iv. Peticiones administrativas atendidas

Se elaboraron 167 certificaciones de expedientes institucionales, así como 232 Acuerdos Institucionales. Además se realizaron visitas a las instalaciones de la sede cede central, como a las Delegaciones Departamentales y Locales con la finalidad de realizar cambios y mejorar la atención a las personas usuarias, así como el ambiente laboral de los empleados y empleadas de la institución, implementando en algunos casos la política de seguridad ocupacional.

v. Otras actividades destacadas

Se dieron respuesta a las recomendaciones realizadas en el informe preliminar de auditoría hechas por la Corte de Cuentas de la República. También se realizaron reuniones en coordinación con las jefaturas administrativas y financieras de la Institución, se recibieron los informes de labores mensuales correspondientes. Y se gestionó un edificio único, con el objetivo de cumplir eficaz y eficientemente el mandato constitucional, brindando una atención integral a las personas usuarias.

b) Departamento de Recursos Humanos

i. Capacitaciones

Parte del esfuerzo por optimizar la calidad del servicio a las personas usuarias, en el marco del fortalecimiento institucional, se impartieron al personal veintiocho capacitaciones en diversas

temáticas. Algunas de ellas respondieron a solicitudes directas de sectores de empleadas y empleados de la Procuraduría, orientadas hacia el reforzamiento de competencias, la identificación institucional y los diferentes aspectos de comportamiento que contribuyan al logro de los objetivos institucionales y el mantenimiento de un clima laboral saludable. El total de personal beneficiado (técnico y administrativo) con dichas capacitaciones fue de 466 algunos participaron en dos jornadas. De este grupo de personas, 209 fueron hombres y 257 mujeres.

ii. Nuevas Contrataciones

En el período del presente Informe se realizaron 17 contrataciones por Ley de Salarios y Contratos, de las cuales 10 fueron del sexo femenino y 7 del sexo masculino.

iii. Otras actividades destacadas

Adicionalmente en este período se realizaron actividades de entrega de camisas institucionales y entrega de vales de Supermercado a todo el personal. Asimismo, se diseñó una propuesta del Plan de Capacitaciones para todo el personal de la Institución, de acuerdo a necesidades de mejorar las competencias y habilidades con el fin de optimizar el rendimiento. Además en coordinación con el Departamento de Planificación se está verificando las Evaluaciones de Desempeño de acuerdo a metas y resultados del empleado. Respecto al seguimiento del Plan Operativo Anual, relativo a los Proyectos en el Diseño e Implementación de un Sistema Integrado de Gestión de Recursos Humanos, se reprogramó quedando pendiente la contratación de la consultoría para la elaboración de Manuales y el Sistema Informático de Recursos Humanos.

c) Departamento Administrativo

i. Supervisión y administración de contratos

El Departamento Administrativo administró y supervisó los contratos de servicios de

proveedores externos a la institución, tales como, arrendamiento de inmuebles, pagos de servicios básicos, póliza de aseguramiento de automotores, fotocopadoras, fumigación de instalaciones, mantenimiento de cisternas, recarga de extintores, agua purificada, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado, provisión de cupones para combustible, suministros de materiales de oficina, limpieza e informáticos, mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, servicio de vigilancia privado y mantenimiento correctivo de plantas telefónicas.

Las dependencias de la institución contaron, según las capacidades institucionales, con los servicios de transporte requeridos; además se garantizó por medio de la custodia del combustible, que los automotores de la institución contaran con la provisión necesaria de combustible, para lo cual se adoptó medidas que hicieron posible el uso racional de recurso y la cobertura de las misiones oficiales generadas. De igual manera se gestionó el buen funcionamiento de la flota vehicular, a través de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo, a cargo de administradores de dicho contrato.

ii. Coordinaciones con dependencias

Por otra parte, se hicieron las respectivas coordinaciones con diferentes dependencias tales como la Sección de Activo Fijo con la cual se mantuvo el registro, control y distribución de mobiliario y equipo a las dependencias de la institución; de igual forma se realizó una labor permanente de registro, resguardo, protección y entrega de documentación física en el Archivo General, así como entrega oportuna a las dependencias solicitantes; en ese mismo orden por medio del Almacén de Suministros se solicitó, recibió, resguardó y distribuyó equitativamente insumos y materiales utilizados para el adecuado funcionamiento de la institución.

iii. Ejecución del programa de mantenimiento general de instalaciones

Por otra lado se ejecutó un programa de mantenimiento general de instalaciones, por medio de la Sección de Mantenimiento, asimismo, se brindó el servicio de vigilancia y protección de recursos de la Procuraduría. Con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo y funcionamiento de oficinas, se realizaron gestiones de localización y posterior traslado de viviendas para la Delegación Local de Metapán, así como de las Delegaciones Departamentales de Chalatenango y La Libertad, lo cual se realizó en conjunto con Secretaría General, Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional y Unidad Financiera Institucional, previa aprobación del Titular institucional. Del mismo modo se llevaron a cabo actividades para impulsar el descargo de bienes obsoletos y/o inservibles ante la Comisión de Descargo Institucional.

iv. Otras actividades destacadas

Se participó en las siguientes comisiones institucionales: Comité Técnico Presupuestario; Comisión Evaluadora de Ofertas para Concesión de Beneficio al Personal; y Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. También, se revisó y formuló la propuesta de reforma a la normativa interna; se hicieron gestiones con los propietarios de edificios de sede central y viviendas que ocupan las Delegaciones Departamentales y Locales, con el fin de que asumieran la ejecución de trabajos o equipamiento de dichas instalaciones, y con ello mejorar las condiciones de funcionamiento, al tiempo que se generó economías a la institución; se le dio seguimiento a diferentes medidas de austeridad aplicadas con el objeto de generar economías y cumplir las acciones y compromisos de la institución; se realizaron diferentes actividades logísticas y de apoyo administrativo para la ejecución del Observatorio Electoral de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, desplegado a nivel nacional en los meses de febrero y marzo de 2014.

d) Departamento de Comunicaciones y Prensa

Durante el período en mención el Departamento de Comunicaciones y Prensa logró dar cumplimiento a numerosas actividades programadas consolidando una labor constante de difusión de las distintas actividades de la institución, manteniendo relaciones con diversos medios de comunicación nacional e internacional e instituciones estatales y no gubernamentales generando insumos y espacios informativos, produciendo los siguientes logros:

i. Organización de conferencias de prensa y publicación de documentos

Se organizaron un total de 22 conferencias de prensa, dentro de las cuales se dio a conocer la perspectiva, objetivos y plan de trabajo al frente de la PDDH para los próximos tres años. Además se brindó posición institucional sobre temas tales como la intoxicación con toxafeno en San Luís Talpa; resolución en torno a medidas cautelares de la Sala de lo Constitucional sobre participación política de empleados públicos en actos de proselitismo; y pronunciamiento del Procurador en torno a la inseguridad en el país. Se lograron distribuir 25 comunicados de prensa. También se publicaron varios documentos elaborados por la PDDH como: 17 campos pagados en prensa escrita; una revista trimestral de “El Defensor del Pueblo”; el tiraje en versión popular de afiche y una revista conmemorativa del 32 aniversario de la masacre de El Mozote.

ii. Gestión de entrevistas y espacios de difusión

Se realizaron gestiones de entrevistas en medios radiales, televisivos y escritos, manteniendo una presencia permanente en los diversos temas de coyuntura. Referente a los espacios de difusión se impulsaron dos campañas de radio por un lapso de dos y tres meses cada una. Se mantuvo la publicidad sobre servicios institucionales en dos periódicos digitales.

iii. Gestión de tecnologías de la comunicación

Se optimizó el manejo oportuno de las redes sociales institucionales. Se coordinó con el Departamento de Informática algunas mejoras y rediseño en la página web institucional.

iv. Apoyo a la organización de actividades institucionales

Se brindó apoyo en la organización y logística de foros públicos y eventos de relevancia de la PDDH, destacándose entre ellas; la conmemoración del 65 Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 32 Aniversario de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños; el Día Internacional de la Verdad 2014; y Festival Juvenil de la PDDH por “Nuestros Derechos”. Se logró coordinar el mantenimiento de un Observatorio y seguimiento de Medios en el contexto del proceso de elecciones presidenciales que se realizaron en enero y marzo de 2014.

v. Archivo de material audiovisual de actividades institucionales

Elaboración de archivo institucional de audio, vídeo y fotografía de las diversas actividades institucionales. Asimismo, se envió información en audio y vídeo a los medios de comunicación que solicitan material, por no poder cubrir los eventos que se organizan.

vi. Red permanente de difusión de actividades institucionales

Mantenimiento de red permanente de difusión de las actividades de la PDDH a través de corresponsales de prensa en el interior del país, a quienes se les envía información periódica de las actividades de la PDDH.

e) Departamento Jurídico

Durante el período de este Informe, el Departamento Jurídico elaboró 35 contratos, además de dar inicio y seguimiento a 18 procedimientos de deducción de

responsabilidades administrativas y emitir 29 opiniones jurídicas.

Asimismo realizó otras actividades destacadas tales como: elaboración de oficios, escritos e informes a la Procuraduría General de la República, Comisión del Servicio Civil de la PDDH y Sala de lo Constitucional Corte Suprema de Justicia; asistencia al Instituto de Acceso a la Información Pública para celebrar audiencia de avenimiento; asistencia a eventos por designación y representación del Titular de la Institución; asistencia a reuniones de la Comisión de Ética Gubernamental; se han autenticado todos los contratos y certificado documentos institucionales que se han solicitado; a solicitud de la Secretaría General se han elaborado diferentes proyectos de acuerdo institucionales; y contestación a requerimientos de la Corte de Cuentas de la República hechos al titular de esta Procuraduría.

f) Departamento de Informática

Durante el período, el Departamento de Informática reportó en relación al proyecto Plan Maestro para el Desarrollo Informático para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, un nivel de ejecución del 55%, obteniendo los resultados siguientes:

En atención a la visión de la actual gestión en los últimos cuatro meses de 2013, se llevó a cabo una consultoría para elaborar una hoja de ruta más actualizada para la implementación del Sistema Informático de Gestión Institucional, cuyo resultado se dio a conocer en el mes de diciembre. En la mencionada hoja se planteó retos como la formalización de los procesos institucionales en un formato apropiado, la estandarización de los indicadores de desempeño y de las estadísticas en general, el fortalecimiento del Departamento de Informática y la modernización de la infraestructura tecnológica, que si bien cumple con los requerimientos actuales, ya no permite mayores ampliaciones, por lo que aún está pendiente proceder al diseño y programación del sistema.

Existe un avance significativo en cuanto a los procesos institucionales que deben ser revisados, documentados y aprobados. Una comisión realizó un primer levantamiento de los mismos a un nivel general, incorporando información clave para el funcionamiento institucional en todos los ámbitos de trabajo. Dicha comisión describió a su vez algunos procesos que, si bien aún no se realizan en su totalidad o no han sido objeto de sistematización, se proponen para su implementación para complementar el amplio abanico de funciones institucionales establecidas, tanto en la Constitución de la República, como en la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y sus Reglamentos. Todos estos insumos serán tomados en consideración para la construcción definitiva de los procesos, objeto de una nueva consultoría para el acompañamiento en la definición formal de los procesos institucionales y posterior elaboración de las especificaciones técnicas del nuevo sistema, con los siguientes objetivos:

- Definir con claridad los instrumentos y la metodología que la Institución deberá aplicar para recopilar la información necesaria para la especificación, sobre todo en el caso de los procesos y procedimientos de trabajo.
- Acompañar y asesorar a las diferentes áreas que conforman la Procuraduría con la finalidad de asegurar un desarrollo efectivo del proceso de recopilación.
- Organizar la información obtenida y crear una especificación de un sistema informático que comprenda todo el quehacer institucional de manera integral.

Tal consultoría iniciará sus labores en junio 2014, para contar con un pliego de especificaciones ajustadas a los procesos aprobados por el Procurador, en el mes de diciembre 2014.

El funcionamiento mismo del Departamento de Informática está siendo a su vez acomodado a estos nuevos requerimientos, por lo que ya se han iniciado las labores para ajustar los procesos propios de esta unidad, para afrontar los retos antes mencionados y que se verán reflejados

en un nuevo Manual de Procedimientos del Departamento de Informática, actualmente en construcción.

g) Unidad de Proyectos Institucional

El Departamento de Planificación Institucional es responsable del proyecto “Estudio de modernización y reorganización de la PDDH”, el cual reporta un nivel de ejecución del 60%. Las acciones realizadas en el período fueron las siguientes: estudio de modernización y reorganización de la institución; revisión y actualización del marco legal; creación de la Unidad de Género Institucional en Atención Especializada para Mujeres Víctimas de la Violencia; se ha fortalecido la Unidad de Planificación Institucional; se ha reorganizado el Sistema de Protección y fortalecido el Departamento de Denuncias para dar acompañamiento, gestión y respuesta inmediata a las víctimas.

Además se llevaron a cabo otras actividades: la elaboración y presentación del Plan Anual Operativo 2014; coordinación de la elaboración de los Planes por Área de Gestión (PAG) 2014; la elaboración de evaluación y seguimiento a Planes por Área de Gestión (SPAG); y la consolidación de los planes por área de gestión 2014.

h) Unidad de Planificación Institucional

La Unidad de Proyectos y Gestión de Cooperación tiene el objetivo de administrar y gestionar cooperación externa para suplir las necesidades financieras que demanda el desarrollo institucional y que no pueden ser cubiertas por los limitados presupuestos que se le han venido asignando a la institución a través de sus años de existencia. Según Acuerdo Institucional N° 117, de fecha dieciséis de mayo de 2014, a partir del primero de junio de 2014, se acordó fusionar los Departamentos de Planificación y la Unidad de Proyectos y Gestión de Cooperación convirtiéndolo en el Departamento de Planificación y Gestión de Proyectos.

A continuación se presenta el detalle de la cooperación externa que recibió durante el

período del presente Informe, o que se encuentra pendiente por recibirla: Informe especial sobre el impacto de la violencia en la protección de los Derechos Humanos de la niñez y Adolescencia en El Salvador, UNICEF; asistencia técnica para fortalecer el proceso de tutela de los Derechos Humanos de las personas con VIH en la PDDH, PNUD; elaboración de un estudio sobre el Análisis de Contexto de Derechos Humanos y la Situación de Grupos Específicos en El Salvador, ACNUR; diseño de una Política Interna de la Niñez de la PDDH que establezca las líneas de actuación para brindar una atención a los niños, niñas y adolescentes acorde a los estándares nacionales e internacionales y formulada sobre la base de tres pilares fundamentales: un enfoque de derecho, de género y de la doctrina de protección integral, Fundación Privada INTERVIDA.

i) Unidad de Acceso a la Información Pública

La Unidad de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos le corresponde sistematizar la información institucional, a través de la recopilación y actualización de datos provenientes de las diferentes unidades o departamentos que la conforman, con el fin de garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información y contribuir con la transparencia de las actuaciones de esta institución.

En el período se han recibido 56 solicitudes de información, las cuales 25 fueron presentadas por mujeres y 31 por hombres, en su mayoría estudiantes universitarios, de éstas el 95% fue entregada y el resto se denegó por no cumplir con los requisitos de ley; la información que más fue requerida por los ciudadanos es financiera, informes, comunicados y estadísticas de denuncias recibidas.

Se puede mencionar como una actividad destacada la realización de dos talleres denominados “Aspectos básicos de la LAIP”, dichos talleres fueron impartidos a 50 funcionarios, el primer taller fue llevado a cabo en el mes de diciembre del año 2013 donde se convocó al personal de la institución y el segundo, se celebró en el mes de marzo del 2014, el cual fue impartido a las

jefaturas de la institución, donde asistieron el Titular, Procuradores y Procurador Adjunto, Delegados y Delegadas, Jefaturas de Tutela, Jefaturas Administrativas y Secretaría General. Para la capacitación de las Jefaturas se contó con el apoyo del comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y de la Subsecretaría de Transparencia.

En el mes de mayo se participó en la Feria nominada “la Ley de Acceso a la Información Pública”, organizada por la Subsecretaría de Transparencia y Anti Corrupción, la cual se llevo a cabo en el Parque Daniel Hernández, ciudad de Santa Tecla, con el objeto de dar a conocer el trabajo realizado por las unidades de información dentro de las instituciones públicas con relación a la transparencia.

j) Procuradurías adjuntas específicas

i. Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos del Medio Ambiente

Dentro de las actividades destacadas se encuentran la capacitación que tuvo el personal de la Procuraduría Adjunta en diferentes eventos internacionales, entre ellos la participación en el Máster de “Protección Internacional de los Derechos Humanos”, realizado en la Universidad de Alcalá de Henares, España, realizada de octubre a diciembre de dos mil trece; de igual forma se participó en la Conferencia Regional “Gobernabilidad y Conflictividad Ambiental: perspectivas comparadas” desarrollada en Guatemala y la participación en la Segunda Consulta Regional sobre la Iniciativa NASEN, en San José, Costa Rica.

Dentro de los principales logros de Procuraduría Adjunta de Medio Ambiente se destaca: gestión de cooperación con la Universidad Alcalá de Henares, Madrid, España, quien asignó una alumna en calidad de pasante de la Maestría en Derechos Humanos impartida por dicha universidad, para colaborar en dicha Procuraduría Adjunta. Asimismo se destaca la capacitación del personal en diferentes temas como el observatorio electoral, la evasión y elusión fiscal por parte de las transnacionales, el tema de minería metálica, recursos hídrico, entre otros.

ii. Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales

En el período del informe la Procuraduría Adjunta ha concentrado sus esfuerzos en la participación del personal de la institución en actividades formativas, en el apoyo al despacho del señor Procurador en aspectos presupuestarios y diseño organizacional, así como en el monitoreo de las necesidades de recursos de trabajo en las Procuradurías Adjuntas y Delegaciones Locales y Departamentales.

Esta Procuraduría coordinó el desarrollo de una capacitación sobre el Examen Periódico Universal, impartida por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (10 personas capacitadas). También brindó apoyo al Departamento de VIH en la coordinación de 4 jornadas de capacitación sobre “Derechos Humanos y VIH”, a personal de la PDDH y del Ministerio de Salud, impartidas por el abogado colombiano especialista en Derechos Humanos, VIH y poblaciones en mayor riesgo de adquirir la infección, Germán Humberto Rincón Perfetti (noviembre) (200 personas capacitadas).

Asimismo, se delegó a personal de la institución para que participara en las siguientes actividades formativas, organizadas por otras instituciones: Foro Internacional de Protección Social en El Salvador, organizado por la Secretaría Técnica de la Presidencia, con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (16 y 17 de julio); y el Taller “Obstáculos y oportunidades de acceso a la justicia en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en El Salvador”, organizado por la Comisión Internacional de Juristas (1 y 2 de octubre); apoyo al señor Procurador en la elaboración del documento sobre la Demanda Adicional para el Presupuesto 2014 y en su presentación ante la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto de la Asamblea Legislativa; participación en las reuniones del Equipo Técnico de Diseño, conformado por el Señor Procurador para dar seguimiento al proceso de reforma al presupuesto impulsado por el Ministerio de Hacienda; participación en reuniones del Comité Técnico de Gestión y del Equipo Técnico de Diseño, conformados por el Señor Procurador

para dar seguimiento al proceso de reforma al presupuesto impulsado por el Ministerio de Hacienda; aportes a la Unidad de Planificación en lo relativo a la Matriz de Riesgos Institucionales y evaluación del cumplimiento de los planes de trabajo para el segundo semestre de 2013; participación en distintas actividades en relación a la reorganización del Sistema de Tutela.

Por otra parte, se realizaron gestiones para que ocho personas de la PDDH participaran en el “Curso Básico de Mediación Social” impartido por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano en el mes de abril. A la vez, durante mayo se realizaron gestiones para que seis personas de distintas unidades de la PDDH participen en el “Taller de Derecho Agroalimentario en los países del OIRSA” que será impartido a principios de junio por la FAO y OIRSA. Finalmente, en el mes de mayo, la PADESC participó en dos reuniones convocadas por la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia para discutir sobre la inclusión del enfoque de género en análisis situacional del Informe de Labores 2013-2014.

iii. Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales

En el período de este Informe, la Procuraduría Adjunta participó en espacios diversos tales como capacitaciones, talleres, planificación presupuestaria, entre otros siendo las actividades más destacadas las siguientes: tres talleres dirigidos a personal técnico de las Delegaciones Departamentales y Locales, en el tema de derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, gestionado por la Procuraduría Adjunta en coordinación con el Programa de Atención a Personas Refugiadas PARES, OIM y Departamento de Atención a la Persona Migrante de la PDDH; apoyo a la Escuela de Derechos Humanos en programa de capacitaciones a sociedad civil, con el tema de libertad de expresión; revisión y análisis del proyecto de un nuevo Reglamento de turnos y concesión de tiempo compensatorio; revisión de documentos presentados por una consultoría del Comité de Seguridad e Higiene Ocupacional; reuniones con la Directora Regional y Oficial de país de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, con las que se logró un acercamiento de trabajo, así como

una breve capacitación sobre los mecanismos del sistema de Naciones Unidas y preparación de aportes desde la institución para el Examen Periódico Universal; reuniones con el Comité de Gestión del Presupuesto Institucional en apoyo al señor Procurador para elaborar documento sobre la Demanda Adicional para el Presupuesto 2014, así como el respectivo seguimiento al proceso de reforma al presupuesto impulsado por el Ministerio de Hacienda; y asistencia a la capacitación sobre la Ley de Acceso a la Información Pública, así como a la presentación de la consultoría relativa a los resultados de la hoja de ruta para el diseño, desarrollo y puesta en marcha de un nuevo sistema informático.

iv. Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y Familia

En el período de este Informe, la Procuraduría Adjunta enfocó sus esfuerzos en llevar a cabo acciones relativas a la planificación de actividades, apoyo y trabajo conjunto con las demás Procuradurías Adjuntas Específicas, así como la realización de gestiones para facilitar la participación de personal en actividades formativas.

Entre las actividades más destacadas se encuentran: participación del personal institucional en el “Taller de Prevención de la Violencia y Masculinidades”, impartido por el Centro de Prevención de la Violencia CEPREV, institución nicaragüense especializada en el tema; se trabajó con Procuradoras Adjuntas y Procurador Adjunto, así como personal técnico de las Procuradurías Adjuntas Específicas, para incorporar el enfoque de género en los análisis situacionales; se realizó un taller con personal técnico de las Procuradurías Adjuntas Específicas y jefaturas de Unidades adscritas, con el objetivo de desarrollar un proceso de asistencia técnica al personal, para contribuir a la transversalización del género en las áreas de derecho que atienden las Adjuntas; y designación de nueve representantes de PDDH quienes estarán participando en la segunda convocatoria de cursos de formación virtual en tres áreas: “ABC de la Igualdad Sustantiva”, “ABC Vida Libre de Violencia para las Mujeres” y “ABC de las Masculinidades”.

[Capítulo
VI]

ANEXOS



“Pedimos que el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Educación trabaje la implementación de programas enfocados a la atención en salud sexual y la prevención de forma permanente, capacitando a padres de familia, líderes comunales y docentes en el tema”

Segundo Pronunciamiento de las Juventudes de El Salvador sobre la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”, aprobado en el Encuentro Nacional 2014 de las Unidades Juveniles PDDH “Ejerciendo la Contraloría Juvenil por nuestros Derechos”



Jóvenes de la Unidad Juvenil de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de Santa Ana, realizaron la presentación de la obra teatral “Detrás del Arcoíris”, en el Centro Juvenil del Instituto Nacional de la Juventud Injuve-Zacamil, con el fin de enviar un mensaje preventivo y educativo sobre la trata de personas en el país.

1. Documentos emitidos

Informes especiales y situacionales 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014	
Área Temática	Documento
Derechos civiles	- Primer Informe del Plan de Monitoreo de Fronteras.
Derechos económicos, sociales y culturales	- Informe Alternativo de la PDDH sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2006-2013) Se elaboraron 2 informes (para lista de cuestiones y para lista de recomendaciones) - Informe Alternativo El Salvador 2008 – 2013. A cinco años de entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. - Análisis situacional para el Informe de Labores 2012-2013.
Derecho a la protección del medio ambiente	- Informe sobre Medio Ambiente presentado a la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO).

Opiniones sobre proyectos de ley, posicionamientos sobre normativas y propuestas de reforma de ley por área temática 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014	
Área Temática	Total Documentos
Derechos civiles	<ul style="list-style-type: none"> - Opinión ilustrativa sobre la ratificación del Segundo Protocolo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinados a abolir la Pena de Muerte, de fecha 15 de agosto de 2013. - Opinión ilustrativa sobre la ratificación del Tratado Centroamericano relativo a la Orden de Detención y Extradición Simplificada, de fecha 9 de septiembre de 2013. - Opinión ilustrativa sobre la ratificación del Acuerdo de Asistencia Jurídica mutua en Asuntos Penales suscrito entre la República de El Salvador y la República Oriental del Uruguay, de fecha 30 de agosto de 2013. - Opinión ilustrativa sobre la ratificación de la “Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”, de fecha 5 de noviembre de 2013. - Opinión del señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en el Anteproyecto de Ley contra la Trata de Personas. (Septiembre de 2013). - Respuesta mediante oficio PACI/0098/2013, de fecha 6 de noviembre de 2013, a solicitud realizada por el MIREX, a raíz del EPU 2008-2010, sobre la viabilidad de la firma y ratificación de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad; Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; Convenio No. 97 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los Trabajadores Migrantes, (Revisado) 1949; y Convenio No. 143 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los Trabajadores Migrantes (Disposiciones Complementarias) 1975. - Respuesta mediante oficio PACI/0122/2013, de fecha 26 de noviembre de 2013, a solicitud realizada por el MIREX, a raíz del EPU 2008-2010, remitiendo las acciones realizadas en armonía con el Decreto Ejecutivo No. 56 denominado “Disposiciones para evitar toda forma de Discriminación en la Administración Pública, por razones de Identidad de Género y/o de Orientación Sexual”. - Pronunciamiento del Lic. David Ernesto Morales, ante la admisión por parte de la Sala de lo Constitucional de la solicitud de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, del 23 de septiembre de 2013. (se hizo primer borrador que luego fue modificado por el señor Procurador)
Derechos económicos, sociales y culturales	<ul style="list-style-type: none"> - Opinión del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado David Ernesto Morales Cruz, sobre los Anteproyectos de Ley de Indemnización Universal y Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria (28 de agosto). - Opinión sobre el Anteproyecto de Decreto Transitorio para la revisión y reincorporación de los miembros de la Policía Nacional Civil (29 de octubre).

Pronunciamientos por área temática 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014	
Área Temática	Documentos
Derechos civiles y políticos	<ul style="list-style-type: none"> - Pronunciamiento de la Mesa Permanente de la PDDH sobre Derechos de Pueblos Indígenas, con respecto al artículo “Siete mil idiomas en el mundo: ¿Cuántos merecen conservarse?”, de autoría anónima, publicado en el espacio de opinión del medio escrito “Diario de Hoy”, del 1 de julio de 2013. - Posición del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, licenciado Oscar Humberto Luna, ante el retraso en la elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República, del 18 de junio de 2013. - Resumen Ejecutivo para prensa: Emisión de medidas cautelares ante el cierre de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado y la obligación de preservar los archivos históricos 3 de octubre de 2013.
Derechos económicos, sociales y culturales	<ul style="list-style-type: none"> - Pronunciamiento sobre la afectación de los servicios en la red pública de salud, por suspensión de labores a causa de posible ausencia de financiamiento del escalafón salarial para el año 2014 (30 de septiembre). - Comunicado Público del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en torno al atentado en contra de Pro-Búsqueda (16 de noviembre). - Pronunciamiento de la PDDH en ocasión de la conmemoración del 22 Aniversario de la Firma de los Acuerdos de Paz (16 de enero). - Mensaje del Procurador en el marco de la conmemoración del XXXIV Aniversario del Martirio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez (25 de marzo). - Mensaje del Procurador en el marco del Día Internacional del Trabajo 2014 (1 de mayo). - Revisión del Pronunciamiento “A 6 años de la entrada en vigor de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo” (5 de mayo) - Revisión del Pronunciamiento del señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos licenciado David Ernesto Morales Cruz, en el marco de la celebración del Día Nacional de la Solidaridad hacia las personas con VIH (16 de mayo). - Revisión del comunicado de prensa ante el caso del Agente de la Policía Nacional Civil (PNC), que se encuentra en “huelga de hambre” (20 de mayo). - Revisión del comunicado de prensa “Mediación de PDDH permite acuerdo que pone fin a la huelga de hambre que realizaba agente PNC” (24 de mayo)
Derechos humanos de las mujeres	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicado Público del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, expresando preocupación por grave situación de violencia contra las mujeres en El Salvador, 20 de febrero de 2014.

2. Datos Estadísticos Generales

Consolidado Estadístico General 1 de Junio de 2013 al 31 de Mayo de 2014		
Documento	Dato Estadístico	Expedientes Resueltos
Denuncias admitidas	2,549	n/d
Informes especiales y situacionales	6	n/d
Opiniones sobre proyectos de ley, posicionamientos sobre normativas y propuesta de reforma de ley	17	n/d
Pronunciamientos públicos	18	n/d
Resoluciones Iniciales	226	227
Resoluciones Finales	170	176
Oficios	41	35
Resoluciones de Revisión	2	2
Medidas Cautelares	2	1
Resoluciones de Rectificación	1	1

Fuente: Reporte del Departamento de Seguimiento, PDDH.

3. Consolidados Estadísticos por Resoluciones Iniciales²²⁶

Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014		
Derecho Humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
I. POLICÍA NACIONAL CIVIL		
Acceso a la justicia	Negligencia o retardación injustificada en la investigación	2
Acceso a la justicia para familiares de niñas y niños desaparecidos durante el conflicto armado		1
Debido proceso administrativo	Inobservancia del principio non bis ídem	2
	Inobservancia del derecho de defensa	4
	Inobservancia del derecho de recurrir	4
	Inobservancia del principio de legalidad	2
	Inobservancia del principio de legalidad y seguridad jurídica	1
Debido proceso administrativo		1
Derecho a la no desaparición	Negativa a reconocer la privación de libertad	2
Derecho a las libertades sindicales	Discriminación en razón de la afiliación	1
Derecho de la mujer a la integridad personal	Malos tratos	2
Derecho de la mujer a la seguridad personal	Acoso policial	2
Derecho de la mujer a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual	Maltrato físico, psicológico o moral ejercido por agentes del Estado prevaliéndose de sus prerrogativas	26
Derecho de las niñas, niños y adolescentes a la integridad personal	Tratos crueles, inhumanos y degradantes	1
	Malos tratos	1
Derecho de las personas con orientación sexual diversa a la vida	Tentativa de ejecución extralegal	2
Derecho de las personas privadas de libertad a la vida		2
Derecho de las personas privadas de libertad a ser tratadas humanamente y con el debido respeto a la integridad personal	Tratos crueles, inhumanos y degradantes	3
	Malos Tratos	6
	Trato degradante	2
	Privación de acceso a la alimentación	2
Derecho de los niños, niñas y adolescentes a la imagen	Falta de protección de su imagen	1
Derecho de los niños, niñas y adolescentes a la integridad personal	Tratos crueles, inhumanos y degradantes	4
	Malos tratos	6
Derecho de los niños, niñas y adolescentes a la libertad personal	Detención arbitraria	2

²²⁶ En el cuadro se muestra el detalle de las Resoluciones Iniciales emitidas durante el período de 2013 a mayo 2014, se encuentra la institución o autoridad presuntamente denunciada, así como otras instituciones o autoridades recomendadas y que se contemplan dentro de la Resolución Inicial, lo que conlleva a que en una misma Resolución, puede aparecer una institución o autoridad presuntamente responsable y otra u otras recomendadas; asimismo, se establece la frecuencia con que se ha notificado cada derecho a las instituciones o autoridades presuntamente denunciadas o recomendadas. Este dato refleja la labor realizada por Notificaciones.

Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014		
Derecho Humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
I. POLICÍA NACIONAL CIVIL		
Derecho de los niños, niñas y adolescentes a la no desaparición	Omisión o negligencia de agentes del Estado para investigar la desaparición	2
Derecho de los niños, niñas y adolescentes a la protección contra todo tipo de abuso, descuido o maltrato realizado por las personas responsables de su cuidado personal	Tolerancia, negligencia y omisión del Estado para prevenir, investigar y sancionar todo tipo de abuso, descuido o maltrato	1
Derecho de los niños, niñas y adolescentes a la vida	Amenazas de muerte	2
Derecho de los niños, niñas y adolescentes a no recibir malos tratos	Maltrato físico o moral ejercido por agentes del Estado prevaleciendo de sus prerrogativas	2
Derecho de los niños, niñas y adolescentes a no recibir malos tratos, crueles inhumanos y degradantes	Malos tratos	2
	Tratos crueles, inhumanos y degradantes	1
Derecho de los niños, niñas y adolescentes a permanecer en lugar diferente de los destinados para adultos	Permanencia junto con adultos durante la detención administrativa	2
Derecho de los niños, niñas y adolescentes a una administración de justicia diferente al régimen de adultos	Aplicación de procedimientos que no están contemplados en la ley penal especial y sin las garantías que exige su condición	1
Derecho de los niños, niñas y adolescentes privados de libertad a permanecer en lugares diferentes de los destinados para adultos	Permanencia junto con adultos durante la detención administrativa	1
Derecho individual y colectivo a la verdad		1
Derechos de los niños, niñas y adolescentes a la integridad personal	Malos Tratos	2
	Tratos crueles, inhumanos y degradantes	1
Documentación Personal	Despojo ilegal de documentos	4
Garantía de confidencialidad		1
Igualdad y no discriminación	Trato diferente debido a la identidad de género	1
Integridad personal	Uso desproporcionado de la fuerza	9
	Tortura	2
	Malos tratos	33

Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014		
Derecho Humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
I. POLICÍA NACIONAL CIVIL		
Intimidad	Violación arbitraria del domicilio	1
	Allanamiento de morada y/o registros de manera ilegal o arbitraria	6
	Incorporación ilegal de datos personales a un registro determinado	2
	Allanamiento de morada	6
	Registros de manera ilegal o arbitraria	2
Libertad de expresión	Amenazas	1
Libertad de pensamiento y expresión	Restricciones a la libertad de prensa	1
Libertad de pensamiento y expresión	Restricciones a la libertad de prensa	1
Libertad personal	Detención ilegal	7
	Detención arbitraria	15
	Retención ilegal	1
	Detención ilegal o arbitraria	4
Petición	Dilación injustificada en la tramitación y respuesta de la solicitud	2
	Toma arbitraria de fotografía por autoridad para fines no determinados	4
	Captura de imágenes para su eventual incorporación a un registro determinado	2
Propiedad	Actos ilegales o atentatorios que restringen o afectan el derecho a la propiedad	18
	Daños	1
Protección del medio ambiente	Contaminación del medio ambiente	1
Seguridad ciudadana	Afectación colectiva que sufre la comunidad por presuntos abusos	3
Seguridad personal	Aparente desprotección por parte de los entes encargados de brindar seguridad	1
Seguridad personal		2
seguridad personal	Intimidación	13
	Coacción e intimidación	14
	Persecuciones o indagaciones ilegales	21
	Exposición y toma de fotografías no autorizadas	1
	Coacción	1
	Aparente desprotección por parte de los entes encargados de brindar seguridad	1

Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014		
Derecho Humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
I. POLICÍA NACIONAL CIVIL		
Trabajo	Actos ilegales atentatorios contra la estabilidad laboral	9
	Tolerancia estatal ante condiciones indignas de trabajo	2
Trabajo sin discriminación	Acoso laboral ejercido en los centros de trabajo	5
	Hostigamiento y/o violencia sexual en los centros de trabajo	2
	Tolerancia u omisión del Estado frente a la ausencia total o parcial de formación y readaptación profesional de personas con discapacidad	3
	Acoso laboral	2
Vida	Posible participación de miembros de la PNC en la planificación de acciones como amenazas a muerte que pretenden la privación del referido derecho	2
	Amenazas	2
	Amenazas de muerte	3
TOTAL		312

Fuente: Reporte del Departamento de Seguimiento, PDDH.

Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014		
Derecho Humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
II. INSTITUCIONES AUTÓNOMAS O INDEPENDIENTES		
Debido proceso administrativo	Inobservancia del principio de legalidad	2
	Inobservancia del derecho de audiencia y defensa	1
	Inobservancia del derecho de audiencia	7
	Inobservancia del derecho de defensa	7
	Inobservancia del principio de seguridad jurídica	1
	Inobservancia del principio de presunción de inocencia	1
	Inobservancia del principio de proporcionalidad de la sanción	1
	Incumplimiento de resolución	1
Denegación de acceso a los servicios de salud, como resultado de la discriminación		1

Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014		
Derecho Humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
II. INSTITUCIONES AUTÓNOMAS O INDEPENDIENTES		
Derecho a la documentación personal	Restricciones indebidas para obtener documentación personal	1
Derecho a la protección del medio ambiente	Omisión o negligencia para regular actividades que provoquen contaminación electromagnética	1
Derecho de la mujer a la salud y tratamientos diferenciados	Negligencia médica	1
Derecho de la mujer al trabajo sin discriminación	Actos ilegales o arbitrarios atentatorios contra la estabilidad laboral	1
	Acoso laboral ejercido en los centros de trabajo	1
Derecho de las niñas, niños y adolescentes a no recibir tratos, crueles, inhumanos y degradantes		1
Derecho de las personas a la privacidad personal, integridad, seguridad personal y a la vida, por daños irreparables en sus derechos		1
Derecho de las personas adultas mayores a la protección contra toda forma de abuso y explotación	Maltrato o abuso por personas encargadas de su cuidado en instituciones del Estado o de instituciones privadas vigiladas por el Estado	1
Derecho de las personas adultas mayores a obtener beneficios y prestaciones de seguridad social	Denegación ilegal o arbitraria de los beneficios o prestaciones de la seguridad social	1
Derecho de las personas adultas mayores de acceso preferente a los servicios de salud		1
Derecho de las personas con discapacidad a la seguridad social		1
Derecho de las personas con discapacidad al acceso a la salud sin discriminación	Denegación o retardación estatal de prestar los servicios o tratamientos médicos adecuados y oportunos	1
Derecho de las personas con orientación sexual diversa a la igualdad y no discriminación	Trato diferenciado debido a la identidad de género	3
Derecho de las personas privadas de libertad a ser tratadas humanamente y con el debido respeto a la integridad personal	Tratos Cruels, inhumanos y degradantes	1
Derecho de las víctimas y sus familiares a saber la verdad y acceder a recursos judiciales efectivos		1
Derecho de los consumidores de acceso a la justicia	Dilaciones indebidas en los procesos de resolución de conflictos o en hacer cumplir lo resuelto	1
Derecho de los niños, niñas y adolescentes a la protección y prevención contra todo tipo de abuso, explotación, venta, trata y secuestro	Tolerancia, negligencia u omisión del Estado para prevenir, investigar, sancionar todo tipo de abuso, explotación económica o sexual, venta, trata y secuestro	1
Derecho de los niños, niñas y adolescentes a la salud sin discriminación	Denegación estatal de brindar el tratamiento adecuado y oportuno	1
Denegación de tratamientos de rehabilitación y medicamentos especializados para las personas con discapacidad	1	

Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014		
Derecho Humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
II. INSTITUCIONES AUTÓNOMAS O INDEPENDIENTES		
Derecho de los niños, niñas y adolescentes a la seguridad social	Dilaciones indebidas para ser inscritos y obtener beneficios de seguridad social	1
Derecho de los niños, niñas y adolescentes a no recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes	Malos tratos	1
Derecho de los niños, niñas y adolescentes a no ser abusado, descuidado o maltratado por las personas responsables de su cuidado personal	Tolerancia u omisión del Estado ante abusos, descuido o maltrato ocurrido en el seno familiar, en centros públicos o privados responsables de su cuidado personal	4
Derecho de los niños, niñas y adolescentes de acceso a la salud sin discriminación	Denegación estatal de brindar el tratamiento adecuado y oportuno	2
Derecho de los niños, niñas y adolescentes de acceso a la salud sin discriminación	Denegación de tratamientos de rehabilitación y medicamentos especializados para las personas con discapacidad	2
Derecho legítimo de los defensores de derechos humanos a no ser objetos de acciones arbitrarias que busquen impedir el ejercicio de su derecho a promover los derechos humanos y libertades fundamentales		1
Derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos a no ser sometidos a actos que conlleven violencia, amenaza, represalia, discriminación, de hecho o derecho, pensión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo		2
Garantía del interés de las víctimas y sus familiares para hacer valer sus derechos, especialmente sus derechos a saber la verdad y a acceder a recursos judiciales efectivos		1
Identidad personal	Restricciones para obtener documento de identidad	1
Igualdad y no discriminación	Trato diferente debido a la identidad de género	3
Integridad personal		1
Libertad personal	Detención arbitraria	1
Detención ilegal	1	
Petición		1
Petición	Incumplimiento de hacer saber lo resuelto	1
Dilación injustificada en la tramitación y respuesta de la solicitud	5	
Privacidad personal		1
Propiedad	Obstaculización o dilaciones excesivas para obtener documentos que otorguen seguridad jurídica sobre la propiedad	1
No reconocimiento a la posesión y restricciones a la legalización de la tenencia	1	
Protección del medio ambiente	Omisión o negligencia para regular actividades que provoquen contaminación electromagnética	1
Recibir atención médica de calidad y calidez	Malos tratos	2

Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014		
Derecho Humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
II. INSTITUCIONES AUTÓNOMAS O INDEPENDIENTES		
Salud	Desabastecimiento de medicamentos	1
Denegación de acceso a los establecimientos, bienes y servicios de salud como resultado de la discriminación de cualquier tipo	2	
Negligencia médica	8	
Denegación de asistencia médica	3	
Omisión del Estado para prevenir y reducir la contaminación del medio ambiente	1	
Seguridad individual y colectiva	Inobservancia del deber de prevención y precaución	1
Seguridad Personal	Aparente desprotección por parte de los entes encargados de brindar seguridad	1
Seguridad Personal		1
Seguridad Social		1
Seguridad social	Deficiente o inexistente control por parte de autoridades competentes de garantizar el derecho a la seguridad social	1
Desprotección de los sectores vulnerables para que accedan a los beneficios de la seguridad social	1	
Trabajo	Actos ilegales o atentatorios contra la estabilidad laboral	10
Denegación de prestaciones o derechos laborales	2	
Incumplimiento de resolución judicial	1	
Vida	Negligencia médica	1
Posible participación de miembros de la PNC en la planificación de acciones como amenazas a muerte que pretenden la privación del referido derecho	1	
Vida		1
Vivienda	Realización ilegal de desalojos forzados sin ofrecer medios o alternativas apropiadas de protección	1
TOTAL		115

Fuente: Reporte del Departamento de Seguimiento, PDDH.

Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014		
Derecho Humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
III. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		
Acceso a la justicia	Omisiones o negligencia de funcionarios del Estado frente a la reclamación de una persona para la protección de derechos	8
Negligencia o retardación injustificada en la investigación por parte de instituciones competentes		
Retardación indebida en la investigación y sanción de violaciones a los derechos de la mujer	1	
Retardación indebida en la investigación y sanción de violaciones a los derechos de la mujer en cualquier ámbito	1	
	1	
Acceso a la justicia para familiares de niñas y niños desaparecidos durante el conflicto armado		1
Acceso a la justicia sin discriminación	Negligencia u omisión estatal en la investigación y sanción a la violencia contra las mujeres	1
	Omisiones o negligencia de funcionarios o agentes del Estado frente a la reclamación de una persona para la protección de sus derechos	1
Debido proceso administrativo	Incumplimiento de resolución	1
Debido proceso administrativo	Inobservancia del derecho de audiencia	3
Debido proceso administrativo	Inobservancia del derecho de defensa	3
Debido proceso administrativo	Inobservancia del principio de legalidad	2
Debido proceso administrativo	Inobservancia del principio de seguridad jurídica	2
Debido proceso judicial		1
Debido Proceso Judicial	Inobservancia al derecho de presunción de inocencia	2
Derecho a las libertades sindicales	Discriminación en razón de la afiliación	1
Derecho de la mujer a la protección de su integridad	Omisión o negligencia del Estado para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer	1
Derecho de la mujer a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual	Por acoso o abuso sexual ejercido por agentes del Estado prevaleciendo de sus prerrogativas	1
Derecho de la mujer de acceso a la justicia sin discriminación	Omisión o negligencia del Estado para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer	1
Derecho de las personas con orientación sexual diversa de acceso a la justicia	Omisión del Estado para combatir la homofobia y la discriminación en contra de éstas	1
	Omisiones o negligencia de funcionarios o agentes del Estado frente a la reclamación de una persona para la protección de sus derechos	1
Derecho de las personas privadas de libertad a la vida		1
Derecho de las personas privadas de libertad a ser tratadas humanamente y con el debido respeto a la integridad personal	Tratos Crueles, inhumanos y degradantes	2
	Malos tratos	1

Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014		
Derecho Humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
III. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		
Derecho de las víctimas y sus familiares a saber la verdad y acceder a recursos judiciales efectivos		1
Derecho de los niños, niñas y adolescentes a la protección y prevención contra todo tipo de abuso, explotación, venta, trata y secuestro	Tolerancia, negligencia u omisión del Estado para prevenir, investigar, sancionar todo tipo de abuso, explotación económica o sexual, venta, trata y secuestro	2
Derecho de los niños, niñas y adolescentes a no recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes		1
Derecho de los niños, niñas y adolescentes a una administración de justicia diferente al régimen de adultos	Aplicación de procedimientos que no están contemplados en la ley penal especial y sin las garantías que exige su condición	1
Derecho de los niños, niñas y adolescentes privados de libertad a permanecer en lugares diferentes de los destinados para adultos	Permanencia junto con adultos durante la detención administrativa	1
Derechos humanos de numerosas personas, víctimas, familiares y testigos relacionadas con hechos constitutivos de graves crímenes internacionales que se cometieron durante el conflicto armado		1
Garantía de confidencialidad		1
Garantía del interés de las víctimas y sus familiares para hacer valer sus derechos, especialmente sus derechos a saber la verdad y a acceder a recursos judiciales efectivos		1
Garantía del interés de las víctimas y sus familiares para hacer valer sus derechos, especialmente sus derechos a saber la verdad y a acceder a recursos judiciales efectivos		1
Igualdad y no discriminación	Trato diferente por determinados motivos con el objeto de menoscabar derechos o que tienen ese resultado	2
Integridad personal	Malos tratos	2
Intimidad	Allanamiento de morada y/o registros de manera ilegal o arbitraria	2
Libertad de expresión	Amenazas	1
Libertad personal	Detención ilegal	2
Libertad personal	Detención arbitraria o ilegal	4
Libertad sindical	Actos ilegales o atentatorios contra la estabilidad laboral de directivos sindicales	1
Petición	Dilación injustificada en la tramitación y respuesta de la solicitud	3
Protección del medio ambiente	Omisión o negligencia en la regulación y control del manejo y disposición de desechos tóxicos	1
Salud	Omisión del Estado para prevenir y reducir la contaminación del medio ambiente	1
	Negligencia médica	3
	Negligencia médica	1
Seguridad Personal	Aparente desprotección por parte de los entes encargados de brindar seguridad	1
	Persecuciones o indagaciones ilegales	1
	Amenazas	1
	Intimidación	2
Seguridad personal		2

Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014		
Derecho Humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
III. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		
Seguridad personal y seguridad ciudadana	Falta de políticas criminales adecuadas para combatir la delincuencia	1
Trabajo	Actos ilegales o atentatorios contra la estabilidad laboral	2
Vida	Posible participación de miembros de la PNC en la planificación de acciones como amenazas a muerte que pretenden la privación del referido derecho	1
	Amenazas	1
TOTAL		83

Fuente: Reporte del Departamento de Seguimiento, PDDH.

Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014		
Derecho Humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
IV. ÓRGANO JUDICIAL		
Acceso a la justicia Omisiones o negligencia de funcionarios del Estado frente a la reclamación de una persona para la protección de derechos Retardación indebida en la investigación y sanción de violaciones a los derechos de la mujer Negligencia u omisión estatal en la investigación y sanción a la violencia contra las mujeres	Dilación injustificada en la tramitación de recursos legalmente establecidos	1
	3	
	1	
	1	
Debido proceso administrativo	Inobservancia del derecho de audiencia y defensa	1
Debido proceso judicial Inobservancia al derecho de presunción de inocencia Inobservancia del derecho a un juez independiente e imparcial Inobservancia del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas Tramitación de casos, por parte de operadores de justicia sin observar la independencia e imparcialidad Inobservancia del derecho a un juez independiente e imparcial Igualdad y no discriminación	Inobservancia del principio de legalidad	1
	2	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
Derecho de acceso a la justicia	Omisiones o negligencia de funcionarios o agentes del Estado frente a la reclamación de una persona para la protección de sus derechos	1
Derecho de la mujer de acceso a la justicia	Dilaciones indebidas para juzgar y hacer cumplir lo juzgado	1

Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014		
Derecho Humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
IV. ÓRGANO JUDICIAL		
Derecho de las personas privadas de libertad a un debido proceso	Inobservancia del derecho a ser Juzgado sin dilaciones indebidas	1
Derecho de los niños y niñas a participar y a ser escuchado en todo procedimiento en el cual puedan resultar afectados		3
Derecho de los niños, niñas y adolescentes a una administración de justicia diferente al régimen de adultos	Aplicación de procedimientos que no están contemplados en la ley penal especial y sin las garantías que exige su condición	1
	Permanencia junto con adultos durante la detención administrativa	1
	No escuchar opinión de niña	1
Igualdad y no discriminación	Trato diferente por determinados motivos con el objeto de menoscabar derechos o que tienen ese resultado	1
Interés superior del niño, niña y adolescente	No asegurarse de las condiciones de vida que llevaría la niña residiendo con su madre y el esposo de ésta	1
Intimidad	Allanamiento de morada y/o registros de manera ilegal o arbitraria	1
	Divulgación de información o hechos de la vida privada	1
Libertad de tránsito	Restricciones ilegales o arbitrarias para entrar, permanecer o salir del territorio	1
Libertad personal	Detención arbitraria o ilegal	2
Protección del medio ambiente	Contaminación del medio ambiente	1
Salud	Negligencia médica	1
Seguridad personal	Aparente desprotección por parte de los entes encargados de brindar seguridad	1
Trabajo	Actos ilegales o atentatorios contra la estabilidad laboral	1
	Trato digno y respetuoso	3
Vida	Posible participación de miembros de la PNC en la planificación de acciones como amenazas a muerte que pretenden la privación del referido derecho	1
Acceso a la justicia	Dilación injustificada en la tramitación de la demanda de amparo	1
	Dilaciones indebidas en la tramitación de recursos legalmente establecidos	1
	Dilación injustificada en la tramitación de recursos legalmente establecidos	1
Asociarse para constituir partidos políticos y del derecho a un debido proceso	Inobservancia del principio de legalidad	1
Debido proceso administrativo	Inobservancia del derecho de audiencia	2
	Inobservancia del derecho de audiencia y defensa	2
Debido proceso judicial	Inobservancia del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas	1

Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014		
Derecho Humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
IV. ÓRGANO JUDICIAL		
Debido proceso judicial		1
Derecho de la mujer a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual	Maltrato físico, psicológico o moral ejercido por agentes del Estado prevaliéndose de sus prerrogativas	1
Igualdad y no discriminación	Inobservancia del principio de legalidad	1
Integridad personal	Malos tratos	1
Intimidad	Allanamiento de morada y/o registros de manera ilegal o arbitraria	1
Libertad personal	Detención arbitraria	1
Petición		1
Petición	Falta de respuesta	1
Trabajo	Discriminación laboral	1
	Actos ilegales o atentatorios contra la estabilidad laboral	7
	Discriminación laboral	1
TOTAL		65

Fuente: Reporte del Departamento de Seguimiento, PDDH.

Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014		
Derecho Humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
V. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL		
Debido proceso administrativo	Inobservancia del principio de legalidad y seguridad jurídica	2
	Inobservancia del derecho de audiencia y defensa	1
Derecho a las libertades sindicales	Discriminación en razón de la afiliación	9
Trabajo	Actos ilegales o atentatorios contra la estabilidad laboral	3
	Denegación de prestaciones o derechos laborales	1
Derecho de la mujer al trabajo	Actos ilegales o atentatorios contra la estabilidad laboral	1
	Acoso laboral	1
Derecho de las mujeres a la salud	Omisión o negligencia del Estado en adoptar medidas para prevenir y tratar las enfermedades que afectan a la mujer	1
	Ocultar o tergiversar información importante para la protección de la salud o para el tratamiento de enfermedades que afectan a la mujer	1
Derecho de las mujeres a la salud y tratamiento diferenciados	Negligencia Médica	2

Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014		
Derecho Humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
V. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL		
	Integridad persona	1
Protección del medio ambiente	Omisión o negligencia para regular actividades que provoquen contaminación electromagnética	2
	Omisión o negligencia en la regulación y control de manejo y disposición de desechos tóxicos	1
Recibir atención médica de calidad y calidez	Maltrato	1
Salud	Omisiones del Estado para prevenir y reducir la contaminación del medio ambiente	2
	Inobservancia del deber de prevención y precaución	1
	Vida	
	Negligencia médica	9
	Salud	4
Seguridad personal	Amenazas	8
Seguridad Social	Aplicación de criterios restrictivos y no favorables para acceder y gozar de los beneficios de la seguridad social	1
Vida	Amenazas	2
	Negligencia médica	3
	Falta de atención médica	1
TOTAL		58

Fuente: Reporte del Departamento de Seguimiento, PDDH.

Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014		
Derecho Humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
VI. GOBIERNOS LOCALES		
Debido proceso administrativo	Inobservancia del derecho de audiencia	2
	Inobservancia del derecho de defensa	2
	Inobservancia del principio de seguridad jurídica	1
	Inobservancia del principio de legalidad	1
Derecho a participar en la dirección de asuntos públicos	Obstaculización a funcionarios para el cumplimiento de sus obligaciones institucionales	1
Derecho de la mujer a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual	Acoso o abuso sexual ejercido por agentes del Estado prevaleciendo de sus prerrogativas	2
Igualdad y no discriminación	Trato diferenciado debido a la identidad de género	2
Integridad personal	Malos tratos	3

Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014		
Derecho Humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
VI. GOBIERNOS LOCALES		
Libertad sindical	Actos ilegales o arbitrarios que atentan contra la estabilidad laboral de directivos sindicales	3
	Actos ilegales o arbitrarios que atentan contra la estabilidad laboral	2
Petición	Dilación injustificada en la tramitación y respuesta de la solicitud	2
Propiedad	Actos ilegales o arbitrarios que restringen o afectan el derecho a la propiedad	2
Protección del medio ambiente	Omisión o negligencia para regular actividades que provoquen contaminación electromagnética	2
Salud	Omisiones del Estado para prevenir y reducir la contaminación del medio ambiente	1
Seguridad individual y colectiva	Inobservancia del deber de prevención y precaución	1
Trabajo	Actos ilegales o arbitrarios que atentan contra la estabilidad laboral	11
	Denegación de prestaciones laborales	1
TOTAL		39

Fuente: Reporte del Departamento de Seguimiento, PDDH.

Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014		
Derecho Humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
VII. ÓRGANO LEGISLATIVO		
Acceso a la justicia para familiares de niñas y niños desaparecidos durante el conflicto armado		2
Derecho de las víctimas y sus familiares a saber la verdad y acceder a recursos judiciales efectivos		1
Derecho de las y los defensores de los derechos humanos a no ser sometidos a actos que conlleven violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de derechos		1
Derecho individual y colectivo a la verdad		2
Derechos de las víctimas y sus familiares a saber la verdad y acceder a recursos judiciales efectivos		1

Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014		
Derecho Humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
VII. ÓRGANO LEGISLATIVO		
Derechos de las y los defensores de los derechos humanos a no ser sometidos a actos que conlleven violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos		1
Derechos humanos de numerosas personas, víctimas, familiares y testigos relacionadas con hechos constitutivos de graves crímenes internacionales que se cometieron durante el conflicto armado		2
Garantía de confidencialidad		2
Garantía del interés de las víctimas y sus familiares para hacer valer sus derechos, especialmente sus derechos a saber la verdad y a acceder a recursos judiciales efectivos		2
Imagen		1
Integridad personal		2
Petición		1
Privacidad personal		2
Seguridad personal		3
Trabajo	Actos atentatorios contra la estabilidad laboral	1
	Denegación de prestaciones o derechos laborales ante el incumplimiento de la resolución judicial	1
Vida		2

Fuente: Reporte del Departamento de Seguimiento, PDDH.

Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014		
Derecho Humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
VIII. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA		
Acceso a la justicia	Dilaciones indebidas para hacer cumplir lo dispuesto en las resoluciones o sentencias emanadas por autoridad administrativa o judicial	1
	Incumplimiento de sentencia dictada por autoridad judicial	1
Debido Proceso	Inobservancia del principio de legalidad	1

Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014		
Derecho Humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
VIII. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA		
Debido proceso Administrativo	Incumplimiento de resolución	3
	Actos arbitrarios cometidos por funcionarios públicos	1
Derecho a un nivel de vida digno de las personas privadas de libertad		1
Derecho de la mujer a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual	Maltrato físico, psicológico o moral ejercido por agentes del Estado prevaliéndose de sus prerrogativas	1
Derecho de la mujer al trabajo sin discriminación	Acoso laboral ejercido en los centros de trabajo	1
	Actos ilegales o atentatorios contra la estabilidad laboral	1
Derecho de las personas privadas de libertad de acceso a la salud sin discriminación	Negación de las autoridades a suministrar el régimen alimenticio adecuado para la preservación de la salud	1
Derecho de los niños, niñas y adolescentes a la imagen	Falta de protección de su imagen	1
Garantías especiales del debido proceso legal que la condición de persona menor de edad exige	Inobservancia del principio de legalidad y seguridad jurídica	1
Petición	Dilación injustificada en la tramitación y respuesta de la solicitud	3
Propiedad	Actos ilegales o arbitrarios que restringen o afectan el derecho a la propiedad	1
Salud	Omisión o negligencia para su traslado a un centro hospitalario	1
Seguridad personal	Exposición o toma de fotografías no autorizadas	1
Trabajo	Denegación de prestaciones o derechos laborales	1
TOTAL		21

Fuente: Reporte del Departamento de Seguimiento, PDDH.

Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014		
Derecho Humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
IX. MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL		
Debido proceso	Inobservancia del derecho de defensa	1
	Inobservancia del derecho de audiencia	1

Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014		
Derecho Humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
IX. MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL		
Debido proceso administrativo	Inobservancia del derecho de defensa previa	1
Integridad personal	Malos Tratos	4
	Realización de registros indebidos	1
Intimidad	Registro ilegal o arbitrario de teléfono celular	3
Seguridad personal	Intimidación	3
	Persecuciones o indagaciones ilegales	3
Trabajo	Actos ilegales o atentatorios contra la estabilidad laboral	1
TOTAL		18

Fuente: Reporte del Departamento de Seguimiento, PDDH.

Detalle de las diez instituciones públicas más recomendadas y notificadas, por derecho humano y hecho violatorio presuntamente afectado 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014		
Derecho Humano presuntamente afectado	Hecho violatorio	Frecuencia en que se ha recomendado y notificado
X. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		
Acceso a la justicia	Omisiones o negligencia de funcionarios o agentes del Estado frente a la reclamación de una persona para la protección de sus derechos	2
Debido proceso administrativo		1
Debido proceso administrativo	Inobservancia del derecho de audiencia	1
	Inobservancia del derecho de defensa	1
Debido Proceso Judicial	Incumplimiento de deberes institucionales	1
Derecho de la mujer a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual	Maltrato físico, psicológico o moral ejercido por agentes del Estado prevaleciendo de sus prerrogativas	2
	Acoso o abuso sexual ejercido por agentes del Estado prevaleciendo de sus prerrogativas	1
Derecho de los niños y niñas a participar y a ser escuchado en todo procedimiento en el cual puedan resultar afectados		1
Libertad de reunión	Denegación o restricciones ilegales o arbitrarias a la libre reunión de grupos sociales para la defensa de sus derechos e intereses	2
Trabajo	Denegación de prestaciones o derechos laborales	1
	Actos ilegales atentatorios contra la estabilidad laboral	2
Trato digno y respetuoso		1
TOTAL		16

Fuente: Reporte del Departamento de Seguimiento, PDDH.

4. Consolidados estadísticos por Resoluciones Finales²²⁷

Consolidado de resoluciones finales firmadas con detalle de institución señalada y recomendada, y cómo se resolvió 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014							
ÓRGANO EJECUTIVO							
Institución	Tipo de resolución emitida						
	R	NR	A	BO	AR	CR	RD
I. Ministerio de Relaciones Exteriores	0	1	0	0	0	0	0
II. Ministerio de Justicia y Seguridad Pública	13	42	9	0	7	4	0
III. Ministerio de la Defensa Nacional	4	3	2	0	0	0	0
IV. Ministerio de Educación	7	3	0	0	2	2	0
V. Ministerio de Salud	5	3	1	0	1	2	1
VI. Ministerio de Hacienda	0	2	0	0	0	0	0
VII. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	2	0	0	0	0	0
Total dependencias órgano ejecutivo	24	56	12	0	10	8	1

Fuente: Reporte del Departamento de Seguimiento, PDDH.

Consolidado de resoluciones finales firmadas con detalle de institución señalada y recomendada, y cómo se resolvió 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014							
ÓRGANO JUDICIAL							
Total Órgano Judicial	Tipo de resolución emitida						
	R	NR	A	BO	AR	CR	RD
TOTAL	12	3	3	1	2	4	0

Fuente: Reporte del Departamento de Seguimiento, PDDH.

Consolidado de resoluciones finales firmadas con detalle de institución señalada y recomendada, y cómo se resolvió 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014							
MINISTERIO PÚBLICO							
Institución	Tipo de resolución emitida						
	R	NR	A	BO	AR	CR	RD
I. Fiscalía General de la República	8	4	3	0	2	2	0
II. Procuraduría General de la República	1	3	0	1	2	1	1
Total instituciones del ministerio público	9	7	3	1	4	3	1

Fuente: Reporte del Departamento de Seguimiento, PDDH.

²²⁷

Abreviaturas:
 R Responsabilidad
 NR No Responsabilidad
 A Archivo
 BO Buenos Oficios
 AR Acatamiento de Recomendaciones
 CR Con Recomendaciones
 RD Restitución de Derecho

Consolidado de resoluciones finales firmadas con detalle de institución señalada y recomendada, y cómo se resolvió 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014							
Gobiernos Locales	Tipo de resolución emitida						
	R	NR	A	BO	AR	CR	RD
Total gobiernos locales	18	15	12	14	2	2	1

Fuente: Reporte del Departamento de Seguimiento, PDDH.

Consolidado de resoluciones finales firmadas con detalle de institución señalada y recomendada, y cómo se resolvió 1 De junio de 2013 al 31 de mayo de 2014							
Instituciones autónomas							
Institución	Tipo de resolución emitida						
	R	Nr	A	Bo	Ar	Cr	Rd
I. Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	7	5	1	0	0	0	0
II. Instituto nacional de pensiones de los empleados públicos (INPEP)	0	0	0	0	0	1	0
III. Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN)	0	2	0	1	0	0	0
IV. Universidad de El Salvador (UES)	0	0	1	0	0	0	0
V. Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	1	5	1	1	2	2	0
VI. Instituto salvadoreño de transformación agraria (ISTA)	1	2	0	0	0	0	0
VII. Fondo de protección de lisiados y discapacitados a consecuencia del conflicto armado (FOPROLYD)	0	3	0	0	0	0	0
VIII. Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0	3	0	0	0	0	0
IX. Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP)	0	2	0	0	0	0	0
X. Arzobispado de San Salvador	3	3	0	0	0	1	0
Total instituciones autónomas	12	17	2	2	0	3	0

Fuente: Reporte del Departamento de Seguimiento, PDDH.

5. Seguimiento al grado de acatamiento de recomendaciones en Resoluciones Finales

Seguimiento al grado de acatamiento de recomendaciones en Resoluciones Finales 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014				
Institución Señalada	Grado de acatamiento			
	Cumplida	No. cumplida	Parcialmente cumplida	Sólo informó
I. ÓRGANO EJECUTIVO				
I. Ministerio de Agricultura y Ganadería			1	
II. Ministerio de Educación			6	1
III. Ministerio de Justicia y Seguridad Pública		1		1
IV. Ministerio de la Defensa Nacional	2			
V. Ministerio de Relaciones Exteriores				1
VI. Dirección de Gestión Humanitaria y Atención al Migrante del Ministerio de Relaciones Exteriores			1	
VII. Ministro de la Defensa Nacional		1		
VIII. Ministro de Trabajo y Previsión Social				1

IX. Policía Nacional Civil	1		1	1
X. Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC)				2
XI. Tribunal Disciplinario de la PNC			1	
XII. Inspectoría General de la PNC	9		6	8
XIII. Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP)	1			
XIV. Dirección General de Migración y Extranjería				1
XV. Director General de Centros Penales	1	1		1
XVI. Directora del Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango	2			
XVII. Hospital Nacional Especializado Rosales			1	
TOTAL	16	3	16	18

Fuente: Reporte del Departamento de Seguimiento, PDDH.

Seguimiento al grado de acatamiento de recomendaciones en Resoluciones Finales 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014				
Institución Señalada	Grado de acatamiento			
	Cumplida	No. cumplida	Parcial-mente cumplida	Sólo informó
II. ÓRGANO LEGISLATIVO				
Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales				1
TOTAL				1
II. ÓRGANO JUDICIAL				
Corte Suprema de Justicia (CSJ)	1	2	4	1
TOTAL	1	2	4	1
III. MINISTERIO PÚBLICO				
Fiscalía General de la República (FGR)	1			
Procuraduría General de la República (PGR)			2	
TOTAL	1		2	
IV. GOBIERNOS LOCALES				
Alcaldía Municipal de Ciudad Delgado	1		3	
Alcaldía Municipal de San Martín	1			
TOTAL	2		3	
V. INSTITUCIONES AUTÓNOMAS				
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	1	3	1	2
Junta de Vigilancia de la Profesión Médica (JVPM)				1
Superintendencia del Sistema Financiero (SSF)	1			
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA)			3	
Universidad de El Salvador	2			
Junta de Vigilancia de Químicos Farmacéuticos			1	
TOTAL	4	3	5	3
TOTAL GENERAL	24	8	30	23

Fuente: Reporte del Departamento de Seguimiento, PDDH.

Este libro se terminó de imprimir en los talleres
gráficos de Editorial e Impresora Panamericana
y consta de 500 ejemplares



**Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos**

9a Avenida Norte y 5a Calle Poniente,
Edificio AMSA No.535 San Salvador,
El Salvador, Centro América.

www.pddh.gob.sv

Tel.: (503) 2520-4300

Fax.: (503) 2520-4363

Denuncias: (503) 2529-5300